C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. LANDELINO LAVILLA ALSINA

Sesión Plenaria núm. 74

celebrada el jueves, 13 de marzo de 1980

ORDEN DEL DIA (continuación)

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley (continuación):

- De la Comisión de Educación, sobre el proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (final) («Boletín Oficial de las Cortes Generales» Serie A, número 48-II, de 1 de marzo de 1980).

S U M A R I O

Se abre la sesión a las diez y cincuenta minutos de la mañana.

Continúa el orden del día.

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley (continuación):

—De la Comisión de Educación, sobre el proyecto de Ley Orgá-

nica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (continuación).

Página

Artículo 31 4948

La señora Vintó Castells defiende una enmienda del G. P. Comunista. La contesta el señor Herrero Rodríguez de Miñón (Gru-

po Parlamentario Centrista), quien acepta dicha enmienda. Fue aprobado el texto del dictamen y a continuación la enmienda del G. P. Comunista, como adición al mismo.

Página

Artículo 32 4949

El señor Gómez Llorente defiende una enmienda del G. P. Socialista del Congreso. La señora Vintró Castells mantiene una enmienda, que no defiende por ser coincidente con otra defendida al artículo 7.º Fue rechazada la enmienda y aprobado el texto del dictamen.

Página

Artículo 33 4951

La señora Vintró Castells defiende una enmienda del G. P. Comunista. Turno en contra del señor Herrero Rodríguez de Miñón. Para rectificar intervienen nuevamente estos Diputados. Fue rechazada la enmienda y aprobado el texto del dictamen.

Página

Artículo 34 4953

El señor Gracia Navarro defiende enmiendas del G. P. Socialista del Congreso. El señor Herrero Rodríguez de Miñón se manifiesta en contra. El señor Gómez Llorente (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso) rectifica un pasaje de la intervención del señor Herrero Rodríguez de Miñón. Para rectificar intervienen de nuevo los señores Gracia Navarro y Herrero Rodríguez de Miñón. La señora Vintró Castells defiende enmiendas (una de ellas «in voce») del Grupo Parlamentario Comunista. Turno en contra del señor Gómez de las Rocas (Grupo Parlamentario Mixto). La señora Mata Garriga (G. P. Socialistas de Cataluña) defiende una enmienda en relación con el número 3 de este artículo. Fueron rechazadas las enmiendas defendidas y aprobado el texto del dictamen. También fueron rechazadas, a continuación, dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso proponiendo la adición de los artículos 34 bis, 34 ter y 38 bis. Para explicar el voto

intervienen el señor Sagaseta Cabrera (G. P. Mixto) y la señora Rubiés Carrofé (G. P. de la Minoría Catalana).

Se suspende la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

Página

Artículo 35 4987

El señor Riera Mercader defiende dos enmiendas del G. P. Comunista y el señor Fuentes Lázaro otra del G. P. Socialista del Congreso. Turno en contra del señor Herrero Rodríguez de Miñón. Intervienen nuevamente para rectificar estos tres Diputados. El señor Presidente anuncia que han sido presentadas dos enmiendas de transacción por el G. P. Centrista en relación con las defendidas por el G. P. Comunista. A continuación fueron rechazadas las dos enmiendas del G. P. Comunista y aprobadas las transaccionales. Fue rechazada la enmienda del G. P. Socialista del Congreso. Fue aprobado el texto del dictamen, al que quedan incorporadas las dos enmiendas transaccionales anteriormente aprobadas.

Página

Artículo 36 4992

El señor Riera Mercader defiende conjuntamente tres enmiendas del G. P. Comunista a los artículos 36, 37 y 38, que tienen un objetivo común. El señor Fuentes Lázaro defiende una enmienda del G. P. Socialista del Congreso. Turno en contra de estas enmiendas, del señor Herrero Rodríguez de Miñón. Intervienen para rectificar los señores Riera Mercader, Fuentes Lázaro y Herrero Rodríguez de Miñón. Fue rechazada la enmienda del G. P. Socialista del Congreso. El señor Presidente anuncia que ha sido presentada una enmienda transaccional por el G. P. Centrista, de adición de una letra i'), cuyo texto lee. Se admite a trámite, y es aprobada. A continuación fueron rechazadas otras enmiendas del G. P. Socialista del Congreso y la del G. P. Comunista. Fue aprobado el texto del dictamen, al que se incorpora el texto de la enmien-

da transaccional antes aprobada. También fue rechazada otra enmienda del G. P. Socialista del Congreso propugnando la adición de un artículo 36 bis.

Página

Artículo 37 5001

Fue rechazada la enmienda del G. P. Comunista defendida anteriormente. Fue aprobado el texto del dictamen.

Página

Artículo 38 5001

Fue rechazada una enmienda del G. P. Comunista defendida anteriormente. La señora Rubiés Garrofé defiende una enmienda del G. P. de la Minoría Catalana. Fue aprobada. Fue aprobado igualmente el texto del dictamen, al que queda incorporado el de la enmienda que acaba de aprobarse.

Página

Artículo 39 5002

El señor Riera Mercader defiende una enmienda del G. P. Comunista. Turno en contra del señor Herrero Rodríguez de Miñón. Fue rechazada la enmienda y aprobado el texto del dictamen.

Página

Disposición adicional (conjuntamente con el artículo 20) 5003

El señor Presidente recuerda su propuesta en la sesión de ayer de debatir conjuntamente estos dos preceptos, dada la conexión existente entre los mismos.

La señora Mata Garriga defiende dos enmiendas por el G. P. Socialistas de Cataluña y el señor Peces-Barba Martínez defiende otra por el G. P. Socialista del Congreso. Turno en contra de estas enmiendas, del señor Herrero Rodríguez de Miñón. Intervienen nuevamente, para rectificar, el señor Peces-Barba Martínez, la señora Mata Garriga y el señor Herrero Rodríguez de Miñón. La señora Mata Garriga defiende otra enmienda al artículo 20, y el señor Solé Tura (Grupo Parlamentario Comunista) defiende cua-

tro enmiendas al artículo 20 y a la Disposición adicional. Turno en contra de estas enmiendas del señor Roca Junyent (Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana). Para rectificar intervienen nuevamente los señores Solé Tura y Roca Junyent. El señor De la Vallina Velarde defiende otra enmienda sobre el artículo 20 y la Disposición adicional, por el G. P. Coalición Democrática. Turno en contra de esta enmienda del señor Peces-Barba Martínez. En turno de rectificación intervienen nuevamente estos dos señores Diputados. Fueron rechazadas todas las enmiendas defendidas. Fue aprobado el texto del dictamen para el artículo 20. También fue aprobado el texto del dictamen para la Disposición adicional. El señor Aguilar Moreno (G. P. Andalucista) explica el voto.

Página

Disposición final primera 5035

Sin discusión fue aprobado el texto del dictamen.

Página

Disposición final segunda 5035

La señora Vintró Castells (G. P. Comunista) da por defendidas sus enmiendas y las mantiene para su votación. Fueron rechazadas. Fue aprobado el texto del dictamen.

Página

Disposiciones transitorias primera, segunda y tercera 5035

Después de rechazados el voto particular y las enmiendas del G. P. Comunista, fueron aprobados los textos del dictamen para estas Disposiciones transitorias.

Página

Disposición transitoria cuarta 5058

El señor Herrero Rodríguez de Miñón (Grupo Parlamentario Centrista) formula una enmienda transaccional en relación con otras enmiendas formuladas. Se admite a trámite y es aprobada. A continuación fue aprobado el texto del dictamen, que lleva incor-

porado el texto de la enmienda transaccional antes aprobada.

La señora Mata Garriga (G. P. Socialistas de Cataluña) renuncia a una enmienda proponiendo la reordenación del articulado del proyecto de ley.

A continuación, interviene el señor Vicepresidente segundo del Gobierno (Abril Martorell) en relación con algunos aspectos del proyecto de ley que acaba de ser debatido.

Para explicar el voto intervienen seguidamente los señores Guerra González (G. P. Socialista del Congreso), Herrero Rodríguez de Miñón (G. P. Centrista) y Solé Tura (Grupo Parlamentario Comunista), a quien replica el señor Vicepresidente segundo del Gobierno (Abril Martorell). Continuando la explicación de voto, intervienen los señores Roca Junyent (G. P. de la Minoría Catalana), De la Vallina Velarde (G. P. Coalición Democrática), Aguilar Moreno (Grupo Parlamentario Andalucista) y señora Mata Garriga (G. P. Socialistas de Cataluña).

El señor Presidente manifiesta que, dado el carácter orgánico de esta ley, procede someterla a una votación de conjunto, para la que se requiere un quórum de la mayoría absoluta, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución. Seguidamente informa de que se ha presentado a la Mesa un escrito firmado por 56 Diputados en solicitud de que la votación sea nominal y pública, así como dos escritos, de los G. P. Socialista del Congreso y Socialistas de Cataluña, por los que se solicita que la votación sea secreta mediante papeletas.

El señor Peces-Barba Martínez defiende la petición formulada por el G. P. Socialista del Congreso. Intervienen a continuación sobre este tema los señores Jiménez Blanco (Grupo Parlamentario Centrista), Solé Tura (G. P. Comunista) y Fraga Iribarne (Grupo Parlamentario Coalición Democrática). El señor Presidente hace una amplia exposición de carácter reglamentario sobre la cuestión planteada y, en definitiva, decide que la votación se realizará en forma de votación nominal pública en la modalidad de «por llamamiento», conforme al artículo 74 del Reglamento. El señor Peces-Barba Martínez manifiesta que acata la decisión de la Presidencia, pero desea conste en acta la

más enérgica protesta de su Grupo Parlamentario por dicha decisión. En el mismo sentido se manifiesta el señor Guerra Fontana por el G. P. Socialistas de Cataluña.

Página

Votación de totalidad del proyecto de Ley Orgánica 5063

Se procede, pues, a la votación en la forma indicada por el señor Presidente, cuyo resultado fue el siguiente: votos emitidos, 314; a favor, 187; en contra, 127. El señor Presidente declara aprobado el proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares, que será remitido al Senado para la tramitación constitucional subsiguiente. A continuación anuncia que el Pleno se reunirá de nuevo el martes, 25 de marzo, a las cuatro y media de la tarde.

Se levanta la sesión a las doce y treinta minutos de la noche.

Se abre la sesión a las diez y cincuenta minutos de la mañana.

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY:

— DE LA COMISION DE EDUCACION, SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DE CENTROS ESCOLARES (FINAL).

El señor PRESIDENTE: Proseguimos el debate sobre el dictamen de la Comisión de Educación en relación con el proyecto de Ley de Centros Escolares.

Al artículo 31 el Grupo Parlamentario Comunista mantiene una enmienda. Tiene la palabra, para su defensa, la señora Vintró.

Artículo 31

La señora VINTRO CASTELLS: Señor Presidente, Señorías, la enmienda que el Grupo Parlamentario Comunista mantiene a la redacción del actual artículo 31 pretende incorporar, al final, un nuevo párrafo que diga: «Serán preceptivas una reunión a comienzos de curso y otra al final».

Es evidente que la necesidad de la participación y de la intervención de los órganos colegiados no puede quedar reducida a la simple ficción de que existan estos órganos, sino que tiene que venir recogida en una necesidad de sus reuniones y de su trabajo en conjunto.

El texto que propone el dictamen de la Comisión prevé simplemente una reunión al trimestre y cuantas veces sea convocada por el director o por un tercio de los componentes. Sin embargo, abundando un poco en lo que señalaba el representante del Grupo Socialista en la reunión de ayer respecto a la necesidad de que los cargos colegiados fueran elegidos a comienzo de curso —nos señalaba incluso el mes de octubre—, enmienda que nosotros apoyamos, pensamos que estos órganos colegiados deberían reunirse, de modo preceptivo, sin señalar fechas al comienzo y al final de curso, en un caso para marcar las directrices y las líneas generales de trabajo relativas a la propia estructura, y, en otro, al final del curso, para hacer un balance y analizar los resultados de la gestión del mismo.

Es posible que se nos vuelva a decir que en una Ley Orgánica —que no somos nosotros precisamente quienes la pretendemos Orgánica— no deben figurar estas precisiones, pero en esta ley, que otros sí quieren que sea Orgánica, ya figuran las suficientes concreciones como para que haya una más, en este caso en beneficio de estos órganos colegiados, a los cuales nosotros con tanto interés y con tan poco éxito hemos intentado reforzar. Por esta razón es por la que mi Grupo Parlamentario propone el añadido de este párrafo, con la pretensión de que haya una reunión preceptiva a comienzo de curso y otra al final.

El señor PRESIDENTE: Para un turno, en contra de esta enmienda, tiene la palabra el señor Herrero.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MINON: Señor Presidente, convencidos por los abrumadores argumentos de la señora Vintró, desde ahora señalamos nuestro deseo de aceptar su enmienda y votar afirmativamente. Gracias. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.

Votaremos, en primer lugar, el texto del artículo 31 según el dictamen de la Comisión y, posteriormente, la adición propuesta en la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 189; a favor, 126; en contra, dos; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 31 conforme al dictamen de la Comisión.

Votamos, seguidamente, la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista sobre adición de un párrafo final al apartado único de este artículo 31.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 190; a favor, 184; en contra, dos; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda, del Grupo Parlamentario Comunista, respecto del artículo 31. El contenido de dicha enmienda, quedará incorporado al texto del artículo 31.

Pasamos al Título III relativo a los centros privados.

Al artículo 32 mantiene una enmienda el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Tiene la palabra, para su defensa, el señor Gómez Llorente. **Artículo 32**

El señor GOMEZ LLORENTE: Señor Presidente, Señorías, el artículo 32 del dictamen de la Comisión plantea, ciertamente, cuestiones importantes, pero que inciden en temas que ya fueron debatidos en la discusión del artículo 7.º y, en consecuencia, como yo creo que todos estamos en la persuasión de que hay que aligerar el debate y en la necesidad de concluir en el día de hoy el mismo, voy a procurar ser sumamente telegráfico en las explicaciones.

Para aquellos de Sus Señorías que, no formando parte de la Comisión, no recordasen en este momento la materia del artículo 7.º,

les indicaré que las primeras líneas con las que se abre el artículo 32, que en estos momentos estamos considerando, coinciden casi literalmente con lo dicho en el artículo 7.º Baste el siguiente cotejo.

El artículo 32 dice: «Todas las personas físicas o jurídicas podrán crear, gestionar y dirigir centros docentes que impartan las diversas enseñanzas que comprende el sistema educativo». El artículo 7.º dice: «Toda persona física o jurídica, pública o privada, de nacionalidad española, tiene libertad para establecer y dirigir centros docentes, dentro del respeto a la Constitución y a las leyes».

Es obvia la reiteración. La única diferencia es que donde en el artículo 7.º se dice «establecer y dirigir», aquí se dice «crear, gestionar y dirigir». Es por ello, Señorías, por lo que este Grupo Parlamentario mantuvo en Comisión el criterio de que debiera de evitarse esa reiteración, que no tenía otro objeto que el de halagar los oídos de los sectores afectados, usuarios, beneficiarios, como ustedes quieran llamarlo, de este derecho que aquí se establece, por segunda vez, en el mismo texto de una ley.

En cambio, nosotros planteábamos, como sustitución a ese texto, otro, que es el que se contiene en nuestra enmienda 103 que, ciertamente, afirma algo nuevo, el modo que lo afirman las líneas siguientes del artículo 32, las que continúan el texto que les he leído antes.

Nuestra enmienda número 103 decía: «Los centros privados se acomodarán en lo esencial a lo que, respecto a los centros públicos del correspondiente nivel, ciclo o modalidad se establecen en la presente ley y disposiciones reglamentarias que la desarrollan».

Ahora bien, este Grupo Parlamentario se encuentra ante esta enmienda que planteamos en su día en una situación similar a aquella en la que nos encontrábamos cuando este Diputado comentó el artículo 16, y es el texto que hemos propuesto en el contexto de otro conjunto de enmiendas, que dan a nuestras propuestas un significado completamente distinto. Porque, cuando nosotros proponíamos que los centros privados se acomodasen en líneas generales a lo que para centros públicos establecía la presente ley, estábamos

pensando, lógicamente, en nuestras enmiendas con respecto a los centros públicos. Dado el tipo de organización que la mayoría de la Cámara ha ido estableciendo para los centros públicos, sería totalmente contrario a nuestras intenciones que siguiéramos manteniendo el texto de esa enmienda, por lo cual proponemos la analogía entre los centros privados y los centros públicos.

Es esta, exactamente, la razón, señor Presidente, por la que deseamos retirar una enmienda que tuvo pleno sentido en el momento de ser presentada, pero que ahora nos llevaría a un contrasentido con respecto a su objetivación real o su trascendencia material.

Con respecto al tema capital, que es el tema de la dirección, del derecho a dirigir, ya quedaron completamente desarrollados nuestros criterios en nuestra intervención sobre el artículo 7.º, y, en honor a la brevedad, señor Presidente, me limito a darlos por reproducidos en este punto, para que quede constancia de nuestra posición. Eso es todo; gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Enmienda número 148, del Grupo Parlamentario Comunista respecto del artículo 32. Tiene la palabra la señora Vintro.

La señora VINTRO CASTELLS: Gracias, señor Presidente. Realmente no vamos a hacer la defensa de esta enmienda porque coincide absolutamente con la que presentamos en su momento al artículo 7.º y, por tanto, habría que repetir la argumentación.

Mantenemos sí, para su votación, dicha enmienda, pero la argumentación es la que ofreció ya mi compañero Solé Tura.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. Votamos en primer lugar la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista que propone sustituir la palabra «dirigir» por «administrar» en el número 1 de este artículo 32.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 16; en contra, 127; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, respecto al número 1 del artículo 32.

Someteremos, seguidamente, a votación el artículo 32, separando sus dos apartados.

En primer lugar, votaremos el número 1 de este artículo 32, conforme al dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 128; en contra, 86; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el número 1 del artículo 32, conforme al texto del dictamen de la Comisión.

Votaremos, seguidamente, el número 2 de este mismo artículo 32, también según el dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 212; en contra, dos; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, conforme al dictamen de la Comisión, el número 2 del artículo 32.

Artículo 33 El Grupo Parlamentario Comunista mantiene, asimismo, una enmienda respecto al artículo 33.

Tiene la palabra para su defensa la señora Vintró.

La señora VINTRO CASTELLS: Señor Presidente, Señorías, en este artículo 33, antes 36, el Grupo Parlamentario Comunista mantiene una enmienda que procede de las que ya se presentaron inicialmente al proyecto de ley del Gobierno y que, en aquel momento, por un error mecanográfico, era notablemente incomprensible.

Yo querría aclarar a Sus Señorías cuál era exactamente el contenido de esta enmienda y las razones que, a juicio de nuestro Grupo, hacían innecesaria su introducción.

Este artículo 33 regula, fundamentalmente, la apertura y funcionamiento de los centros docentes privados, que deberán someterse al principio de previa autorización; y los criterios que se tendrán en cuenta por parte

de la Administración para conceder dicha previa autorización serán el que dichos centros reúnan las condiciones mínimas que regula el artículo 12, singularmente en cuanto a instalaciones, profesorado y sistema de enseñanza.

Es evidente que una de las preocupaciones que nosotros hemos venido manteniendo a lo largo del estudio y la discusión de este proyecto de ley es la organización de los centros privados, así como la participación y gestión en los mismos.

En el próximo artículo tendremos ocasión de volver sobre este tema, pero a mí me interesaba destacar aquí que en estas condiciones a las que deberán someterse los centros privados para obtener la previa autorización no se hace ninguna mención y, por tanto, no es válida la idea, que en el artículo anterior se desliza, respecto a la similitud entre los centros estatales o públicos en lo que hace referencia a la gestión.

Porque, Señorías, si fuera efectivamente esta la intención del artículo anterior, no habría el menor inconveniente para aceptar que en este artículo 33, en donde se van a controlar por la Administración las condiciones que reúne un centro privado, se tendría también que recoger esta necesaria similitud en los aspectos de gestión y esta necesaria igualdad o paralelismo en las composiciones, funciones y atribuciones de los órganos de gobierno de los centros.

Y esto es, precisamente, lo que yo quiero que quede claro. La enmienda que nuestro Grupo presenta al artículo 33 indica la conveniencia, la obligatoriedad de que, también, entre las condiciones que se analicen a la hora de reconocer un centro privado, exista un pronunciamiento sobre la gestión en estos centros privados, que garantice aquello que, a nuestro juicio, no garantiza ni el artículo 32, ni, obviamente, va a garantizar, si se aprueba tal como viene formulado, el artículo 34.

Insistíamos al hablar de mantener el artículo 18, en la necesidad de que ese artículo 18 regulara algunas de estas condiciones que, luego, al haber desaparecido, tampoco quedan recogidas en el 34. Es, una vez más, un intento por nuestra parte de que aquello que se formula en las palabras por parte de

quienes defienden el dictamen de la Comisión, y por parte de quienes le dan apoyo entendiendo que dice aquello que no dice, den en este artículo la demostración de que, efectivamente, se adecúan sus palabras con el texto de la ley, y se acepte la introducción, ya que se me ha aceptado una enmienda hace un momento, dejándome —y permítaseme la broma— absolutamete sorprendida a estas horas de la mañana. Espero que este síntoma de buena voluntad que ha dado, por una vez, el Grupo Centrista, se mantenga a lo largo de la discusión de los artículos que quedan, y en esta enmienda que ahora defiendo, que simplemente recoge aquello que verbalmente se dice que ya está recogido, tenga una traducción en el texto legal, y así los centros privados, previamente a su autorización, tengan también que demostrar que van a cumplir en materia de gestión estos mínimos (que, efectivamente, son muy mínimos) que se acaban de aprobar para los centros públicos. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra de esta enmienda tiene la palabra el señor Herrero.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, desgraciadamente las dotes de convicción que la señora Vintro había demostrado en la defensa de su anterior enmienda, al menos en lo que a juicio de este Grupo se refiere, han disminuido grandemente, porque no ha dejado nada claro cuál era realmente el objetivo de su enmienda, sino que lo ha oscurecido de manera notable.

El principio de autorización previa, a que están sometidos los centros privados a la hora de establecerse, se justifica perfectamente en cuanto que tiende a garantizar el cumplimiento de determinados mínimos; aquellos mínimos que requiere el famoso pacto de 1966, tantas veces citado, para que se establezcan por los particulares escuelas distintas de las estatales; aquellos mínimos que deben garantizar, en cuanto a la función docente del centro, cualquier legislación estatal consciente, de uno u otro signo.

Sin embargo, la enmienda del Grupo Comunista pretende introducir una cosa absoluta-

mente distinta, porque una cosa son los mínimos exigibles en cuanto a instalaciones, profesorado, etc., que es aquello que tiene que asegurar el cumplimiento de la función docente por parte del centro, y otra cosa son las diversas peculiaridades en cuanto a la gestión del centro se refieren, que ya sabemos que al Grupo Parlamentario Comunista le preocupa de una manera verdaderamente maníaca —perdón, en el buen sentido del término—, quiero decir obsesiva. (*El señor SOLE TURA: Entonces diga obsesiva.*) Gracias, señor Solé.

Los condicionamientos respecto de la gestión de un centro privado, nosotros creemos que se aseguran suficientemente en esta ley cuando se fijan los órganos de participación, cuando se regulan, incluso, los mínimos de composición de sus órganos de participación, y cuando se establece el principio de analogía esencial que acabamos de aprobar en el artículo anterior, analogía esencial que alcanza también a las competencias de esos órganos. Por tanto, cuando discutamos en el artículo 34 las competencias de los órganos de participación allí previstas, no se podrá decir que no se les atribuye ninguna competencia determinada, puesto que, como ha reconocido antes el portavoz del Partido Socialista, existe un principio profundo de analogía esencial entre centros privados y centros públicos, en opinión del Partido Socialista, insatisfactoria, porque insatisfactoria es la organización del centro público, pero que sin duda existe, como ha sido reconocido, de manera que las funciones de los órganos participativos de los centros privados están suficientemente garantizadas por la ley.

Si se garantiza esta analogía, que se calificaba de esencial en cuanto al funcionamiento y competencias, y se garantiza en el mismo texto de la ley la composición mínima de los órganos de participación y gestión, lo que no vemos es a qué se puede referir esta otra exigencia de requisitos mínimos de gestión, que lo que hace es confundir algo importante pero accidental en un centro; porque todo lo instrumental es accidental, y la gestión es un instrumento respecto del fin. Tratar de confundir lo que es instrumental y accidental en la gestión con lo que es más sustancial al cumplimiento de la función educativa del centro, co-

mo son los requisitos mínimos en cuanto a los medios específicamente docentes.

Por eso, porque creemos que es innecesaria y supérflua la enmienda, si lo que pretende es garantizar esta participación de los diversos sectores de la comunidad escolar en el centro docente, y, porque si pretende otra cosa, lo que pretende es una peligrosa confusión, es por lo que lamentamos oponernos a esta enmienda del Grupo Comunista.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: En turno de rectificación tiene la palabra la señora Vintró.

La señora VINTRO CASTELLS: Gracias, señor Presidente, simplemente celebro que quede claro y que conste en el «Diario de Sesiones» que para UCD la gestión es algo accidental.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Herrero, en turno de rectificación.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MINON: Señor Presidente, para UCD y probablemente para todos los conocedores de la lógica, todo lo que es instrumental respecto de un fin es accidental respecto de ese fin, y sería realmente pintoresco considerar que la gestión de un tema, y no el fin de esa gestión busca, es lo principal. Sería una pintoresca concepción, muy burocrática por cierto, de lo que es un centro docente o una organización docente, el considerar que lo importante es cómo se gestiona y no qué finalidad busca y consigue.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. Enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto del artículo 33.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 234; a favor, 94; en contra, 138; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, respecto del artículo 33.

Sometemos a votación seguidamente el tex-

to del artículo 33, conforme al dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 235; a favor, 220; en contra, 14; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 33, conforme al dictamen de la Comisión.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso mantiene una enmienda en la que propone un texto alternativo a este artículo 34, más dos enmiendas que parecen tener sentido subsidiario con respecto a la que sería la principal. Para la defensa de estas enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra el señor Gracia.

Artículo 34

El señor GRACIA NAVARRO: Señor Presidente, Señorías, a la altura del debate en que estamos ya, entiendo que a nadie en esta Cámara se le oculta la importancia de este artículo 34 para la configuración del sistema de centros escolares que la presente Ley Orgánica va a configurar.

Desde luego, debo empezar por dejar bien sentado que para el Grupo Socialista este artículo 34 constituye uno de los motivos básicos, radicales, de desacuerdo con esta ley. Se podría decir que, junto a los artículos 5 y 15, este artículo 34 constituye los argumentos de fondo más importantes para nuestra posición en esta ley. Si a ello se añade toda la articulación de los órganos unipersonales y colegiados de gestión y de participación de los centros, tendríamos los dos grandes grupos de motivos por los cuales los socialistas no aceptamos esta ley tal como ha sido presentada ante este Pleno.

Voy a tratar, a lo largo de mi intervención, de ir manifestando cuáles son, Señorías, las diferencias fundamentales que el texto del dictamen mantiene respecto a las enmiendas socialistas, y voy a tratar, a lo largo de esa comparación, de fundamentar los argumentos por los cuales los socialistas estimamos que la regulación del ideario educativo (curiosa expresión introducida por primera vez en nues-

tro ordenamiento jurídico), que se da en este artículo 34 del dictamen, constituye un motivo radical de desacuerdo para el Grupo Socialista.

En el texto del dictamen, en el número 1, se lee lo siguiente: «Se reconoce a los titulares de los centros privados el derecho a establecer un ideario educativo propio dentro del respeto a los principios y declaraciones de la Constitución».

Lo primero que los socialistas nos preguntamos cuando vimos esta expresión «ideario educativo», era qué se quería significar exactamente con esa expresión. Porque en el Diccionario de la Real Academia se lee que el ideario educativo es el repertorio de las ideas de un autor. Y nosotros, ateniéndonos a esta definición, tenemos que concluir que el ideario educativo será, evidentemente, puesto que se reconoce su establecimiento a los titulares de los centros, el repertorio de ideas del propietario del centro. Muchas veces, a lo largo de los debates en Ponencia y Comisión, Señorías, se nos ha dicho a los socialistas, por parte de grupos que apoyan esta ley, que ideario educativo era sinónimo de proyecto educativo. Y yo tengo que decir que no podemos ni debemos engañarnos, porque en todos los textos de iderios que ya están publicados por entidades privadas, antes de la aprobación de esta ley, antes del reconocimiento del derecho a establecer un ideario, en todos ellos, repito, se tiene un exquisito cuidado en distinguir el ideario del proyecto educativo. Una cosa es el ideario, que es algo absolutamente inalterable por definición —se llega a leer en uno de esos idearios— y otra cosa es el proyecto educativo que puede ser algo mutable y cambiante. Si, evidentemente, se establece, por parte precisamente de los que por este artículo se les concede el derecho a establecer ese ideario, es decir, por los propietarios de los centros, esa distinción fundamental, por algo será. Porque, en el fondo, ellos tienen muy claro —y ellos son los receptores de este artículo— que proyecto educativo e ideario educativo no son sinónimos en ningún sentido.

En ningún caso, Señorías, en esos mismos idearios se reconoce a la comunidad educativa el derecho a elaborar o modificar el ideario. En ninguno de los textos de esos idearios —y

tendré ocasión, a lo largo de mi exposición, de proceder a leer algunas partes de idearios educativos que están en vigor en centros privados de nuestro país— se da la más mínima oportunidad a la comunidad educativa para modificar, alterar y, mucho menos, elaborar el ideario educativo. Lo que sí se deja muy claro es que el ideario educativo —perdón por la expresión— es como las lentejas, el que quiere lo toma, y el que no, lo deja.

Es probable, Señorías, que por parte de mi digno oponente, don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, se diga que esa es la esencia, precisamente, de la libertad de enseñanza: la posibilidad de elegir. A mí me gustaría detener un poco la atención de Sus Señorías sobre esta cuestión, porque es básica para la argumentación socialista y para la comprensión social del problema que estamos aquí discutiendo. ¿Se elige el ideario, Señorías? Aquí radica, nos parece a nosotros, una de las claves de la cuestión, porque —y yo lamento que no esté presente en este momento en la sala, el señor Ministro de Educación—, a pesar de esas cuentas —que en mi tierra le llamarían cuentas del Gran Capitán—, con que ayer o anteayer nos obsequió el señor Ministro, la realidad nos está indicando que en las pequeñas magnitudes, no en las cifras globales, pueblo por pueblo, barrio por barrio, Señorías, no hay ni va a haber posibilidad de elegir para la mayoría de los padres.

Yo creo que todos los que estamos en esta Cámara tenemos obligación de poseer un grado de información suficiente, y ahí están las informaciones —no desmentidas de manera oficial, contundentes y con cifras en la mano— de necesidades educativas en muchas zonas de nuestro país, en muchas ciudades, grandes ciudades y en pequeños núcleos rurales.

¿Qué ocurre, Señorías, en las grandes ciudades, donde la elección comporta necesariamente el transporte en la mayoría de los casos, y éste significa un desembolso que rompe ya, por el mismo hecho de existir, la igualdad de elección? ¿Qué ocurre en los pueblos donde, por ejemplo, el único centro que exista sea privado? ¿Qué es lo que se elige allí? ¿Cómo conocerán los padres —y éste es otro aspecto importante de la elección— los diferentes idearios entre los cuáles elegir? ¿A través de

campañas de propaganda? ¿A través de anuncios por radio, por prensa, por buzoneo puerta a puerta?

Señorías, no es ninguna ironía. La elección comporta condiciones de información suficiente para todos los que han de elegir. Es un principio fundamental previo para el ejercicio de un derecho de elección. Y ese ejercicio tendrá que —ascendiendo, por supuesto, en la argumentación que el Gobierno nos propone— llegar a la exigencia, incluso, de financiación para las propias campañas de publicidad de los idearios. No se da, Señorías, reconozcámoslo, y no se van a dar en un futuro, al menos inmediato, condiciones iguales para elegir, con lo cual se está haciendo un fraude —y yo también lo digo en términos civiles— a los ciudadanos en este tema.

Otro aspecto del establecimiento de este derecho del ideario educativo que a los socialistas nos importa comentar es el de las consecuencias que la imposición del ideario educativo va a tener. No me voy a extender, naturalmente, sobre las consecuencias jurídico-constitucionales, porque han sido ya suficientemente expuestas, tanto en Comisión como en este Pleno, por mi compañero el señor Peces-Barba, de una manera ya mucho más autorizada que lo podría hacer yo. Pero sí me importa destacar aquellas otras consecuencias que, de alguna manera, precisamente las enmiendas a este artículo pretenden matizar, pretenden limitar y pretenden racionalizar en el orden constitucional. El núcleo de nuestra oposición a este tema se podría centrar en que nosotros mantenemos que el establecimiento del ideario educativo, en los términos en que figura en el dictamen, limita una de nuestras más importantes atribuciones en orden constitucional, reconocida en el número 7 del artículo 27; limita, sustancialmente, la intervención de la comunidad escolar en el control y gestión. Esto no es algo que los socialistas nos estemos inventando; está ya en los textos de algún que otro ideario educativo que voy a poderles leer a Sus Señorías. Sin citar nombres que puedan identificar el ideario, por delicadeza, sin embargo creo que hay que leer lo demás: «Mientras sea la congregación quien asume en el colegio la última responsabilidad ante la Iglesia y la sociedad, a ella le corres-

ponde la última decisión. La participación de alumnos, padres, profesores y colaboradores habrá de entenderse dentro de los principios y del estilo que se deduce de este ideario».

Efectivamente, Señorías, se nos ha dicho no hasta la saciedad, porque las argumentaciones lógicas y coherentes no sacian, o al menos no sacian a las personas inteligentes, pero se nos ha dicho muchas veces que intervenir en el control y gestión es participar, y que participar es «tomar parte en»; evidentemente que es «tomar parte en», pero tomar parte en algo, Señorías, en algo. Cuando se dice que la última decisión la tiene el propietario del centro, no hay nada en lo que tomar parte; cuando se acepta y se reconoce que la responsabilidad de la gestión del centro ante la Administración de la gestión económica del centro y del funcionamiento del mismo corresponde al titular —y eso se dice en el dictamen de este artículo—, díganme Sus Señorías de Unión de Centro Democrático en qué es en lo que van a tomar parte los profesores, los padres y los alumnos, en su caso. Porque, Señorías, hay algo que también obedece a la lógica, y justamente al mismo tipo de lógica que antes utilizaba el señor Herrero Rodríguez de Miñón, que era la lógica escolástica, y es que de aquello de lo que se tiene responsabilidad es de aquello de lo que se puede participar. Yo no puedo participar en algo en lo cual luego no tenga que dar cuenta, no tenga que responsabilizarme. Señorías, si aquí se está estableciendo que el titular del centro es el que responde ante la Administración del funcionamiento del centro, él es el que asume la responsabilidad y, por tanto, podrá aducirse en cualquier momento que él es el responsable y que todas las decisiones tienen, en definitiva, que someterse a la decisión suprema del propietario del centro, porque él es quien tiene la responsabilidad. En esta medida, la participación, la intervención, el tomar parte en algo, evidentemente queda huero, queda absolutamente carente de contenido, porque no se puede intervenir en algo que no existe, en algo de lo cual no se asume responsabilidad.

Pero hay más, porque aunque el antiguo artículo 18 haya desaparecido del dictamen, son evidentes las implicaciones que sobre el ámbito estrictamente pedagógico y didáctico del ideario podríamos considerar.

Señorías, el ideario del centro, además de comportar ese componente fundamental de ideología, de ideas propias de un autor, como veíamos antes, en opinión de expertos en organización escolar, es quizá la variable más importante, más determinante entre aquellas variables que determinan e inciden en el funcionamiento de la institución escolar. En el ideario, en efecto, subyacen las posibilidades máximas de discriminar en lo educativo. Tal como se regula en este artículo, puede esconder no sólo, como de hecho esconde, la ideología del propietario del centro, sino también la posibilidad de alterar o de condicionar aspectos exclusivamente técnicos, didácticos y pedagógicos de la organización escolar. Por ejemplo, la organización escolar podrá ser modificada por el grado de normativismo que establezca el ideario educativo; un ideario educativo que pretenda aherrar, mantener estrechamente el control sobre la organización del centro, va a comportar un grado mayor o menor de posibilidades de creatividad, de posibilidades de aportación espontánea del trabajo en común, del trabajo en equipo por parte de los diferentes miembros de la comunidad escolar.

La distribución de las actividades escolares, bien sea en su aspecto formativo o en su aspecto informativo, también podrá venir condicionada por el ideario educativo. Igual ocurrirá con la orientación escolar o profesional, y voy a tener ocasión también de probar a Sus Señorías que hay casos en que se condiciona hasta la orientación escolar por el ideario del centro.

Otro tanto se puede decir de los aspectos estrictamente didácticos. El aprendizaje que se lleve a cabo en un centro, que puede ser de muchos tipos, un aprendizaje de tipo memorístico, un aprendizaje activo, la represión de la creatividad, el sistema de evaluaciones, los métodos de recuperación y promoción, todo ello, unido a la utilización de técnicas dinámicas o pasivas de aprendizaje, va a venir condicionado por el ideario educativo del centro.

Efectivamente, yo les decía que podría leerles idearios donde aparecen esos condicionamientos a los aspectos estrictamente didácticos o pedagógicos. Se puede leer en uno de los idearios que tengo aquí lo siguien-

te: «Para lograr una educación integral de cada alumno en conformidad con los objetivos propuestos, el colegio tal procura una formación intelectual...», etc. Y sigue: «... inicia a los alumnos en el estudio personal dirigido».

Señorías, para la mayoría creo que es una expresión sobradamente conocida, porque tiene una rancia tradición en la enseñanza privada de nuestro país, la de «el estudio dirigido»; pero, desde el punto de vista estrictamente técnico, hay que decir que el estudio dirigido es una técnica de aprendizaje, más que discutida, repudiada y rechazada por la inmensa mayoría de las modernas corrientes pedagógicas. Pues bien, Señorías, un ideario educativo condiciona ya el inicio de los alumnos en el estudio personal dirigido; entiende (vean Sus Señorías hasta dónde se puede llegar) la educación física como dominio del propio cuerpo. Hay aquí toda una serie de resonancias o connotaciones que a mí personalmente no me agradan nada, pero que pueden recordarles a Sus Señorías alguna proyección cinematográfica en un programa de la segunda cadena no hace muchos sábados en nuestro país. «La práctica del deporte en el ámbito colegial educa en el esfuerzo y en la competitividad». Eso es transmisión ideológica, Señorías; eso no es ni proyecto educativo ni técnica pedagógica; eso es implicación ideológica que sufre la pura pedagogía, la pura técnica didáctica, como consecuencia de un determinado ideario educativo. No se le han puesto límites al ideario educativo, y ésa es la prueba de que vamos a tener una extensión de idearios que comporten conclusiones tan aberrantes como la de establecer un sistema basado fundamentalmente en la competitividad, con las consecuencias que de ese planteamiento se pueden derivar.

Pero hay más todavía, Señorías, porque el ideario comporta también la intolerancia y la ruptura del derecho a la intimidad, y así ocurre, por ejemplo, respecto a la limitación de la actividad de los agentes educativos en el centro y hasta fuera de él. También tengo ejemplos de un ideario de un centro donde se manifiesta esto que acabo de decirles: «Para que este centro promovido por la congregación pueda realizar eficazmente su proyecto educacional debe ser reconocido y acep-

tado en su identidad por cuantos intervienen activamente en él a diversos niveles», etc.; «... quienes ajustarán sus actuaciones profesionales y sus comportamientos personales a las exigencias que derivan de esa identidad...», «... y sus comportamientos personales». Y se sigue diciendo: «Los profesores, conscientes de la trascendental misión que voluntariamente han elegido, procurarán dar, con su preparación, vida y testimonio, la verdadera imagen del educador cristiano. Los padres, conscientes de sus derechos y responsabilidades», etc.; «... aceptando el espíritu de este ideario...»; «... todos ellos sintonizan y comparten el espíritu de este ideario».

Señorías, las actuaciones profesionales, la vida de los profesionales, la aceptación, el acatamiento habría que decir, del ideario, evidentemente son limitaciones graves al derecho a la intimidad que garantiza nuestra Constitución. El ideario, según el artículo 18, condiciona los fines y actividad de la asociación de padres; según el artículo 15, limita la libertad de expresión de los profesores, y según el artículo 37, puede interpretarse como afectando también a la libertad de los alumnos.

Se trata de algo que se respeta o de algo que se acata y que se acepta pasivamente. A mí me gustaría que se me pudiera responder a algunas dudas. ¿Es que en un centro con un ideario de este tipo se va a poder explicar, explicar, la evolución, o es que va a haber que explicar la evolución y añadir al final, como en aquellos tratados de filosofía escolástica que nos prodigaban en la Universidad hace unos años, donde, después de cada teoría, se decía: «errores», se va a poder explicar a Nietzsche, Señorías, o va a haber que explicar a Nietzsche y luego decir errores de Nietzsche? Este es uno de los aspectos que, evidentemente, más preocupan a los socialistas, porque se ha hablado mucho de respetar, de respetar; pero nos preguntamos si el respeto es el acatamiento, si el respeto es no sólo la asunción de una posición espiritual e intelectual que consiste, Señorías, en no atacar a aquello a lo que se respeta o, por el contrario, si el respeto, por lo menos en estas interpretaciones que estamos viendo —y nos gustaría escuchar las interpreta-

ciones que den los diferentes Grupos de esta Cámara—, es algo más, es el acatamiento y la asunción de los contenidos en aquello que se respeta, porque en este segundo caso no se está hablando de respeto o, al menos en la opinión de los socialistas, no se estaría hablando de respeto.

Todo lo dicho hasta ahora nos parece especialmente grave. Pero eso, todo eso, es más grave todavía si consideramos, si se tiene en cuenta que esa ideología del propietario del centro, esa desigualdad para la elección, esa limitación de la participación, ese acatamiento y sometimiento de la actividad profesional y de la intimidad personal; todo eso, Señorías, va a ser financiado con fondos provenientes de todos los ciudadanos. Y ya sé que se nos va a decir que ese es otro tema. Esa también es una distinción escolástica, y yo, desde luego, no soy de los que practican la filosofía escolástica. Porque aquí estamos tratando de un problema que forma un todo estrechamente unido con otro tema, que ya llegará formalmente a esta Cámara, pero que ya está en esta Cámara porque ya está el debate educativo en nuestra sociedad, que es el tema de la financiación, y no me vale la argucia dialéctica o parlamentaria de decir que eso se verá cuando llegue la Ley de Financiación, porque, Señorías, aquí se ha aceptado y aprobado un número 2 del artículo 5.º donde se establece esa financiación de una manera indiscriminada y generalizada.

Estamos ante un problema que es el mismo; y si los socialistas desde la defensa de la enmienda a la totalidad en la Comisión ya denunciábamos que la estrategia parlamentaria educativa que el Gobierno había elaborado y puesto en marcha nos parecía desacertada, era justamente porque estamos apreciando esto que ahora aparece, y es el que se iba a regular, de un lado, como si no tuviera absolutamente nada que ver, la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, y, por otro, como si no tuviera nada que ver, se iban a tratar de regular las condiciones y requisitos que deben reunir los centros para que reciban ayuda por parte del Estado.

Y ésa, Señorías, con perdón, por supuesto, es esquizofrenia legislativa que a los socia-

listas nos parecía peligrosa, porque podía conducir a situaciones de incongruencia, de incoherencia y, sobre todo, de pérdida de la perspectiva global de cuál es el fondo auténtico del problema.

El tema de la financiación va estrechamente unido a este del ideario; forma parte, evidentemente, de ese todo; y ese todo, esa pretensión de que con el dinero de todos se imponga la ideología de unos pocos, es lo que los socialistas rechazamos frontalmente.

La enmienda 104, del Grupo Socialista, en la numeración antigua, proponía para ese número 1 una redacción alternativa en la que básicamente, aceptando y reconociendo a los titulares de los centros privados el derecho a establecer un ideario educativo propio (y me gustaría que esto fuera perfectamente atendido y comprendido por Sus Señorías), decimos: «Se reconoce a los titulares de centros privados el derecho a establecer un ideario educativo propio», y añadíamos una serie de matizaciones y limitaciones (y yo sé que se va a decir que van de suyo) que son redundantes, pero que nos parecían cautelas necesarias e imprescindibles; porque, Señorías, no estamos legislando en Bélgica o en Holanda, sino que estamos legislando en la sociedad española, donde se producen estos idearios educativos antes incluso de la aprobación de esta ley. Nosotros decíamos: «Se reconoce a los titulares de centros privados el derecho a establecer un ideario educativo propio en el respeto a los principios y declaraciones de la Constitución» (hasta ahí igual que el texto del dictamen), «sin que de ello puedan derivarse condiciones discriminatorias respecto a los alumnos, profesores y restante personal de los centros», primera matización; segunda: «... respetando, en todo caso, los derechos profesionales correspondientes...», y tercera: «... y en el pleno respeto a la conciencia de cada individuo».

Señorías, el respeto a los derechos profesionales, el respeto a la conciencia individual y la no discriminación nos parece a nosotros que no pueden ser rechazados por quienes aceptan de una manera veraz la Constitución.

Respecto al número 2 de la redacción del dictamen, los socialistas tendríamos que comentar cómo en el número 2, letra d) —en nuestra enmienda letra b)—, del dictamen

decimos: «Consejo del Centro, como órgano supremo de participación, en el que estarán representados, junto con la titularidad y los órganos unipersonales de gobierno del centro, los profesores, personal no docente, los padres de alumnos» (hay una errata en la transcripción de nuestra enmienda, porque dice «o padres de alumnos»; habría que suprimir la «o») «y, en su caso, los alumnos, en proporción y sistema de elección análogos a la establecida para el Consejo de Dirección en los centros públicos». Y hasta aquí el espíritu quizá sea el mismo, aunque no la letra. Pero aparece ahora otra importante matización, otra importante adición socialista, que dice: «Entre sus funciones estarán la de participar en la elaboración o modificación del Estatuto del centro, en la programación de todas las actividades educativas y extraescolares, en la determinación de su régimen económico».

Señorías, lo que pretendemos es fijar unos límites de competencias para ese Consejo del centro. Quizá Sus Señorías puedan decir: «Eso viene ya dado por esa disposición de este propio proyecto de ley donde se dice que los centros privados deberán asemejarse, en lo esencial, a los centros llamados públicos». Pero ocurre que, en virtud de la redacción actual del dictamen, en este número 2 se dice que «cada centro deberá elaborar su propio Estatuto o Reglamento de Régimen Interior en el que establecerá la intervención de los profesores, de los padres de los alumnos, del personal no docente y, en su caso, de los alumnos, en el control y gestión del centro...», que es el que establecerán los correspondientes órganos de gobierno.

Por lo tanto, Señorías —y me voy a referir sólo a los órganos de gobierno— si el Reglamento de Régimen Interior es el que establecen los órganos de gobierno, y ese Consejo del centro deriva de ese Reglamento, lo que pretendemos, como mínimo, es que tenga que atribuirle funciones que son esenciales para que se pueda hablar de la intervención de la comunidad escolar en la gestión del centro.

Sin embargo, en esa redacción, a la que he dado lectura, del número 2 del artículo 34 del dictamen hay un aspecto enormemente grave para los socialistas, porque se dice,

como he leído, que es el Reglamento de Régimen Interior el que regula la intervención de los profesores, de los padres de los alumnos y de los alumnos, en su caso, en el control y gestión del centro. Por tanto, lo que viene establecido en el número 7 del artículo 27 de la Constitución, en virtud de la interpretación que le da el Partido del Gobierno, puede ser interpretado y puede ser reglamentado por un Reglamento de Régimen Interior de un centro privado, y resulta que en ningún caso se establece y se da garantías de que ese Reglamento vaya a ser elaborado, al menos, por la propia comunidad escolar. Se dice: «Cada centro deberá elaborar...». Y si arriba se ha dicho que el responsable de asumir la gestión económica del centro y la responsabilidad del funcionamiento del mismo es del titular, creo que los socialistas estamos absolutamente justificados para sospechar que ese Reglamento lo va a dictar el propietario, y que ese Reglamento va a ser también una emanación del ideario educativo, con todas las implicaciones que ya hemos visto antes.

Además, hay otra frase importante en este número 2, porque se añade, después de que se dice que el Reglamento de Régimen Interior regulará o establecerá la intervención de profesores, padres de alumnos, etc., lo siguiente: «... dejando siempre a salvo lo dispuesto en el apartado anterior. Hay que aclarar, inmediatamente, qué es lo que se trata de salvar, qué es lo que se pretende dejar a salvo, qué intereses, qué derechos son los que se dejan a salvo ahí. ¿Los intereses de los padres?, ¿los intereses de los propios alumnos? (que, por cierto, no intervienen para nada en la fijación del ideario; que presumiblemente no van a intervenir en la elaboración de ese Reglamento de Régimen Interior; que ven limitada, de hecho, su intervención en el control y supervisión de la gestión económica en aquellos centros que son sostenidos por fondos públicos), ¿o, por el contrario, no se tratará de los intereses de aquellos que han hecho ya estos idearios, de los intereses que quieren utilizar la escuela para adoctrinar, para hacer proselitismo, para imbuir una determinada ideología a sus alumnos?

Nosotros —y lo quiero decir con absoluta

claridad y contundencia— no nos oponemos a que los centros privados tengan un carácter propio (terminología europea, por otra parte, mucho más aséptica y correcta que la de «ideario educativo») que se identifique con la programación general del centro; pero a lo que sí nos oponemos es a que dicho carácter propio pueda lesionar o condicionar derechos y libertades fundamentales. Porque ésta es la clave del asunto, Señorías. El derecho al ideario, al carácter propio no está reconocido ni sancionado en la Constitución ni en los pactos o tratados internacionales, y, por lo tanto, no puede constituir, en ningún supuesto, límite o restricción a la suprema norma legal.

En esta dirección es en la que van nuestras enmiendas: en la de tratar de acotar, de fijar los límites del ideario en cuanto a sus posibles repercusiones sobre derechos y libertades constitucionales.

Respecto al número 3 de este artículo 34 del dictamen de la Comisión, quizá haya dos diferencias fundamentales —yo no voy ahora a repetir los argumentos que se dieron en la Comisión o los enfrentamientos dialécticos que pudimos tener en torno a si era o no una victoria de la racionalidad, etc.—; pero lo que es claro es que los socialistas hemos venido manteniendo, desde mucho antes de que esta ley empezara a ser debatida en Ponencia, que en la realidad educativa de nuestro país existen tres sectores educativos, que son: el de la enseñanza oficial, que puede ser estatal o municipal, etc.; el de la enseñanza estrictamente privada y el de origen de iniciativa privada, pero que es un sector específico, y cuya especificidad viene dada por ser un sector de iniciativa privada sostenido por fondos públicos. Eso es lo que hemos venido sosteniendo los socialistas y que ha sido uno de nuestros caballos de batalla en la lucha por conseguir convencer al Partido en el Gobierno, a los partidos que mantienen el apoyo a esta ley y a la sociedad española en general: la racionalidad y oportunidad que aconsejaba o bien regular de una manera concreta la especificidad de este sector de centros o bien, en este propio Estatuto, hacer alguna referencia a esta especificidad que permitiera la aplicación estricta y respetuosa del número 7 del artículo 27 de la Constitución.

Pues bien, después de negar esa especificidad una y otra vez; después de decirnos a los socialistas que lo que pretendíamos con esa distinción de especificidad no era sino, en el fondo, transformar los centros privados, que son sostenidos con fondos públicos en centros estatales o escuelas únicas, llegamos a la Comisión y, merced a una enmienda «in voce», con un espíritu transaccional por parte de la UCD, se añade este apartado d), donde se habla de que «en los centros o niveles sostenidos con fondos estatales» (es la única vez que se habla de este sector, pero, al menos, ya es una en la ley) «o de otras entidades públicas, una Junta Económica en la que estarán representados, además de la titularidad del centro, los profesores, los padres de los alumnos, y, en su caso, los alumnos, con la misión de intervenir en el control y supervisar la gestión económica del centro». Nosotros tenemos prevista, en nuestra enmienda 104 —de numeración antigua—, la Junta Económica para todos los centros privados. Lo que sí podemos decir es que si por parte de UCD se entiende que esta letra d) del número 3 del artículo 34 es la aplicación del número 7 del artículo 27 de la Constitución a los centros sostenidos con fondos públicos que son de origen de iniciativa privada, desde luego, Señorías, ésa sería una lamentable interpretación, puesto que allí se habla —y esta diferencia de lenguaje está patente— de intervenir en el control y gestión de los centros y no de los fondos económicos que reciben los centros, que eso va incluido dentro del control y gestión de los centros. Por tanto, que no se nos vaya a decir que esta letra d) es la que aplica el número 7 del artículo 27 de la Constitución.

Nosotros, precisamente en esa línea de reconocer, sancionar y regular, aunque fuera mínimamente, la especificidad del sector, hemos presentado una enmienda que, de forma casi alternativa, pretenden que haya una regulación: por un lado, la enmienda de numeración antigua 105, donde lo que pedimos pura y simplemente es que se regule en un estatuto la especificidad del sector de centros privados sostenidos con fondos públicos, y, por otro lado —y ésta es, quizá, la que más nos importa destacar—, la enmienda «in

voce» que presentamos en Comisión y que significaba un artículo que entonces se numeraba como 37 tris, que sería ahora 34 tris, o como se quiera llamar, que dice literalmente: «En todos los centros sostenidos con fondos públicos, el Consejo del centro definirá los principios y objetivos educativos generales a los que habrá de atenerse toda la actividad de los mismos, respetando en todo caso los principios y declaraciones de la Constitución. «En su aplicación se respetarán las opciones filosóficas y religiosas inherentes al ejercicio, por parte de los padres de los alumnos de los centros, del derecho reconocido en el artículo 27, 3, de la Constitución».

Señorías, esta enmienda es la que recoge de una manera, quizá, digamos, más matizada, más exquisita, nuestra filosofía sobre este tema. Porque, evidentemente, se trata de un sector específico, el sector de centros de iniciativa privada sostenidos con fondos públicos, y esa especificidad nosotros creemos que hay que respetarla.

Pero también esa especificidad comporta, señorías, el hecho de ser sostenidos con fondos públicos. Yo no voy a repetir las argumentaciones que he dado ya en Comisión y en la defensa de la enmienda a la totalidad ante este Pleno, de que el depósito de fondos públicos a un centro de enseñanza no es como el depósito de unos fondos económicos; es el depósito de una confianza en la prestación de un servicio público, porque creo que ésta es la idea fundamental y ha sido suficientemente desarrollada.

Nosotros, Señorías —y esto es algo que me importa destacar—, no estamos en esta enmienda, en esta ley (y esto no implica rechazo, repudio u olvido de ninguna de nuestras posiciones), propugnando la autogestión, y que no se nos enarbole una y otra vez la bandera de la autogestión, porque en esta ley nosotros lo que estamos defendiendo no es la autogestión, estamos diciendo que en los centros privados sostenidos con fondos públicos el proyecto educativo se elabore por parte de la comunidad escolar. Es la aplicación escrupulosa del artículo 27, número 7, la que nos lleva a presentar esa enmienda en un afán, en un intento de racionalizar el tema y de encontrar un cauce que permita armonizar y

salvar el ejercicio de todos los derechos y libertades que, o bien aparecen en el artículo 27 de nuestra Constitución, o bien vienen conectados directamente con l.

¿Qué implica esa enmienda de los socialistas? Evidentemente, Señorías, no implica, ni muchísimo menos, la estatalización. ¿Convertir en centros públicos a los centros privados sostenidos con fondos públicos? Quizá. Pero yo voy a poderles leer unos párrafos que me parecen de una gran importancia, porque cuando nosotros estamos hablando de escuela pública y de centros públicos, no estamos hablando de lo que en este proyecto de ley se llama centros públicos, eso tiene que quedar perfectamente claro.

Lo que aquí se llaman centros públicos son centros oficiales, son centros que provienen o bien de la Administración del Estado, o de aquellas administraciones territoriales que tienen competencia, delegada o no, o propia, en materia educativa. Eso no es lo que los socialistas entendemos por escuela pública, eso equivale a lo que en el modelo centralista era la escuela estatal; y nosotros, Señorías, lo que defendemos es una concepción de escuela pública o de servicio público de educación donde convivan perfectamente la red de centros oficiales, que pueden ser estatales, municipales o de corporaciones de otro tipo, donde conviven los centros de tipo corporativo, donde conviven los centros de iniciativa privada, pero que estén todos ellos acogidos al sistema de sostenimiento por parte de los fondos públicos. Y ahí, evidentemente, nosotros creemos que está la clave de la cuestión.

No se trata de hacer de esos centros privados, sostenidos con fondos públicos, centros oficiales; se trata de hacer centros públicos al servicio del ciudadano, al servicio de la sociedad.

Señorías, nosotros queremos una escuela al servicio del pueblo y abierta a todos, sin marginaciones de ningún tipo; una escuela pública en el sentido más noble de la palabra, en razón de la función de servicio. Eso es lo que queremos los socialistas.

Se ha dicho desde el Grupo Centrista, y desde el propio Gobierno, que esta ley pretendía la igualdad en la libertad. En el famoso folleto de propaganda de la política del

partido del Gobierno, que también se sostiene con fondos públicos, el Ministerio de Educación informa un modelo educativo para la igualdad de la libertad. Eso se ha dicho.

Pues bien, Señorías, si no hay condiciones de igualdad, si no hay satisfacción plena de las necesidades educativas, si no queremos que la escuela surgida del dinero de todos sirva al adoctrinamiento y al proselitismo de los pocos, para que eso no sea así los socialistas proponemos, y seguiremos proponiendo, la defensa de la libertad de todos desde la igualdad de todos.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra de estas enmiendas? (*Pausa.*)

Quiero advertir que se ha defendido, tanto la enmienda que propone un texto alternativo al artículo 34, como las enmiendas que proponen, en fórmula subsidiaria, formulaciones distintas, 34 bis y 34 ter, cuanto la incorporación de un nuevo artículo relativo a la participación de profesores, personal no docente, etcétera, en los centros subvencionados con fondos públicos.

Tiene la palabra el señor Herrero de Miñón.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: Señor Presidente, mi ánimo es de gran brevedad, aunque la afirmación inicial del señor Gracia de que las observaciones inteligentes nunca sacian y que, por tanto, él y sus colegas no están saciados de oír la argumentación de UCD, me incita a reiterar aquí algunos extremos.

El señor Gracia, aunque ha defendido una serie de enmiendas concretas, lo cierto es que también las ha insertado en un planteamiento general en torno al concepto de ideal a las consecuencias de la admisión de este concepto y, por último, a los extremos de financiación y participación. Y es a estos extremos a los que también se va a ceñir mi respuesta a las enmiendas por él propuestas.

El primer gran problema que se nos ha planteado aquí, y no sólo esta vez, sino insistentemente y a través también de los debates en Comisión y de la propaganda que con fondos públicos y privados se viene haciendo por parte de diversos grupos políticos en la opinión pública, es el concepto equívoco del

ideario. Se ha preguntado una y otra vez qué es el ideario y se han traído aquí algunos textos fraccionados, poco significativos como suele ser la cita de todo texto fraccionado, de acuerdo a lo que ayer el propio señor Gracia nos señalaba. (*El señor Vicepresidente ocupa la Presidencia.*)

¿Qué es el ideario?, se nos pregunta, y nosotros queremos responder de una manera clara, para que, al menos, la intención de nuestro Grupo, y creemos que de los demás Grupos que han apoyado desde posiciones muy distintas el texto de la mayoría, quede suficientemente explicitada.

¿Qué es el ideario? El ideario, señor Presidente, es un sistema coherente de ideas o principios generales destinados a engendrar o dirigir un proyecto de enseñanza. Es la declaración expresa y explícita del tipo humano, de la personalidad humana integral que se va a formar y de los grandes fines educativos que la institución destinada a esta formación integral se propone alcanzar. El ideario supone, por tanto, unos valores procedentes de la visión, más o menos completa, más o menos coherente, que se tenga sobre el mundo y el hombre y comprende, además, unos principios y objetivos educativos derivados de estos valores.

Lo dicho, señor Presidente, permite concebir una pluralidad posible de idearios que van desde una fundamentación puramente monobásica, es decir, aquellos idearios que atienden, por ejemplo, a la experiencia interpretada por la ciencia, a unos idearios que llamaríamos bibásicos, es decir, aquellos idearios basados no sólo sobre la experiencia, sino también sobre la especulación racional de tipo filosófico, ya crítica (como sería, por ejemplo, un ideario de un centro docente racionalista, ilustrado), ya dogmático, como sería, por ejemplo, un centro docente marxista, dogmático, como el que podría dirigir el Partido Comunista francés (*Risas*), o idearios tribásicos, en los que a estas dos aportaciones se une la concepción trascendente del mundo, del hombre y de su destino.

Esto es un ideario, señor Presidente. Y hay idearios patentes, y hay idearios también latentes. Es decir, los primeros, los idearios patentes, son tanto aquellos idearios coherentes como aquellos otros idearios que consis-

ten —y el señor Gracia en Comisión aceptaba esta posibilidad— en la ausencia de todo ideario, es decir, en el más extremado pluralismo. Estos son idearios patentes y plenamente aceptables y convenientes en una sociedad pluralista y democrática.

Pero también hay idearios latentes. Es decir, idearios no confesados, y lo latente en los idearios, como en el contenido latente del discurso, o del gesto, o del sueño, es lo más peligroso, porque es en el imperio de lo oculto donde está el peligro; porque en lo latente, en lo que no se confiesa, está la palabra que no se pronuncia, y la palabra que no se pronuncia, decía Nietzsche —autor que no sabíamos contaba con la estima del señor Gracia—, se corrompe y, además, es susceptible de corromper, lo cual es mucho más peligroso.

El ideario es lo que la institución libre de enseñanza (institución que nunca ha gozado como en esta hora de la unánime y elogiosa cita de los diversos sectores de esta Cámara; ¡hay que ver si esto hubiera ocurrido en el Parlamento que dio ocasión a la creación de la institución libre de enseñanza!) denominaba el «espíritu educativo propio». Es decir, es el carácter propio de un centro que da sentido a su establecimiento, explica su perduración y garantiza frente a terceros el tipo de educación que en él se va a proporcionar.

Sin ideario o carácter propio (y la similitud entre ideario y carácter propio la hemos afirmado nosotros, pero también la ha afirmado reiteradamente el representante del Partido Socialista) carece de sentido la libertad de crear centros docentes, puesto que un centro docente que renuncia a todo carácter propio, a todo proyecto educativo que le caracterice como tal, realmente merecería el nombre de mera empresa educativa, que no es despectivo, pero que aquí ha sido utilizado por los grupos situados a mi izquierda en tono despectivo.

Los límites del ideario (que es lo que preocupa al parecer de manera especial al Partido Socialista, y también a nosotros, hemos de decirlo, nos preocupa que los idearios se formulen de manera prudente y responsable) se encuentran en la Constitución, puesto que es, en efecto, dentro del respeto a los principios constitucionales, como el artículo 27, 6 reconoce a los particulares, el derecho de

crear centros docentes y, por tanto, de identificarlos. Esta limitación se reitera en el número 1 de este artículo 34 que ahora discutimos.

Ahora bien, dentro de la Constitución, señor Presidente, es preciso destacar a estos efectos la importancia de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa afirmada en el artículo 16. El ideario no puede violentar ninguna conciencia. A nuestro juicio, el ideario ha de ser respetuoso con todas y cada una de las conciencias. El ideario no puede ser jamás impuesto, sino tan sólo ofrecido a quienes, mediante su aceptación, vayan a integrarse en la comunidad escolar constituida como institución en torno a ese ideario educativo, a ese espíritu educativo. En esa adhesión hay, sin duda, un elemento activo, pero también hay una gran dosis de mero respeto, y puede perfectamente concebirse una conciencia agnóstica integrada como profesor en una comunidad educativa presidida por un ideario confesional que el profesor de geometría tiene simplemente que respetar cuando discurre entre poliedros e hipotenusas. Sin duda, habrá otras asignaturas mucho más comprometidas.

Surge la preocupación socialista por que no se critique a Nietzsche. Sin duda, la Filosofía es más comprometida que la Geometría; sin duda, la clase de Ética es más comprometida que la clase de Historia de la Filosofía, y el respeto habrá de medirse en función de aquella asignatura que se explica. Esto creo que es fácilmente comprensible por todos.

Pero una dimensión expresamente reconocida en el artículo 16 de la Constitución es también, junto a la libertad de conciencia, la libertad religiosa, no sólo de las personas individuales, sino de las comunidades, y ello supone no sólo una libertad de culto, sino también de enseñanza y de organización de centros e instituciones, propios de esas comunidades religiosas o a esas comunidades religiosas vinculadas, en virtud de su carácter propio.

Y el mismo artículo 16, que protege la conciencia individual, protege la manifestación coherente de la conciencia colectiva de una comunidad, que puede expresarse, entre otras maneras y con absoluta legitimidad, mediante el ideario educativo de centros de enseñanza.

Esto, señor Presidente, es nuestra concepción del ideario, que ha de ser siempre respetuoso con la Constitución, pero que puede prevalerse también del derecho que la Constitución reconoce a la expresión de la conciencia colectiva de una comunidad, que supone, sin duda, un compromiso activo por quienes lo aceptan, pero supone, sobre todo, una gran dosis de respeto, respeto que deberá graduarse según el sentido y el objetivo de la disciplina explicada o de la actividad docente realizada.

Y, por último, es un ideario que nunca puede ser impuesto, que es simplemente ofrecido, pero precisamente en la posibilidad de ofrecer algo y en la posibilidad de aceptarlo mediante una adhesión cordial a esta idea-fuerza, es en lo que se basa la gran categoría de la institución, esa gran categoría que hoy articula y medula el verdadero mundo moderno de la libertad. Porque, señor Presidente, todos sabemos que en la sociedad actual la libertad no es sólo libertad de individuos, es también la libertad de los individuos articulados en instituciones, y articulados en instituciones en virtud de aquellos principios, de aquellas ideas-fuerza que explican y justifican esas instituciones y su perdurabilidad.

Se nos ha dicho a continuación que el ideario podía tener consecuencias sumamente peligrosas. Se nos ha dicho, en primer lugar, que el ideario condiciona hasta el punto de que puede en él establecerse la conveniencia del estudio dirigido o la conveniencia de que se conciba la educación física como dominio del propio cuerpo.

Señor Presidente y señoras y señores Diputados, si todos los peligros que esperamos del ideario es que se pueda llegar a decir que la educación física ha de interpretarse como dominio del propio cuerpo, creo, realmente, que estamos gastando unos fondos públicos excesivos en estas discusiones. El que la educación física se conciba de una u otra manera, y de la manera peligrosa que se concibe es como dominio del propio cuerpo, no creo que sea algo que atente, realmente, al fundamento de la libertad de enseñanza y de la igualdad democrática de los ciudadanos e incluso de la calidad de enseñanza que estos ciudadanos reciben.

Se nos ha dicho también, y ello es más se-

rio, que una consecuencia grave del ideario es que pueda, hasta cierto punto, influir, incidir, sobre la situación de quienes prestan sus servicios como docentes y no docentes en la comunidad educativa.

Yo quiero aquí hacer una referencia comparada, pero antes, y con la benevolencia de la Presidencia y de todos ustedes, quiero abrir un pequeñísimo y breve paréntesis y lamentar que no esté aquí don Gregorio Peces-Barba. Ayer hubo una pequeña discusión de hecho entre el señor Peces-Barba y yo sobre la vigencia de determinado Convenio internacional: el Protocolo Adicional I de la Convención Europea de Derechos del Hombre. A mí no me duelen prendas en decir que el señor Peces-Barba tenía absoluta razón, y esta es la mejor garantía que encuentro para, a continuación, traer a colación otros precedentes internacionales y comparados.

El señor Peces-Barba tenía razón. Este protocolo adicional al que me refería fue firmado por España el año 1978, pero no se ha ratificado todavía. Es cierto que la firma ya engendra determinada obligación de buena fe a la ratificación y ulterior puesta en vigor por parte del Estado que suscribe un convenio y ello es universalmente reconocido por la doctrina internacional; pero, de hecho, no está ratificado y, por tanto, no está vigente en España, y yo, a título particular, pienso pedir a la Administración responsable explicaciones de por qué este extraño retraso en la ratificación durante dos años de tan importante Convenio internacional.

Lo que quiero también decir es que la voluntad expresa del Grupo Socialista, según el texto que ayer leí de ratificar este Convenio y de aceptar su vigencia en España y la vigencia ya hoy de paralelos convenios como el de París de 1966 mantienen hasta cierto punto en pie la argumentación mía de ayer frente al señor Peces-Barba.

Cerrado este paréntesis, quiero darles a ustedes algunos datos sobre cómo se entiende en el mundo occidental la incidencia de los idearios en las conductas de quienes prestan su servicio, su trabajo, su actividad, en el seno de institutos docentes con un carácter propio.

En Estados Unidos, el Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de marzo de 1979, recono-

ció la autonomía laboral de los centros religiosos respecto de las autoridades laborales y de la legislación laboral general, porque consideraba que el carácter propio de estos centros exige un tratamiento y una relación especial y peculiar del personal que en ellos presta sus servicios.

En Francia, se reconoció que el carácter propio o ideario de los centros privados, incluso de los financiados con fondos públicos, ha de ser estrictamente respetado por el personal que en ellos trabaja. Esto lo dijo el Consejo Constitucional francés en fecha tan reciente como la sentencia de 23 de noviembre de 1977. Y el carácter propio —dice el Tribunal de Casación, es decir el Tribunal Supremo francés en sentencia de 19 de mayo de 1978— ha de ser protegido incluso frente a la conducta extradocente del personal que allí trabaja.

En Alemania existe una abundante doctrina y jurisprudencia. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de octubre de 1977, favorable al carácter propio de establecimientos docentes, hospitalarios, benéficos, etc., de fundaciones privadas y a la autonomía que para su régimen interno y laboral ello supone. Así, por ejemplo, en un caso bien reciente que no ha dado lugar a jurisprudencia alguna porque nadie lo ha discutido, en una universalidad estatal no puede desempeñar una cátedra de teología dogmática católica quien no esté habilitado para ello por la respectiva Iglesia, en este caso la Católica. Y me refiero, como todos ustedes comprenderán, al caso del doctor Küng.

En Italia, país que de forma incomprensible se nos pone tantas veces como modelo, los convenios nacionales de trabajo para el personal docente y no docente, respectivamente, en las instituciones regidas por entes eclesiásticos, celebrados por los correspondientes sindicatos en 1977 y prorrogados en 1979 por dos años más, es decir, hasta 1981, reconocen literalmente, en sus artículos 2.º, 4.º y 25, la obligación del personal de aceptar formalmente el carácter educativo católico de la institución y comportarse de manera coherente con el citado carácter, estimando motivo de justo despido el comportamiento contrario a este carácter.

En sentencia de 1972, aquí ya citada, la

Corte Constitucional italiana reconoció que la libertad de cátedra en una Universidad privada debía atemperarse al respeto del ideario o carácter propio de dicha institución.

Todos estos documentos están aquí, a disposición de los señores Diputados.

Después de afirmar esto que ocurre en el mundo, yo creo que la preocupación que sentimos porque el profesorado y el personal no docente del centro deba atemperar su comportamiento y deba respetar, al menos respetar, aquello que justifica la razón de ser del centro donde presta su trabajo, es algo exagerado. Si, incluso en el cumplimiento de cualquier relación contractual se supone inherente el principio de buena fe —y una violación del principio de buena fe es la competencia ilícita—, no parece excesivo que al personal docente que trabaja en un centro caracterizado por un ideario, se le exija que no realice la competencia ilícita que supone utilizar las competencias docentes que este centro le proporciona para atacar el ideario que caracteriza a este mismo centro docente. Y esto, señoras y señores, es lo que nosotros pretendemos al afirmar el ideario, y no otra cosa; que sea un marco de respeto; un marco de respeto que, insisto, adecuado al nivel de compromiso de la enseñanza que se está impartiendo o de la actividad que se está haciendo.

Yo creo que con esto quedan, en parte, respondidas algunas de las consideraciones generales relativas al texto del número 1 del artículo 34 del señor Gracia y, por supuesto, de lo que supone para nosotros la inaceptabilidad de sus enmiendas.

En cuanto al tema de la financiación, también tocado de pasada, yo querría señalar que, realmente, nuestro temor de que se intente publicar toda la enseñanza mediante un Estatuto de Centros subvencionados, es un temor justificado, porque en el debate a la totalidad, el portavoz autorizado del Grupo Socialista afirmó que, mediante este Estatuto, lo que se pretendía era asimilar a los centros públicos los centros privados subvencionados.

Nosotros ya hemos señalado que, a nuestro juicio, la subvención no puede ser un instrumento de inhibición de la libertad, sino, precisamente, de poner la libertad al alcance de todos. A nuestro juicio, la financiación, hasta

la gratuidad, tiene como objeto que todos los padres españoles, cualquiera que sea su condición económica, puedan decidir dónde escolarizar a sus hijos, si en el sector público o en el sector privado y, también, mediante los correspondientes instrumentos, poner el derecho de creación de centros docentes al alcance de todos y, especialmente, al alcance de cooperativas de profesores y padres de alumnos. Lo que no podemos, en consecuencia, tolerar es que la financiación, concebida como instrumento de liberación para realizar esa función liberalizadora —que corresponde al Estado, según el artículo 9.º de nuestra Constitución— se convierta en un instrumento de confiscación de la misma libertad a cuyo fomento estaba destinada.

Llego al último punto de las consideraciones generales del señor Gracia, el tema de la participación. Hemos dicho, y ahora tenemos que repetir, que el artículo 34 establece una participación a dos niveles, y ello exige un poco de historia. Los Pactos de la Moncloa —tantas veces citados aquí— preveían un control de la comunidad escolar en los centros subvencionados con fondos públicos, sobre esos fondos públicos, y solamente sobre esos fondos públicos; eso dicen literalmente los Pactos de la Moncloa.

La Constitución dio un paso más (creo que la Constitución es mucho más importante que los Pactos de la Moncloa), la Constitución dio un paso más y estableció la intervención de los diversos sectores de la comunidad escolar, en los centros subvencionados, y no solamente en los fondos públicos destinados a esos centros. Y este principio del artículo 27, 7, en relación, por supuesto, con el resto del artículo y con el resto de la Constitución, es lo que ahora nosotros tratamos de llevar a la práctica en esta ley.

El Grupo Socialista estará, sin duda, en desacuerdo sobre la manera como lo llevamos, pero acaba de reconocer expresamente hace unos minutos —hace unos minutos no, porque ya esto está siendo muy largo, pero hará media hora o tres cuartos de hora— que nosotros tratamos de manera igual los centros públicos que los centros privados, y como le gusta tan poco la manera como tratamos los centros públicos, es la razón por la cual no

puede aceptar la analogía que nosotros establecemos entre los centros privados y los públicos, y entonces es lógico que vote en contra de dicha analogía. Pero lo que ya no se puede afirmar es que nosotros mantenemos una dicotomía entre públicos y privados, y que tratamos los públicos de una manera y los privados de otra, porque precisamente el gran reproche que el señor Gómez Llorente ha hecho del artículo anterior es que establecíamos una analogía entre lo público y lo privado, y como le gusta —repito— tan poco nuestra solución para los públicos, es por lo que no puede aceptar la analogía que establecemos entre lo privado y lo público.

De manera que, cualquiera que sea nuestra razón en el tratamiento global, ha de reconocérsenos que no hacemos ninguna discriminación, en cuanto a participación se refiere, entre lo público y lo privado, esté o no subvencionado con fondos públicos. Porque, efectivamente, señor Presidente, y ya voy a ser muy breve, nosotros establecemos un nivel de participación doble, con dos escalones: para todos los centros privados, estén o no estén subvencionados, establecemos una organización participativa en un Consejo de dirección, en un Claustro y en una asociación de padres análoga a la de los centros públicos; establecemos los mínimos de la composición de esos órganos, remitimos su funcionamiento al funcionamiento de los correspondientes órganos en los centros públicos y, además, en algún precepto que antes no se ha citado, o se ha citado el contrario, en el artículo 18, antes 17, que es un precepto que se sitúa en el título general y que, consecuentemente, se aplica tanto a los centros públicos como a los privados, se atribuye a la asociación de padres elaborar, desarrollar o modificar, junto con el Claustro de profesores, el Reglamento de régimen interior del centro.

Ustedes recordarán que uno de los grandes argumentos del señor Gracia ha sido decir que este Reglamento lo va a establecer simplemente el titular. Pues bien, si este Reglamento lo establece el titular en los centros privados, lo cierto es que los órganos de participación, es decir, los padres y los profesores, van a poder modificar ese Reglamento, porque así se establece exactamente en el artículo 18, y

así se establece en virtud de la analogía esencial a que antes nos hemos referido, y que tiene el aval de don Luis Gómez Llorente y del Grupo que representa.

Finalmente, para remitirme a una de las enmiendas concretas que se han hecho, quiero manifestar mi extrañeza ante el hecho de que quienes se abstuvieron a la hora de votar y aquí públicamente criticaron nuestra posición sobre el artículo 23, relativo a que en la escuela pública, que es neutra, se respete la opción axiológica de los padres, hoy pretendan introducir, rigurosa y exactamente, el mismo texto en la escuela privada, cuando precisamente en esta escuela, que puede no ser neutra y que podrá, y usualmente estará, caracterizada por idearios de uno u otro tipo, la opción axiológica de los padres está garantizada por el hecho de que son los propios padres quienes eligen entre esta escuela u otra escuela.

Por último, también hay una enmienda, que no sé si se ha mantenido o no, que es la relativa a la libertad de sindicación. Yo quiero decir sobre esta enmienda que la libertad de sindicación reconocida en el artículo 28 de la Constitución es una de las declaraciones constitucionales que, como el resto de la Constitución, los idearios deben respetar.

Lo que es cierto es que esta libertad de sindicación, como toda libertad y todo derecho reconocido en la Constitución o en cualquier otro precepto, debe ejercerse de buena fe. Yo me pregunto qué ocurriría si mañana el personal administrativo y subalterno de la Fundación Pablo Iglesias decidiera afiliarse en bloque a Comisiones Obreras. Creo que resultaría una situación verdaderamente anómala, porque, como el otro día decía el señor Alzaga, el pluralismo de verdad es un pluralismo que exige determinada coherencia, y precisamente el pluralismo a ultranza, el pluralismo que permite introducir la discordia dentro de los núcleos de la pluralidad es un arma contra el propio pluralismo. Yo recuerdo que en un proyecto de asociaciones que se elaboró en el Consejo Nacional, hace muchos años, y del que fue padrino don José Solís Ruiz, se insistía mucho en algo muy parecido a esta enmienda; que de ninguna manera se podía inhibir o coaccionar la libertad de opinión de los

miembros de las asociaciones políticas, con lo cual fue imposible que funcionase ninguna asociación política coherente bajo aquel Estatuto.

Yo sé que la intención es radicalmente distinta, pero hay que tener cuidado con que las formulaciones no permitan algo absolutamente ajeno a lo que se pretende .

Por eso, señor Presidente, porque el ideario creo que es un principio de pluralidad y libertad, porque existen límites constitucionales a esos idearios, porque el ideario, con uno u otro nombre, está reconocido en el mundo libre al que pertenecemos, porque en la Constitución y en esta ley existen suficientes garantías de que ese ideario en manera alguna va a contravenir los derechos de los ciudadanos, sino que va a servir a los derechos de los mismos y de las comunidades, y porque, por último, el artículo que estamos discutiendo garantiza suficientemente y en pie de igualdad con los centros públicos, la participación de los diversos sectores de la comunidad educativa, es por lo que, señor Presidente, nosotros nos oponemos a la enmienda socialista.

Debería terminar aquí mi intervención, pero he olvidado una cosa que es importante decir: junto al sistema de participación en los centros privados, en pie de igualdad con los públicos, a nivel de Consejo de dirección, Claustro y asociaciones de padres, hay un segundo nivel, que es una junta económica, como instrumento de control y supervisión del funcionamiento económico global de los centros financiados con fondos públicos. Y ahí el control no se reduce, como preveían los Pactos de la Moncloa, al mero control de los fondos públicos, sino que se extiende al control de toda la actividad económica del centro subvencionado con fondos públicos.

Gracias, señor Presidente.

El señor GOMEZ LLORENTE: Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): ¿Es para rectificaciones, señor Gómez Llorente?

El señor GOMEZ LLORENTE: Si me lo permite la Presidencia, para un brevísimo tur-

no de alusiones, sin entrar en el fondo general del debate.

El señor Herrero Rodríguez de Miñón ha hecho una interpretación, con una alusión «nominativum», de unas palabras anteriores mías, y desearía rectificar sólo la interpretación que ha dado a algunas de mis palabras, con permiso de la Presidencia.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): De acuerdo, señor Gómez Llorente.

El señor GOMEZ LLORENTE: Creo que la cuestión no tiene mucho alcance, y no me voy a extender; solamente voy a referirme estrictamente a esas palabras.

El señor Herrero ha tomado pie en mi intervención concerniente al artículo 32 para llegar a decir que tenía la caución o aval de este Diputado a la idea de que el proyecto trata por igual a los centros públicos que a los privados. Yo, por supuesto, esto tengo que rectificarlo, porque ni ha sido ese el sentido literal de mis palabras, ni mucho menos la interpretación que hay que dar a las mismas, dado el contexto concreto de la discusión en el que se han producido, puesto que estábamos hablando del artículo 32 exactamente, y refiriéndonos a un párrafo del mismo, que dice: «... acomodándose en lo esencial a lo que respecto a los centros públicos del correspondiente nivel, ciclo o modalidad se establece en la presente ley».

Es obvio que, en una recta interpretación de mis palabras no se puede inducir de la argumentación que he utilizado el que yo acepte que este proyecto, en su conjunto, trata por igual a los centros privados y a los públicos. Con un cierto rigor intelectual, el señor Herrero no podía imputarme a mí tal cosa, puesto que yo he sido ponente de esta ley, he discutido todas y cada una de las palabras de esta ley, línea por línea, y obviamente él tiene que comprender que está de absoluta evidencia en mi mente el resto de los artículos de esta ley donde se establecen unas diferencias absolutamente radicales entre los centros públicos y los centros privados.

Así, por ejemplo, ¿a quién se le puede ocurrir pensar que la forma de seleccionar al personal en un centro público es la misma que en un centro privado, cuando todos sabemos

que en un centro público hay un sistema de oposiciones para el acceso a los cuadros de profesores con carácter definitivo, y en un centro privado hay simplemente la libre contratación por parte del propietario del centro, aun cuando, por desgracia, se establezca ese mismo sistema de libre contratación, siendo el Estado quien pague a esos profesores?

Es evidente que no puede imputarme el señor Herrero de buena fe que yo piense que en esta ley se trata por igual a los centros públicos que a los centros privados. ¿Quién es el que puede establecer, por ejemplo, un ideario en los centros públicos? Ya ha quedado claro que en los centros públicos no va a haber ideario, y en los privados es el propietario el que lo establece, conforme acaba de tratar de justificar en su brillante intervención el señor Herrero.

Por lo tanto, yo lo único que quería dejar bien claro, en esta limitadísima intervención, que sólo trata de precisar una cosa, es que, en ningún caso y bajo ninguna forma, se busque mi aval a la afirmación de que esta ley trata por igual a los centros públicos y a los centros privados.

Esa es la rectificación que quería hacer, sin entrar más en el fondo del debate, puesto que en este momento no tengo derecho a ello y no quiero abusar del turno que tan gentilmente me ha concedido la Presidencia. (*El señor Herrero y Rodríguez de Miñón pide la palabra.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Señor Herrero, como el señor Gracia supongo que desea intervenir para un turno de rectificación, le agradecería que en la contestación a las rectificaciones incluya ésta también.

Tiene la palabra el señor Gracia para turno de rectificación.

El señor GRACIA NAVARRO: Señor Presidente, muchas gracias.

Señoras y señores Diputados, tengo que empezar por afirmar, con absoluta honestidad, que el señor Herrero y Rodríguez de Miñón no ha contestado a los argumentos fundamentales de nuestra exposición. (*Rumores.*) Porque, Señorías, entre sonrisas y demás gestos,

el problema de fondo que yo he tratado de destacar no es el problema, por ejemplo, de qué es lo que establecen las sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos, señor Herrero y Rodríguez de Miñón. Ya hemos bajado de categoría normativa; hasta ahora estábamos permanentemente con el papelín en la mano de los Tratados y Pactos internacionales, pero a partir de ayer, curiosamente, hemos bajado de categoría normativa: hoy son los Tribunales Supremos de los países cuya soberanía, por supuesto, nosotros respetamos, pero que no puede afectar a la nuestra. En todo caso, habría que recordarle al señor Herrero que cuando se citan los Pactos internacionales hay que citarlos todos, y a mí me agrada mucho que se haya dicho que el espíritu del Grupo Socialista —y cree él también que el de todos los Grupos de esta Cámara— es que el mencionado protocolo sea ratificado por el Gobierno español; ya tendremos ocasión, dentro de algún tiempo, de hablar de otros protocolos, que sí están suscritos por el Gobierno español, relativos a otras materias conexas con el tema educativo en los aspectos estrictamente sindicales y que no se están respetando por el Gobierno español.

De manera que hay Tratados y Pactos internacionales, cumplimientos e incumplimientos, para todos los gustos. Pero lo que está claro, señor Herrero y Rodríguez de Miñón, es que ya hemos bajado de categoría normativa, y que si vamos a entrar en la normativa de los Estados Unidos, Francia y Alemania federal, se podría citar también la de Suecia, la de Dinamarca, la de Holanda, la de Bélgica, etc., y vamos a entrar entonces en todas. Esa dialéctica, Señorías, me temo que puede llegar a que cuando estemos discutiendo aquí otras leyes y otras disposiciones, puede que algunas muy próximas, los socialistas tengamos también que recordar las sentencias de los Tribunales Supremos de algunos de esos países democráticos, europeos o no europeos.

Evidentemente, yo he mencionado a Nietzsche, señor Herrero. A mí me asombra que una persona de la finura intelectual del señor Herrero se sorprenda de que un socialista mencione a Nietzsche. Porque, señor Herrero, el que les habla es un profesional de la filosofía, y yo respeto a todas aquellas men-

tes que han producido una teoría filosófica de importancia, lo cual no quiere decir que acate o me adhiera, cordial o incordialmente, a la filosofía de Nietzsche. He puesto el ejemplo de Nietzsche por no poner otros ejemplos que hubieran podido ser utilizados de alguna manera no muy adecuada por Su Señoría. De manera que el ejemplo de Nietzsche lo podía haber utilizado, pero si Su Señoría quiere, pongo el ejemplo de San Anselmo, que quizá esté más próximo a la mentalidad de Su Señoría. (*Risas.*)

Que, evidentemente, el ideario es una declaración del tipo humano, de la personalidad que se pretende formar, de acuerdo. Pero también ha hablado Su Señoría de algo muy importante: la visión del mundo y del hombre. Y, Señoría, eso es ideología; la visión del mundo y del hombre es ideología, de manera que no ha rebatido la declaración que yo he hecho aquí de que el ideario educativo es, pura y simplemente, ideología. Visión del mundo y del hombre —consulte el diccionario Ferrater Mora, de Filosofía— es la ideología, que comporta principios objetivos educativos, qué duda cabe. Nosotros, en la enmienda «in voce» al 34 tris, decíamos que los objetivos y principios educativos debían ser definidos por el Consejo de Dirección del centro privado sostenido por fondos públicos.

Que el ideario establece unos límites, porque, dice Su Señoría, el ideario no puede lesionar las conciencias. ¿Y qué es lo que decía la enmienda número 104 socialista? ¿Qué es lo que decía? ¿Cómo es que se nos dice que se ha refutado nuestra enmienda si, literalmente, Su Señoría, dice que el ideario no puede lesionar conciencias, y eso está en la enmienda socialista número 104? Que no puede afectar a derechos constitucionales... ¡Si eso es lo que nosotros decimos en la enmienda 104!

Señorías, quizá uno de los argumentos fundamentales (y por eso empecé mi intervención refutando la no refutación por parte del representante del Grupo Centrista de lo que yo había afirmado) es que no se dan, ni se van a dar en un futuro previsible, condiciones de igualdad para la elección, y eso no ha sido refutado por Su Señoría; eso no ha sido refutado y yo insisto, Señorías, en que hablar

de igualdad en la libertad cuando no se dan condiciones iguales para el ejercicio de la libertad, es un sarcasmo, como mínimo.

Yo no he citado los Pactos de la Moncloa, señor Herrero Rodríguez de Miñón; yo he citado la Constitución. ¿Que se puede o no se puede mantener la dicotomía entre centro público y centro privado? Yo no voy a insistir en lo que como respuesta a la alusión personal ha dicho mi compañero Gómez Llorente. Yo sí voy a recordar que en el artículo 34 que estamos debatiendo es el Reglamento el que fijará la composición de los órganos en los centros llamados públicos por el proyecto; es esta ley la que establece la composición de los órganos colegiados. En los centros privados la Junta Económica no va a existir nada más que en aquellos que son sostenidos con fondos públicos; sin embargo, en los centros llamados públicos por esta ley, en todos existe una Junta Económica. Hasta la terminología está indicando la distinción, Señorías. En los centros privados se habla de Consejo de Centro, probablemente porque hubiera en la mente de la mayoría la sospecha de que utilizar la denominación «Consejo de Dirección» en los centros privados podría, de alguna manera, colar subrepticamente un atentado al derecho a la Dirección de Centros, que se reconoce en esta ley a los propietarios de los centros privados. De manera que sí se puede mantener esa dicotomía, señor Herrero.

Además, Su Señoría ha citado el artículo 18. La Asociación de Padres —se dice, efectivamente, en el artículo 18— elaborará, desarrollará y modificará, junto con el claustro de profesores, el Reglamento de Régimen Interior del centro. Pero antes de esa letra e) se dice: «Las Asociaciones de Padres de Alumnos, respetando el Reglamento de Régimen Interior...». De manera que ya tenemos aquí una especie de «circulatio» aquí. Si se elabora el Reglamento de Régimen Interior y se tiene que respetar el Reglamento de Régimen Interior, Su Señoría me explicará por dónde se corta esta «circulatio».

Y, por otro lado, se dice: «... y, cuando lo hubiese, el ideario del centro». ¡Ah, claro! De manera que la Asociación de Padres elaborará el Reglamento de Régimen Interior. No se sabe a partir de qué Reglamento de Régimen

Interior, no se sabe por quién se ha elaborado, pero, en todo caso, lo elabora asumiendo y respetando el ideario del centro.

Que nos hemos abstenido en el artículo 23. Evidentemente; yo sabía, sospechaba, imaginaba que el señor Herrero iba a mencionar la votación del artículo 23. Pero en honor a la honestidad intelectual, Su Señoría tiene que reconocer conmigo que fue muy clara nuestra explicación acerca del sentido del voto, porque lo considerábamos innecesario. De manera que no es en modo alguno aceptable el que en este momento, de una forma dialéctica, se diga que aquellos mismos que no aceptaban el respeto a la conciencia de las opciones filosóficas y religiosas de los padres en el artículo 23 ahora pretenden imponerlo en los centros privados sostenidos con fondos públicos. Eso, señor Herrero, no es admisible, porque ése no fue el sentido, y explícitamente se dijo así, de nuestro voto, en el día de ayer sobre el artículo 23.

En definitiva, ¿se van o no a respetar las conciencias? ¿En qué quedamos? ¿Se van o no a respetar las conciencias? Porque parece como si nosotros ahora quisiéramos que en el artículo 34 se añadiera un apartado referente a los centros privados sostenidos con fondos públicos, donde se deben respetar las conciencias, eso molestará a Sus Señorías, cuando Su Señoría, al principio de su disertación, ha afirmado literalmente que el ideario no puede lesionar las conciencias. ¿Se van a lesionar, se van a respetar o no las conciencias individuales en los centros privados?

Evidentemente, el ejemplo de la Fundación Pablo Iglesias a mí me parece, como todos los ejemplos del señor Herrero, muy brillante, pero habría que recordarle la distinción, que ya se le recordó ayer, entre empresas de tendencias ideológicas y empresas normales y, en todo caso, sus propias palabras, señor Herrero, porque Su Señoría ha dicho ante el Pleno de esta Cámara que las Fundaciones no eran empresas. De manera que, si no eran empresas, entonces no podemos entrar en la comparación de una y otra.

En definitiva, Señorías, se ha hablado de argumentos, evidentemente, pero se ha rebatido el argumento fundamental de si se eligen en igualdad; no se ha rebatido la filosofía so-

cialista acerca de la concepción de la escuela pública como dentro del servicio público y de la dualidad de redes dentro del servicio público de la educación. Y a mí me gustaría, añadiendo otra cita a la anterior, terminar con la siguiente: «Entendemos por escuela de servicio público aquella escuela que quiere responder a las diversas opciones educativas, que cumple una función de servicio respetando las diversas concepciones del hombre y del mundo, que está abierta a todos los que aceptan respetar la opción asumida por la comunidad educativa, expresada y elaborada en el propio proyecto educativo, que cuenta con un equipo de profesores, etc., que está financiada por los poderes públicos y que hace real la participación corresponsable de los diversos estamentos de la comunidad educativa».

Señorías, estas palabras, igual que aquellas otras a las que di lectura antes, pertenecen al I Congreso de la Escuela Cristiana de Cataluña y, evidentemente, reflejan una mentalidad bastante alejada de la mentalidad que, hasta el momento, ha mantenido en este debate la Unión de Centro Democrático.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Para rectificaciones, tiene la palabra el señor Herrero.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑON: Señor Presidente, con el talante de máxima brevedad, que confío recuperemos una vez pasado este espinoso artículo, diré, en primer lugar, que todo lo que considera el señor Gracia tan importante —el respeto a la Constitución, etc.— lo dice precisamente el artículo 34, número 1. De manera que todo eso está ahí.

En segundo lugar, he de decir que sigo extrañándome de que se estime innecesario el artículo 23 en la escuela pública y se estime necesario en la escuela privada, cuando la escuela pública es neutra y sería más necesario asegurar en la neutralidad un respeto, mientras que la escuela privada puede estar identificada por un ideario y la conciencia de los padres ya se autoprotege mediante la opción en pro de esa escuela; me extraña que lo que era innecesario entonces se estime necesario ahora.

Se ha hablado del Reglamento de Régimen Interior, etc. Lo único que reserva a los fun-

dadores o creadores del centro el último inciso del número 1 con ese «sin perjuicio de» es, en primer lugar, el ideario, que es la idea matriz, intangible, de la institución, y, en segundo lugar, las competencias inherentes a la dirección.

El señor Gracia dice: ¿Cómo se puede reformar un Reglamento si hay que respetar ese Reglamento? Pues claro, como se reforma toda ley o toda Constitución, precisamente respetándola a través de las cláusulas de reforma previstas en el texto en cuestión; si no, ocurriría siempre un procedimiento revolucionario y subversivo cuando se tratase de reformar una norma, y nosotros tenemos comparada la experiencia de que eso no ocurre así.

En cuarto lugar, se nos insiste en que no hay libertad real de elección porque, efectivamente, hay obstáculos que impiden que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sea efectiva y plena. Eso es lo que dice el artículo 9.º de la Constitución. Y precisamente para remover esos obstáculos es por lo que el Estado asume tareas asistenciales, entre ellas la gratuidad de la enseñanza. Es decir, si todos los ciudadanos estuvieran en una situación económica óptima, que les permitiese costearse por sí solos óptimos niveles de enseñanza, sería innecesario que el Estado asumiese esa tarea. Precisamente para remover los obstáculos que se oponen a que la libertad y la igualdad sea efectiva, es por lo que el Estado debe garantizar, en pie de igualdad a todos los ciudadanos, esa libertad, mediante una financiación por igual de los puestos escolares.

Pasando a un tema más risueño, señor Gracia, aparte de respetar a Nietzsche, hay que respetar el sentido del humor. Yo no entro en las aficiones filosóficas del señor Gracia y, por supuesto, Nietzsche y el señor Gracia tienen todo mi respeto. Además, el señor Gracia me hace más gracia. (Risas.)

Pasando de Nietzsche a otro pensador ilustre, el señor Gómez Llorente, yo probablemente le he entendido mal. Tenía entendido que la enmienda que han retirado los socialistas decía exactamente: «Los centros privados se acomodarán en lo esencial a lo que, respecto a los centros públicos del correspondiente nivel, ciclo o modalidad se establece

en la presente ley y disposiciones». ¿No era eso lo que han retirado? (El señor GÓMEZ LLORENTE: Señor Herrero, era eso en el contexto de otro conjunto de enmiendas que ustedes han rechazado.)

Yo entendía, señor Presidente, que el señor Gómez Llorente había retirado esto no porque considerase que nuestro tratamiento de los centros privados era extraordinariamente distinto del de los centros públicos, sino porque consideraba que el tratamiento de la participación —sólo de la participación, no de los demás extremos, que es a lo que yo me he referido— que hacíamos nosotros en lo público era tan malo que asimilar a ella la participación de lo privado era también muy malo. He entendido eso. De eso se deduce que, al menos en materia de participación, hacemos un tratamiento uniforme de los centros públicos y de los centros privados, a excepción de lo que el señor Gracia ha dicho aquí —y yo también había dicho antes—: que existirá una Junta Económica que controlará la actividad económica de los centros privados, sólo cuando aquellos centros privados estén subvencionados.

Creo que con esto no tengo más que rectificar. Ah, sí, deseo vivamente que no se presente en la práctica la afiliación masiva de los funcionarios de la Pablo Iglesias a Comisiones Obreras, porque estoy seguro de que crearía serios problemas. (Risas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): El Grupo Parlamentario Comunista mantiene a este artículo cuatro enmiendas, una «in voce» y las números 151, 152 y 153.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Vintro.

La señora VINTRO CASTELLS: Gracias, señor Presidente. Después de una hora larga de debates sobre el artículo 34 y las argumentaciones que se han hecho a este artículo por parte del Diputado socialista y la réplica del señor Herrero Rodríguez de Miñón, es posible que pueda considerarse que casi todo ha sido dicho y que las razones de nuestras enmiendas están ya debatidas y contraargumentadas.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario Comunista no va a renunciar a la defensa de sus criterios respecto a este artículo, ni va a re-

nunciar a explicar cuál es la gravedad que entiende reviste este artículo y que, de alguna manera, con la aprobación de este artículo, queda todavía, por si a algunos miembros de esta Cámara les quedaban dudas, mucho más claro cuáles son los objetivos de este proyecto de ley y cuáles son los objetivos de este artículo 34.

Señorías, antes de defender concretamente mis enmiendas, y sin ánimo de reiterar argumentación, yo querría dejar sentado qué es lo que a mi criterio, y a criterio de mi Grupo Parlamentario, pretende este artículo 34 y qué es, en definitiva, lo que pretende este proyecto de ley. Para nosotros es muy claro que con este artículo no se trata de abordar la libertad de los padres, sino de garantizar ideológica y económicamente la supervivencia, la potenciación y la absoluta libertad de los patronos institucionales o privados; que con este artículo y esta ley no se trata de responsabilizar a la comunidad escolar del funcionamiento de dicha institución y de los sistemas pedagógicos, sino de obligarles a aceptar una situación dada de hecho; que con este artículo y esta ley no se trata de dar cumplimiento tampoco al artículo 27, 5, de la Constitución, ni al 27, 7, sino de primar y reforzar a los actuales patronos; y que con este artículo y esta ley no se trata de respetar la libertad de conciencia, sino de reforzar por el ideario las limitaciones vocacionales de las actuales instituciones religiosas y de propiciar o bien la hipocresía de los padres y de los profesores o, lo que es peor, violentar sus propias convicciones para garantizar sea el puesto de trabajo, sea el puesto escolar.

Estas cuatro afirmaciones que he hecho, Señorías, se pueden argumentar y demostrar de infinitas maneras. Simplemente yo voy a insistir en un tema al cual sistemáticamente se deja de lado porque es el único sobre el cual, efectivamente, no hay Tratados internacionales ni sentencias de Tribunales que puedan avalarlo y es la realidad escolar española hoy, a la cual no se hace nunca referencia cuando se citan estos países a los cuales dicen vamos a homologarnos, porque si se citaran exactamente las proporciones de centros estatales y de centros privados en estos países —y estoy pensando en Alemania, Seño-

rias— todo este intento o toda esta fabricación de analogías iría directamente al suelo.

No se puede hablar hoy de esta libertad cuando no existen centros escolares en número suficiente, a pesar de las cifras que el señor Ministro nos dio el otro día y que el mismo señor Ministro, si fuera mínimamente objetivo, reconocería que no puede decirlos en público más allá de esta Cámara, porque si las dice en los barrios y en las zonas faltas de centros escolares, posiblemente la reacción de la gente sería un poco violenta, y con mucha razón. Por tanto, que no se nos diga que se va a elegir, que no se nos diga que se va a respetar la libertad de los padres, porque los padres bastante hacen si encuentran escuela para sus hijos. Y a estos padres que encuentran, con dificultades, escuela para sus hijos, no se les puede decir que con esta ley van a elegir, porque con esta ley y con este artículo lo único que podrán hacer es decir amén y, generalmente, serán amén porque los centros privados son mayoritariamente confesionales.

Aquí se han leído idearios. A mí me gustaría saber si los señores de Unión de Centro Democrático van a proceder a una revisión de los idearios actualmente existentes y van a proceder a la denuncia de aquellos que contravengan la Constitución. Yo empezaré a creer en esta voluntad de honestidad de Unión de Centro Democrático el día que presenten la primera denuncia contra este ideario que tengo aquí y que en sus fundamentos básicos dice: «La Iglesia tiene derecho a establecer y dirigir libremente escuelas de cualquier orden y grado».

Señorías, con la Constitución en la mano y con esta ley aprobada, la Iglesia tampoco tiene este derecho. Pero es que más adelante este mismo ideario dice: «Como centros de enseñanza, se rigen y acomodan a las leyes de cada país, en lo que no se opongan a la doctrina y leyes de la Santa Iglesia». Por tanto, si ellos entienden que alguna de las leyes contraviene las doctrinas de la Santa Iglesia, tampoco estas instituciones vienen obligadas a cumplir la legalidad de un país, y esto es lo que enseñan a los ciudadanos que se forman en estos centros. *(El señor PRESIDENTE ocupa la Presidencia.)*

Pero dicen más los idearios: «Todas las personas que colaboran con las religiosas participan en la misión educativa y apostólica de la congregación. Esto les lleva a un compromiso cristiano, ya en su vida docente, ya en su vida personal».

Por tanto, Señorías, si yo he entendido bien lo que decía el señor Herrero Rodríguez de Miñón en cuanto hablaba del respeto al ideario, al que tenía que acomodarse el profesor de Geometría (el de Filosofía ya quedaba mucho más discutible, pero el de Geometría puede explicar, según el señor Herrero Rodríguez de Miñón, la clase de Geometría respetando el ideario), pero aquí le obligan a que en su vida personal sea también apostólico y, por tanto, o bien este ideario es ilegal y el señor Herrero, o el Grupo Centrista va a exigir su rectificación o, Señorías, aquí se está simplemente negando lo que es la realidad.

Y dice más el ideario que estoy leyendo: «Este espíritu de colaboración pide una actitud de confianza en la dirección del centro y de fidelidad a sus normas». Por tanto, si pide esta confianza y esta fidelidad y es el mismo ideario que más adelante dice a los padres que su única función de participación consiste en apoyar las decisiones de la Dirección, tenemos ya fidelidad, confianza y apoyo a las directrices de la Dirección, sin ninguna posibilidad de intervención, sin ninguna posibilidad real de participación.

De los alumnos, se dice en este mismo ideario, que puede ser un compendio de los distintos idearios que se podrían leer: «Participar también responsablemente en aquellas funciones que el centro les pidieren». Y fíjense ustedes en el tiempo, un tanto anacrónico, que prácticamente ya no se usa en la Gramática castellana.

Entonces, Señorías, ¿qué es lo que nuestro Grupo viene a defender respecto al artículo 34? Yo quisiera, en primer lugar, corregir lo que supongo que es una errata, en este número 1, que habla de los derechos y deberes «imanentes». Yo tenía entendido que era «dimanantes».

El señor PRESIDENTE: Dimanantes.

La señora VINTRO CASTELLS: Pues el Grupo Parlamentario Comunista propone una

redacción sustitutiva para este número 1, del tenor siguiente: «Se reconoce a los titulares de los centros privados el derecho a regular las relaciones contractuales con el personal, con sujeción a las normas de la legislación laboral. De la gestión económica y del funcionamiento del centro responderán ante los poderes públicos padres de alumnos, profesorado y personal no docente».

Nosotros, Señorías, sustituimos el número 1, lo anulamos por completo, porque entendemos que, o bien lo que se decía respecto a la participación de toda la comunidad escolar en el establecimiento y definición de los principios y objetivos pedagógicos, que fue incorporado como una de las misiones, a la cual también votamos afirmativamente los comunistas, del Consejo de Dirección, y es el sentido profundo y responsable del trabajo compartido en el seno de los centros, o es así y así se entiende la analogía y similitud, o, si no, si realmente se respeta el texto tal cual viene en el dictamen, que quede también claro que los padres, los profesores y los alumnos no tienen otra opción que el acatamiento, pero no tienen en absoluto la opción de la intervención responsable en la fijación de este ideario educativo, de esta programación de objetivos y principios que son aquellos que han de informar la actividad docente de un centro. Y como nosotros, lamentablemente, sabemos que detrás de la palabra «ideario» no hay estos principios y objetivos pedagógicos, sino que existe, como ya se ha señalado anteriormente, otro tipo de voluntades, es por lo que mantenemos la analogía en este sentido y consideramos que ha de ser el Consejo de Dirección quien elabore esta identidad propia en lo pedagógico y en lo educativo, y que no ha de ser la titularidad quien elabore esa identidad propia que no es ni pedagógica ni educativa, sino que es clara y estrictamente de cariz ideológico.

Esta es la razón de mantener nosotros la desaparición de este primer número y de sustituir esta posibilidad omnimoda de los patronos para despedir a los profesores por esta sujeción a la normativa laboral y la desaparición de esta limitación del ideario, porque serán los profesores del centro con los padres y la titularidad quienes elaboren estos objetivos

pedagógicos y quienes no se vean, efectivamente, obligados a aceptar una imposición, sino que participen responsablemente en la construcción de esta opción.

El texto del dictamen se ha dicho también que en el número 2 ha sufrido modificaciones para adecuarlo, porque la redacción inicial era todavía mucho más contradictoria con respecto a la Constitución. En este párrafo 2 tenemos la elaboración del Estatuto o Reglamento de Régimen Interior. Es evidente que en función de la desaparición del número anterior, y dejando siempre a salvo como dice: «lo dispuesto en el apartado anterior», si el número anterior queda redactado en el sentido que nosotros proponemos, no hay ningún inconveniente en la aceptación de este segundo número, porque ya no será la titularidad tampoco quien elabore en primer lugar el Estatuto o Reglamento de Régimen Interior, sino que este Estatuto o Reglamento de Régimen Interior vendrá hecho también por este Consejo de Dirección con las competencias y con la composición que más adelante se indica.

Y llegamos a las enmiendas que mantenemos al texto del número 3. En el número 3 nosotros pedimos, por un lado, que en la Junta Económica tenga también su intervención el personal no docente. Es evidente que la actual redacción de que la Junta Económica sólo será para los centros «sostenidos con fondos estatales o de otras entidades públicas», y aquí hay que hacer notar también una desaparición de la propuesta inicial, porque decía «sostenidos, cualquiera que sea su fórmula», y en estos momentos se ha hurtado esta definición para dejar: «... sostenidos con fondos estatales...», nos podemos encontrar, Señorías, con la desaparición, pura y simple, de las Juntas Económicas en los centros efectivamente subvencionados, porque, recuerde-se, que uno de los objetivos no es la subvención al centro, sino a la familia, con lo cual en la práctica se subvencionarán los centros, pero de acuerdo con esta ley, como la subvención no irá directamente al centro, va a desaparecer cualquier tipo de Junta Económica. Nosotros, como éramos defensores de la categoría del centro subvencionado y habíamos establecido toda una casuística para el control de este dinero, al hablar de los cen-

tros privados entendíamos que también tenía que existir esta Junta Económica y por eso hablábamos sólo de la supervisión de su gestión.

Bien es verdad que al haber desaparecido la figura de los centros subvencionados esta redacción que hay ahora de intervenir en el control y supervisión es más precisa, pero, repito, mis objeciones de fondo están en que estas Juntas Económicas pueden encontrarse en la práctica absolutamente inexistentes.

Para nosotros tenía que haber un Consejo de Dirección en el cual estuvieran representados además de la titularidad y los órganos unipersonales del centro, los profesores, los padres de los alumnos, el personal no docente y, en su caso, los alumnos en proporción análoga a lo establecido para los centros públicos.

Señorías, esta enmienda también fue rechazada en Comisión, en donde, una vez más, queríamos establecer la analogía de hecho entre los órganos de gobierno de los centros privados y los órganos de gobierno de los centros públicos o estatales. Y que no se nos diga de nuevo que ya hay aquella analogía o similitud en el artículo 32, porque yo insisto en que aquella analogía está puesta a otros niveles, y que el no recordarlo y repetirlo, cuando en tantos casos no ha habido inconveniente en repetir cosas, serviría al menos para tranquilizar el funcionamiento y para conocer que en los centros privados no se van a cometer más desmanes de los que ya se vienen cometiendo. También tendría que decirse cuáles son las funciones —y nosotros señalábamos aquí la elaboración o modificación del Estatuto de Centros—, aquí quedaba claro quién elaboraba el Estatuto en la programación de todas las actividades educativas y extraescolares y en la determinación de su régimen económico.

Y por coherencia también con todo nuestro planteamiento respecto a los centros escolares, hablábamos de la existencia del Consejo General, que iba a ser el órgano supremo y que iba a tener la representación análoga a la de los centros públicos y a la de las competencias que, también por analogía, se establecían con los centros públicos. Esta era, Señorías, nuestra idea de lo que tenía que ser

el texto del artículo 34, respetando la existencia de estos centros privados que la Constitución reconoce, pero respetando también la necesidad de que en los centros privados, y de acuerdo con lo que dice la Constitución, hubiera un planteamiento y un funcionamiento participado, corresponsable, y que no se limitara pura y exclusivamente al dictado del titular o del patrono correspondiente.

Yo querría terminar esta intervención señalando la sorpresa que me ha producido oír por dos veces que la escuela pública o estatal, según el señor Herrero Rodríguez de Miñón, va a ser la escuela neutra, porque entonces, efectivamente, yo ya no entiendo nada. Si resulta que la escuela neutra ha sido abominada sistemáticamente por los señores de Unión de Centro Democrático, si se han pasado discursos y discursos diciendo que no es posible la neutralidad escolar, si han aceptado que en los centros públicos exista la definición de los objetivos pedagógicos —que es una manera de no neutralizar la escuela—, ahora resulta que todo lo que se ha puesto en los Consejos de Dirección de los centros públicos queda eliminado por esta nueva interpretación que nos da el señor Herrero Rodríguez de Miñón por dos veces, porque lo ha dicho en su primera intervención y lo ha ratificado en su turno de rectificación, y que por tanto aún queda más claro que el 60 por ciento de la población que no puede optar tendrá que ir necesariamente a la escuela neutra, y que el otro 40 por ciento va a ir a la escuela confesional, con ideario de este talante, que no van a garantizar ningún tipo de libertad, sino que van a imponer una ideología en el proceso educativo.

Señorías, con este artículo 34 que ya lleva tanto rato en discusión, y que yo he procurado abreviar en mi exposición, estamos definitivamente resolviendo lo que es la preocupación esencial de Unión de Centro Democrático, que es dar un contentamiento, que es dar una satisfacción a un determinado sector ideológico y a un determinado grupo de presión. Sépase claramente y vótese en consecuencia.

El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra de esta enmienda tiene la palabra el señor Gómez de las Rocas.

El señor GOMEZ DE LAS ROCES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a consumir un turno en contra de las enmiendas del Grupo Comunista, y en aras de la brevedad procuraré manifestar mi pensamiento sobre la materia, de una manera global, sin razones apasionadas, sino meramente lógicas.

En este momento, estamos doblando el cabo de las tormentas del proyecto, y dada la dificultad de convencernos unos a otros, quizá lo más útil sea centrar las propias ideas, dejar constancia de las propias convicciones, sin palabras hirientes y sin desdén alguno hacia otras posiciones, igualmente respetables.

Quizá estas razones que vaya a exponer no sean ni todas ni las más importantes de las que podrían ponerse entre las numerosas que, además, ya han sido expuestas en favor del artículo 34 del proyecto, que es tanto como decir en contra de las enmiendas tan brillantemente defendidas por la señora Vintró. De todas formas, creo que el mantenimiento de ese artículo 34 en modo alguno sería inútil, aun admitiendo que la redacción del proyecto pudiera ser más afortunada, porque toda obra normativa es perfectible; pero, insisto, en ningún caso, creemos que hubiera sido más conveniente la supresión total o parcial del precepto. Para nosotros se trata de una norma básica, de una de las que responden con mayor aptitud al calificativo de ley orgánica que tiene este proyecto.

La señora Vintró ha dicho que el artículo 34 pretende garantizar, ideológica y económicamente, la supervivencia de los patronos privados; que no da cumplimiento al artículo 27 de la Constitución, sino que trata de primar simplemente a los patronos y de violentar las propias convicciones. Es, a nuestro juicio, una versión negativa del contenido del artículo 34, que no podemos compartir porque nosotros no vemos que en dicho artículo se hable de los patronos privados, sino de la enseñanza, con las necesarias alusiones al titular del centro y a otros estamentos que también participarán en su gestión. Lo demás es imaginado.

En todo caso, nosotros no entendemos por qué se localizan tanto las enmiendas en pro-

blemas particulares, que existen y van a seguir existiendo, según mi personal opinión, a pesar de la redacción que reciba este importante proyecto de ley; pero que son ajenos al mismo. Frente a esas tesis del Grupo enmendante, a nosotros nos parece indispensable mantener el número 1 del artículo 34 del proyecto acerca del alcance, en absoluto arbitrario según nuestro punto de vista, de las facultades de los titulares del centro. Entendemos que se debe respetar la facultad autorreguladora de los mismos y, en fin, que se debe hacer mención a los mínimos orgánicos, incluida la Junta Económica, respecto de la cual es a nuestro juicio profético que vaya a desaparecer, pero no es cierto, cuando ni siquiera ha llegado a establecerse: en otras palabras, regulación debe estar garantizada por esta Ley Orgánica.

Un examen meramente sucinto de los problemas del artículo 34 nos lleva a conclusiones bien diversas de las mantenidas por el grupo enmendante; por ejemplo, el alcance de las facultades de los titulares de los centros, aludidas en el número 1, no son más que la expresión o la consecuencia de una facultad de crear y dirigir que está en la Constitución (aun cuando no esté mencionada expresamente la palabra «dirigir»), respecto a centros privados. Cabe distinguir esas potestadas (correlativas a otros tantos deberes y, en este sentido, tienen validez social) en los vacíos puntos, a los efectos de esta exposición; en primer lugar, examinemos la posibilidad de establecer un ideario. Sería, desde luego, ya ocioso hablar otra vez de lo que es un ideario. Se han dicho esta mañana palabras muy importantes acerca de lo que es y de lo que no debe ser un ideario; acerca de las distintas concepciones.

También nosotros, en el debate general, hemos expuesto nuestro modesto pensamiento sobre el tema. Un ideario no es una ideología, pero sí es el anuncio público de una manera de pensar, el anuncio de algo, cuando es expreso y cuando es ostensible, como antes decía el señor Herrero Rodríguez de Miñón, que sirve para no engañar a nadie, para que todos conozcan cuáles son las directrices programáticas del centro que los enuncie. Es así, si se me permite la imagen, como el rótulo de la botella, para que no

nos sirvan vino «peleón» cuando lo queremos de Cariñena. Un ideario responde a principios que están en la Constitución, es algo que aprovecha a todos, no solamente a los patronos de centros privados; responde a un principio de publicidad, a un principio de pluralidad, a un principio del sentido finalista que tiene la educación, etc.; y no se impone a contrapelo de la Constitución, sino para poder cumplir previsiones fundamentales que, en orden a derechos del mismo carácter, contiene nuestro primer texto legal.

No puede haber en nuestra opinión liberal de enseñanza si no hay libertad de ideario. Un ideario, su posibilidad y su necesidad está fundada sobre el cultivo de algo tan común como debe ser la tolerancia de todas las ideas, la tolerancia de todas las escuelas, por aquello de que nadie enseña como depositario de toda la verdad. Eso sólo se puede predicar a través del respeto a las directrices de cada uno de los centros. No habrá desde luego idearios sin límite, contra lo que pretende indicarse, y casi es ocioso, por tanto, recordar la necesidad de que la Constitución sea respetada. La Constitución es el manantial de este derecho implícito de la libertad de enseñanza, pero es también la frontera de todas las limitaciones implícitas para evitar que los demás no puedan hacer ejercicio de la misma facultad.

Suprimir el ideario es, a nuestro juicio, verdaderamente imposible, aunque suprimir sus manifestaciones externas sea formalmente posible; ni existe la escuela neutra. El artículo 23 del proyecto parte de su imposibilidad cuando habla del respeto de las opciones filosóficas y religiosas en los centros públicos, en absoluto parte de su viabilidad.

También es mencionada en este número 1 y ha sido combatida por el grupo enmendante, la facultad de contratar y ejercer derechos y obligaciones derivadas de las relaciones laborales; habría que preguntarse quién podría contratar al personal del centro, si no es su titular. Es decir, el que asumirá las consecuencias jurídicas de las relaciones del negocio. Civilmente, basta leer el artículo 1.259 de nuestro primer Código para saber que nadie podría imponer al titular del centro los efectos de una relación jurídica no establecida con su consentimiento y concur-

so; nadie puede contratar en nombre de otros, en nombre de terceros, sin ostentar la representación de éstos. Es, a nuestro juicio, un principio elemental de Derecho. Si lo que se teme es el desacuerdo de algún profesor con el ideario del centro, hay que decir que ese desacuerdo cuando por lo menos trate de traducirse en un ejercicio docente que se oponga al ideario del centro no puede por menos de convertirse en un obstáculo cierto para la subsistencia de la relación jurídico-laboral. Otra cosa, sería legitimar la deslealtad en el plano de las relaciones de esta índole.

No olvidemos tampoco que hay muchas actividades privadas de contenido ideológico, que es algo más que un ideario, según aquí se ha dicho, subvencionadas por la Administración y en las que ésta no interviene para la contratación del personal que utilice la actividad o la empresa privadas que la desarrolle.

También se refiere este número, en definitiva, a la gestión económica del centro, pero no voy a hacer una exposición de nuestro punto de vista en aras a la brevedad.

Con todo ello, con todo lo que se está indicando, se está defendiendo —y creemos que es la interpretación más adecuada al número 1 del artículo 34— el concepto de titularidad y sus inevitables consecuencias legales. Ser titular es ser destinatario de los riesgos y venturas de una actividad. Se trata de cosas inseparables. No se puede atribuir a la Administración o a los estamentos partícipes, la última facultad decisoria en materia, por ejemplo, de personal e imputar las consecuencias humanas, sociales y contables, al titular del centro. Responde quien dice o decide quien responde; pero responsabilidad y decisión son inseparables. Así ocurre en toda suerte de empresas, en las mercantiles, en las políticas y, desde luego, en las docentes.

Quería hacer una última alusión al tema de la Junta Económica para insistir en lo que ya antes apunté de pasada. La Junta Económica está prevista como órgano de gestión, dentro de su competencia, en la vida de los centros privados y no hay nada que nos permita predecir el futuro advirtiéndolo como intensa lo enmendante, ni que permita comba-

tir las leyes en elaboración, con base en supuestos particulares, lo mismo que no se puede hablar de lo que va a ser un ideario invocando ejemplos anteriores. En torno al ideario, en torno a la presunta ineficacia de una Junta económica, la facultad de impugnación, la facultad de denuncia, podrá ejercerla el Grupo Parlamentario de UCD, podrá ejercerla el Grupo Parlamentario Comunista, podrá ejercerla el ciudadano medio español, cualquier persona con interés legítimo para hacerlo, y nos parece que éstas son razones bastante para no suponer que en ninguno de esos casos carezcamos de remedios jurídicos contra el riesgo, evidentemente cierto, de que se produzca un exceso o una desviación de poder, como dicen los administrativistas, en la redacción o aplicación de un ideario o en la interpretación de las facultades de una Junta Económica.

Dije al comenzar que quizá no fueran mis razones las más importantes ni las únicas, pero tampoco veo que desde otros ángulos se haya dicho qué es lo que más importa del artículo 34 del proyecto. Lo que más importa es que va a permitir todas las escuelas: desde la escuela marxista hasta la escuela religiosa. Entre ellas cabrá cualquier otra variedad, así como la facultad para que cualquier particular, grupo social o persona pueda establecerla.

Y esto es más importante que lo que el artículo 34 va a impedir, sólo en obligada tutela de todas las libertades y de todas las creencias. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Enmienda del Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña respecto del número 3 de este mismo artículo. Tiene la palabra la señora Mata.

La señora MATA GARRIGA: Señor Presidente, señoras Diputadas, señores Diputados, nuestra enmienda es una enmienda de adición a la letra d) del número 3 de este artículo. Esta letra dice concretamente: «En los centros o niveles sostenidos con fondos estatales o de otras entidades públicas, una Junta Económica en la que estarán representados, además de la titularidad del centro, los profesores, los padres de los alumnos, y, en su caso, los alumnos, con la misión de inter-

venir en el control y supervisar la gestión económica...». Supongo que quiere decir, además, que «habrá» una Junta Económica. Falta el verbo.

Nosotros proponemos a esta Junta Económica la adición del siguiente párrafo. «En tales centros, el Consejo de Centro elaborará y modificará, cuando convenga, el proyecto pedagógico y el estatuto de régimen interior».

Es la primera vez que en esta ley finalmente se admite que existen unos centros escolares subvencionados (aunque no se dice exactamente con esta misma palabra), que contempla la Constitución, pero con otra frase, es decir: centros sostenidos por la Administración con fondos públicos. Es por respeto a la Constitución que en esta Ley Orgánica —que también respetamos como ley que desarrolla los derechos y libertades fundamentales establecidos en la Constitución— propusimos esta pequeña enmienda «in voce», dentro del desarrollo que, a nuestro juicio, tendría que tener el concepto de participación en esta ley.

Hay en el artículo 20, que tendremos que defender al final, la forma de contemplar el número 5 del artículo 27, donde se dice: «Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados...». Y en el número 7 se habla concretamente de la intervención en el control y gestión de los centros.

Para nosotros, en este momento, pues, la participación forma parte de los derechos y libertades fundamentales, y se trata de la participación en la gestión. Nosotros intentamos defender esta participación en la gestión, en función de su importancia pedagógica.

El señor Herrero Rodríguez de Miñón ha hecho esta mañana —contestando a unas explicaciones de doña Eulalia Vintró— una distinción escolástica entre los instrumentos y los fines de la educación. Yo quisiera decirle que también en la misma escolástica podríamos encontrar la explicación de cómo en pedagogía y cómo en educación los instrumentos, es decir, las pautas pedagógicas, son ya educación; es decir, que la realización, la vivencia de los fines de la educación son ya

educación. Creo que esto, en la escolástica más creativa, se llamaría la doctrina de la unión entre materia y forma, que en el caso de la educación está totalmente justificado.

Nosotros, además, creemos que estas pautas pedagógicas no solamente están ligadas con los fines de la educación de una manera indisoluble, sino que estas pautas pedagógicas están totalmente ligadas con la organización de la gestión del centro. Creemos que profesores, alumnos y padres tienen unas pautas de organización, unas pautas de colaboración, de participación, de interés compartido, porque no puede conocer a un alumno un solo profesor si no tienen una pauta de colaboración todos los profesores; no se puede hacer un tratamiento educativo a un alumno si no hay una pauta de participación en la gestión del centro entre padres y alumnos.

Para nosotros, estatuto de centro, educación e ideario —para decirlo en estos términos tan feos de este proyecto de ley— no pueden separarse, están totalmente ligados. En este momento nos encontramos precisamente ante el artículo antes 37, ahora 34, que liga todas estas características y las deja, a nuestro entender, en manos —en el caso de los centros privados— totalmente del titular.

Recordemos cómo el número 1 de este artículo reconoce a los titulares de los centros privados el derecho a establecer el ideario educativo propio, etc.; a contratar el personal del centro, es decir, a decir quiénes van a trabajar allí, y a contratarlo en función del ideario; a asumir la gestión económica del centro; la responsabilidad del funcionamiento, es decir, la matrícula de los alumnos y las relaciones con los padres. O sea, el titular del centro en este caso es la persona que dibuja, a través de su ideario, y a través de su contratación y de su matriculación, no solamente el ideario, sino el estatuto.

En el número 2 se dice: «Cada centro deberá elaborar su propio Estatuto o Reglamento». ¿Pero quién lo elaborará? El titular que ha contratado a todos los que trabajan en el centro y que ha admitido en él a estos alumnos y a sus padres.

Se dice en el número 3 que el Estatuto o Reglamento de Régimen Interior de cada cen-

tro incluirá los siguientes órganos: el Director —claro, el que ha contratado como Director—, y el Consejo del centro, compuesto por profesores y padres de alumnos —padres de alumnos, que son los que el titular ha permitido que intervinieran.

Entonces nos encontramos en la letra d), que, de pronto, se hace una salvedad: En los centros o niveles sostenidos con fondos estatales o de otras entidades públicas, una Junta Económica... intervendrá en el control y supervisará la gestión económica del centro. ¿Por qué decir esto? ¿Por qué repetir aquí esto sólo respecto a la gestión económica, cuando en el número 2 se dice más o menos lo que dice la Constitución, que el «Régimen Interior establecerá la intervención de los profesores, de los padres de los alumnos, del personal no docente y, en su caso, de los alumnos, en el control y gestión del centro a través de los correspondientes...? ¿Por qué se repite esto ahora? Nosotros creemos que se repite porque algo debe cambiar en el momento en que un centro es subvencionado; algo cambia, hay una apertura a nuevos alumnos, a nuevos padres. Pero nosotros suponemos que puede cambiar algo más, es decir, que puede cambiar toda la tira de relación entre ideario, educación y estatuto o régimen interior.

Para nosotros la libertad de enseñanza definida en la Constitución también es libertad de intervención. Los socialistas concebimos la intervención en el centro como algo necesario en todos los centros. Aquí la Constitución sólo lo pone para los centros mantenidos como fondos públicos, pero este artículo lo limita al aspecto económico, al cambio del aspecto económico, no al posible cambio, que es lo que nosotros proponemos, del aspecto organizativo, para nosotros estrechamente ligado con las pautas pedagógicas y con lo que en esta ley se llama ideario.

Pensamos en la posibilidad del cambio, puesto que hay un cambio en el centro en el momento en que se subvenciona, y pensamos que intervenir en el control y gestión del centro no es simplemente hacer lo que los demás ya han decidido, lo que el titular ya ha decidido, sino poder cambiar lo que está decidido en un centro.

Nuestra enmienda, pues, va en este sentido,

hacia un posible cambio dentro del centro, puesto que para nosotros la vida del centro es precisamente la posibilidad de cambiar, y el actual artículo 34, número 3, letra d), sólo trata de un cambio, el cambio económico, y aún, por lo que me acabo de enterar esta mañana, dentro de un concepto de economía en la escuela francamente distinto del que yo hubiera pensado que esta ley promulgaba.

El señor Herrero Rodríguez de Miñón ha hablado de la intervención del Estado como algo asistencial en el caso de la educación. Es decir, la gratuidad mantenida por el Estado es una función asistencial del Estado. Esto me recuerda exactamente las primeras palabras que, en el año 1939, dijo don Romualdo de Toledo a los maestros nacionales de Barcelona reunidos: «Quien pueda pagar la educación, que lleve sus hijos a la escuela privada. La escuela nacional —en aquel momento se llamaba escuela nacional— es solamente para los que no pueden pagar». Es decir, el concepto de beneficencia del sistema educativo mantenido por los poderes públicos.

Es posible que esto quepa, sea así, dentro de una concepción de economía social de mercado, pero desde luego para nosotros, que tenemos una concepción de la educación obligatoria como de un servicio público al cual los poderes públicos tienen la obligación de subvenir, que tienen la obligación de ofrecer a todo ciudadano, desde luego la importancia del control económico es totalmente distinta.

Nosotros siguiendo, alargando aún más el hilo y valorando la economía de la escuela mucho más como los aspectos materiales, pensamos que entre economía de la escuela, organización de la escuela, pautas pedagógicas de la escuela y proyecto pedagógico —que no ideario— de la escuela, hay un hilo de continuidad, y es por eso que hemos presentado esta enmienda.

A nosotros no nos extraña que los grupos de presión económico-ideológica mantengan bien separados, para no escandalizar demasiado, los dos extremos: por aquí va el ideario, por allá va una junta de control económico. Para quienes defendemos la escuela pública, por razones de pedagogía pequeña, pensamos que no se puede hacer buena edu-

cación dentro de la clase si no tenemos un sistema educativo público bueno para todos los niños. Nosotros incluso pensamos que los poliedros pueden ser un instrumento de cultura cuando están bien utilizados dentro de clase. O sea, no nos preocupa solamente la ética, sino todas las pautas pedagógicas, que vemos inseparables de economía, de organización de la escuela y de proyecto pedagógico.

Para quienes defendemos la escuela pública como la única posibilidad de hacer buena pedagogía dentro de clase y para quienes defendemos la escuela pública por razones de gran pedagogía, que es política, esta humilde enmienda era lo mínimo que pedíamos.

El señor PRESIDENTE: Turno en contra de esta enmienda. Tiene la palabra el señor Herrero Rodríguez de Miñón.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: Muy brevemente, señor Presidente. Digamos que la fundamentación general de nuestro rechazo a la enmienda de la señora Mata ha sido ya dada cuando hemos respondido al anterior portavoz de su partido.

Vamos a ver dos cosas. La señora Mata, por una parte, nos propone el texto concreto de una enmienda, que es adicionar una letra o un párrafo a la letra d) del artículo 37, hoy 34, 3, en la que se pide que en los centros subvencionados se pueda cambiar por parte de la comunidad escolar el estatuto y el proyecto pedagógico.

A eso nosotros decimos: el estatuto o reglamento de régimen interior lo puede cambiar la comunidad escolar siempre; no sólo en los centros subvencionados, sino en todos. Lo he explicado antes. Y eso es lo que se deduce sistemáticamente de interpretar el concepto establecido en el artículo que ahora estamos discutiendo, a través del principio de analogía esencial, del 32, 1, y de lo previsto para los centros públicos en el artículo 28. Y eso avala, además, lo que dice el artículo 18 con carácter general. Nuestra interpretación, y creo que tiene base jurídica suficiente, es que en todos los centros privados, subvencionados o no, la comunidad escolar, a través de sus órganos, puede efectivamente modificar el reglamento.

En cuanto al proyecto pedagógico, nosotros entendemos que forma parte del llamado ideario, y esa integración la ha reconocido la señora Mata y, por tanto, nosotros consideramos que eso forma parte de la idea matriz que justifica la existencia del centro. Por consiguiente, es intocable. Antes bien, mediante la adhesión de la comunidad escolar a esa idea-fuerza es cómo se crea la institución.

Esa sería la respuesta concreta a la enmienda de la señora Mata.

Aparte de esto querría señalar que existe una diferencia radical entre la beneficencia y las tareas asistenciales del Estado. Es decir, el Estado social de Derecho, tal como funciona en Europa occidental, se basa precisamente en la tarea asistencial del Estado, que no es beneficencia. Beneficencia es aquello a lo que el ciudadano no tiene derecho, mientras que la tarea asistencial del Estado es un derecho-crédito al que el ciudadano tiene derecho. Entonces, cuando digo que la educación debe ser financiada por el Estado en cumplimiento de su obligación asistencial, no le estoy imputando tareas benéficas; estoy diciendo que debe procurar a todos los ciudadanos, en pie de igualdad, la posibilidad de ejercer su derecho a una libertad de enseñanza.

Por otra parte, cuando se han repetido esas palabras de que hay que hacer a todos los ciudadanos iguales cuando no tienen medios para ser iguales —que no sé si se dijeron en aquellas fechas que ha señalado la señora Mata—, desde luego lo que se dice es lo del artículo 9.º de nuestra Constitución, redactado a propuesta del Grupo Socialista en la Ponencia Constitucional, al cual nos adherimos los demás.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: En turno de rectificación tiene la palabra la señora Mata.

La señora MATA GARRIGA: Simplemente el señor Herrero dice que en esta ley ya se determina que se puede cambiar. ¿Qué se puede cambiar? ¿El ideario?

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: El reglamento de régimen interno.

La señora MATA GARRIGA: Yo he intentado argumentar que ideario, en sus palabras, pauta pedagógica, reglamento de régimen interior y economía van unidos. Que en esta ley se pueda cambiar el reglamento de régimen interior, pero no se pueda cambiar el ideario, es una de las demostraciones de lo que es esta ley.

Por otro lado, si lo que yo decía ya está incluido, no sé por qué no se puede admitir esta enmienda. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones en relación con el artículo 34. Votaremos, en primer lugar, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que propone un texto alternativo a la totalidad de este artículo 34.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 115; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista respecto de este artículo 34.

Sometemos a votación seguidamente la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, en la que propone una nueva formulación del número 1 de este artículo.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 23; en contra, 149; abstenciones, 89.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto del número 1 del artículo 34.

Votaremos seguidamente la enmienda del propio Grupo Parlamentario Comunista, número 152, relativa a la letra b) del número 3, referente al Consejo de Dirección, en lugar de al Consejo del Centro.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 109; en contra, 148; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 152, del Grupo Parlamentario Comunista.

Seguidamente votaremos la enmienda número 151, del propio Grupo Parlamentario Comunista, relativa a la letra d) del número 3, concerniente a la Junta Económica.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 110; en contra, 150; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 151, del Grupo Parlamentario Comunista.

Seguidamente sometemos a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña, relativa a la letra d) del número 3.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 111; en contra, 149; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña respecto de este artículo 34.

Seguidamente la enmienda número 153, del Grupo Parlamentario Comunista, en la que se propone la introducción del Consejo General.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 20; en contra, 236; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 153, del Grupo Parlamentario Comunista, respecto del número 3 del artículo 34.

Sometemos a votación seguidamente el texto del artículo 34 conforme al dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 155; en contra, 106.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 34 en los términos que figura en el dictamen de la Comisión.

Votaremos seguidamente la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, enmienda que era subsidiaria de la anterior y por la que propone la introducción de los artículos 34 bis y 34 ter.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 111; en contra, 141; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que proponía la introducción de nuevos artículos 34 bis y 34 ter.

Votamos, finalmente, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que propone la introducción de un nuevo artículo relativo a participación del personal, padres y alumnos en los centros privados subvencionados, que estaba inicialmente instrumentada como artículo 38 bis.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 108; en contra, 143; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada también esta enmienda de introducción de un nuevo artículo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sagaseta.

El señor SAGASETA CABRERA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, he votado en contra de la aprobación del texto del dictamen porque considero que si ha habido buen afán en alguno de los componentes del Grupo Parlamentario de UCD al presentar esta ley, en definitiva, este texto concreto, que es muy central en el contexto general del articulado, se ha frustrado. Si ha habido un afán de superación de procesos y de fenómenos que han pesado tanto en la historia de nuestro pueblo, se ha fracasado. Se ha fracasado rotundamente porque, en

definitiva, ese afán de reconciliación de que nos hablaba el señor Ministro, ese afán de poner fin a las dos Españas —nos ha citado a Machado—, ese afán de no volver a las cavernas, como alguien concretamente manifestó, eso se tiene que demostrar con hechos concretos. Y, desde luego, tanto en el día de hoy como en la legislación represiva que durante estos últimos tiempos se ha ido depositando en esta Cámara, se demuestra que no hay una real voluntad, al menos que se ofrezca a la luz pública, sino todo lo contrario.

Sabemos que hay contradicciones internas dentro de UCD. Sabemos que posiblemente una gran parte no comulga con preceptos, con normas que no están sino frenando un proceso que todos deseáramos que fuera mucho más rápido, como lo demandan los acontecimientos históricos, y con una profundidad mucho mayor de la que se está desarrollando.

Efectivamente, estoy convencido de que, como decía el señor Ministro, razones extraescolares pesan aquí sin duda. Y una razón fundamental es ese artículo 38 consensuado de la Constitución, en el que se puede comprender claramente que sólo queda garantizado por los poderes públicos —y utiliza la palabra «garantizar»— la protección del ejercicio y la defensa de la productividad de las libres empresas. Desde este artículo 38 ya teníamos que suponer todo lo que se deducía aquí y lo que, en definitiva, se trata de defender a ultranza, que es un sistema económico, periclitante a ojos vista en todos los continentes; por medio de la reproducción ideológica dentro de las escuelas, con ese sistema que a tan funestas consecuencias está llevando a la humanidad. Ese sistema económico que está a punto, en esta década, de dar el salto al vacío, de pasar al museo de la historia.

No cabe duda que son acontecimientos extraescolares y ya universales los que se están produciendo, con un efecto también universal. Ese ideario que hoy se defiende claramente por su historia demuestra —porque los idearios tienen su historia— que cuando aquí la izquierda ha estado combatiendo la palabra ideario se sabía perfectamente a cuál se refería: al ideario de la propiedad

privada, al ideario de la competitividad, al ideario de la insolidaridad humana, al ideario del autoritarismo, al ideario de los que tienen todos los medios de producción en sus manos, mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos son explotados.

Son, pues, hechos extraescolares, y si no, veamos ese magnífico, ese formidable ejemplo que nos ha dado Africa hace nada más que unos días. El ideario sudafricano de los racistas de aquella zona, que de pronto, de la noche a la mañana, se sustituye. Y ahora no luchan por el «apartheid»; dicen que ahora todos los blancos y negros son hermanos en Cristo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en Africa para que suceda esto? Simplemente que el pueblo de Zimbabwe ha tomado las riendas del poder y el ideario se ha transfigurado en veinticuatro horas. De estar sostenido a machamartillo ese vergonzoso «apartheid», que tiene la repulsa universal, a proclamar, al día siguiente de la victoria de Mongawe, que todos los blancos y negros son hermanos en Cristo. ¡No faltaba más! (Rumores.)

Efectivamente, hechos extraescolares. Hechos extraescolares nos han traído a esta Cámara; pero muchos han creído que con cambiar la fachada del poder económico dictatorial del gran capital, se iba a transformar también la conciencia, y eso sí que no. Eso se ha demostrado en la práctica que no, porque ese poder económico de las multinacionales es el que sigue vigente en este país.

Hoy se ha hablado mucho de la Iglesia. Yo no creo que por ahí anden los tiros. No creo que los tiros de los señores de UCD anden por reproducir viejos manuales, y en eso yo preferiría con toda sinceridad los manuales cavernarios, porque esos manuales de las cavernas de la Iglesia no van a volver, sino que van a venir del gran templo que está tratando de fabricar la Trilateral. (Risas.)

Esa sí que va a salir, esa sí es la que va a venir. Olvidémonos un poco del padre Asteite, ahora lo que va a venir, lo que está viniendo en la práctica, por donde están empezando los señores de UCD esta reacción en este país, es por el impulso muy serio, que en todos los campos está realizando ese gran frente de la Trilateral. (Risas.)

La gran Trilateral que en definitiva no es

más que una, el gran capitalismo imperialista americano, ese que se disfraza de japonés, alemán, y ahora también de español. Efectivamente, esa robotización que en Alemania es de todos conocida, esa «magnífica Alemania Federal» que nos resulta hoy, y aquí se han sacado incluso textos para decir que todavía somos mejores, aquí, con toda ingenuidad, se nos ha dicho que Francia, Estados Unidos, Alemania, todavía son mucho más intransigentes. ¡Naturalmente, porque el desarrollo capitalista en estos países es más poderoso que el canijo capitalismo de este Estado! (Risas.)

Esto está más claro que el agua, y ahora lo que se pretenderá es robotizar al máximo, creando indudablemente toda una psicología de terror, de miedo. Ese miedo que tanto se va inculcando de las formas más diversas, desde el mencionar constantemente a «caballos de Pavía», hasta introducir la pena a los quince años, de privar de la libertad a los autores de un delito que pudiera tener en su día prisión menor, en definitiva, una serie de normas. Porque aquí se está haciendo pedagogía, muy mala, pero se está haciendo por la legislación reiterada y represiva de la UCD y compañía.

Efectivamente, nadie quiere retornar a las cavernas, pero hay muchos que están anhelando verse en algún sillón de la Trilateral, eso está clarísimo. (Risas.) Hay muchos que todavía se sonríen cuando se habla de defender a los defensores del Alcázar y se preguntan pero ¿de qué Alcázar hablamos?, ¿del Alcázar de la Iglesia?, ¿pero en qué cree la Iglesia? Hay una respuesta de don Miguel de Unamuno que decía: «¿Usted, en qué cree? Yo creo en lo que manda la Santa Madre Iglesia, y ¿en qué cree la Santa Madre Iglesia? En lo que creo yo».

Y eso todos y cada uno de ustedes se lo están diciendo constantemente, y la Iglesia la interpreta cada uno a su manera, ¡no faltaba más!, y esa es en definitiva la Iglesia. Pero no la del Vaticano: es la nueva Iglesia de Washington, Bonn y Tokio. Hacía ahí se dirigen los tiros claramente, y por eso hace falta mantener el autoritarismo, porque en definitiva, el sistema social que la superestructura religiosa mantenía exige las mismas características de autoritarismo, competitiv-

dad e intransigencia; competitividad hasta ciertos límites, naturalmente, entre iglesias, y como no somos iguales no puede haber competencia naturalmente. Porque aquí, cuando se habla de libertad, de igualdad con términos abstractos generales, nos olvidamos de que aquí no puede haber «libertad» concreta, determinada, sino libertades concretas y determinadas. En la práctica abstracciones. ¿De qué libertad de empresa, podemos preguntar a cualquier obrero que se levanta todas las mañanas para ganarse el pan que le permita acostarse aquella noche? ¿Se habla aquí, señores, de libertad, de igualdad, con el señor que se levanta sabiendo perfectamente que tiene un talonario de cheques del que puede disponer libérrimamente, ¡ése sí que la tiene!, tan libérrima, que tiene forzosamente que existir con la opresión de la esclavitud. ¡Triste libertad! ¡Pues sí, efectivamente, esa libertad es la que se trata de defender! Defender a esas minorías, cada día más minorías, porque evidentemente las fuerzas políticas y económicas que tiene la UCD y compañía, socialmente no tienen la razón, ojalá cada vez son más reducidas y por ello, en verdad, son ciertamente alcázares. Hay que defender alcázares y hay que decir que es una política totalmente defensiva, derrotista, porque en el fondo son todos unos derrotistas. Tienen miedo al pensamiento científico, tienen ideas, ideas con las cuales se pueden acondicionar conductas de los demás semejantes, no de acuerdo con la realidad objetiva, con la realidad y necesidades de la humanidad, sino de acuerdo con los intereses económicos de esa Trilateral y de sus adláteres.

Esta es la más lamentable pedagogía que ha dado UCD con la ley que regula el Estatuto de Centros Escolares, lo demás se vendrá por añadidura. Pero el temor que tienen claramente es que, como socialmente cada vez son menos y menos, efectivamente, la ideología auténtica, la que le corresponde a la realidad objetiva, la que desenmascara todos los trucos, todos los palabreos, bonitos, muy bonitos pero que no dicen nada a la gente sino, como aquella frase que un amigo utilizaba refiriéndose a los discursos de la época franquista, no tan lejanos, quizá más bien cercanos: «Es preciso vincular el sopicaco ambiental al concepto carcurino» (Risas.) ¿Habéis

entendido algo? Absolutamente nada. Pues esto es lo que está pasando entre este país oficial y el país real. No hay posibilidad de entendimiento mientras que las Señorías de UCD sean mayoría en estos escaños.

Estamos muy confiados en que en breve espacio de tiempo van a disminuir sensiblemente sus filas. Entonces, por ese lado, tenéis totalmente perdida la partida. Podréis frenar en cuanto a profesorado, podéis poner toda clase de complicaciones para impedir la libertad de los más para imponer la libertad de los menos, esa extrañísima libertad que, en abstracto, queréis asimilar a todos los ciudadanos y cada día se os irán colando las ideas verdaderas, porque ¡cuántos ciudadanos, señores de UCD, han sido marxistas! Desde hace muchos años son marxistas, porque reconocen que es el pensamiento científico, que no se trata de algo sacado así de la cabeza, rascándose la cabeza, por un señor que se llamaba Carlos Marx, sino que reflejaba exactamente la realidad en transformación de modo inevitable por leyes históricas, que ustedes podrán seguir frenando, pero es un suicidio absurdo porque, evidentemente, frenar la Historia no es nada más que abocar a lo contrario de lo que ustedes dicen: reconciliación. Reconciliación y olvidar la Historia. ¿Cómo se puede reconciliar a nadie olvidando la Historia? Evidentemente, la única manera de reconciliación es la superación de la Historia, conocer perfectamente por qué se dio el año 1936 y por qué se podrá dar otro 1936. ¿Por qué? Porque las gentes reciben los esquemas, esos esquemas del ideario, esos esquemas de ese alcázar que hay que defender. Eso y las dos Españas. Para mí está claro. Las dos Españas, la España del futuro, la del proletariado, la de los trabajadores todos y, frente a eso, la España de los propietarios, antes terratenientes, después financieros y después y ahora ejecutivos, como quieran llamarlo. La España del pasado. Efectivamente, son las dos Españas.

Aclaremos de una vez que la gente se queda con eso de los buenos y los malos; y no, unos que reflejan objetivamente a las fuerzas sociales que están construyendo el presente y van a ser dominantes en el futuro, y esas fuerzas sociales que hoy están defendiendo un proceso económico finiquitado que no tie-

ne solución. Porque que aquí no hay solución está tan claro que, cuando se defendía aquí la idea de proteger a la juventud, de que el límite es la protección de la juventud, señores de UCD, ¿cómo están ustedes defendiendo a la juventud? ¿Quizá con el paro? ¿Quizá con la frustración constante de los titulados? ¿Quizá con la droga? ¿Quizá con la pornografía? ¿Con el pasotismo? ¿Manipulando, creando reflejos condicionados para convertir a la gente en perritos falderos? ¿Esa es la defensa de la juventud? ¿Quién defenderá a la juventud de sus defensores, de sus protectores? Naturalmente que son las fuerzas sociales del futuro, el proletariado y clases progresistas enteras. Efectivamente, las clases hoy dominantes en este país, políticamente dominantes, no van a ser las defensoras de la juventud, lo están demostrando en la práctica y no podemos estar ya especulando. Sino hechos, hechos. Cuando UCD realice actos que demuestren que están dispuestos a superar los esquemas del pasado, pero no sólo los escolares, y necesariamente los extraescolares, efectivamente nosotros vamos a empezar a creer que creen en la reconciliación, que creen en algo. Mientras, será cubrir, cubrir la Historia y la Historia sale por todos lados. Porque es metafísicamente imposible hacer olvidar a la gente cuando el presente es una continuación del pasado, cuando ni siquiera se ha aceptado una herencia a beneficio de inventario sino, incluso, se ha incrementado esa herencia con notables aportaciones dignas del más feroz franquismo, y esa responsabilidad la tiene Unión de Centro Democrático.

El señor PRESIDENTE: Señor Sagaseta, le ruego que concluya; se ha pasado largamente del tiempo.

El señor SAGASETA CABRERA: Todos se han pasado.

El señor PRESIDENTE: No, señor Sagaseta.

El señor SAGASETA CABRERA: No quiero alargar más la cuestión, pero está claro. Para mí esta ley ¿va a ser o no efectiva? ¿Va a ser o no realizable? En la medida en que

las demás fuerzas sociales acepten básicamente esto, yo creo que nace totalmente moribunda, porque hay una respuesta clara —quizá no tan clara como debiera por ciertas circunstancias que no quiero expresar—, pero, efectivamente, hay una retoma de conciencia. Hace tres o cuatro meses el Ministro de Economía nos decía aquí que era la economía privada la que iba a salvar la situación y, a los pocos meses, ya está reconociendo —por lo menos, lo he leído en alguna prensa— que hay que relanzar la economía pública por el sector público porque esto es la catástrofe, y yo espero que, también, pasados unos meses, los señores que piden que todo el mundo sea libre de elegir la escuela se vean en la necesidad de crear escuelas de verdad a todos los ciudadanos. Y después el superlujo. Esos señores que están dispuestos a gobernar con la Trilateral, si les dejamos, esos señores que tengan sus escuelas privadas pero, por favor, que se las financie el Pentágono. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto por el Grupo Parlamentario Minoría Catalana, tiene la palabra la señora Rubies.

La señora RUBIES GARROFE: Gracias, señor Presidente. Evidentemente, este artículo 34, a juzgar por los grandes debates que ha habido tanto en comisión como en el Pleno, merece que Minoría Catalana, aunque sea de una manera sucinta, exponga las razones por las cuales ha dado el voto afirmativo.

En primer lugar, nosotros hemos votado afirmativamente este artículo porque el artículo 34, en sus números 2, 3 y 4 se ha de interpretar y lo interpretamos de acuerdo con los artículos 32, 1 y 16 de esta ley. Es decir, que para todos los centros privados, sean o no subvencionados en el presente o en el futuro, la participación en la gestión y en su funcionamiento de padres, alumnos, personal no docente y profesores se ha de entender en cómo se ha de participar en los centros públicos.

La segunda razón es porque el número 1 de este artículo desarrolla los números 1, 3 y 6 del artículo 27 de la Constitución en lo que se refiere, no a la escuela pública sino a la

otra escuela, a la escuela libre o escuela llamada privada.

En tercer lugar, porque los números 2, 3 y 4 de este artículo desarrollan, también, el número 7 del mismo artículo de la Constitución.

En cuarto lugar, porque el ideario educativo, tal como está recogido en esta ley, ha de respetar la Constitución, sus principios y sus declaraciones. Por tanto, lo que hay que respetar es algo que es compatible con la Constitución, que no se opone a ella ni la contradice, que es, de alguna manera, un contenido en el sentido de inclusión. Y si todos los ciudadanos hemos de respetar lo más, que es la Constitución, los padres que elijan estos centros libremente y los profesores que han escogido trabajar en los mismos también pueden respetarlo.

Quinto, el ideario educativo, por otra parte, nunca podrá lesionar los derechos de los alumnos, que están reconocidos en el artículo 36, antes 40, sobre todo en su letra a), donde se dice que en todos los centros escolares, todos, públicos y privados, subvencionados o no, se ha de respetar a los alumnos su conciencia cívica, moral y religiosa.

Sexto, la Minoría Catalana entiende que las escuelas libres, llamadas privadas, tienen derecho, si quieren, a tener un carácter propio —que por eso existen—, una identidad propia que justifica su existencia. La Minoría Catalana ha votado este artículo, y entiende por ideario educativo lo siguiente: son las grandes líneas de definición de la escuela lo que garantiza la opción educativa que la define, y que da cohesión a toda la tarea educativa que en ella se realiza, con la participación de todos los implicados, y que constituye la comunidad educativa cuando la acción de todos ellos se realiza en un mismo sentido de coherencia. El ideario educativo es un conjunto de ideas y de principios que contienen y expresan la concepción del hombre, de la vida, de las relaciones humanas y el sentido trascendente o no de la historia.

Séptimo, la Minoría Catalana no confunde, sino que distingue, el ideario educativo del proyecto educativo.

Octavo, la Minoría Catalana defiende y defenderá, no sólo la participación de todos los

sectores afectados en la escuela, ya sea para la tarea educativa, ya sea para la gestión económica, sino que, además, defenderá que realmente se evalúen los resultados educativos de todos los centros, incluidos los públicos. Con una evaluación de los resultados y del funcionamiento, no sólo de los dineros públicos, nosotros lograremos hacer que nuestro sistema educativo mejore, como ya se hace en muchos países en que la calidad de enseñanza, ese dinero público esté bien utilizado.

Existen países democráticos que, para subvencionar un centro privado no le exigen ni siquiera que haga declaración de sus ideas, ni de lo que aquí mal llamamos idearios educativos. Solamente que haga una función de educación, una función de escuela; solamente que la calidad del producto, es decir, la enseñanza de la educación esté a la altura de lo que exigen los ciudadanos, y que justifique que ese dinero público esté bien utilizado.

Quiero decir sobre la enmienda del Grupo Socialista a la adición de un artículo 34 ter —me voy a referir sólo a éste— que les agradezco sinceramente que lo hayan propuesto porque, después de decir todo lo que dijeron del artículo 22 bis, que lo que se quería para la escuela pública era que se respetaran los valores —este es el sentido axiológico que tiene— que los padres o tutores hubieran escogido para sus hijos, y que todas las escuelas públicas tuvieran un proyecto educativo, esto que allí criticaron y a lo que se opusieron, ahora para los centros privados subvencionados lo presentan como artículo 34 ter. Como yo esto lo defendía para la escuela pública, evidentemente ahora no he podido votar en contra para las otras escuelas, y me he abstenido.

También quería hacer una breve alusión a la enmienda de Socialistas de Cataluña. He de decir que lo que doña Marta Mata pedía sólo para los centros públicos que estén subvencionados o que lo vayan a estar, la Minoría Catalana lo quiere para todos los centros privados, sean o no subvencionados.

Lo que pedía doña Marta Mata, en el número 1, en lo esencial, era que todas las escuelas privadas se tuvieran que acomodar a lo que se diga para las públicas. Para mí es esencial en esta ley el que sea el Consejo de dirección en todos los centros el que elabore

los principios y objetivos educativos, que es el proyecto educativo que ha de regir en estas escuelas. Por tanto, esto ya está incluido, imbricado en la ley, y además también se dice que serán la asociación de padres, junto con el Claustro de profesores, quienes van a elaborar el Reglamento de régimen interior, y que va a ser el Consejo de dirección de cada centro el que lo va a aprobar; por estar todo esto contenido en la ley y por ser el texto de este artículo mucho más amplio que lo que pretendía la enmienda de Socialistas de Cataluña, esta vez he votado en contra.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: La sesión se reanudará a las cuatro y media. Se suspende la sesión.

Eran las dos y treinta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

Artículo 35 El señor PRESIDENTE: Continuamos el examen del dictamen de la Comisión. Al artículo 35 mantiene enmiendas, a sus dos números, el Grupo Parlamentario Comunista. Para su defensa tiene la palabra el señor Riera.

El señor RIERA MERCADER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a defender, conjuntamente, las enmiendas números 154 y 155, que hacen referencia al artículo 35 del dictamen de la Comisión. Las voy a defender conjuntamente porque tanto el número 1 como el 2 de este artículo hacen referencia a un mismo tema; tema que considero de gran importancia. Hacen referencia al tema de los criterios de admisión de los españoles en los centros de estudios, tal como se dice al principio del número 1 del artículo 35.

Digo que es muy importante, porque, en definitiva, en este artículo vamos a comprobar si es realmente cierto uno de los temas que ha salido constantemente en el debate del Estatuto, referente a que todos los españoles van

a tener las mismas posibilidades de ir a los centros, sean privados o públicos.

Decía el señor Ministro que, a partir de esta ley vamos a conseguir realmente hacer escuelas interclasistas, vamos a conseguir que sean centros, privados o públicos, en los que todos los ciudadanos de este país tengan las mismas posibilidades. Por tanto, dejando aparte las declaraciones de principios, dejando aparte criterios que no voy a entrar en su discusión, vamos a ver en la realidad y en la práctica, lo que dice el artículo 35, y si realmente estos principios que proclama UCD, estos principios que ha proclamado insistentemente el señor Ministro de Educación, se cumplen o no se cumplen en este artículo. Y lo vamos a realizar sin intentar hacer ideología sobre esta discusión, sin hacer una discusión de principios, sino ajustándonos mucho a la realidad.

A mí me parece —y ahí está el contenido de las enmiendas que nosotros proponemos—, que hay tres aspectos fundamentales de este artículo que, a nuestro entender, limitan gravemente esta igualdad de oportunidades. Pensamos que en este artículo hay una serie de trampas y filtros que se ponen para que, en definitiva, la igualdad de todo el mundo, a partir de la financiación que nos propone en otra ley el Partido del Gobierno, no se cumpla en la realidad. El artículo dice: «Todo español tiene derecho a ser admitido en un centro escolar de cualquier nivel educativo, siempre que cumpla las condiciones establecidas para el acceso al mismo...».

La primera pregunta que nosotros hacemos al Partido del Gobierno es, en definitiva: ¿Quién va a decidir las condiciones para el acceso a los centros escolares? En principio, parece, según el texto, que van a ser los propietarios de estos centros, o el Gobierno; pero queda muy indeterminado. La realidad es que no se especifica quién va a poner las condiciones para la admisión de los estudiantes en estos centros. Por tanto, nos gustaría que, a la hora de contestar a las enmiendas que proponemos, el señor Diputado que vaya a hacerlo nos diga claramente quines van a poner estas condiciones.

Por otra parte, me parece que en el número 2 hay dos elementos que pueden parecer

lógicos o inocuos, pero creo que también tienen mucha importancia. Dice: «Entre los criterios de admisión se deberán tener en cuenta los que se refieren a proximidad domiciliaria y precedentes familiares de escolaridad».

Por tanto, una vez puestas las condiciones para la admisión en los centros, se nos dice que se van a tener en cuenta dos cuestiones que parecen lógicas y sin importancia, que son las que hacen referencia a la proximidad domiciliaria y a los precedentes familiares de escolaridad.

Pero ¿qué ocurre en la realidad? Ocurre que si los dos criterios fundamentales para admisión de los españoles en los centros de estudio son la proximidad domiciliaria y los precedentes familiares de escolaridad, estamos poniendo también trabas muy importantes para la admisión y para la igualdad de oportunidades.

Yo voy a poner un ejemplo muy real, porque me parece que no se trata de hacer declaraciones de principios, para ver si UD lo que va a hacer con este proyecto de ley es dar o no igualdad de oportunidades. Voy a coger el ejemplo de una ciudad, que es, en concreto, mi ciudad natal, Sabadell, que tiene 10.000 habitantes, y que es una ciudad que tiene, fundamentalmente, una parte muy importante de migración de otras regiones, pueblos y nacionalidades de nuestro país. Vamos a ver si esta proximidad domiciliaria es o no un elemento de selectividad.

Cogiendo los nueve distritos en que está distribuido el territorio de Sabadell, vemos que, en los distritos primero y cuarto, la proporción entre la escuela estatal y la escuela privada es la siguiente: en el distrito primero, que es el centro de la ciudad, escuela estatal, el 8,3 por ciento; escuela privada, el 91,7 por ciento. Distrito cuarto, que también corresponde al centro de la ciudad, escuela estatal, el 3 por ciento; escuela privada, el 97 por ciento.

Y cojamos dos barrios básicamente de migración, dos barrios periféricos de la ciudad, que son los distritos sexto y noveno. Distrito sexto, escuela estatal, 93,2 por ciento; escuela privada, 6,8 por ciento. Distrito noveno, escuela estatal, 95,93 por ciento; escuela privada, 4,07 por ciento.

En definitiva, hay unos barrios, los del centro de la ciudad, en los cuales la diferencia entre escuela privada y escuela estatal es realmente impresionante: del 3 al 97 por ciento. Y en las escuelas que están en los barrios periféricos hay también una proporción abismal, representada por ese noventa y pico por ciento de escuela estatal.

Por tanto, si realmente un primer criterio fundamental para la admisión de estudiantes es el del domicilio de los que pidan la posibilidad de matricularse en un centro, vemos que existe una primera discriminación, una discriminación real, que será que, en definitiva, podrán ir a las escuelas privadas los que viven en los barrios donde estén estas escuelas. Y estos datos no son inventados, son reales.

Además, tampoco nos podría extrañar porque si vemos los resultados de las elecciones habidas en este período, el voto favorable (en el caso de Sabadell) a Convergencia Democrática, Unión de Centro Democrático y Coalición Democrática coincide evidentemente con los barrios donde la incidencia de la escuela privada es realmente casi casi del 100 por ciento.

Pero si resulta que este primer filtro no funciona, existe el segundo, que parece también inocuo, que es el de la procedencia familiar para la escolaridad. Es evidente (aquí no se dice, parece que en Comisión se dijo) que esta procedencia familiar serán los hermanos, pero en principio no consta en ningún sitio que sea así.

Vamos a ver también que las posibilidades de admisión, si resulta que el primer filtro no funciona, se van a reducir a los que tengan ya hermanos en aquel centro. Por tanto, hoy por hoy, si partimos de la idea de que los que van a los centros privados fundamentalmente son unas clases determinadas, vemos que el criterio para la posibilidad de admisión va a ser también unas pocas posibilidades a favor de los que ya tienen hermanos o parientes dentro de aquel centro. Es un segundo filtro indiscutible.

Pero si resulta que este tampoco funciona, hay un tercer filtro en este artículo, que dice que las condiciones, en definitiva, van a establecerse a partir de los propietarios de los

centros, a partir del Gobierno. Aquí no se dice; por tanto, puede ser, perfectamente, que sea el propietario.

Por consiguiente, señores de UCD, me gustaría que se me respondiera a esta argumentación: si es verdad, o no, que los criterios de selección van a ser estos u otros. Si resulta que va a existir realmente esta posibilidad, quisiera saber si una persona que viva en un barrio periférico, en un barrio que está más lejano del centro de la ciudad, donde está casualmente la escuela privada, va a tener las mismas condiciones que una familia que viva en el centro de una ciudad.

Me gustaría que se me respondiera y si, realmente, es así, si hay algunos elementos que van a compensar esta dificultad, nosotros entraríamos en la comprensión de esta argumentación.

En definitiva, nuestras enmiendas proponen dos cosas muy simples, muy sencillas; dos cosas que si UCD quiere que exista esta igualdad de oportunidades, me parece que no hay ninguna argumentación para no aceptarlas.

¿Cuáles son estas dos cosas? Proponemos que el criterio para el acceso a los centros se haga a través de ley; que no sean los propietarios de los centros los que tengan que establecer estos criterios, sino que sea el Parlamento el que tenga la posibilidad para legislar; y a partir de sus propias mayorías, que se dicten los criterios para la admisión de alumnos en los centros escolares.

Y segunda cuestión: que entre los elementos que compongan el criterio de selección haya uno muy importante, cual es el de los ingresos familiares. Si entramos en esta dinámica de que se legisle a través de ley, y si logramos que se tenga en cuenta cuestión tan importante como es la de los ingresos familiares, queremos saber si UCD va a cumplir su promesa de que habrá igualdad de oportunidades.

Nos gustaría saber por qué UCD no acepta que entre estos criterios, para el acceso a los centros se adopte uno que es fundamental en la igualdad de oportunidades. Si tenemos en cuenta que no existe esta igualdad entre los ingresos, creemos que se debe aceptar el criterio, para nosotros fundamental, de los ingresos familiares.

Por tanto, nosotros pediríamos al señor Diputado que nos va a contestar a esta enmienda que, por favor, nos indicara, estrictamente, estos dos aspectos: por qué no se quiere que el acceso a los centros se haga a través de una ley, y por qué no se acepta que entre los criterios que se van a adoptar, uno sea el de los ingresos familiares.

Pensamos que si no se adoptan estos criterios, lo que se ha hablado aquí de igualdad de oportunidades es una entelequia, es una falacia, porque, en definitiva, las posibilidades que se van a tener para ir a los centros privados, sin contar con chanchullos y enchufismos, etc., van a ser muy limitadas, sin contar los que no tengan posibilidades en sus ingresos familiares.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y para defender la enmienda al número 2 de este artículo, tiene la palabra el señor Fuentes.

El señor FUENTES LAZARO: Señor Presidente, muy brevemente para exponer nuestra enmienda a este artículo 35, número 2.

Proponemos que los criterios de admisión en los centros con financiación pública sean los siguientes: primero, situación socio-económica de la familia; segundo, la proximidad domiciliaria, y, tercero, la existencia de hermanos en los centros, y por este orden.

Las razones fundamentales de nuestra enmienda son las siguientes: por un lado, evitar la discriminación que en la práctica podía originarse si no se tiene en cuenta la situación económica y social; y si, por otra parte, no aparece en este artículo, evitar que ciertos centros con financiación pública —y éste es el matiz importante— puedan convertirse en colegios elitistas.

Con nuestra enmienda se conseguiría huir del riesgo que puede suponer la estratificación férrea de los colegios y la perpetuación de la discriminación.

La otra parte de nuestra enmienda pretende sustituir la expresión «precedentes familiares» por otra que diga «hermanos en los centros».

Creo que nuestra expresión es más afortunada, y que no deja paso a ningún tipo de in-

interpretaciones sesgadas que podrían derivarse de la ambigua expresión del texto.

La aparición del criterio socio-económico en la ley puede evitar lo que todos queremos evitar, y que, por otra parte, compaginándolo con el principio de no discriminación del apartado anterior, puede dar lugar a que en todos los centros, todos los niños puedan acceder en igualdad de oportunidades. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para turno en contra de las enmiendas al artículo 35 tiene la palabra el señor Herrero.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE NIÑON: En cuanto a la enmienda del Grupo Socialista se refiere, nosotros hemos presentado, en el sentido apuntado por el representante del Grupo Socialista, una enmienda transaccional que obra en poder de la Mesa, y en la cual se acepta el criterio relativo a la mención de los hermanos que hace la enmienda del citado Grupo Socialista, aunque creemos que se le da una redacción gramaticalmente más exacta y precisa y, por eso, no creo que, en este punto, haya problemas.

En cuanto a la mención de la situación económica de la familia, nosotros afirmamos, formalmente, nuestro acuerdo con la intención que acaba de manifestar el representante del Grupo Socialista, de crear condiciones de no discriminación en los centros, pero también creemos que la fórmula de la enmienda socialista no es, precisamente, la más acertada. Porque si se deja así, como está, «teniendo en cuenta la situación socio-económica de la familia», puede darse perfectamente la circunstancia de que existan centros que tengan una determinada exigencia de nivel económico para entrar, y entonces se creen centros con clara discriminación, de manera que haya centros para ricos, centros para menos ricos y centros para pobres.

Nosotros, en esta versión, y precisamente por esto, porque creemos que sienta las bases, no queridas, pero sí gramaticales, de una total discriminación económica, es por lo que nos oponemos a la redacción de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Pero si el Grupo Socialista nos propone una redacción que responda a la intención que ha declarado

su portavoz, y que nosotros compartimos, es decir, conseguir que en los centros haya un acceso sin discriminación económica de los candidatos, estamos absolutamente dispuestos a aceptarla.

En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, y pasando por alto las extrañas estadísticas que se nos han dado sobre la población escolar de Sabadell y el número de muestreo que se ha utilizado, que resulta raro, atendiendo a la población de Sabadell, pasando esos detalles por alto, quiero decirle que, en cuanto al tema de la situación económica familiar, estamos dispuestos a aceptar la intención declarada por el Grupo Socialista si se presenta una redacción que nos convenza.

En relación a su pregunta de por qué no son las leyes las que fijen estos criterios, pues porque creemos que no es un tema de reserva de ley; creemos que es un tema evidentemente reglamentario, y ahora proponemos una enmienda «in voce» e inmediatamente transmitiremos a la Presidencia una redacción que diga: «siempre que cumplan las condiciones establecidas reglamentariamente». Con lo cual se satisface la existencia de una norma con criterio objetivo.

El señor PRESIDENTE: En turno de rectificación tiene la palabra el señor Riera.

El señor RIERA MERCADER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, muy brevemente. En primer lugar, para decir al señor Herrero de Miñón que los datos no son muy extraños, y que pueden comprobarse. Me imagino que el señor Ministro tiene la posibilidad de comprobarlos en las estadísticas y en los datos que tiene el Ministerio.

Simplemente lo que he dicho es la distribución por los distritos de una ciudad, los puestos escolares que hay en cada distrito, la procedencia social de estos distritos y, en definitiva, una cosa que me parece evidente, que es la proporción entre la escuela privada y la pública según estos distritos; en definitiva, según la posición social de los ciudadanos de cada uno de ellos.

Por tanto, no son estadísticas extrañas ni datos extraños, sino que pueden comprobar-

se; y me parece que el señor Ministro tiene todas las posibilidades para comprobarlos.

En segundo lugar, cuando se hace referencia al artículo 35 parecía que lo que nosotros estamos haciendo es dar la posibilidad de intervenir a este Parlamento, restándosela a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas. Lo que va a ocurrir es que si se aprueba tal como está la Disposición adicional, éste es uno de los artículos que parece que no se van a poder tocar desde las Comunidades Autónomas, porque el 35 no figura entre los artículos que se citan en la Disposición adicional.

En definitiva, nosotros hemos apoyado, y apoyamos claramente, que sean los Parlamentos respectivos de las Comunidades Autónomas los que legislen sobre los aspectos que les corresponden, según sus propios Estatutos de autonomía. Por tanto, lo único que pretendemos con estas enmiendas, en principio (veremos si se llega a un posible arreglo a partir de la propuesta que hacía el señor Herrero de Miñón, de que, según la enmienda Socialista, se pudiera llegar a una formulación que tuviera en cuenta los ingresos familiares), es que se tengan en cuenta estos criterios, y que, en definitiva, no pongamos cortinas de humo ante un aspecto que está muy claro, pues para nosotros, tal como está redactado este artículo, no garantiza la igualdad de oportunidades.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en turno de rectificación, el señor Fuentes Lázaro.

El señor FUENTES LAZARO: En primer lugar supongo que la Presidencia leerá la enmienda de la que acaba de hablar el señor Herrero, puesto que no la conocemos.

En segundo lugar, decir que no acabo de entender las razones por las que no se aceptan los criterios, o la referencia socio-económica como un criterio válido, sobre todo cuando hemos querido tener una absoluta confianza en el Ministro de Educación, puesto que —y como punto de referencia— tenemos una Orden del Ministerio de Educación de 12 de febrero de 1980, en la que se habla, para acceder a los centros de enseñanza integrados, de que se tendrán en cuenta, como criterios

importantes, la valoración social, la ponderación social familiar, la ponderación económica familiar y la ponderación, después, geográfica y académica.

Si nosotros hemos concedido esta confianza al Ministro pensando que en ningún momento va a utilizar este criterio para consagrar colegios elitistas, no acabamos de entender las explicaciones que ha dado el señor Herrero Rodríguez de Miñón.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Herrero Rodríguez de Miñón.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: Insisto en lo que he dicho antes. Si se nos presenta un texto que satisfaga, al parecer, la intención común, lo votamos; si no, debemos atenernos, por supuesto, y por nuestra parte, al texto del dictamen.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Centrista ha presentado dos enmiendas de transacción, una con respecto a la sostenida por el Grupo Parlamentario Comunista (enmienda número 154) y que supondría decir «siempre que cumplan las condiciones establecidas reglamentariamente». De manera que es añadir el adverbio «reglamentariamente» en el número 1 del artículo 35. Esta es la primera enmienda presentada. La segunda enmienda de aproximación presentada respecto de la del Grupo Parlamentario Comunista supondría sustituir «precedentes familiares de escolaridad» por «de los precedentes de escolarización de hermanos en el mismo centro».

Estas son las dos enmiendas que se han depositado en la Presidencia. Pregunto a la Cámara si hay objeción por parte de algún Grupo Parlamentario para la admisión a trámite de estas dos enmiendas de aproximación. (Pausa.) ¿No habiendo objeciones, quedan admitidas a trámite, entiendo que sostenidas las originarias por el Grupo Parlamentario Comunista, señor Riera? (Pausa.) Sostenidas.

Vamos a proceder a la votación. En primer lugar, votaremos la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto del número 1 del artículo 35. Enmienda número 154.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 26; en contra, 148; abstenciones, 94.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 154, del Grupo Parlamentario Comunista, respecto del número 1 del artículo 35.

A continuación votaremos la enmienda de aproximación presentada por el Grupo Parlamentario Centrista respecto de este mismo número 1 del artículo 35, y que supone la introducción del adverbio «reglamentariamente». Enmienda de transacción del Grupo Parlamentario Centrista al número 1 del artículo 35.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 151; en contra, tres; abstenciones, 115.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta enmienda, que, aun cuando la Presidencia ha dicho que suponía solamente incorporar la palabra «reglamentariamente», tiene una leve diferencia de formulación: en lugar de «siempre que cumplan las condiciones establecidas» dice «siempre que se cumplan las condiciones establecidas reglamentariamente».

Votaremos seguidamente la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, número 155, respecto del número 2 del artículo 35.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 27; en contra, 144; abstenciones, 100.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 155, del Grupo Parlamentario Comunista, respecto del número 2 del artículo 35.

Votamos seguidamente la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso respecto de este mismo apartado del artículo 35.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 120; en contra, 147; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso respecto del número 2 del artículo 35.

Votamos seguidamente la enmienda de aproximación presentada por el Grupo Parlamentario Centrista, y admitida a trámite, respecto de este mismo número 2 del artículo 35.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 156; en contra, tres; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda aceptada la enmienda del Grupo Parlamentario Centrista respecto del número 2 del artículo 35.

Votamos, finalmente, el texto del artículo 35 conforme al dictamen de la Comisión, entendiéndose que, en caso de aprobarse, llevará incorporadas las enmiendas ya aprobadas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 153; en contra, 117; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 35 conforme al dictamen de la Comisión, incorporando las enmiendas que han sido aprobadas con anterioridad.

Al artículo 36 mantiene enmienda el Grupo Parlamentario Comunista, la número 157.

Tiene la palabra, para su defensa, el señor Riera.

El señor RIERA MERCADER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, brevemente voy a defender las enmiendas número 157, 158 y 159, intentando agrupar las mismas, que van dirigidas a los artículos 36, 37 y 38.

El sentido de agrupar estas enmiendas está en función de que buscan un objetivo común, que es el de potenciar por todos los medios la participación de los estudiantes.

Este proyecto de ley que estamos discutiendo pienso sinceramente que es claramente discriminatorio con respecto a los alumnos, con respecto a los estudiantes. Tampoco

Artículo 36

se trata aquí de hablar de intuiciones, sino de referirnos a algunos artículos de la ley, que son los que prueban esta discriminación: en primer lugar, la participación sólo de dos estudiantes en el Consejo de Dirección, lo que hace una proporción de 13 votos frente a dos. Además, en la Comisión se aprobó una enmienda del Grupo Centrista que daba también derecho a voz y voto a dos estudiantes del segundo ciclo de EGB. Para la UCD tienen tantas posibilidades de opinar y de votar un niño de diez u once años que un joven de quince, dieciséis o diecisiete años.

Pensamos, pues, que la misma proporción de participación en el Consejo de Dirección a nivel de EGB y a nivel de los centros de formación profesional de Bachillerato es, como mínimo, desproporcionada.

Por otra parte, creemos —y éste es un aspecto muy importante— que en el reglamento interno —que, entre otras cosas, según el proyecto de ley, tiene que regular todas las cuestiones referentes a la disciplina— no ván a participar los alumnos, no van a participar los estudiantes. Los estudiantes van a convertirse con esta ley en personajes de cuarta categoría dentro de la vida de los centros. Lo que nosotros pretendemos sinceramente es —y pensamos que la UCD y todos los Grupos Parlamentarios deberían tener el mismo objetivo— conseguir la máxima participación del conjunto de los estudiantes, porque, tanto a nivel pedagógico como a nivel puramente democrático, hoy es fundamental que los estudiantes, en sus propios centros de estudio, tengan posibilidades reales de participar; y para poder participar, para poder motivar esta participación es fundamental no que se les den unas migajas pensando que así se resuelve el tema, sino haciendo comprender que con la participación van a poder realmente resolver sus propios problemas. En definitiva, participar no es simplemente tener dos representantes en los organismos de dirección, sino que participar es dar posibilidades de que esta participación se corresponda en la práctica real para resolver estos problemas.

Estamos ante un tema muy importante. Nos quejamos mucho de que la juventud no participa, nos quejamos mucho de que no existe esta integración de la juventud en el

sistema democrático; se quejan los profesores, y se queja —creo yo— casi todo el mundo de que no hay una participación activa de los estudiantes. Si queremos esta participación es fundamental que demos los instrumentos y los medios, no simplemente para que se puedan sentir representados, sino que es preciso también que les demos estos canales de auténtica participación y gestión democrática en los propios centros.

Pensamos —y repito que es un tema muy importante— que no se puede hacer demagogia diciendo, como a veces decimos, que de lo que se trata es de poder preservar a la juventud de los problemas que le puedan acaecer. Aquí se argumentaba mucho, cuando se habló del ideario, que era preciso proteger a la juventud, pero lo fundamental para esta protección es dar la posibilidad para poder participar, para sentirse personas capaces y poder decidir en los temas que directamente les afecten.

Este es el sentido de nuestras enmiendas, y fundamentalmente de ésta, que va dirigida a la posibilidad por parte de los estudiantes de organizar sus propios centros de estudio.

Es un aspecto fundamental; sabemos además que la juventud asociada es una ínfima minoría del conjunto de la juventud; sabemos que la disgregación entre la juventud es un gran problema con el que nos encontramos, y pensamos que un elemento importante para ayudar a este asociacionismo, para ayudar a que la juventud sea corresponsable de sus problemas, es potenciar —no dirigir, sino potenciar y fomentar— todo tipo de organización en los centros de estudio.

No quiero alargarme más en la argumentación. Todos somos conscientes de esta necesidad. Simplemente querría terminar con unas palabras que, si no recuerdo mal, dijo el señor García Pérez, uno de los portavoces del Grupo Parlamentario Centrista, en este proyecto de ley, cuando nosotros presentamos el proyecto de Estatuto de Centros, hace ya más de un año y medio, en la Comisión, y que no fue tomado en consideración por los votos en contra de UCD y Coalición Democrática, entonces Alianza Popular. Nosotros planteábamos un tema y él nos dijo que una de las argumentaciones por las cuales la UCD no iba a votar a favor era porque no se recogía

suficientemente la participación de los estudiantes. Y nos decía que en un Estatuto de Centros debía recogerse, como un aspecto fundamental, el elemento que afectaba directamente a los alumnos, a los estudiantes.

Simplemente lo que quiero es recordar, y no como una cita más, que todavía estamos a tiempo de conseguir en este proyecto de ley un objetivo fundamental, y es que esta ley responda a los intereses de los estudiantes y, como mínimo no entro en otras consideraciones—, podíamos conseguir que los estudiantes se puedan sentir corresponsables de lo que están haciendo en los centros de estudio.

Pienso que desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de participación democrática, es un aspecto fundamental, y lo único que yo quería es que se fuera coherente con lo que se dijo hace un año y medio cuando se rechazó un proyecto del Grupo Parlamentario Comunista aduciendo que era poco democrático en lo que hacía referencia a la participación de los estudiantes.

El señor PRESIDENTE: Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso respecto de este artículo. Tiene la palabra el señor Fuentes Lázaro.

El señor FUENTES LAZARO: Señor Presidente, Señorías, para consumir un turno de defensa de nuestra enmienda, que propone la incorporación de un nuevo artículo, cuyo texto es el siguiente: «Los alumnos podrán asociarse creando organizaciones con arreglo a las normas que reglamentariamente se establezcan y a lo que prescriban los estatutos propios de cada centro.

»Sus fines serán los siguientes: primero, expresar la opinión de los alumnos en cuanto concierne a su situación en el interior de los centros; segundo, colaborar en la labor educativa de los centros y, de una manera especial, en las actividades complementarias y extraescolares, y, tercero, realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de trabajo en equipo».

He leído nuestro texto en su integridad para que se pueda apreciar la finura y la matización de nuestra enmienda —podría decirse que está medida al centímetro— y para que nadie se

llame a engaño sobre cuál es el sentido de nuestra propuesta. Y esto lo digo porque ya en Comisión, con una total falta de sensibilidad, se rechazó nuestra enmienda porque proponíamos el asociacionismo de los alumnos. Y allí se dijo, entre otras muchas cosas que no voy a citar, que nuestra propuesta era inaceptable porque de ella se derivarían graves peligros para los alumnos.

El señor Diputado que esto dijo sólo oyó la palabra asociación de alumnos e inmediatamente aprestó todos los instrumentos necesarios para ahuyentar demonios. Pero, una vez anatematizada, escuchamos, en explicación de voto de otro señor Diputado, la sorprendente teoría de que los alumnos no necesitaban asociaciones, porque ya estaban asociados por el hecho de estar en el colegio. Evidentemente, el señor Diputado, con criterio digno de democracia orgánica, rechazaba la asociación como vía de participación porque confundía asociación con yuxtaposición. Sin embargo, no quiero recordar, sino explicar nuestra matizada propuesta para que se entienda bien su sentido y su alcance.

Señor Presidente, Señorías, para los socialistas el alumno es, con palabras de Unamuno, el agonista del centro, pero, desgraciadamente, el significado etimológico de la palabra se ha perdido para atribuirle en los colegios el papel del ser agonizante o que se muere diariamente, y se muere porque su paso por el colegio ha sido, en la gran mayoría de las veces, un calvario, en el que tenía que aprender actitudes de los adultos, comportamientos de los adultos y hasta tics de los adultos. Se ha hecho del alumno un negativo de nuestro propio comportamiento, pero nunca se le ha dejado que él mismo, que por sí mismo, vaya evolucionando y se desarrolle para después ser adulto. Con esto estamos tocando uno de los grandes problemas de la educación, y uno de los grandes males de la educación de nuestro país.

Desde hace más de un siglo, en España se ha reproducido exacta copia del alumno a imagen y semejanza de nuestros defectos y virtudes políticas, morales y sociales, pero nunca se le ha dejado hacerse, formarse sus propios defectos y sus propios méritos. Que esto ha sido el caballo de batalla en nuestro país durante todo el siglo xx, y lo sigue sien-

do, lo revelan las diferentes posturas mantenidas entre los que podríamos llamar los progresistas de la educación y los conservadores de la educación.

Y a estos efectos, ya que se han citado tantos textos del PSOE, permítaseme citarles dos textos de 1918, de las Bases para un Programa de Instrucción Pública. Se decía lo siguiente: primero: «... siendo uno de los fines fundamentales de la Educación Primaria la formación de ciudadanos independientes y sociales, a la vez se concederá a los niños de los últimos grados cierta autonomía e intervención en el régimen de las escuelas». Segundo —se decía en 1918—: «... con este fin también se fomentará entre los niños el espíritu de asociación mediante agrupaciones deportivas, de auxilio mutuo, de consumo de materiales escolares, etc.».

Estos textos, que los leo con gran orgullo, los he citado no para utilizarlos como un dogma, sino para confirmar que en España uno de los graves problemas que tenemos planteados, y que tenían planteados nuestros antepasados, es la educación; y en la educación, el desarrollo social y humano del alumno, con un sentido amplio de la participación o, en la otra alternativa, con un sentido restrictivo de ella.

Es posible que todos queramos una participación del alumno y, por ende, su desarrollo democrático y social, pero reconózcanme que hay grados o que hay formas diferentes de concebir la participación, formas diferentes que no excluyen la responsabilidad, porque ésta, señor Presidente, Señorías, no es patrimonio única y exclusivamente de la derecha, sino que también es patrimonio, en este caso, de los socialistas, y por eso no se nos acuse de que lo que queremos, al proponer asociaciones en los colegios, es trasladar la vida de las fábricas a las escuelas o trasladar, miméticamente, nuestros esquemas de comportamientos políticos o sociales a los centros.

Lo que nosotros queremos es que en todas las escuelas exista la democracia, la democracia creada, matizada y conservada por los propios alumnos; que creen sus cauces de representación con sus reglas democráticas de juego, que elijan a sus delegados a través de la discusión sensata y responsable, que aprendan a informarse para superar la fri-

volidad de sus planteamientos, que aprendan, en una palabra, a colaborar con los profesores, con los centros y a programar sus propias actividades culturales y extraescolares. Pero si de entrada se les ponen restricciones a su forma de participación, estamos limitando el ejercicio de sus derechos de representación, porque reconocerán conmigo que es distinto que les impongan la elección de unos delegados a que ellos mismos sean los que sientan la necesidad de elegir a sus propios representantes.

Y esto, Señorías, no es la utopía; esto es la forma de que los alumnos vayan encarnándose en la democracia, y la democracia vaya encarnándose en ellos mismos. Y esto tampoco es el caos; es simplemente empezar a educar de una forma distinta desde la etapa preescolar; es confiar en la capacidad de los alumnos a ser responsables, si se les enseña a ser responsables. Y ustedes, señores de la UCD, van a aplicar en los centros, a través de este Estatuto, un esquema de participación por debajo de cero. Están —y lo digo con todo respeto— burocratizando a los alumnos a través de una serie de artículos de este Estatuto que instauran una participación con más cautelas —atribúyasele el sentido negativo que tiene— que indicaciones positivas.

Estas han sido y éstas son las razones que nos han movido a presentar y mantener esta enmienda.

Mantenemos otras dos enmiendas que voy a intentar exponer brevemente para acabar el debate. Pretendemos en el artículo 36 que se incorpore un texto que diga lo siguiente: «Serán derechos de los alumnos el que se respete su conciencia cívica, moral y religiosa, de acuerdo con la Constitución. Ningún alumno podrá ser obligado por el centro a aceptar una determinada ideología».

Y sin querer repetir argumentos que ya se han expuesto en otras intervenciones, interesa dejar bien claro que el derecho principal de los alumnos es el derecho a tener sus propias convicciones y a irse formando su propio cuerpo de principios sin que nadie, absolutamente nadie, le obligue.

No se nos utilice la teoría de la obviedad, porque, en teoría, puede haber grandes declaraciones de principios —y reconozco que éste es el fuerte de la Unión de Centro Demo-

crático—, pero se puede dejar en la práctica la puerta abierta a una imposición de ideologías que iría contra los derechos del alumno, y éste es un derecho del alumno que debe figurar expresamente. No basta con decir que se respete su conciencia cívica, moral y religiosa; es necesaria una cláusula que enseñe a los directores, a los titulares y a los idearios, que no pueden imponer sus ideologías, y que esta imposición, además, no debe ser financiada con fondos públicos.

Si quieren, nuestra enmienda pretende atar, de cara a la práctica diaria de los colegios, los principios de la Constitución y de los derechos humanos; pero pensamos que es preferible atar estos principios antes que dejarlos a la libre interpretación de los directores o de los titulares.

Y la otra enmienda es de adición de un texto por el cual se pretende que para que sean efectivos una serie de derechos que se han enunciado en este artículo, se tienen que crear los medios adecuados para que esos derechos que se han reconocido se puedan aplicar en los centros. De alguna forma estamos entrando en un tema que ya se planteó en el artículo 4.º, y allí el señor Díaz-Pinés nos dijo que no se podía aceptar la creación de un gabinete de orientación, porque lo único necesario era, por un lado, crear los organismos que pusieran en marcha lo que ya estaba en la Ley General de Educación de 1970, y, por otro, buscar las medidas necesarias. Pues bien, es lo que nosotros queremos con esta enmienda, pero además ofrecemos cuáles deben ser los criterios que deben tenerse en cuenta para conseguir una orientación eficaz, una medicina escolar que sea algo más que un reconocimiento al año y una ficha; que haya una asistencia social para alumnos y para las familias que les sirva para superar los problemas sociales y familiares.

En este sentido, y muy telegráficamente, voy a presentar cuáles son nuestras propuestas y cuáles son nuestros criterios de una manera positiva.

La Medicina escolar, que es uno de los puntos importantes, no puede estar constituida por acciones asistenciales, sino que debe enmarcarse en una idea más amplia: la educación sanitaria, pero no como asignatura, sino como información y responsabiliza-

ción. Información para la prevención de las enfermedades, y por eso se necesita la existencia de equipos multidisciplinarios que hagan posible una actuación sanitaria concebida como algo más que el seguro escolar de la asistencia social.

Para que esta acción dirigida a los alumnos y a las familias sea efectiva es preciso que alguien conozca el barrio y el entorno del niño; que alguien conozca las condiciones urbanísticas, los equipamientos sociales, la cualificación profesional de los padres y de los vecinos; y para conseguir una auténtica igualdad de oportunidades de todos los alumnos es necesario que alguien conozca los niveles culturales de la familia, las relaciones de los padres entre sí y con los hermanos, y esto no lo puede hacer el maestro. Esta sería la forma de evitar frustraciones y fracasos escolares.

Habría que atender también a la educación sexual, y ello porque la salud mental es un don inapreciable, que ha estado fuera de nuestros colegios. Hay que acabar con los desequilibrios, con las angustias y con las hipocresías que una educación excesivamente timorata ha ido creando en los alumnos.

Esta acción comprendería también la educación para evitar un grave mal como es el de las toxicomanías y el de las drogas, aspecto éste al que hasta ahora sólo se ha dado tratamiento policial pero nunca tratamiento educativo en los centros.

Por último, la orientación y los servicios de Psicología, que en nuestras escuelas los estamos ignorando. Estamos ignorando los descubrimientos de la psicología infantil, porque ¿para qué queremos una orientación si no hay un experto que junto con los profesores programe, revise, coordine y aplique las técnicas precisas? Si esto no se entiende así, ni lo que se dice en la Ley General de 1970, ni los criterios de orientación que aquí se han fijado, muy restrictivamente, servirán para nada.

Este es el sentido global de nuestras enmiendas y hemos querido repetir varias veces los mismos conceptos para que nadie se llame a engaño y nos diga que no se pueden aceptar nuestras enmiendas porque son inviables. Nosotros creemos que son viables y que no cabe duda que aportarían esa calidad para

la enseñanza que todos estamos buscando. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra de las enmiendas al artículo 36, tiene la palabra el señor Herrero. Antes quiero advertirle que el señor Riera ha defendido, puesto que tienen una unidad en su concepción, las enmiendas a este artículo y a los dos siguientes, relativos todos ellos a la participación, organizaciones de los estudiantes, etcétera.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: Muchas gracias. Yo también querría señalar que me parece que en el texto impreso falta el epígrafe correspondiente a este título y que se entiende que se salvará por el buen juicio de los Servicios de esta Cámara.

Creo que tal como se han manifestado hasta ahora los dos Grupos enmendantes en este punto, hay cuatro tipos de enmiendas; mejor dicho, cinco tipos de enmiendas, puesto que también el Grupo Comunista se ha referido a otras formas de participación.

Hay una enmienda que comparten, hasta cierto punto, los Grupos Socialista y Comunista, que es la referente al derecho de asociación de los alumnos.

Yo creo que esta enmienda, en sus dos versiones, es manifiestamente inadmisibles, pero inadmisibles no por extrañas lucubraciones políticas sino por imperativos del derecho.

Y no se puede admitir este derecho de asociación porque, si se refiere al derecho de asociación general que reconoce el artículo 22 de la Constitución, es claro que tanto este derecho de asociación como los demás derechos activos ciudadanos se reservan a los mayores de edad, es decir, a aquellas personas que tienen una capacidad general de obrar, y, en consecuencia, la capacidad jurídica necesaria para asociarse.

Y es claro que mediante esta ley, aunque se trate de una ley importante y de una ley de rango orgánico, lo que no podemos hacer es modificar en un extremo todo el sistema general de capacidad de obrar y de capacidad jurídica para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Las organizaciones juveniles, como saben

Sus Señorías, siempre son constituidas por personas plenamente capaces, al menos jurídicamente reputadas así, y en ellas participan, de una u otra forma, los menores como asociados o como socios «juniores», puesto que ellos no tienen de suyo una capacidad de asociación.

Por esto es por lo que no podemos reconocer aquí un derecho de asociación que, insisto, trastocaría todo el sistema civil y constitucional al respecto.

Otro tema absolutamente distinto del derecho de asociación son las vías de participación de los alumnos. A nuestro juicio, este estatuto, tanto en los centros públicos como en los privados, ha establecido cauces de participación de los alumnos en la comunidad escolar.

Yo creo que cuando el Grupo Comunista, en su enmienda 158 al artículo siguiente —que entiendo, según las indicaciones de la Presidencia, incluida en esta defensa— propone que los alumnos deben participar en la vida escolar y organizaciones del centro en los términos establecidos en la presente ley, no está añadiendo nada nuevo, puesto que, por una parte, la presente ley en los Consejos de Dirección establece una participación del alumnado, y, por otra parte, el propio artículo 37, letra b) dice: «Participar en la medida en que lo permitan las edades propias de cada nivel, en la vida escolar y organización del centro».

Yo, sinceramente, no veo que esta enmienda comunista suponga una innovación. Creo que técnicamente recarga el texto con una tautología.

Hay otra enmienda socialista que constituye un artículo 17 bis, que, en un primer párrafo se refiere al derecho de asociación al que me he referido antes, y en un segundo párrafo incluye una serie de derechos participativos de los alumnos. Muchos de ellos están ya recogidos, y podríamos hacer un cotejo por el que se demostraría cómo la incluida por los socialistas en su letra b) está recogida más extensamente en la letra d) del artículo 36, en la b) del 37 y la letra a) y en la letra f), número 2, del artículo 26. De manera que tampoco introducen nada verdaderamente apreciable en el texto, como no sea el apartado c). En este sentido nosotros esta-

ríamos dispuestos a votar, y por ello se ha presentado una enmienda de aproximación a la Presidencia de la Cámara por si ésta la quiere admitir a trámite, en la que se propone que se atribuya a los alumnos «el derecho a realizar actividades culturales, deportivas y de fomento del trabajo en equipo y actuación cooperativa», que es, en parte, lo que los socialistas proponen en su enmienda bajo el epígrafe del artículo 17 bis, letra c).

Pasamos con ello a las enmiendas socialistas al artículo 40, ahora 36, en su letra a) y al último apartado de dicho artículo, referente a los derechos de los alumnos.

En cuanto a la innovación que se pretende en el artículo 40, 2, antiguo, y que ha ocupado la atención del portavoz socialista en el último momento, es decir, cuando se pretenden que se especifiquen una serie de derechos sanitarios para los alumnos, nosotros estamos de acuerdo en la conveniencia de que los alumnos cuenten con estas prestaciones sanitarias; lo que no vemos claro es que la enumeración detallada de estas prestaciones sanitarias sean propias de una ley orgánica.

Aquí se incluye —y creo que ya lo hemos discutido sobradamente— la asistencia de los servicios de psicología, pero una prueba de que una enumeración es siempre parcial es que nuestro colega, que nos ha antecedido en el uso de la palabra, ha señalado la conveniencia de la educación sexual.

Nosotros estamos de acuerdo en que esa educación se preste, sobre todo, a través de medios lícitos, y ocurre que no está absolutamente incluida en una asistencia psicológica, puesto que la sexología coincide, parcial pero no totalmente, con la psicología, pero, además, sería útil e interesante dar cursos de educación viaria a los alumnos e iniciar una lucha preventiva en la escuela contra la droga, y nada de eso se especifica aquí. Y, ¿por qué no se especifica? Porque aunque el Grupo Socialista ha querido especificar todos los supuestos de asistencia que sería deseable que el alumno tuviera, es imposible hacerlo en el artículo de una ley. Por eso, nosotros creemos que la letra l) del texto del dictamen es mucho más comprensiva, y lo demás debe ser reglamentariamente desarrollado.

Por último, llegamos, yo creo, a una enmienda del Grupo Socialista, especialmente

interesante por su carga política, que es la propuesta a la letra a) del artículo 40, en la que, después del reconocimiento de la conciencia del alumno y del respeto que merece, se propone añadir: «Ningún alumno podrá ser obligado por el centro a aceptar una determinada ideología».

Yo creo que este extremo, en parte, ya ha sido apuntado, e incluso, debatido, cuando esta mañana —y en muchas otras ocasiones— hemos discutido el ideario y el concepto que este ideario implicaba. Pero, concretamente, con relación a los términos que propone el Partido Socialista, quiero señalar que ideología puede interpretarse, al menos utilizando el diccionario público de la Academia y el diccionario privado del señor Casares, en tres sentidos diferentes. Si ideología es —como dice la primera acepción del diccionario— la rama de las ciencias filosóficas que trata de la clasificación de las ideas, entonces la ideología es una enseñanza más y el alumno debe recibir esa enseñanza si está en los programas.

Si ideología —de acuerdo con su segunda acepción que comparte el diccionario Casares— es el conjunto de ideas o pensamientos principales que caracterizan a una escuela, entonces esto puede ser, en parte, ideario, pero también puede ser, en parte, otra cosa; puede ser la serie de presupuestos o de convicciones que fundamentan una disciplina o un conjunto doctrinal y, en este sentido, los axiomas euclidianos serían una ideología en cuanto conjunto de principios de una escuela de pensamiento que, más o menos, suele coincidir con la geometría que todos estudiamos.

Ahora bien, yo creo que todos sabemos cómo debajo de ideología se esconde una tercera acepción que es aquella según la cual «ideología es cualquier sistema de ideas que aliena al hombre», y, entonces, hay una escuela de pensamiento —que no voy a mencionar porque todos la conocemos— que dice: «Todas las doctrinas, salvo yo, alienan al hombre, y son ideologías porque sólo yo soy el liberador universal de los hombres». Todos sabemos a quién me estoy refiriendo.

Entonces, realmente, introducir en este artículo una disposición en que se impida que se imponga una ideología —en este tercer sen-

tido— nos lleva a concluir en la necesidad de no admitir la enmienda socialista. Porque en el fuero interno del alumno, en la conciencia del alumno, nadie debe mandar y siempre debe ser respetada, aunque es de esperar que la escuela contribuya a formar esta conciencia; si no, no valdría la pena de que la escuela existiera.

En cuanto al fuero externo se refiere —y veo que mi compañero el señor Gómez Llorente se sonríe de manera especialmente ajena e interesada— (Risas), lo que es intolerable, desde nuestro punto de vista —y para la buena marcha de un centro, de cualquier tipo de centro—, es que un alumno debidamente manipulado considere que no se le puede explicar, por ejemplo, la batalla de Lepanto o la Reforma Protestante, si no se considera que la Reforma Protestante es el resultado de factores de producción en la Europa central. Entonces se podría decir que lo que no sea eso aliena la conciencia y, por tanto, es una ideología. Y como creemos que detrás de la expresión «ideología» está ese estricto sentido de que ideología es todo conjunto de ideas que alienan al hombre, y sabemos que hay una muy activa escuela de pensamiento y de acción que condena como alienantes a todas las demás escuelas, salvo a sí misma, es por lo que nos oponemos a esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: En turno de rectificación, tiene la palabra el señor Riera.

El señor RIERA MERCADER: Después de la disquisición que nos ha brindado el señor Herrero Rodríguez de Miñón, quería volver al tema que trata esta enmienda.

Querría preguntarle al señor Herrero —y si quiere que me conteste en el derecho que tiene a la rectificación— sobre lo que ha dicho de que no es posible potenciar, a través de esta ley, el asociacionismo entre los estudiantes, porque, según la ley, solamente a partir de los dieciocho años tienen posibilidad de constituirse en asociación. Si esto es verdad, hay dos posibilidades: una, que se cambien las leyes, porque lo que hace falta es que puedan asociarse todos los jóvenes, ya que a los dieciséis o diecisiete años no se tiene derecho a asociarse, y otra, que como los jóvenes a los dieciséis o diecisiete años

no tienen derecho a asociarse, tienen que esperar a ser mayores de edad, esperar a los dieciocho años, para poder constituirse en asociación.

Estas son las dos posibilidades. Si lo que se tienen que modificar son las leyes, ello coincide con casi todas las organizaciones juveniles, incluidas las juventudes de UCD, que piensan que el actual asociacionismo juvenil es inútil porque son ilegales todas las asociaciones juveniles que existen, pues aunque están toleradas, y negocian y discuten con el Director General de la Juventud, son ilegales según la legislación actual, que sólo permite que se asocien los mayores de dieciocho años.

Por tanto, si lo que pretendemos realmente es potenciar el asociacionismo juvenil, tenemos que modificar los decretos-leyes que dificultan este asociacionismo o decir claramente que un joven de dieciséis o diecisiete años no puede asociarse y tiene que esperar a tener dieciocho años.

Este es el tema que nos preocupa fundamentalmente. Esperamos que el señor Herrero Rodríguez de Miñón en este tiempo haya podido clarificarse y nos pueda explicar cuál es la posición de UCD sobre el derecho de asociacionismo de los jóvenes, que hoy está absolutamente limitado por la legislación vigente, y, como no hay intención por parte del partido del Gobierno de modificar esta realidad, qué va a hacer con esta ley que estamos aprobando ahora para potenciar la participación democrática en los centros. Este es el tema fundamental de nuestra enmienda.

Pensamos que el señor Herrero en su intervención se ha referido a otros temas muy marginales, no al núcleo de lo que creemos que es la cuestión que estamos discutiendo.

El señor PRESIDENTE: Para turno de rectificación, tiene la palabra el señor Fuentes Lázaro.

El señor FUENTES LAZARO: Muy brevemente. No voy a entrar en la rectificación del señor Herrero, pero tengo que reconocer que sus intervenciones —cuando yo esperaba la de otros miembros de la Comisión, y esto se viene prodigando desde hace varios días— me sorprenden y me honran, porque el señor Herrero es —y lo digo con toda cordialidad—

un gran sofista; hace grandes discursos, pero no dice nada absolutamente de fondo. No ha entendido nada de nuestras enmiendas y de nuestros planteamientos. Le aconsejaría que estudiara, en sus ratos libres, un poco de Pedagogía, porque le puede ser bastante útil. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: En turno de rectificación, tiene la palabra el señor Herrero Rodríguez de Miñón.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: Señor Presidente, en cuanto a la interesantísima y central intervención del representante del Grupo Comunista —lejos de mí considerarlo nunca marginal—, quiero decir que el tema que ha planteado, en lo que tiene de serio, se aborda en el Estatuto de Libertades Públicas que todos sabemos está en trance de elaborarse.

Yo quiero señalar que me asombra cada día más el afán intervencionista del Grupo Comunista. Ayer nos daban consejos sobre la manera de manejar nuestro Grupo Parlamentario y hoy nos dan consejos sobre la manera de entendernos con nuestra juventud. Les aseguro que UCD, como Partido mayoritario, sabe perfectamente satisfacer los deseos de su juventud e integrarla en el proceso general del Partido. Por tanto, no se preocupen los señores del Grupo Comunista.

También nos asombra que últimamente, y después de una discordancia que la juventud comunista ha manifestado con el juicio que un «sénior» del Partido mantuvo el otro día en una Comisión de esta Cámara, pretenda ya la reforma de la Constitución. Lo ha dicho claramente. Y las leyes que hay que reformar no serían unos decretos-leyes, sino que habría que reformar la mayoría de edad en la Constitución, lo que la Constitución prevé para los derechos ciudadanos y el artículo 22 de la Constitución. Así es que tomamos nota de que el revisionismo del Partido Comunista llega ya a la Constitución.

En cuanto al Grupo Socialista, como no me ha rectificado, no tengo nada que decir. Es la segunda vez que en esta Cámara se me llama sofista; la otra fue mi amigo el señor Barón, quien me calificó de sofista y yo le respondí —siempre amistosamente— que sofista

es lo que en la famosa comedia «Las Ranas» llamaban a Sócrates. Así es que muchas gracias. (*Risas.*)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones en relación con el artículo 36.

En primer lugar, sometemos a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso respecto de la letra a) de este artículo 36.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 136; en contra, 151; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso respecto de la letra a) del artículo 36.

El Grupo Parlamentario Centrista había presentado una enmienda transaccional, cuya admisión a trámite no había sido sometida todavía por la Presidencia a decisión de la Cámara. Se trata de añadir un apartado, que sería provisionalmente el i'), y que diría: «A realizar actividades culturales, deportivas y de fomento del trabajo en equipo y de la actuación cooperativa».

¿Hay objeción por parte de algún Grupo Parlamentario para la admisión a trámite de esta enmienda? (*Pausa.*) No habiendo objeción por parte de ningún Grupo Parlamentario, queda admitida a trámite, y es la que sometemos a votación a continuación.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 169; en contra, uno; abstenciones, 123.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda del Grupo Parlamentario Centrista, que supone la incorporación de un nuevo apartado, que provisionalmente sería el i'), a este artículo 36.

Votamos seguidamente la enmienda número 157, del Grupo Parlamentario Comunista, que propone la incorporación de un nuevo párrafo a este artículo 36.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 124; en contra, 159; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 157, del Grupo Parlamentario Comunista, respecto del artículo 36.

Votaremos seguidamente la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que propone la incorporación de un número 2 a este artículo 36.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 136; en contra, 157; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, proponiendo la incorporación de un número 2 a este artículo 36.

Votaremos seguidamente el texto del artículo 36 tal como figura en el dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 167; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 36 en los términos que figura en el dictamen de la Comisión, al que se incorporará el apartado añadido en virtud de la enmienda aprobada con anterioridad.

Votamos seguidamente la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en cuanto propone la adición de un nuevo artículo, que sería provisionalmente el 36 bis.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 125; en contra, 156; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso por la que se proponía la incorporación de un nuevo artículo al texto del proyecto.

Artículo 37 La enmienda del Grupo Parlamentario Comunista ha sido ya debatida, por lo que va-

mos a proceder a su votación. Votamos, pues, la enmienda número 158, del Grupo Parlamentario Comunista, respecto del artículo 37.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 127; en contra, 154; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 158, del Grupo Parlamentario Comunista, respecto del artículo 37.

Sometemos a votación seguidamente el texto del artículo 37 conforme al dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 170; en contra, 23; abstenciones, 96.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 37 conforme al dictamen de la Comisión.

Entiendo que también la enmienda al artículo 38 ha quedado ya defendida y ha sido objeto de debate, por lo cual vamos a someterla a votación seguidamente.

Artículo 38

Enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto del artículo 38.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 124; en contra, 157; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto del artículo 38.

Hay mantenida una enmienda del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana respecto de este mismo artículo. Tiene la palabra, para su defensa, la señora Rubies.

La señora RUBIES GARROFE: Sí, señor Presidente, esta enmienda la hubiéramos retirado si hubiera prosperado una enmienda que defendió en su día la representante del Grupo Comunista doña Eulalia Vintró, referente a que se pudiera hacer reglamentariamente la participación de los estamentos que

inciden en los centros escolares que tengan secciones nocturnas.

Al haber sido rechazada esta enmienda, voy a defender la nuestra brevemente, que sólo pide que reglamentariamente se determine de qué forma los alumnos que asisten a las secciones nocturnas —que pueden ser bien de Institutos o bien de Centros de Formación Profesional— puedan participar en los órganos colegiados de estos centros. Y pido a la Cámara el voto afirmativo, dado que en las secciones nocturnas de estos centros los alumnos suelen tener, debido a sus condiciones de trabajo, muchas veces una edad superior a la de los otros alumnos y su incidencia es distinta.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra de esta enmienda? (Pausa.)

Sometemos a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Minoría Catalana al artículo 38, que acaba de ser defendida por la señora Rubiés. (Pausa.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 291; en contra, uno; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda presentada por la Minoría Catalana respecto del artículo 38.

Votamos seguidamente el texto del artículo 38 conforme al dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 171; abstenciones, 120.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 38 conforme al dictamen de la Comisión, e incorporando los términos de la enmienda del Grupo Parlamentario Minoría Catalana, aprobada con anterioridad.

Artículo 39 Enmienda del Grupo Parlamentario Comunista al artículo 39. Tiene la palabra, para su defensa, el señor Riera.

El señor RIERA MERCADER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a

defender brevemente esta enmienda, y desde mi escaño, básicamente por dos razones: la primera es por el propio contenido de la enmienda, cuya argumentación es muy sencilla y clara; y la segunda razón, en atención a las señoras y señores Diputados que van llegando últimamente, porque pienso que su interés no viene motivado tanto por el debate que estamos haciendo como por otras razones. En atención a esto, señores Diputados, vamos a aligerar el debate, porque me parece que no tienen en él un interés especial.

En concreto, la enmienda número 160 dice lo siguiente: «Sustituir el apartado 1 del artículo 39 por la siguiente redacción: En el Reglamento o Estatutos de Régimen Interior se determinarán los derechos y deberes de los alumnos, así como, de manera específica, las faltas de disciplina y sus correlativas sanciones». Creemos que la redacción de este texto es más clara que la del texto que nos propone la Comisión y que tiene, además, menos carácter coercitivo que la propia redacción del dictamen de la Comisión, donde la palabra «disciplina» sale continuamente.

Por tanto, nuestra propuesta sería: Sustitución del número 1 del artículo 39 del dictamen de la Comisión por una enmienda que es más sencilla, y cuyo resultado, en definitiva, es el mismo que nos propone la Comisión.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) El señor Herrero Rodríguez de Miñón tiene la palabra.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: Señor Presidente, Señorías, la única razón que se nos ha dado para que cambiemos el texto es que en él aparece constantemente la palabra «disciplina». En la redacción de la Comisión aparece exactamente dos veces, y en la enmienda que se propone, una. Es una reducción de un 50 por ciento, pero no muy significativa.

También se ha dicho que la redacción que se propone es más clara. Nosotros no lo creemos así. Pensamos que, si acaso, es ligeramente más compleja.

No se nos ha dado mayor argumentación y, por tanto, tampoco tenemos que dar mayor réplica.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. Sometemos a votación, en primer lugar, la enmienda 160, del Grupo Parlamentario Comunista, respecto al número 1 del artículo 39.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 34; en contra, 157; abstenciones, 100; nulos, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto al número 1 del artículo 39.

Sometemos a votación seguidamente el texto del artículo 39 conforme al dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 168; en contra, uno; abstenciones, 121; nulos, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 39 conforme al dictamen de la Comisión.

Llegamos a la Disposición adicional y al debate, por consiguiente, relativo al artículo 20 y a esta misma Disposición.

El Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña tiene una enmienda en la que propone una nueva formulación para el artículo 20 y otra en la que también da una nueva formulación para la Disposición adicional.

Por tanto, por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña, para la defensa de su enmienda, o de sus enmiendas, según estime si puede defenderlas conjunta o separadamente, en virtud de la indicación que hacía ayer, tiene la palabra la señora Mata.

La señora MATA GARRIGA: Muy brevemente, señor Presidente, señoras y señores Diputados, en el momento de empezar la discusión conjunta de este problema de la distribución de competencias entre los distintos poderes públicos, nuestra enmienda tiende a subrayar algo que se especifica en la Constitución, y que en esta ley no queda especificado. (El señor Vicepresidente, Fraile Poujade ocupa la Presidencia.)

Es decir, que hay un conjunto de compe-

tencias que pertenece a los poderes públicos, pero que tiene un denominador común establecido en la Constitución con estas palabras: «Los Poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados». En el artículo 20 simplemente se dice: «La Administración tendrá las siguientes competencias en relación con los centros docentes:

«a) La programación general con participación efectiva de todos los sectores afectados, conforme legalmente se establezca.

»b) La ordenación general de las enseñanzas.

»c) La determinación de los niveles mínimos de rendimiento.

»d) La inspección, la evaluación, etc.».

Nuestra enmienda quiere poner, dentro del paquete que requiere la participación efectiva de los sectores afectados, un conjunto de competencias, sean estas competencias de la Administración Central, sean competencias de la Administración Autonómica, sean competencias de la Administración Local. Nuestra enmienda pone dentro del paquete de las competencias que reclama la participación efectiva de los sectores afectados, en primer lugar, la ordenación general de las enseñanzas, es decir, la distribución en ciclos de las enseñanzas, de la enseñanza elemental o mal llamada actualmente pre-escolar, del futuro tronco único de enseñanzas medias, o no tronco único de enseñanzas medias, de la enseñanza de adultos, de la enseñanza especial, es decir, la ordenación general de las enseñanzas nos parece que es algo que tiene que hacerse con participación de los sectores afectados, que no pueden quedar únicamente en manos de la Administración, de la Administración entendida desde el punto de vista del Ministerio, Consejería, etc.

Un segundo aspecto es la determinación de los niveles mínimos de rendimiento. Estos niveles mínimos de rendimiento son muy distintos según los sectores de población, según los sectores socioeconómicos a los cuales se refieran. Todos nosotros tenemos ejemplos de escuelas, conocimiento de escuelas, que haciendo la misma tarea tienen unos niveles de

Disposición adicional (conjuntamente con el artículo 20)

rendimiento muy distintos, según estén en zona rural, en suburbio, en centro de ciudad, etc. Es para determinar estos niveles mínimos que pensamos que es imprescindible también la participación de los sectores afectados.

Hay un tercer punto que nuestra enmienda pone también como dependiente de esta participación, que es la planificación de creación y supresión de centros mantenidos con fondos públicos.

Ya se ha visto que es imprescindible, por ejemplo, en el comienzo de curso, la participación de los municipios, la participación de las instituciones de barrios locales, etc., que son las que conocen las necesidades concretas de la creación y supresión de centros. Creemos que esto es necesario hacerlo con la participación de todos.

Finalmente, el cuarto aspecto es la determinación, con carácter general, de los índices máximos y mínimos de alumnos por unidad, así como la fijación de la plantilla de profesorado y demás personal de los centros públicos. Creemos que no puede haber una plantilla única por todos los centros ni unos módulos únicos para todos los centros, puesto que otra vez, y según los niveles socio-económicos en los cuales se insertan los centros, tenemos una necesidad de relación alumno-profesor, una necesidad de plantillas de profesorado, de profesores dedicados a la recuperación, de profesores dedicados a las clases especiales, etc.

Por tanto, nuestra enmienda va a que en la letra a) se diga: La programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados, conforme legalmente se establezca en lo que se refiere a:

- 1) Ordenación general de las enseñanzas.
- 2) Determinación de los niveles mínimos de rendimiento.
- 3) Planificación de creación y supresión de los centros mantenidos con fondos públicos.
- 4) La determinación con carácter general de los índices máximo y mínimo de alumnos por unidad, así como la fijación de la plantilla de profesorado y demás personal de los centros públicos.

Para la Administración, sea cual sea esta Administración, la Administración Central, la Administración Autónoma o la Administración Local, quedan unos aspectos que están ya en el texto del artículo 20. Es decir, la inspección, la evaluación, el control y el asesoramiento de los centros en una competencia que no necesita de esta participación de los sectores.

Letra c): la expedición o reconocimiento de títulos que tengan validez en todo el territorio español. Esto está ya puntualmente definido en la Constitución como competencia del Estado; d) la creación y supresión de los centros de la titularidad del Estado mediante real decreto aprobado, etc.; e) la utilización y funcionamiento, la clasificación académica y revocación de la autorización. Estas competencias no necesitan de una participación, son responsabilidad directa, yo diría obligación de la Administración, mientras que todo lo anteriormente dicho requiere de la participación de los sectores afectados.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Muchas gracias, señora Mata. Entiendo que no va a defender —según nota que me ha dejado el Presidente— la otra enmienda sobre nueva formulación de la Disposición adicional.

La señora MATA GARRIGA: No, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene enmienda a la Disposición adicional en la que pide una nueva formulación de la misma. El señor Peces-Barba tiene la palabra para la defensa de dicha enmienda.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestra enmienda tiene un doble sentido: por una parte, sustituir la Disposición adicional, que sólo puedo calificar como imprudente, insólita y anticonstitucional, que está en el texto aprobado por la Comisión. Y, en segundo lugar, tiene la finalidad de reordenar, para salvar los problemas y para garantizar y defender los derechos de las Comunidades autónomas, separando la ley en dos leyes:

una ley orgánica y una ley ordinaria. Por eso, nuestra enmienda dice lo siguiente: Se separan de esta ley y se tramitarán como proyecto de ley ordinaria los artículos 24, 2; 24, 3; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 42, y 43. Y sigue diciendo nuestra enmienda: la ley resultante —tras esa exclusión— tendrá condición de Ley Orgánica.

La enmienda a la Disposición adicional diría lo siguiente:

«Las Comunidades Autónomas que asuman competencias en materia de educación podrán ejercer las facultades señaladas en sus Estatutos o las que les sean transferidas por el procedimiento prescrito en el artículo 150, 2» (está equivocado en el texto que recoge las enmiendas de la Comisión, es el 150, 2, y no el 150, 1) «de la Constitución, siempre dentro del respeto a la misma y a las leyes orgánicas que desarrollen el artículo 27, y con el límite establecido, asimismo, en el artículo 149, 1, 30ª. Y sigue diciendo: «En todo caso y por su propia naturaleza corresponde al Estado: a) la ordenación general del sistema educativo», y aquí añadimos al texto del proyecto «con participación de los sectores afectados», para ajustar ese párrafo a lo establecido en la Constitución. Luego, las letras b) y c) las dejamos tal como están en el dictamen.

¿Cuál es la historia, señor Presidente, de esta enmienda? ¿Cuál es la historia de esta Disposición adicional? La historia de nuestra enmienda es la de intentar superar y reponer esta ley a la vinculación con la Constitución. Y si Sus Señorías se fijan en la separación que nosotros hacemos de proyectos de ley orgánica y de ley ordinaria, ninguno de los artículos que enviamos para que se conviertan en una ley ordinaria separada son ninguno de los que afectan a los problemas que nosotros denunciábamos y a los que más radicalmente nos oponemos. Quiere esto decir que nuestra enmienda tiene una objetividad y una limpieza no partidista; que excluye la posibilidad de que, a través de este cauce de separar ley ordinaria y ley orgánica, nosotros llevásemos a la ley ordinaria aquellos temas que luego, por ejemplo en una Comunidad Autónoma, que puede modificar con sus propias leyes las leyes ordina-

rias del Estado, cambie lo que aquí no nos gusta.

No se trata de eso, y tiene que quedar muy claro. Se trata, simplemente, de impedir el hecho insólito de que la Disposición adicional pretende que, conservando esta ley el carácter de Ley Orgánica, algunos de sus artículos puedan ser modificados por una ley de las Comunidades Autónomas. Para nosotros ése es el quid de la cuestión, y, desde un punto de vista constitucional, con independencia de los problemas educativos gravísimos y provocadores para los socialistas que aquí se han planteado, eso es un problema de Estado, un problema distinto, incluso, del problema que aquí estamos discutiendo, en cuanto al contenido educativo, y es un problema, insisto, en virtud del cual, con nuestra enmienda, nosotros no queremos arreglar llevando a la ley ordinaria los temas que no nos gusten en esta Ley Orgánica, sino que queremos arreglar el desajuste que entre el Gobierno, el Partido de UCD, Coalición Democrática y la Minoría Catalana han organizado en esta Disposición adicional, y que es un gravísimo precedente que, a poca sensibilidad constitucional que tengan Sus Señorías, les tiene que mover la argumentación que voy a intentar hacer.

La Disposición adicional que queremos combatir en su número 3 no fue modificada por Coalición Democrática en Comisión, es decir, que Coalición Democrática ha asumido y ha aceptado esta grave inconstitucionalidad, que tiene consecuencias importantes en otras leyes orgánicas. Naturalmente, la Minoría Catalana es, digamos, la madre de la criatura de esta Disposición adicional y, desde luego, la principal beneficiaria de ella. Ese número 3 dice lo siguiente: «Los artículos 19 y 24» (la parte que a nosotros nos parece más grave), «números 2 y 3; 24, 2 y 3; 25, 3 y 4; 26; 27; 28...», etc. (aquí varios artículos más), «sin perjuicio de su carácter general podrán ser modificados o sustituidos por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus facultades y competencias determinadas por sus respectivos Estatutos de Autonomía».

¿Por qué digo que es la principal beneficiaria la Minoría Catalana? Aparentemente ésta es una enmienda autonomista, pero sólo aparentemente, porque ninguna enmienda an-

ticonstitucional es una enmienda autonomista. Y ustedes, señores de la Minoría Catalana, se están engañando o están engañando a sus bases si piensan que este camino puede prosperar. Voy a intentar demostrarles que no puede prosperar.

Al mismo tiempo, la irresponsabilidad del Gobierno, señores Centristas de Cataluña, está produciendo que, en todo caso, en estos días con esta Disposición adicional ustedes están perdiendo posibilidades de voto en beneficio de la Minoría Catalana. Ese es un hecho que ahí está; porque, en definitiva, esta Disposición adicional no va a afectar en absoluto a los planteamientos de los Socialistas de Cataluña que traen, con la enmienda que defienden y con la enmienda que nosotros también defendemos, la auténtica y real solución autonomista. Ustedes no se están dando cuenta de que con la irresponsabilidad de esta enmienda del Partido del Gobierno y del Gobierno están favoreciendo una enmienda aparentemente autonomista que les perjudica en las elecciones catalanas.

Ese no es mi problema. El señor Herrero Rodríguez de Miñón dirá que demos consejos a otros partidos, pero tengo la obligación de decirles esto para que quede clara que ése es un tema del que probablemente tendrán que arrepentirse a partir del día 20 de este mes.

¿Por qué es anticonstitucional? ¿Por qué? Porque esto es un señuelo, porque esto es un hecho incierto que no puede prosperar, pues no puede prosperar porque una ley orgánica no puede ser modificada por una ley de las Comunidades Autónomas.

La Constitución es muy clara. El artículo 81 de la Constitución, que es el que regula el contenido de las leyes orgánicas, dice: Son leyes orgánicas, etc. Esta es una ley orgánica porque así lo decidió la Comisión y probablemente, si siguen ustedes embarcados en ese camino absolutamente enloquecido que llevan con esta ley, seguirá siendo una ley orgánica.

Pero el artículo 81, 2, de la Constitución dice: «La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas» (y ésta es una ley orgánica) «exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto». Si eso dice el ar-

tículo 81, 2, de la Constitución, ¿cómo es posible que ustedes puedan votar y, sobre todo, algunos distinguidos participantes en la elaboración de la Constitución sean insensibles a esta argumentación? ¿Cómo es posible que eso se pueda producir?

Yo no puedo creer que los intereses de fondo que están defendiendo en esta ley les hagan ser ciegos a esta inconstitucionalidad. Porque nosotros, que defendemos unos intereses distintos de los que ustedes defienden, con la enmienda que aquí estamos haciendo no intentamos proteger nuestros intereses en esta ley. Incluso si tuvieran el acierto, cosa que dudo, de aceptar nuestra enmienda, no estaba peligrando ninguno de los temas de fondo que ustedes están defendiendo, ni ninguno de los intereses que denunciemos estos días. Seguirían incólumes todos en la ley orgánica y tendríamos que combatirlos por las vías que ya hemos anunciado —en el Senado, en el Tribunal Constitucional, etc.— en el caso de que hubiera otras inconstitucionalidades; pero sus intereses seguirán protegidos, los que ustedes defiendan, los de los colegios privados, los de la FERE, aunque aceptasen nuestra enmienda.

Eso demuestra la absoluta limpieza de esta enmienda, que no tiene más propósito que el de enmendar una situación absolutamente inaceptable. Nosotros no ganamos nada con esta enmienda; sólo gana la Constitución, gana el Estado y ganan las Autonomías.

Se podría decir, y se han dicho cosas ingeniosas para contestarme en Comisión, que lo que se está haciendo aquí es utilizar la facultad del artículo 150, 2, de la Constitución para delegar o transferir a las Comunidades Autónomas que tengan competencia en esa materia, incluidas las competencias que tiene el Estado o la que en estos artículos se permite modificar a las Comunidades Autónomas. Así, el señor Herrero Rodríguez de Miñón me contestó en la Comisión que no habíamos visto los socialistas que aquí, en realidad, lo que se estaba era produciendo la delegación que el artículo 150, 2, de la Constitución permite y que dice: «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal...».

Lo que no se nos dijo por el señor Herrero Rodríguez de Miñón es que, naturalmente, esta Disposición adicional no es anti-constitucional porque no hay nada que impida que en una misma ley orgánica se puedan transferir o delegar facultades a las Comunidades Autónomas.

El señor Herrero Rodríguez de Miñón se olvidó absolutamente de leer lo que sigue diciendo el artículo 150, 2, de la Constitución. Primero dice una cosa: «... que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación». Y yo declaro aquí, en nombre del Grupo Socialista, que nosotros creemos que estas competencias son, por su propia naturaleza, susceptibles de ser transferidas o delegadas; no tenemos ninguna objeción a que sean transferidas o delegadas. Pero, lo que se omite, porque ésta es una ley no de transferencia de competencias o de delegación, es el último párrafo del artículo 150, 2, que dice: «La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado». Y es obvio que la brillante inteligencia del señor Herrero Rodríguez de Miñón no pudo impedir que desapareciese este párrafo de la Constitución, como el otro día intentó impedir que desapareciese la no ratificación de unos tratados internacionales que España no había ratificado, aunque luego, naturalmente, la honestidad científica le obligó a decir que yo tenía razón.

Pero, en este caso, ¿cómo se puede afirmar que el artículo 150, 2, de la Constitución es un cauce que se está cumpliendo con esta Disposición adicional? Evidentemente, no es así. Por consiguiente, estamos ante una violación flagrante de la forma de derogación de las leyes orgánicas; forma de derogación flagrante que, además, tiene un enorme peligro para aquellos que quieren, desde posiciones pseudonacionalistas, desestabilizar la Constitución. Porque esta ley no es la única ley orgánica. ¿Y si se dice lo mismo de otras leyes como la de Seguridad Ciudadana o como otras leyes orgánicas, que la propia ley incorporará qué artículo de la misma ley se van a modificar? ¿Ustedes se están dando cuenta en qué avispero se están metiendo por la irresponsabilidad del Go-

bierno, del Partido del Gobierno, de sus colaboradores, en este caso Coalición Democrática y la Minoría Catalana?

Pero es que hay más. Es que introducen ustedes un factor absolutamente falso en cuanto a las posibilidades reales que este camino lleva. Porque las posibilidades reales que este camino lleva son nulas. Quizá les pueda servir a algunos, a la Minoría Catalana para quitar votos a Centristas de Cataluña. Nosotros en el tema electoral estamos enormemente tranquilos con la posición de los socialistas de Cataluña en esta materia; pero ustedes, después del día 21, ¿qué van a hacer cuando intenten modificar una ley orgánica? Porque les van a decir que están apoyados en este artículo o en esta Disposición adicional. Y cuando alguien plantee un recurso y el Tribunal Constitucional utilice lo que establece su artículo 28, ¿es que van ustedes a crear confusión y a decir que prima esta norma sobre el artículo 28 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional? El número 1 de este artículo se refiere al llamado «bloque de constitucionalidad». Y el número 2, que nos afecta directamente, dice: «El Tribunal podrá declarar inconstitucionales por infracción del artículo 81 de la Constitución» —el que estamos aquí tratando— «los preceptos de un Decreto-ley, Decreto legislativo, ley que no haya sido aprobada con el carácter de orgánica o norma legislativa de una Comunidad Autónoma en el caso de que dichas Disposiciones hubieran regulado materias reservadas a ley orgánica o impliquen modificación o derogación de una ley aprobada con tal carácter, cualquiera que sea su contenido».

¿Qué ocurre con esto? ¿Es que va a primar sobre la Constitución, y sobre este mandato clarísimo al Tribunal Constitucional, esta Disposición que es un auténtico engaño, que es una Disposición absolutamente intolerable, que avergüenza a los juristas que se pueda situar aquí esta Disposición? Ya se está produciendo mucha literatura jurídica sobre las leyes orgánicas. Están los coloquios sobre «Las fuentes del Derecho», de la Dirección General de lo Contencioso; están algunas publicaciones de ilustres miembros del Cuerpo de Letrados de esta Cámara; están todos los comentarios a la Constitución;

están algunos libros sobre «Las facultades legislativas de las Comunidades Autónomas», de un distinguido profesor de la Universidad de Barcelona; y ninguno de esos textos, ninguna de esas posibilidades permite justificar lo que existe en este número 3 de la Disposición adicional.

La irresponsabilidad del Gobierno al aceptar esta Disposición adicional, su incapacidad para construir un estado de las autonomías y, sobre todo, el enorme escepticismo que va a producir una norma como ésta cuando se haga imposible el cumplimiento de la misma son responsabilidades que yo quiero que quede muy claro que los socialistas no compartimos. Y quiero que quede muy claro en el «Diario de Sesiones» que los socialistas nos separamos absolutamente de esta aberración jurídica, de este grave daño que produce esta Disposición adicional.

Se podrá decir: es que ustedes están contra las autonomías. Nosotros no queremos que se engañe a las autonomías. Por eso hemos presentado una enmienda que soluciona el tema. Nunca, de acuerdo con el sistema de fuentes, una ley de las Comunidades Autónomas podrá derogar una ley orgánica. Pero una ley ordinaria podrá ser derogada por funcionamiento del principio de competencia y no del de jerarquía. Es decir, que en el ámbito de la Comunidad Autónoma, la ley ordinaria podrá regular la materia propia en temas como el de educación y, además —nosotros lo hemos dicho— podrá ser transferida en una ley orgánica especial de delegación.

Pero ustedes no pueden hacer esto que está aquí, porque es engañar a las autonomías. Y nosotros pensamos esto no solamente para esta ley, porque no nos parece que se pueda estar en coyunturas, que se pueda estar trabajando al día, que cuando a ustedes les sale mal la ley saquen aquí al Vicepresidente del Gobierno a dar explicaciones, como van ustedes a hacer. No hay que trabajar las leyes con perspectiva, y sabe muy bien el Gobierno y el señor Vicepresidente que desde hace seis meses les hemos advertido de los problemas que esta ley plantea. No nos sirve ahora que vengan los bomberos a intentar arreglar las cosas a última hora. (Rumores.)

Insisto, la constitucionalidad y la solución para el futuro de estos temas es la que proponen nuestros compañeros Socialistas de Cataluña, que están realizando de verdad una política autonomista, que están defendiendo de verdad la profundización de la autonomía de Cataluña y la que apoya el Grupo Socialista del Congreso, que es —y esto me parece muy importante volverlo a señalar a Sus Señorías— una enmienda, ésta que aquí presentamos, que no nos beneficia para nada en nuestra tesis de fondo.

A mí me gustaría que se reconociera al menos este planteamiento si, como siempre, van a estar ustedes cerrados al fondo de nuestras enmiendas; que se reconociera que con esta enmienda nosotros no quitamos el ideario del centro, que nosotros no quitamos la financiación, que no quitamos nada de eso, porque para eso hemos combatido y seguiremos combatiendo; que en este caso estamos peleando por defender al Estado de las Autonomías, por defender a la Constitución y por defender a las Comunidades Autónomas, y que no podemos entender que se pueda producir una irresponsabilidad tal apoyada por Grupos que nosotros hemos creído serios en materia constitucional, que modifican otros aspectos, como va a hacer sin duda el señor De la Vallina, como hizo en la Comisión, y que no quieren entrar en este tema que nosotros hemos planteado.

No estoy seguro de que los artículos que nosotros decimos que tienen que ser ley ordinaria sean los únicos que tengan que serlo. A lo mejor hay algún artículo equivocado entre los que nosotros cambiamos, pero para eso está esta Cámara y su sentido de la responsabilidad. Si entre todos convenimos que los artículos que tienen que ser ley ordinaria no son solamente los que nosotros decimos, sino que nos sobra o nos falta alguno, cambiémoslos, pero hagamos las cosas seriamente, porque si no, señor Presidente, señoras y señores Diputados, se estará produciendo grave deterioro a la democracia, que es lo único que limpiamente el Grupo Socialista está intentando defender en esta enmienda. No defendemos nuestras opciones propias, que las hemos defendido como las teníamos que defender. En este momento con nuestra enmienda sólo queremos que prospere, profundice y

arraigue la democracia, la Constitución y las autonomías en España.

Nada más y muchas gracias.

(El señor Herrero Rodríguez de Miñón pide de la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Señor Herrero, supongo que es para consumir turno en contra de estas dos enmiendas. (Asentimiento.)

El señor DE LA VALLINA VELARDE: Nosotros tenemos una enmienda, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): El señor De la Vallina tiene enmiendas que vienen a continuación, pero el señor Herrero pide un turno en contra para estas dos. Por lo tanto, tiene derecho a consumirlo.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: Gracias, señor Presidente, y si he pedido un turno en contra frente a estas dos enmiendas no es con intención, por supuesto, de alargar el debate, cosa que creo está lejos del ánimo de todos, pero sí porque creo que las enmiendas que se presentan y los autores que presentan esas enmiendas son diversos entre sí y, por lo tanto, siguiendo el consejo del maestro de don Gregorio Peces-Barba, Maritain, es necesario distinguir bien para comprender.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Unir.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: Unir es una forma de comprender. (Risas.)

Uniendo a Socialistas de Cataluña con el Partido Socialista Obrero Español, en este caso, yo voy a tratar de ocuparme tanto de la enmienda defendida por la señora Mata, como de la enmienda defendida por don Gregorio Peces-Barba, aunque realmente el tenor de ambas es muy diferente, porque mientras el Grupo Socialista ha planteado una enmienda de índole más bien formal, la portavoz del Grupo Socialistas de Cataluña lo que propone es una diferente concepción material a incluir en el artículo 20.

Yo ya expresé, en Comisión, en nombre de UCD, cuál era nuestra opinión frente a la tesis mantenida allí por la señora Mata, y para no cansar la atención de ustedes voy a tratar de resumir, con la mayor brevedad, mis argumentos al respecto. A señora Mata afirmó entonces, y ha afirmado ahora, la necesidad de incrementar la participación de los sectores interesados en el proceso de programación educativa. Nosotros en este punto, como en todos, pretendemos dar fiel cumplimiento a la Constitución, y por eso en el texto que hemos apoyado del artículo 20 incluimos una estricta aplicación casi literal de las palabras constitucionales al respecto.

Sin embargo, la enmienda de Socialistas de Cataluña amplía extraordinariamente este alcance de la participación de los sectores interesados en la programación educativa. Ello es así porque responde a una visión muy coherente, y a nuestro juicio muy equivocada, de lo que significa la participación democrática.

Se dice que los sectores interesados tienen que participar en cuanto tales sectores interesados para garantizar que la resolución administrativa que se adopte no sea una resolución ciega, una resolución de una autoridad ciega, e incluso creo que circulaba hace tiempo una frase de la que ahora no estoy en situación de acordarme respecto de la máscara ciega de un ciego poder.

Nosotros creemos que cuando la Administración es una Administración dictatorial, cuando la Administración depende de una autoridad política no democrática, las resoluciones de esa Administración pueden tacharse de antidemocráticas. Pero entendemos que cuando la Administración está dirigida por un Gobierno que se apoya en la confianza mayoritaria de una Cámara elegida democráticamente, por sufragio universal, esa Administración no puede ser tachada absolutamente de antidemocrática, porque esa Administración lo que hace es llevar al campo mínimo —y digo mínimo porque de eso viene «administración»— los grandes criterios políticos que se decantan a través de un proceso electoral democrático.

Nosotros no estamos dispuestos a admitir que solamente la participación cuasi corporativa de los sectores interesados en cada caso concreto vaya a dar el sello, el marchamo de

democrática a la resolución administrativa sobre ese caso concreto, porque la verdadera democracia, la democracia tal como se entiende en Occidente —y estoy seguro que en eso coincidimos tanto el Grupo Socialista como los otros Grupos que han apoyado el dictamen de la Comisión— no es una democracia de sectores, no es una democracia corporativa, es una democracia de ciudadanos. Una democracia de ciudadanos que contempla, desde un punto de vista general o generalizable, los problemas que a todos atañen, los problemas de la generalidad. En esta Cámara, son las Cámaras de estas Cortes Generales la instancia democrática máxima, y es el Gobierno responsable ante esta Cámara el único que ejerce el poder legítimamente democrático, legitimidad democrática que alcanza a la Administración dirigida por este Gobierno, y solamente esta Cámara, mediante la exigencia de la responsabilidad al Gobierno, es la instancia capaz de juzgar la democracia y el acierto de cada acción administrativa en cuanto a la Administración del Estado se refiere. Lo demás es importante, pero lo demás, a nuestro juicio, es complementario.

La participación de los sectores interesados en la programación de la enseñanza, en la medida que la reconoce la Constitución, debe ser llevada a cabo, pero siempre será una participación accesorio frente a la fundamental participación democrática, que es la de los ciudadanos votando a través de los diversos cauces y, fundamentalmente, de los Partidos, para elegir unas Cortes democráticas ante las cuales sea responsable el Gobierno que controla la Administración.

Esto y sólo esto es democracia, y esa democracia no se puede pretender desvirtuarla ni diluirla en la participación de los llamados sectores interesados, que, para colmo, en el caso de la educación, son prácticamente todos los ciudadanos, porque los ciudadanos que no son profesores, los ciudadanos que no son alumnos mayores de edad suelen ser ciudadanos que son padres de alumnos, y también como tales están interesados en la enseñanza, pero lo importante, lo fundamental, no lo exclusivo, pero sí lo fundamental, no es su resolución en cuanto padres y en cuanto pro-

fesores, sino su resolución política en cuanto ciudadanos.

Por eso no podemos aceptar la enmienda propuesta por Socialistas de Cataluña.

En cuanto a la enmienda propuesta por don Gregorio Peces-Barba en nombre del Grupo Socialista, yo querría decir, en tono de máxima cordialidad, que se asemeja mucho a un ejercicio académico, e incluso a ello contribuye la insistencia del señor Peces-Barba en su desinterés político en la materia.

Yo estoy seguro de que, además, es una afirmación sincera, con lo cual nos encontramos ante el caso inaudito en la historia parlamentaria, no sólo española, sino comparada, de un Partido que presenta una enmienda, y una enmienda tan seria, a una ley tan importante, solamente por mantener un criterio, como tantos otros criterios discutibles, de pureza dogmática.

Realmente, en apoyo de esta interpretación mía en cuanto al academicismo del señor Peces-Barba, limitaría su remisión bibliográfica, no completa pero sí apreciable, a los diversos comentarios que sobre este punto ha habido.

Sin embargo, yo —y lo digo en honor del señor Peces-Barba y del realismo del Grupo Socialista— me atrevo a dudar un poco de este total desinterés, porque, la verdad sea dicha, en los diversos artículos cuya eliminación de esta ley se propone no estará, por supuesto, el ideario, y no estará, por supuesto, la elección del tipo de educación, pero están concretamente todos los artículos de la numeración antigua, que creo que es la que utiliza el Grupo Socialista, que se refieren a órganos de gobierno, al Consejo de dirección, al Claustro, a la Junta económica, al Consejo de profesores y a la organización y participación de los alumnos.

Y como hemos dedicado a estos temas varias horas, por no decir muchas horas, de debate, yo supongo que, ahora cuando nos propone su eliminación de la ley, algún interés ha de tener el Partido Socialista en estos artículos, porque se ha opuesto con verdadero fervor a ellos esta mañana y durante el día de ayer.

Pero, en fin, volvamos al tema académico, al tema doctrinal que es el que ha planteado el señor Peces-Barba. Voy a resumir también

argumentos que he dado en otras ocasiones ante muchos de ustedes, por cuya reiteración me excuso.

La Disposición adicional que ha aprobado la mayoría de la Comisión, que trata de enmendar ahora el señor Peces-Barba, y yo trato de defender, tiene tres partes. En la primera existe un sentido muy claro. El Estatuto reconoce a la Administración del Estado una serie de competencias, por ejemplo, en el artículo 20, y es preciso salvar las materias o los temas que en materia de enseñanza se atribuyen a Cataluña, Euzkadi y Galicia en virtud de los artículos 15, 16 y 31 de sus respectivos Estatutos.

Por lo tanto, lo que se trata de hacer en el número 1 de la disposición adicional es señalar que las competencias administrativas que en principio, y a tenor del texto de la ley corresponden al Estado, son transferibles, bien por vía estatutaria, como ha sido el caso que ya he mencionado de los Estatutos aprobados, bien por vía paraestatutaria, en aplicación del artículo 150, 2, de la Constitución, a Comunidades Autónomas. Y, en consecuencia, que las competencias que esta ley atribuye a una Administración estatal son total o parcialmente ejercidas, según las transferencias que por vía estatutaria o paraestatutaria se hayan hecho a las Comunidades Autónomas, por las Administraciones de dichas Comunidades Autónomas. De manera que el número 1 de la disposición adicional se refiere a transferencias de competencias y nada más.

El número 2 de la disposición adicional se refiere al techo infranqueable por esas transferencias estatutarias o paraestatutarias de competencias en materia de enseñanza. Es decir, el número 2 se refiere, exclusivamente también, a transferencias de competencias, y marca un techo infranqueable, y parece que en ese punto el Grupo Socialista no tiene argumentos, ni razones ni intenciones de modificación fundamentales, salvo un punto que se refiere a la intervención de los sectores interesados, que creo que ya he respondido, en cuanto a nuestra opinión se refiere, al hacer referencia a la intervención de la señora Mata. Y con ello llegamos al número 3 de la disposición adicional, que es el que ha susci-

tado las iras académicas del señor Peces-Barba.

A mi juicio, la constitucionalidad de este número 3 de la disposición adicional se deduce de dos órganos de consideraciones. Uno pragmático, que es el que creo más interesante, y otro dogmático, que aporto simplemente para la satisfacción del doctor Peces-Barba y algunos otros amigos que aparte de las preocupaciones políticas también tenemos preocupación y sensibilidad de dogmática jurídica.

A primera vista, señoras y señores Diputados, es manifiesto que España no es un Estado Federal donde se superponga a una serie de competencias federales una competencia federal común, como ocurre en los Estados Unidos y como ocurre en Suiza. Es, hoy por hoy, y sin que nos quepa prejuzgar el futuro, un Estado unitario en el que se integran dos —y con Galicia, tres— Comunidades Autónomas, que la doctrina más solvente ha calificado como «Fragmentos de Estado». Y según el proceso autonómico vaya avanzando se incorporarán diversas Comunidades Autónomas con diversos grados de autonomía, según la opción que en dichas Comunidades se tome y según el ritmo establecido constitucionalmente.

Las competencias estatales, en consecuencia, deben tener —y ruego que esto se tome muy en serio, porque es muy serio— un nivel de profundidad menor en el ámbito de estas Comunidades Autónomas, y por razón de su propia autonomía, que en el resto del territorio nacional. Así, en materia de enseñanza, las competencias del Estado alcanzarán en Cataluña, País Vasco y Galicia un determinado «grosor» limitado por el «grosor» de las competencias autonómicas, mientras que en el resto de España las competencias estatales tendrán el «grosor» resultante de la suma de lo que en Cataluña o País Vasco, por ejemplo, son competencias autonómicas más competencias estatales, puesto que toda autonomía supone una distribución mayor o menor de competencias.

Como resulta de todo ello, se plantea en este caso, y probablemente en muchos otros —y yo creo que esta ley, si es aprobada por esta Cámara, va a ser ejemplo para otras muchas Leyes Orgánicas—, la necesidad de op-

tar por una de estas dos soluciones: o bien por una parte se hace una Ley Orgánica aplicable a toda España, como nos propone el Grupo Socialista, y, por otra, se hace una ley ordinaria aplicable a la España no autonómizada, y una serie de normas diferentes para cada Comunidad Autónoma elaboradas por sus respectivos Parlamentos, lo cual es un sistema extraordinariamente complejo, extraordinariamente difícil y que en nada favorece la economía legislativa ni la uniformidad de las normas a regir en todo el territorio español, o bien se sigue el procedimiento que la mayoría de la Comisión ha acordado y que yo estoy defendiendo aquí, esto es, una Ley Orgánica aplicable a todo el territorio español, y que además contenga una serie de disposiciones que si quieren las Comunidades Autónomas pueden modificar estableciendo su propia normativa, y si no quieren pueden aplicar, puesto que desde el comienzo tiene un carácter general.

Esta solución, señoras y señores Diputados, es mucho más económica desde el punto de vista legislativo; es mucho más simple de entender, y, además, favorece sin imponerlo un grado de uniformidad normativa en toda España, que no está mal que hoy tratemos de fomentar en casa cuando precisamente la estamos fomentando a nivel continental o a nivel internacional.

Este es el argumento pragmático para defender la solución que nosotros proponemos, y creo que este argumento es el importante y definitivo, porque si se nos dice que en la dogmática jurídica no cabe esta solución, yo afirmo que la dogmática jurídica deberá cambiar sus categorías, porque quien decide el Derecho no son los profesores, quien decide el Derecho son los legisladores, y si la dogmática jurídica, sobre todo la de los manuales vetustos, tiene categoría limitada, que los manuales se renueven y amplíen sus tablas de categorías para explicar la realidad que nosotros estamos llamados a crear sin someternos necesariamente a las exigencias de Academia alguna.

Por otra parte, a nuestro juicio, este punto de vista pragmático está avalado por una experiencia importante, y está avalado porque esto ya se ha hecho en España, y se ha hecho con el aval del Grupo Socialista, y se ha he-

cho merced al voto favorable del Grupo Socialista, y se ha hecho incluso sobre la base de una enmienda del Grupo Socialista que perfeccionaba un proyecto gubernamental, y se ha hecho concretamente nada menos que en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el artículo 95, 5, en el que se establecen unas sanciones y precisamente se dice que los límites de las cuantías de estas sanciones o multas podrán ser revisados en todo momento mediante ley ordinaria ¿Por qué? Porque ya en ese momento se comprendió que la Ley Orgánica contenía disposiciones cuya importancia material no era tan grande como para reservarlas a la competencia del legislador orgánico, y el propio legislador orgánico hizo en este artículo una transferencia al legislador ordinario. Y entonces nadie, y desde luego menos el Grupo Socialista, protestó contra la procedencia de esta solución

Pero, además, señor Presidente, y con esto voy a terminar, este argumento pragmático, avalado por la conveniencia y avalado por la experiencia, cuenta con cierto fundamento orgánico. Yo me he referido, o, mejor dicho, se ha referido ya el señor Peces-Barba, refutando mi argumentación en Comisión, a que esto, en principio, podría interpretarse como una delegación de competencia a la luz de lo previsto en el artículo 150, número 2 de la Constitución, y en este caso se trataría de una delegación de competencia normativa. Y entonces, se nos pregunta: ¿Y dónde está la ley que establece los medios financieros? Pues no está en ninguna parte, porque no hace falta, porque para el ejercicio de una competencia normativa basta con que exista un Parlamento en Cataluña, un Parlamento en Euskadi, un Parlamento en Galicia; basta que exista ese Parlamento y que se le transfieran las competencias de normar, y como no hace falta ningún recurso financiero suplementario, no existe ninguna ley de dotación financiera al respecto.

Por otra parte, yo creo que además de esto, que puede interpretarse como una delegación, puede también interpretarse como una deslegalización. ¿Qué es una deslegalización? Pues una deslegalización es algo tan simple como lo siguiente: el legislador, mediante una resolución, se reserva un ámbito de materias

para su competencia, y esto es lo que la Constitución hace, en favor de determinada mayoría de esta Cámara, en su artículo 81.

Pues bien, resulta que una deslegalización consiste en un acto contrario de ese mismo legislador, con lo cual abre el campo, en principio reservado a su competencia, a una potestad legislativa distinta. Potestad legislativa distinta que en un caso puede ser, en el caso clásico, la potestad reglamentaria, y en el caso que he señalado de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional fue el legislador ordinario, frente al legislador orgánico, y que en este caso es otra potestad normativa distinta, la de las Comunidades Autónomas, respecto de la competencia legislativa de este Parlamento.

Por lo tanto, yo creo que se trata de aplicar, en este caso incluso, categorías ya conocidas. Lo que pasa es que hay que aplicarlas hábilmente, y la habilidad no es una argucia de los juristas, la habilidad es simplemente una muestra de ser un buen jurista, y como estoy seguro de que el señor Peces-Barba lo es, esto lo comprenderá muy bien.

Por último, se nos ha dicho que esta normativa de las Comunidades Autónomas en estas materias va a ser declarada inconstitucional, en virtud del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Yo no creo que esto tenga que ser así, porque el artículo 28 dice que el Tribunal «podrá» extender su competencia incluso a ese supuesto de violación de una ley orgánica, pero es claro que es una competencia que podrá ejercer en razón de materia, pero no en razón de pura forma, y en razón de materia la puede ejercer sobre los actos de las Comunidades Autónomas, sobre los actos del Estado y sobre muchos actos más. Baste pensar lo que sería una resolución de una Comunidad Autónoma, contemplada o no en esta ley o en otra ley orgánica, que violase derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitución. Es claro que serían declarados, por razón de la materia, inconstitucionales, pero no por razón de la forma, y lo único que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional hace es prever que, como en las leyes orgánicas se va a desarrollar, según el artículo 81 de la Constitución, parte de cuanto se refiere a las liber-

tades y derechos fundamentales, la competencia del Tribunal Constitucional también puede ejercerse en este campo, pero no es un «deberá», es un «podrá» y ha de interpretarse en razón de la materia y no en razón de la forma, lógicamente. Por todo ello, señor Presidente, y con esto termino, porque es perfectamente explicable desde un punto de vista dogmático y, sobre todo, porque es útil para el funcionamiento armónico de nuestro Estado de las Autonomías, esté o no esté previsto por los tratadistas de Derecho Público, es por lo que creo que esta solución debe prosperar y debe rechazarse la enmienda socialista, sin duda hecha con una voluntad de pureza, pero que en mi opinión puede conducir a un sistema mucho más complicado y que multiplique o establezca la necesidad de multiplicar los instrumentos legislativos normativos de diverso autor, y de diversa jerarquía en España.

Nosotros con esta enmienda no tratamos de engañar a nadie; no estamos de ninguna manera limitando el campo autonómico, lo que estamos es facilitando que las Comunidades Autónomas ejerzan sus competencias cuando quieran mediante un camino fácil, y cuando prefieran en ejercicio de su misma autonomía utilicen la normativa común.

Por eso repito que mi opinión es que esta enmienda debe prosperar y que no entrafía los graves peligros ni las graves deficiencias lógicas que el señor Peces-Barba cree ver en ella. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Para un turno de rectificación tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Muchas gracias. Hay un refrán español que dice «quítate de allá, que tiznas, dijo la sartén al cazo». Y realmente es un poco duro que con una intervención de vetusta dogmática jurídica equivocada, como la que mi amigo el señor Herrero Rodríguez de Miñón ha hecho para intentar justificar lo injustificable, haya tenido la osadía de decir que mi intervención es una intervención académica.

El señor Herrero Rodríguez de Miñón ha cubierto con su verbo fácil, con su verbo retórico, la imposibilidad de defender y de con-

testar a lo que yo le he preguntado y a lo que hemos planteado con nuestra enmienda, y es que ustedes pretenden modificar una ley orgánica de una forma que no está en la Constitución.

Yo no me he apoyado en tratadistas; he citado, eso sí, alguna bibliografía, quizá no completa, como ha dicho el señor Herrero Rodríguez de Miñón. Por cierto que la cita que ha hecho de Jean Maritain es equivocada. «Los Grados del Saber» se llama la obra; «Distinguir para unir y no para enseñar», Editorial Desclée de Brouwe, París-Bruselas, 1935.

Pues bien, dejando aparte las remisiones bibliográficas, quisiera indicar que es sumamente grave el planteamiento que aquí se ha hecho. He sentido mucho que algunos distinguidos parlamentarios de esta Cámara, supongo que por pura casualidad, no hayan estado para escuchar la intervención autorizada del señor Herrero Rodríguez de Miñón, y que otros doctos profesores que se sientan enfrente estén silenciosos y no puedan responder a las cosas insólitas que aquí se han manifestado.

El señor Herrero Rodríguez de Miñón me recuerda lo que sucedía en un pueblo de Castilla cuando había una pelea, y es que había un señor que era en aquel caso el tonto del pueblo —no es este el caso, en absoluto, del señor Herrero Rodríguez de Miñón, cuya inteligencia me consta, y cuya amistad me honra— que intervenía en las disputas y decía siempre esta frase: «Es imposible que las cosas sucedan como aquel que dice, porque la gente al cabo y miá tú si...», y entonces la pelea se terminaba. *(Risas.)*

Aquel asunto tenía una solución por aquellas frases incomprensibles. Lo grave es que no estamos en un pequeño pueblo de Castilla, ni ha sido el tonto del pueblo el que ha intervenido, ni es una pelea, sino que ustedes con la fuerza de sus votos van a amparar la tremenda barbaridad que con su verbo fácil ha defendido el señor Herrero Rodríguez de Miñón.

Muchas veces le he recordado al señor Herrero Rodríguez de Miñón que por un bello argumento, por una frase feliz, por una gracia inteligente, como algunas con las que nos ha honrado en estos días, sería capaz de dar la vida, el reino y todo. Y esto es lo que aquí

ha ocurrido. Lo malo es que con su bella argumentación, su retórica fácil, el Reino o el Estado que puede dar no es el suyo, sino que es el de todos; el es Estado de las Autonomías que tratamos de construir, y que Su Señoría, con una intervención como esa, lo ha intentado, repitiendo exactamente el mismo argumento que empleó en Comisión. Yo también prácticamente he dicho las mismas cosas y he argumentado alguna cosa nueva, sobre todo contestando a lo que el señor Herrero Rodríguez de Miñón dijo. El señor Herrero Rodríguez de Miñón ha dicho exactamente las mismas cosas. Tengo que reconocer que su construcción, que esa sí que es de dogmática jurista, que esa sí que es de ciencia del Derecho, que es así que es académica, es ingeniosa y lo reconozco; está bien traída, está bien construida e incluso, a lo mejor, es hasta más económica, pero tiene un defecto: que no es constitucional.

Por esa razón yo creo que esta intervención, que sin duda ha tenido que hacerla por razones de alta política, estoy seguro que, desde el punto de vista de sus profundas convicciones jurídicas, no le puede convencer ni al señor Herrero de Miñón; es realmente algo que efectivamente, como en aquel asunto del pueblo de Castilla, ustedes lo van a ratificar con sus votos, pero ahí está, en el «Diario de Sesiones», la verdad de las cosas, los argumentos, y la historia y los tratadistas, que para algo están, nos juzgarán a todos.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): La señora Mata tiene la palabra para rectificaciones. Lamento que antes la haya visto después que al señor Peces-Barba, por lo que le concedí primero la palabra a él.

La señora MATA GARRIGA: Es igual. Señor Presidente, Señorías, como ya confesé al señor Herrero Rodríguez de Miñón, y como es muy patente, yo no soy jurista; por eso he escuchado con atención su definición de la verdadera democracia, que, según dice él, no es de sectores interesados. Yo quisiera decir al señor Herrero que la Constitución no habla de sectores interesados, sino de sectores afectados, pero, en fin, supongo que esto de la lectura es cuestión de maestros.

Dice él que no es de sectores interesados

(o afectados, dice la Constitución), sino de ciudadanos. Es decir, no es de padres, maestros —esto sería corporativismo—, sino de ciudadanos. Esto y sólo esto, dice el señor Herrero, es democracia; la participación es accesoria. Lo único que yo me pregunto es por qué la participación en este caso figura en el texto constitucional. Es decir, si la participación es accesoria, ¿por qué la pusimos en un artículo de la Constitución como garantía de unos derechos y unas libertades fundamentales?

El señor Herrero Rodríguez de Miñón ha hecho una definición de la participación de los ciudadanos (o sea, además de los padres y los maestros, los demás ciudadanos, es decir, los estériles, los analfabetos, etc.) en esta Cámara, de la cual dimana un Gobierno, este Gobierno que es de UCD. Por lo visto, la democracia es simplemente que mande lo que manda el Gobierno de la mayoría de UCD. Esto es la democracia. Yo pensaba —no soy jurista— que la Constitución, cuando habla de la participación de los sectores afectados está definiendo un cauce democrático necesario en este caso, y que por eso lo pone la Constitución.

A mi entender de maestra, no de jurista, lo pone la Constitución porque hace mucho tiempo que tenemos una Administración que gestiona de una manera burocrática, de una manera impersonal, de una manera tal que en este momento en que estamos tratando de una ley de centros docentes no universitarios, que ya ahora se llaman centros escolares, aún resulta que el Ministerio está discutiendo a nivel de unidades escolares, de prefabricados, etcétera; es decir, la discusión entre el Gobierno, entre el Ministerio y los Ayuntamientos es una discusión de niños a nivel de ganado, de ver cómo se almacenan, etc.

Nosotros, en su día, presentamos un proyecto de Ley de Consejos Escolares, que era la manera reglamentaria de ejercer esta participación. Claro que lo presentó el Grupo Socialista con el conocimiento, la participación y los votos de Socialistas de Cataluña, y creíamos que la manera de reglamentar la participación, en este caso tan importante y tan necesaria, era mucho más jurídica.

Ya veo que en este momento y en esta ley,

donde los juristas se dedican más al chalaneo de votos o de competencias, hablar de la participación sería y jurídicamente no tiene sentido.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): El señor Herrero Rodríguez de Miñón tiene la palabra para rectificaciones.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: Señor Presidente, primero, yo quería decir a la representante de Socialistas de Cataluña que, efectivamente, la Constitución dice muchas cosas, y por decir las la Constitución, mientras las diga, son todas buenas; lo que pasa es que tienen diferente jerarquía. Y de la misma manera que el Tribunal de Cuentas tiene una jerarquía distinta a la de las Cortes Generales, la participación de los sectores interesados en una materia concreta (sectores afectados) tiene un relieve secundario respecto de algo mucho más importante, más relevante, que son las Cortes Generales como representación general y una del pueblo soberano. Eso es así.

¿Y que la democracia es el gobierno de la mayoría? Exactamente es eso: el gobierno de la mayoría, de una mayoría reversible, que se presenta a elecciones periódicas, pero es el gobierno de una mayoría, y si no lo fuera, por falta de gobierno o por carencia de mayoría, sería respectivamente una acracia o la más asombrosa de las demagogias, el secuestro del Poder por la minoría. Por eso, si esta ley la vota la mayoría de las Cortes, es una ley rigurosamente democrática. (El señor PECESBARBA MARTINEZ: Aunque sea anticonstitucional.)

Pasando al doctor Peces-Barba, no voy a rectificar sus citas, sin duda mucho más exactas que las mías. Quiero señalar que yo no sacrificio nada a hacer una gracia ni a hacer una brillantez; sinceramente, no es mi estilo. Me dedico a otras cosas.

Lo que sí intento sacrificar es la pretendida pureza dogmática (que, además, no hay que sacrificarla, pero sí estoy dispuesto a hacerlo) a aquello que es el fin de toda dogmática y de todo derecho, que es el servicio a la cosa pública y al Estado.

El derecho, y menos aún el derecho de los profesores, tiene justificación por sí solo. Sólo lo tiene justificación si sirve a lo que tiene detrás, que es el interés del Estado, y en este caso creo que el interés del Estado exige un proceso lo más económico posible, el más ágil posible, que no extienda ni mengüe lo que las autonomías tienen en virtud de sus propios estatutos, y que facilite el ejercicio de su capacidad autonómica, de acuerdo con esos estatutos. Que después, además, esto se justifique dogmáticamente por una u otra vía es lo secundario. Hay muchas explicaciones, también podríamos decir que se pasan determinadas competencias y normas de un ordenamiento a otro, del ordenamiento estatal a los ordenamientos estatutarios, porque son ordenamientos interconectados, y de uno se pasa a otro por resolución del legislador estatal. Efectivamente, esta es una sugerencia que me ha hecho otro colega de partido, el profesor Meilán.

Pero, insisto: aquí no se trata ni de autorías ni de erudiciones. Se trata, simplemente, de hacer algo que sea útil, que funcione y que funcione en beneficio del Estado de todos, del Estado de los catalanes y de los no catalanes, de los vascos, de los gallegos y de los que todavía no tienen autonomía, de los socialistas y de los que hoy estamos en la mayoría; del Estado de todos. Y a esos supremos intereses del Estado hay que sacrificar todo prurito, incluso el muy laudable prurito intelectual.

El mío, por otra parte, no he tenido que sacrificarlo, y esto me parece una solución intelectualmente muy aceptable.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): El Grupo Socialistas de Cataluña tiene unas enmiendas sobre reordenación del articulado.

Para que los distintos Grupos lo conozcan, diré que la ordenación del debate está hecha de la siguiente manera: las enmiendas ya defendidas, después las enmiendas del Grupo Comunista del Congreso, y a continuación las enmiendas de Coalición Democrática. Así está hecha la ordenación del debate por la Presidencia.

Por otra parte, es que la señora Mata ha dejado de defender una enmienda al artículo 20, y en su lugar hace este turno en defensa

de otra enmienda, además de la que he indicado, que mantiene al artículo 20 y a la Disposición adicional.

Tiene la palabra la señora Mata.

La señora MATA GARRIAGA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Socialistas de Cataluña presentó una enmienda complementaria a la presentada conjuntamente por Socialistas del Congreso y Socialistas de Cataluña, proponiendo la separación del articulado de esta ley en ley orgánica y ley ordinaria, como ha defendido el señor Peces-Barba. Presentamos, además, un modelo, un proyecto de reordenación de los artículos, simplemente por respeto a nuestra idea de ley orgánica, es decir, ley que desarrolla los derechos y libertades fundamentales definidos en la Constitución. (*Varias señoras Diputados conversan entre sí e impiden oír con claridad.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Por favor, tengan respeto a la señora Diputada que está en el uso de la palabra. Silencio en la Cámara, por favor.

Continúe, señora Mata.

La señora MATA GARRIAGA: Nosotros lamentamos enormemente que esta primera ley orgánica que desarrolla el artículo 27, esta primera ley orgánica de educación, sea una ley cuyo texto inicial era anterior a la Constitución; es decir, lamentamos que no sea una ley pensada como auténtico desarrollo de la Constitución, en función del equilibrio que se estableció en la Constitución. Para ello era muy importante tener en cuenta cuáles eran los elementos introducidos en la Constitución, en el consenso constitucional, en lo que afecta a educación.

Lamentamos esto, y por ello presentamos este proyecto de reordenación, que consiste, simplemente, en que esta ley tenga un preámbulo donde se enumeren o se recojan todos aquellos artículos de la Constitución que son desarrollados, en lo que afecta a los derechos y libertades fundamentales de la educación, en esta ley.

En segundo lugar agrupa los artículos en función de: primero, definición de la educación; segundo, definición de los centros, con

una definición que nos falta totalmente, que es la definición de la comunidad educativa, su composición, sus objetivos y funciones. Es aquí donde nosotros hemos puesto un avance de posible definición; tercero, las condiciones de creación y mantenimiento de centros. Es decir, nosotros lamentamos que en esta ley sólo haya la libertad de creación de centros para toda persona, sin poner las condiciones de obligación que los poderes públicos asumen para la creación y funcionamiento de centros públicos. Es decir, lamentamos que esta ley no contemple las condiciones para el nacimiento de un centro público, que es precisamente lo que preocupa a la mayoría de la población cuando necesita escuelas. Nosotros ya hemos presentado a la Cámara un modelo de condiciones de creación.

Pensamos también que tenía que haber en esta ley un artículo con las condiciones del mantenimiento de los centros privados con fondos públicos. Esta ley lo que establece es que los centros privados serán ayudados con fondos públicos, pero no se pone, en absoluto, ninguna condición. Es aquí, creo yo, donde tenía que haber un artículo que lo dijera.

Y, finalmente, agrupamos de mayor a menor, nos parece, los derechos y deberes: derechos y deberes de los alumnos, que para nosotros son el centro de esta ley; derechos y deberes del profesorado, consecuentemente con los derechos y deberes de los alumnos; el derecho de asociación dentro del centro; las funciones y órganos de gestión, es decir, la organización del centro, y, por último, la distribución de competencias entre los poderes públicos.

Esta era nuestra humilde contribución a la reordenación de los artículos de una ley que fue pensada antes de la Constitución, que ha tenido que sufrir cantidad de enmiendas, cantidad de reajustes, pero que la deja totalmente impresentable, nos parece, como desarrollo de la Constitución, es decir, como lo que nosotros creíamos que era una ley orgánica. Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): El Grupo Parlamentario Comunista mantiene al artículo 20 y a la Disposición adicional cuatro enmiendas. Para su defensa tiene la palabra el señor Solé Tura.

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, como ya se ha puesto de relieve, este es un tema efectivamente importante y, diría yo, para situarlo de entrada y para darle toda su amplitud y toda su connotación política, que tengo claramente la sensación de que con el juego de este artículo 20 y de esta Disposición adicional se está generalizando lo que yo llamaría «la vía gallega a la Autonomía». Es decir, se está generalizando un sistema en virtud del cual los poderes reales de las Comunidades Autónomas quedan frecuentemente disminuidos, y se entra en un terreno en el que el centro de delimitación pasa por los Poderes centrales, y esto es para mí la vía gallega.

Nosotros presentamos, efectivamente, varias enmiendas, algunas al artículo 20, y otra, en relación con ellas, a la Disposición adicional, que consiste, pura y simplemente, en suprimirla. ¿Por qué? Porque entendemos que, tal como está, el texto actual es un texto de extrema confusión, que, a nuestro parecer, es el resultado de un equilibrio difícil y comprensible para intentar conciliar los dos apoyos con que cuenta en este momento el partido del Gobierno para sacar adelante esta ley: Coalición Democrática, por un lado, y Minoría Catalana, por otro.

Es evidente que como los intereses de estos dos apoyos no son exactamente coincidentes en todos los puntos, el equilibrio es difícil, y el resultado es una mezcla, una confusión en un artículo fundamental y muy importante, que, además de mantenerse lo que dice la Disposición adicional, no es modificable ni siquiera por las Comunidades Autónomas.

El problema básico que aquí se está discutiendo es cómo se establecen con claridad las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. A nuestro entender, el método aquí adoptado no sólo tiene esa implicación genérica a la que me refería al principio al hablar de «vía gallega», sino que tiene graves deficiencias técnicas: primero, porque el artículo 20 da a la Administración competencias que, desde el punto de vista jurídico no le corresponden estrictamente, pues también pueden corresponder al legislativo; segundo, porque la Disposición adicional intenta dejar algunas cosas a salvo, pero por una vía que, co-

mo demostraré (y también se ha dicho aquí), es rigurosamente contraria a la Constitución.

El resultado global creo que, además de ser jurídicamente confuso, plantea graves problemas políticos en relación con un principio que nuestra Constitución recoge, de una manera clara y explícita, en su artículo 2.º; es decir, el principio de solidaridad entre las nacionalidades y regiones que integran España.

Voy a tratar con algún detalle cada una de estas cuestiones que acabo de enunciar.

Primero, el artículo 20 habla de Administración. Aquí estamos ante un concepto reductivo, porque la Constitución habla de Poderes públicos, y tanto en el artículo 27, números 3, 5, 8 y 9, como en el artículo 149, 1, 30.º, se habla de Poderes públicos, que es, obviamente, un concepto mucho más amplio que el de Administración. Pero es que además el juego del concepto de Administración contemplado en el artículo 20 y el de la Disposición adicional dan a entender que se refieren a la Administración Central, pero sin dejar clara la delimitación entre ésta y las demás Administraciones.

El artículo 149 de la Constitución, número 1, 30.º, al que antes me refería, habla de competencias específicas del Estado, no de la Administración, sino del Estado, y explica cuáles son éstas, y nos dice: «Regulación de las condiciones de obtención, expedición, homologación...», lo cual se puede entender quizá que sean competencias de Administración; pero luego habla de normas básicas, con una finalidad además específica y muy claramente explicitada en los debates que llevaron precisamente a esa fórmula compleja y a esa finalidad específica y también coherente con el artículo 27, y es la que figura al final de este precepto cuando dice: «Para asegurar que los Poderes públicos cumplan las funciones que les impone el artículo 27». Luego el artículo 27 se refiere a toda clase de Poderes públicos y, obviamente, los autonómicos, y si aquí se dice que los Poderes públicos deben cumplir eso, es porque los Poderes públicos de las Comunidades Autónomas tienen competencia específica en el terreno educativo, en los términos del artículo 27.

A mí me parece que está claro lo que dice la Constitución; pero resulta que aquí, en

esta ley, todo eso se confunde. Bajo la denominación general de «Administración» se mezcla lo que es competencia del Estado, según la Constitución, por ejemplo, los apartados e) y f), y lo que puede ser competencia de las Comunidades Autónomas, y no sólo de la administración de las Comunidades Autónomas. La Disposición adicional delimita mal, y si se quiere evitar esta confusión, dígase por lo menos en el artículo 20 algo que nosotros proponemos en nuestra enmienda, es decir, «Poderes públicos».

Por lo demás, nosotros estamos de acuerdo en que alguna de las competencias son propias del Estado, y por eso establecemos dos artículos: uno, donde se habla de las competencias genéricas de los Poderes públicos, en el sentido antes citado, y, otro, donde se habla de las competencias específicas de la Administración del Estado. Entre ellas, nosotros comprendemos que debe existir la señalada con la letra g), pero no sin una especificación que contemple también aquí el papel concreto de las Comunidades Autónomas. Por eso nuestra enmienda propone añadir a este párrafo la expresión: «... salvo en las Comunidades Autónomas que tengan competencia para ello». De este modo nosotros entendemos que el artículo 20 establece una grave distorsión en perjuicio claro de las competencias de las Comunidades Autónomas. Es una manera, a nuestro entender, de mantener estructuras y criterios de centralismo en materia educativa.

¿Resuelve acaso esta cuestión la Disposición adicional? Aquí entramos, evidentemente, en otro terreno. La opinión de nuestro Grupo es que no; que esta Disposición adicional no resuelve el problema, ni muchísimo menos, y eso tanto por razones de contenido como por razones de forma. Por razones de contenido, porque, según la Disposición adicional, en su número 3, son modificables por la Comunidad Autónoma artículos como los siguientes: el 19, que se refiere a la creación, clasificación y funcionamiento de centros experimentales; el 24, números 2 y 3, que se refiere a órganos unipersonales y colegiados; el 25, números 3 y 4, que se refiere a las atribuciones del director, la capacidad para reglamentar competencias de los demás órganos unipersonales, pero ex-

cluye lo relativo al nombramiento del director; el 26, que se refiere a la composición y facultades del Consejo de Dirección; el 27, que se refiere a la composición y competencias del Claustro; el 28, 1 y 1 bis, que se refiere a la composición de la Junta Económica y la participación en ella de un representante del Ayuntamiento; el 29, sobre los Consejos posibles de profesores por cursos, seminarios y departamentos didácticos; el 30, sobre capacidad de reglamentar los tiempos de duración en los cargos; el 31, respecto a las veces en que deberán reunirse los órganos colegiados, y el 37, respecto a los deberes de los alumnos.

Se excluyen, pues, y, en consecuencia, ello significa que las Comunidades Autónomas ya no podrán modificar, ni siquiera entrar en ellas, por imperativo precisamente de esta Disposición adicional, materias tan decisivas como las del artículo 5.º, como es la constitución y financiación de los centros privados como único sistema para posibilitar la acción del centro; el artículo 8.º, donde no se incluye el concepto de centro subvencionado; el artículo 15, sobre las limitaciones a la libertad de cátedra en función del ideario privado; el artículo 18, respecto a las limitaciones a la actividad de las asociaciones de padres; el artículo 20, que se refiere a las competencias concretas de la Administración Central y que va más allá, como acabo de decir, de las facultades que le atribuye la Constitución; el artículo 25, sobre nombramiento de director; el artículo 32, sobre la capacidad de crear y dirigir centros docentes; el artículo 34, sobre la capacidad exclusiva de los titulares privados de establecer idearios y estatutos de régimen interior; el artículo 36, sobre los derechos de los alumnos; el artículo 38, sobre la negativa a la posibilidad de crear asociaciones de alumnos. Todo ello, además, condicionado a lo que digan los Estatutos de los centros establecidos por la dirección.

Ahí tenemos establecida una delimitación que deja perfectamente claro lo que van a hacer y lo que no van a poder hacer las Comunidades Autónomas, de prosperar el texto actual, con el carácter absolutamente reductivo que tiene el juego del artículo 20 con la Disposición adicional.

A nosotros nos parece obvio que con esta delimitación de materias se incumple algo que es fundamental, es decir, el propio contenido de la ley orgánica, porque me parece que en el simple enunciado de las mismas es obvio que hay puntos que se excluyen de la competencia de las Comunidades Autónomas y que se introducen en el concepto de ley orgánica que no entran estrictamente en el concepto de derechos y deberes fundamentales de que habla el artículo 81 de la Constitución. Es decir, los artículos que dan su carácter fundamental y que marcan el contenido y orientación del presente Estatuto quedan por sistema, por definición, absolutamente excluidos de cualquier intervención genérica de las Comunidades Autónomas.

El sistema general que aquí se va a imponer, supongo yo, por una parte mayoritaria hoy de la Cámara (mayoritaria, yo diría, en mayoría precaria, y subrayo eso no por afán de zaherir, sino porque creo que es un problema político importante, sobre todo en estos momentos en que una ley de esas características, tan importante, tan fundamental, va a regir los destinos de un sector tan considerable del país); insisto que lo que se va a imponer por una mayoría precaria es un sistema, digo, que va a configurar de una manera uniforme —y subrayo aquí también el calificativo de «uniforme»— toda la enseñanza, sin atención concreta a las especificidades de las nacionalidades y las regiones.

Aquí quiero recordar lo que ya ocurrió con la exclusión en esta misma ley de toda referencia a las lenguas y culturas regionales y nacionales.

En segundo lugar, está el problema de forma, el problema que plantea el concepto mismo de ley orgánica. El artículo 149, 1, 30.º, de la Constitución, a que antes me refería, habla de normas básicas y no de ley orgánica, y aunque es cierto que los estatutos aprobados hablan de posibles leyes orgánicas y que el concepto de ley orgánica se aplica a los derechos y deberes fundamentales —y una parte de ellos efectivamente entran aquí—, nada puede hacerse contra lo que dice dicho artículo y contra lo que dice el artículo 81 de la Constitución.

La relación entre competencias del Estado y competencias de la Comunidad Autónoma

y ley orgánica creo que queda clara en la Constitución. Lo que es específico del Estado, independientemente de la forma con que se ejerce, es dictar normas básicas para que los Poderes públicos, todos los Poderes públicos —en consecuencia, Administración, Poderes legislativos de las Comunidades Autónomas, etc.—, cumplan las obligaciones del artículo 27. Lo que no permite la Constitución es que, a través de una ley de esas características, el Estado pueda avocar a su propia competencia de ley orgánica lo que dice el artículo 27, reduciendo y limitando el concepto de Poder público.

Yo aquí leería, en todo caso, un fragmento de un dictamen interesante que se ha hecho sobre la materia en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que se escribe lo siguiente:

«Entendemos que la competencia exclusiva estatal en materia educativa solamente se extiende, primero, a la regulación, por la forma jurídica de leyes y reglamentos, de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, campo éste en el que las Comunidades Autónomas sólo pueden asumir competencias ejecutivas de acuerdo con sus respectivos Estatutos; segundo, al desarrollo del derecho y libertad de educación establecido en el artículo 27 de la Constitución, desarrollo que se realizará por la forma de las leyes orgánicas y con pleno sometimiento al régimen jurídico que para ellas establece la Constitución; tercero, al desarrollo del artículo 27 en todo lo referente a la función y servicio público educativo y a los deberes de los Poderes públicos respecto del mismo, que se realizará por la forma jurídica de las normas básicas o ley marco».

¿Es esto lo que se hace aquí? Evidentemente, no. Es que el concepto mismo de ley orgánica, por otro lado, entra en contraposición con el contenido de esta ley. El artículo 81, como antes se ha recordado, habla de derechos fundamentales y libertades públicas. Pues bien, con el juego del artículo 20 y el número 3 de la Disposición adicional entran en el contenido de ley orgánica cuestiones que no tienen que ver estrictamente con este concepto, como es, por ejemplo, el nombramiento del director.

En segundo lugar, la ley orgánica forma un todo. No puede ser a la vez orgánica y no orgánica, y entonces yo me pregunto si, al votarla, estamos votando el todo o estamos votando una parte. Si una parte es orgánica y otra no lo es, me pregunto si no estamos infringiendo el artículo 79 de la Constitución, según el cual sólo caben las mayorías cualificadas expresamente establecidas por la Constitución o por leyes orgánicas, teniendo en cuenta que el Reglamento del Congreso sólo puede establecerlas en el caso específico de la elección de personas y ningún otro.

Entiendo, pues, y me parece claro, casi diría que irrefutable, que esta ley se está votando incorrectamente como ley orgánica y, en consecuencia, caben tres posibilidades:

Primera, hacer dos leyes separadas: una, que sea orgánica, y otra, que no. Cuando se nos pidió nuestra opinión al respecto, así lo dijimos y establecimos con claridad que, en todo caso, sólo se podían contemplar como susceptibles de ley orgánica determinados artículos, que me ahorro aquí exponer.

Segunda posibilidad: votar por mayoría absoluta unos artículos, y otros por mayoría relativa, lo cual me parece ya rizar el rizo.

Tercera posibilidad (que, evidentemente, es compatible, yo diría que es obligatoriamente compatible con las otras dos la que proponemos): delimitar estrictamente lo que es competencia específica de la Administración del Estado en el artículo 20 y dejar abierto todo lo demás mediante el concepto de Poderes públicos. Y aquí es donde creo yo que entro en contraposición concreta con la gran teoría, con la magnífica teoría de los fragmentos de Estado, cuyo principal exponente en este país es el señor Herrero Rodríguez de Miñón, que antes, con un cierto autobombo, ha calificado esta doctrina de la más importante en el país.

La Comunidad Autónoma es la que debe avocar a su propia competencia las materias que le son propias, pues para eso tiene competencia plena, según se dice en los Estatutos de Autonomía. Si no, ¿qué sentido tiene esa competencia plena? Si no hacemos algo de esas tres posibilidades, si no llevamos a cabo una de estas tres posibilidades, la Disposición adicional en su número 3 es riguro-

samente contraria a la Constitución, pues una parte de la presente ley se podrá modificar, como ya se ha dicho, por mayoría distinta a la absoluta, contra lo dispuesto en el artículo 81, 2, de la Constitución.

Se ha dicho aquí que el artículo 95 de la Ley del Tribunal Constitucional ya infringió este precepto. Pues razón de más —ya fue por esta vía, señor Herrero Rodríguez de Miñón— para justificar nuestro voto contrario a esta Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Todo eso, claro está, a menos que en el fondo de dicha Disposición no existan otras intenciones, y yo voy a exponer algunas que se me ocurren de una manera ingenua para saber si realmente se va por aquí o no.

Por ejemplo, teniendo en cuenta que el contenido del artículo 20, desde el punto de vista material, se presta a confusión y cabe preguntarse, en buena lógica, si es o no competencia también del Poder legislativo, ¿significa esta Disposición adicional, en su número 3, que se está introduciendo por esta vía secundaria el concepto de ley orgánica en las Comunidades Autónomas, cosa que no está prevista en los Estatutos de Autonomía ya aprobados? Y, en este caso, ¿no significaría esto infringir lo que establece el artículo 152, 2, de la Constitución, que dice que los estatutos sólo se podrán modificar una vez aprobados mediante referéndum?

Bien, se nos ha dicho aquí el argumento del artículo 150, 2, ¿quién dice que estas materias que aquí se establecen son de titularidad estatal?

Se nos ha dicho el argumento, antes, de que aquí se transfieren materias de titularidad estatal. ¿Quién lo dice? ¿En función de qué precepto constitucional se establece que esas materias son de titularidad estatal? La Constitución no dice nada de eso; en consecuencia, estamos aquí interpretando la Constitución en un sentido enormemente restrictivo, con efectos sobre las posibilidades legislativas y administrativas de las futuras Comunidades Autónomas.

Tercero, cuando aquí se habla del artículo 20 y se habla de Administración, ¿significa eso que se excluyen los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas? Este es, como ya he señalado, un punto de extrema

confusión, pues yo creo que en las materias enumeradas en el artículo 20 hay algunas que, por su propio carácter, son propias del Poder legislativo, y otras que, efectivamente, pueden ser materia reglamentaria. Ahora bien, si hay materias propias del Poder legislativo, y habida cuenta de la forma en que se hace la delimitación en el número 3 de la Disposición adicional, es evidente que se presupone que una parte de estas materias deberán ser desarrolladas por un Poder legislativo.

Entonces, me parece claro que se excluya de esta capacidad a las Comunidades Autónomas futuras que no tengan órgano legislativo. ¿Significa esto que las Comunidades Autónomas que se constituyan por la vía del artículo 143 (que es la opción política que hoy ha tomado el partido del Gobierno con los efectos concretos que ya hemos empezado a ver) no van a tener esta facultad? ¿Se presupone, por el contrario, que esas Comunidades Autónomas sí van a tener órgano legislativo? Y, si es así, ¿en virtud de qué disposición legal, de qué pronunciamiento político, de qué acuerdo?

Lo único que sabemos hoy es que UCD propone reconducir todo el resto de las Autonomías por el artículo 143, y este creo que es el problema de fondo.

Al lado de esas consideraciones jurídicas hay un tema político de base, y es el que antes citaba: el de las relaciones de esas disposiciones son el principio de solidaridad que contempla el artículo 2.º de la Constitución. La disposición adicional, en su número 3, indica rigurosamente que unas Comunidades Autónomas pueden desmarcarse de algunos aspectos de la presente ley, y otras no.

Dado el panorama político actual, dado lo que ha ocurrido ya concretamente en el caso de Andalucía, es evidente que el número 3 de esa disposición adicional se refiere a unas Comunidades Autónomas específicas, y excluye a la mayoría de la población de España. Que esto se haga en nombre de concepciones centralistas se puede entender, aunque no se puede justificar; que se haga en nombre de principios nacionalistas, a mí me parece simplemente escandaloso. Es como decir a los demás pueblos de España, desde Cataluña, desde Euskadi, desde Galicia: «Ahí os

dejamos un regalo que no queremos para nosotros». Literalmente es así, señores.

Jamás podremos dar nuestra aprobación a semejante concepción, precisamente porque somos profunda y auténticamente partidarios de la autonomía plena de Cataluña, de Euskadi y de Galicia y de los demás pueblos; pero, precisamente porque queremos la plena autonomía de Cataluña, de Euskadi y de Galicia, queremos que esta autonomía se construya con solidaridad, con la solidaridad activa de los demás pueblos, empezando hoy por el más agraviado: Andalucía.

El interés profundo, auténticamente nacional de Cataluña, de Euskadi, de Galicia, reside en esta solidaridad activa, no en escastillarse en una posición de privilegio que provoque enfrentamientos entre pueblos.

El problema común es vencer el centralismo y el burocratismo, y no lo venceremos si la constitución de las Autonomías se desvía hacia el enfrentamiento entre pueblos, porque unos obtienen privilegios y los otros encuentran obstáculos burocráticos insalvables. Si se produce esta desviación, el centralismo quedará intacto y no habrá autonomías de verdad para nadie, y cuando digo para nadie, me refiero también, obviamente, a Cataluña, a Euskadi y a Galicia.

Yo entiendo, digo, que, aunque lo repudio total y absolutamente, esto se puede hacer por los que quieren mantener el centralismo o no se atreven a enfrentarse de verdad con él, pero me parece —como antes decía— escandaloso que esto se haga desde posiciones pretendidamente nacionalistas. Tenemos derecho, entonces, a dudar de este nacionalismo y a pensar que detrás de él se esconden, pura y simplemente, posiciones estrechas de clase, y nada más. En todo caso, esta problemática adquiere una dimensión que yo calificaría todavía de más mezquina, cuando se piensa que se comete una infracción de la Constitución y se infringe este principio de solidaridad por la necesidad concreta, puntual y mecánica de asegurar unos votos necesarios a la mayoría absoluta hoy en esta Cámara.

Con estas alturas de miras, señores, por parte de los que hoy ejercen el Poder, las perspectivas de nuestro sistema democrático no son precisamente optimistas.

Frente a todo ello, nosotros afirmamos aquí

—y creo que lo demostramos con el contenido de nuestras enmiendas— que estamos dispuestos a mantener el respeto a la Constitución, a fomentar y fortalecer la solidaridad entre los pueblos y a mantener viva la esperanza de los ciudadanos de toda España en el presente y en el futuro de nuestra democracia.

El señor PRESIDENTE: Para turno en contra de estas enmiendas, por el Grupo Parlamentario Minoría Catalana, tiene la palabra el señor Roca.

El señor ROCA JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la verdad es que nuestro Grupo tenía simplemente previsto explicar el voto en el conjunto de las diversas enmiendas que se han defendido, porque nos parecía que quedaría suficientemente claro; pero algunas de las expresiones formuladas en su defensa por el compañero Solé Tura nos obligan a ello.

En la más prudente intervención de don Gregorio Peces-Barba al defender su enmienda se ha tenido la delicadeza de no introducir un concepto que bueno es, diríamos, para la temática electoral, pero yo, a pesar de la amable invitación de don Gregorio, no voy a introducir aquí, por respeto a la Cámara, la coyuntura electoral, a pesar de que le invite, después de sus amables argumentaciones, a participar en todos los mítines de nuestra campaña electoral.

Pero aquí se acaba de introducir una problemática, que es la de la pretendida insolidaridad, y esto nos obliga a mencionar este tema y a tratarlo; insolidaridad que, por otra parte, se cubre, diríamos, abiertamente con las calificaciones del «pseudo» nacionalismo, del centralismo. Y cuando esto se refiere —yo creo que iba dirigido, por expresas referencias— a nuestro Grupo, entonces, sin ninguna pasión —porque en este título y en este concepto no vamos a recibir lecciones del Grupo Parlamentario Comunista— evidentemente en este tema estamos dispuestos a debatirlo.

En primer término, sorprende que se planteen unas enmiendas al artículo 20, se nos debata todo lo que se ha dicho por don Jordi Solé Tura y, al llevar a la disposición adicio-

nal, lo único que se proponga es la supresión, no una fórmula alternativa.

Estaremos o no conformes —y en la explicación de voto ya lo diremos— en cuanto a la fórmula prevista por el Grupo Parlamentario Socialista, pero una fórmula proponen, no la proponen los compañeros del Grupo Parlamentario Comunista, que se limitan a suprimir este tema de esta disposición adicional, cuando, de hecho, es allí donde se está relacionando toda la temática que se contempla en relación con las Comunidades Autónomas.

Por tanto, yo creo que hay formas de insolidaridad y una de las más claras y elementales es empezar insolidarizándose de las Comunidades Autónomas.

Vamos a ver y vamos a ir por partes. Primero. ¿Qué es el tema que se plantea aquí? Se han dicho muchas cosas y yo creo que algunas de ellas no han encontrado el camino o la vía acertada. Aquí lo que se plantea es que por el encaje de la redistribución de competencias o de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, a través de la figura de los Estatutos —que no se olvide, son leyes orgánicas— debe procederse en esta Ley Orgánica —relativa a unos determinados aspectos de desarrollo del artículo 27 de la Constitución— al encaje entre esta disposición legislativa y la disposición superior en rango, que son los Estatutos. Debe encajarse para adecuar el ordenamiento jurídico a la jerarquización de las normas. Y lo son, en tanto en cuanto —lo digo por los gestos de sorpresa— las leyes orgánicas que aprueban los Estatutos requieren para su modificación procedimientos cualificados que las sitúan, obviamente, como título evidentemente cualificado, a su vez, dentro del ordenamiento jurídico.

Tenemos este encaje en el artículo 27 de la Constitución, se desarrolla y no es petición nuestra. Es petición, por ejemplo, del Grupo Parlamentario Socialistas del Congreso que esta ley tenga la condición de orgánica, como recordará el señor Gómez Llorente. Por tanto, es evidente que ésta es una ley orgánica.

Pero de lo que se trata es de saber en qué medida esta ley orgánica afecta o debe afectar a los ordenamientos estatutarios, en qué contenidos y en qué términos. ¿Cómo se sal-

va esto en la ley que estamos discutiendo? Muy claramente. Por un lado, cuando en el artículo 20 se enumeran unas determinadas competencias, se utiliza el concepto de Administración, no el concepto de poderes públicos. Poderes públicos es un concepto superior al de Administración, más amplio. Comprendería, evidentemente, poderes que no son administrativos y, por tanto, se administrativiza el concepto, y en la medida en que se administrativizan todas estas competencias por esta vía, la Administración es, como, además, consta así acreditado en el «Diario de Sesiones», tanto del Estado o de las Comunidades Autónomas.

En este sentido, la disposición adicional cobra toda su funcionalidad. En tanto en cuanto la Administración, sea la del Estado o la de la Comunidad Autónoma, según corresponda, la mención en la disposición adicional de los Estatutos es lo que permite casar ambos textos, ambos preceptos.

Por tanto, no venga a decirse que aquí hay confusión. En los Estatutos de Autonomía, en los que la Comunidad Autónoma tenga otorgadas las plenas competencias administrativas —y nadie lo va a discutir, ni lo ha discutido hasta la fecha, y, en todo caso, no seremos nosotros quienes lo discutan—, el artículo 20 quiere decir el contenido de estas competencias administrativas.

Por consiguiente, no se diga, porque es falso, que ninguna Comunidad Autónoma de las que tengan sus Estatutos aprobados o de aquellas que por cualquier concepto se incorporen a esta condición de Comunidad Autónoma, precisamente el artículo 20 al administrativizar estas competencias las otorga para todas, y absolutamente para todas.

Segundo punto. Se dice que esto se intenta introducir aquí, es decir, la temática de si el artículo 150 o no el artículo 150. Perdón; esto no procede del artículo 150; procederá, en su caso, respecto de aquellas Comunidades a las que se les quiera dar por esta vía, a las Comunidades que al menos hasta la fecha existen, y deseamos que todas las que se aprueben en el futuro puedan decir lo mismo, y en ello no faltará la colaboración de nuestro Grupo Parlamentario; quede claro una cosa evidente, que estas competencias no se derivan del artículo 150, sino que se

derivan de la distribución convenida en los propios Estatutos de Autonomía, Estatutos que son Ley Orgánica, Estatutos en los que, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, se conviene una distribución de competencias y, por tanto, cuando estamos hablando de Comunidades Autónomas ya no tenemos que mencionar, en este caso, el artículo 150, sino el propio Estatuto de Autonomía.

Tercer punto. No se nos diga tampoco que aquí no se puede modificar y que es anti-constitucional. No es verdad, y no es verdad porque no es lo mismo que una ley orgánica sea modificada sin la previa previsión en la propia ley de los mecanismos a través de los cuales puede ser modificada, que cuando en esta ley se incorporan los mecanismos de modificación. Porque en estos supuestos, esto ya no es modificación, señor Solé Tura, y usted lo sabe bien, sino que es aplicación. Ejemplos los tenemos en lo que antes ha mencionado don Miguel Herrero en la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, artículo 95, número 5, si no recuerdo mal. Pero es que los tenemos en una cosa que usted y yo conocemos bastante bien, que es el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el que, si usted tiene la bondad de recordar o consultar, en su caso, la Disposición adicional sexta, por ejemplo —hay otra referencia, pero le cito una—, se dice concretamente que el contenido de esta disposición, y no es transitoria, es adicional, se podrá modificar mediante tal y tal.

A estos efectos, la modificación de la presente disposición que se tramitará como proyecto de ley no se considerará modificación del Estatuto. Se está desorganizando, diríamos, la naturaleza de la ley, en tanto en cuanto esta ley no será Ley Orgánica, será ley ordinaria, por lo que una propia Ley Orgánica dispone. Por tanto, las modificaciones de una ley orgánica que tengan su razón y su origen en una propia previsión de la Ley Orgánica no son más que aplicaciones y, por tanto, no tienen la naturaleza de la modificación no prevista. Aquí estamos desarrollando, estamos ejecutando, estamos cumpliendo, estamos aplicando una Ley Orgánica, no la estamos, evidentemente, modificando, porque esto no es el sentido del procedimiento.

Y hasta más se puede decir, porque se ha

invocado —no por el señor Solé Tura, pero sí por el señor Peces-Barba, y perdone la intromisión de estos conceptos, en tanto en cuanto la naturaleza de algunas de sus observaciones eran las mismas— el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el mejor de los ejemplos que podían haberse citado, pero, evidentemente «a sensu contrario», porque claro, nos dice que: asimismo el Tribunal podrá declarar..., etc. En el caso que dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a Ley Orgánica y es evidente que lo que se está sacando no son leyes, materias reservadas a Ley Orgánica. Precisamente se sacan, en tanto en cuanto no son materias reservadas a Ley Orgánica y el señor Peces-Barba lo ha manifestado al decir o proponer que sea una Ley Orgánica y una ley ordinaria quiero decir que lo que es por ley ordinaria, según su propuesta, no requería ser tramitada por Ley Orgánica, y no se nos diga ahora que su modificación comportaría una alteración del sistema de la naturaleza constitucional. No es verdad, y además seguiré, no lo he olvidado, señor Peces-Barba, o impliquen modificación o derogación de una ley aprobada. Insisto que aquí ya no es de la modificación ni de la derogación, sino la mera aplicación de una ley que dice: cuando se trate de estos artículos bastará esta disposición legislativa. Pero claro es que entonces lo que ahora nos sorprende es que la solución que se nos proponga sea decir pura y simplemente la supresión, con lo cual nosotros quedaríamos de acuerdo con lo que aquí se dice, de acuerdo con la enmienda de supresión propuesta por el Grupo Parlamentario Comunista, nos quedamos en la siguiente situación. Quizá sí, que se administrativamente determinados conceptos. Quizá sí, que en su intención, la expresión «poderes públicos» querría significar lo mismo que administración en nuestra versión, pero seguro que no se podrían ni modificar ni desarrollar los preceptos que la disposición adicional contempla en las propias Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus propias disposiciones legislativas y entonces, se nos dice: «¡Oh!, es que esto es muy peligroso, porque al margen de estos preceptos hay otros que subsisten y que son muy graves». Señor Solé, lo lamento, cada uno de los preceptos que usted ha mencio-

nado, que no podrán ser modificados por la Comunidad Autónoma, nos guste o no nos guste, no es por imperativo de la disposición adicional, sino que es por imperativo de los Estatutos, en tanto en cuanto allí se remite a la Ley Orgánica que desarrolla el artículo 27. Por tanto, no se nos puede decir que no podrán ser modificados por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, porque esto no es un problema de disposición adicional, es un problema de los propios Estatutos autonómicos. Por tanto, lo que sí nosotros aseguramos, y por eso intervenimos en el turno en contra y no en simple explicación de voto como pretenderemos hacer después, respecto de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, es que esta enmienda es clarísimamente regresiva en el sentido de antiautonómica, gravísimamente centralista y terriblemente insolidaria; insolidaria especialmente para las propias Comunidades Autónomas que tienen en este momento un proceso iniciado, un proceso consumado o un proceso en plenitud. Y sobre todo, señor Solé, yo estoy absolutamente convencido de que superada la fase electoral usted y yo diremos exactamente lo mismo. Nada más.

El señor PRESIDENTE: En turno de rectificación, tiene la palabra el señor Solé.

El señor SOLE TURA: Señor Roca, se ha dejado algo sustancial en su argumentación. Ha olvidado algo fundamental, porque resulta que hay un pequeño detalle, que es el siguiente. Nuestra propuesta de supresión de la Disposición adicional no va sola, sino que va ligada a nuestra propuesta de modificación del artículo 20, y nuestra propuesta de modificación del artículo 20 establece muy claramente dos concepciones, y dice: Corresponde a los Poderes públicos —y, por consiguiente, también a los Poderes públicos de las Comunidades Autónomas— ésta y ésta y esta otra materia. Y se dice luego: Corresponde a la Administración del Estado ésta, ésta y esta otra... En consecuencia, el sistema que aquí se contempla en nuestra enmienda, y por eso es lógico y natural que se suprima la adicional, es establecer un sistema abierto de delimitación de competencias. Por eso hablaba de la vía gallega, porque aquí lo

que estamos haciendo es exactamente el sistema del Estatuto gallego; es decir, haciendo, a través de una ley central, la delimitación de competencias, cuando yo creo que en esta materia —por eso debe tener sentido el concepto de competencia plena del Estatuto de Cataluña, de Euzkadi y del de Galicia— la competencia plena debe significar que el Parlamento o el Poder público correspondiente, en su ámbito de atribución económico, debe tener facultades para empezar a actuar y a legislar en esta materia, y es así como se producirá la delimitación de competencias; es así y ésta es, a nuestro entender, la auténtica visión autonomista del problema, y no la que usted estaba defendiendo.

Quiero decir de todas maneras que, a pesar de todo, nosotros somos los únicos, creo yo, que hemos mantenido hasta el final nuestra posición de que es una Ley Orgánica, pero ése es otro problema.

El artículo 20, si se deja tal como está ahora, además ligado a la Disposición adicional, tiene otra grave connotación que he señalado. El artículo 20 no habla de Poderes públicos, sino de Administración, y eso significa que se excluye a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas allí donde existan de la regulación de las materias que allí contemplan, con lo cual estamos entrando en una vía que yo no sé (porque tampoco quiero entrar en esos temas, ya que coincido en que éste no es un tema electoral), yo no sé quién va a gobernar en Cataluña y, en todo caso, no deseamos que se gobierne por vía de reglamento, como se está gobernando en el Poder central. De dejar el artículo tal como está, la única vía que se deja a las Comunidades Autónomas es la vía de reglamento, porque allí se excluyen los Parlamentos, porque se habla exclusivamente de Administración.

Por lo demás, me decía el señor Roca que esto ya está contemplado en lo que él ha llamado la deslegalización o desorganización (en frase equívoca, pero que entiendo) del Estatuto, cuando en el Estatuto aprobado se hacen referencias a posibles leyes que puedan modificar el propio Estatuto. Pero, señor Roca, esto es elevar a categoría jurídico-interpretativa lo que políticamente fue pura y simplemente una limitación impuesta por el

Poder central, y esto lo sabe usted tan bien como yo o mejor que yo. Además, yo diría que, incluso en estos casos, si se deslegaliza, se hace hasta cierto punto, porque siempre se contempla la intervención del Parlamento —por ejemplo, en el caso de los impuestos—, mientras que aquí se deslegaliza pasando, pura y simplemente, competencias a la Administración, es decir, por la vía reglamentaria.

En fin, por lo demás, decía el señor Roca, es que aunque queramos no podemos, porque hay materias que ya están perfectamente delimitadas, cuando, por ejemplo, en el artículo 15 del Estatuto de Cataluña se dice que se estará a lo que diga la Ley Orgánica. Pero yo estoy contemplando el tema de las materias; he puesto un ejemplo y a este ejemplo no se me ha contestado. Por tanto, ¿está excluida de la competencia de una Comunidad Autónoma toda participación en un tema como el nombramiento de directores? Eso ¿dónde se excluye? ¿En qué Estatuto se excluye? ¿En qué Constitución? ¿En qué artículo de nuestra Constitución? En ninguno. Y, sin embargo, aquí, con el sistema adoptado y con el sistema que seguramente se va a adoptar por la mayoría que se ha formado coyunturalmente en esta Cámara, eso es lo que vamos a hacer.

En consecuencia, señor Roca, yo creo que los argumentos que ha mencionado son argumentos interesantes, pero que no invalidan ninguna, a mi entender, de las observaciones que he hecho y dejan intacto el fondo jurídico y político del problema. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: En turno de rectificación tiene la palabra el señor Roca.

El señor ROCA JUNYENT: Empezaré por el final, señor Presidente. Primer punto, el ejemplo del nombramiento del director, le quiero recordar que, con la lectura del artículo 25 en que se habla de «reglamentariamente», esto se reglamentará por cada una de las Comunidades Autónomas claramente. (Rumores.)

Segundo punto. Todavía queda planteada una cuestión a la que no se ha dado respuesta, y es la que evidentemente sustenta

nuestra posición. En la Disposición adicional, cuando se dice que determinados artículos —una relación extensa de estos artículos—, podrán ser modificados o sustituidos por los respectivos Parlamentos, precisamente lo que se está diciendo es que estas Comunidades autónomas, a través de sus funciones legislativas o reglamentarias, según la propia distribución de competencias que ejerzan, dentro de un Estatuto de régimen interior es donde se determinará quién lo hace.

Lo cierto es que a través de las propuestas que nos formula el Grupo Parlamentario Comunista queda claro, a nuestro entender, que hay toda una serie de materias que por esta vía que proponemos y defendemos nosotros en la Disposición adicional, quedan fuera del contexto de la Ley Orgánica, y, por el contrario, en la propuesta del Grupo Parlamentario Comunista quedan incorporadas y, por tanto, sujetas exclusivamente a los preceptos de esta propia Ley Orgánica.

El señor PRESIDENTE: Voto particular y enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática en relación con el artículo 20 y la Disposición adicional. Tiene la palabra el señor De la Vallina.

El señor DE LA VALLINA VELARDE: Señor Presidente, Señorías, la elaboración de todo texto legal nos enfrenta a un doble orden de problemas.

De una parte, los aspectos sustanciales, la regulación material de la cuestión concreta que se regula —en este caso los centros escolares—, que pretenden desarrollar cuestiones importantes en relación al artículo 27 de Constitución.

Y de otra parte, dejando estas cuestiones sustanciales —y esta Cámara ha tenido ocasión de presenciar largos e importantes debates— la elaboración de todo texto legal supone plantearse una serie de cuestiones orgánicas y jurídico-formales que son precisamente las que en estos momentos nos ocupan.

La ordenación del debate, que con buen criterio ha establecido la Presidencia, nos lleva a contemplar en estos momentos el artículo 20 y la Disposición adicional primera, conjuntamente. Y a estos preceptos, artículo

20 y Disposición adicional primera, Coalición Democrática tiene sendas enmiendas que pretendo ahora defender.

Prescindo, señor Presidente, de la enmienda referente al antiguo artículo 21, que pretendía el mantenimiento del mismo, porque considero que esa enmienda queda subsumida en la que a la Disposición adicional primera mantendré.

La enmienda al artículo 20 tiene una formulación muy clara y concreta. Consiste en volver al proyecto del Gobierno; consiste en que, frente a la redacción con que la Comisión nos la ofrece, la Administración tendrá las siguientes competencias en relación a los centros docentes. Se especifique la Administración de que se trata; se especifique concretamente que se trata de la Administración del Estado.

Hablar simplemente, como hace el precepto, de Administración, sin más, en un texto legal, no sólo es una falta de rigor y precisión (que desde un punto de vista técnico debe evitarse), sino que entiendo que es algo más: es ser conscientemente oscuro e impreciso, y ello, tanto jurídica como políticamente, es grave y rechazable. La oscuridad, la falta de claridad consciente resulta contraproducente y es fuente de tensiones y contenciosos innecesarios en el futuro que, en una materia como la educación y a los niveles a que básicamente se refiere esta ley, creo resulta preocupante.

Debe intentarse delimitar con precisión las competencias de los distintos poderes públicos y, fundamentalmente, la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades locales, que son los poderes públicos, que inicialmente y con carácter propio, pueden tener competencia en el ámbito educativo, según la Constitución.

No digamos verdades a medias; no digamos verdades que confundan, que puedan despertar aspiraciones, luego incumplidas, y de las que, en última instancia, no puede salir nada bueno.

El tema de las Autonomías es ciertamente complejo y técnicamente difícil a la hora de su articulación práctica. Pero si se van dejando las cuestiones sin perfilar en sus aspectos jurídico-formales; si no se aprovechan las oportunidades para clarificar la cuestión,

al final, es muy posible que nadie se aclare y, en vez de enseñar y configurar el estado de las Autonomías, nos encontremos con el caos de las autonomías y, en consecuencia, no logremos un mejor servicio para el ciudadano, un mejor servicio educativo en este caso, una más completa escolarización y una mejor calidad de la enseñanza, que es lo que, en última instancia, debe importarnos por encima de ingenuos o interesados dogmáticos en esta materia.

Por eso, en nuestras enmiendas, por una parte, en el artículo 20, intentamos concretar, precisar, que se trata de la Administración del Estado; y una vez delimitadas de esta forma las competencias de la Administración del Estado en la Disposición adicional primera, delimitar, también con claridad, las competencias que deben corresponder a las Comunidades Autónomas.

La Disposición adicional es, como digo, la que debe clarificar y delimitar el ámbito de las atribuciones, de las competencias que en materia de enseñanza puedan corresponder a las Comunidades Autónomas. Y, como vengo diciendo, en el artículo 20 se propone que diga claramente la «Administración del Estado», porque decir, como hace el precepto, simplemente administración, sin más, no es decir nada; puede ser tanto la Administración pública como la Administración privada, si me apuran. Y, dentro de la Administración pública, sabido es que existen tipos y clases muy distintas. ¿A cuál de esas Administraciones se refiere, aun cuando admitamos que son Administraciones públicas? ¿A todas ellas? De verdad que entiendo que no es admisible dejar el tema en el aire, dejar el tema vaporosamente, como hace esta redacción propuesta por la Comisión que, vuelvo a decir, no estaba en el proyecto inicial del Gobierno.

Por eso nosotros queremos volver a la redacción inicial del proyecto y especificar que se trata de la Administración del Estado, que es, por otra parte, para quien realmente está pensada la redacción de este precepto, como lo prueban expresiones tales como Real Decreto, Consejo de Ministros, Ministerio de Educación, que se utilizan en el contenido de este artículo 20. Así delimitada la competencia de la Administración del Estado en

este artículo 20, mi enmienda afecta exclusivamente a una parte de esa Disposición adicional, el número 1, punto al que inicialmente me voy a circunscribir en esta intervención.

El texto de la Disposición adicional en su número 1, tal como fue aprobado por la Comisión, establece que lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de las competencias reconocidas a las Comunidades Autónomas por sus Estatutos de Autonomía dentro del respeto a la Constitución y a las leyes orgánicas entre las que se encuentra la presente que desarrolla el artículo 20.

Pero ¿cuáles son esas competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas? Esa redacción una vez más, en mi opinión, es ambigua y vaporosa, sobre todo teniendo en cuenta lo que ya indiqué respecto del artículo 20. Creo que no concreta nada, y sólo podría admitirse si ciertamente el tema estuviese claramente resuelto en los Estatutos de Autonomía. Pero tampoco en éstos ello se precisa, pues en los hasta ahora aprobados, a la hora de referirse a las competencias en materia de enseñanza, se vuelve a utilizar una expresión que también se utiliza en esta Disposición adicional. Se vuelve a hablar de «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 y leyes orgánicas que la desarrollen», que es exactamente la misma expresión que se utiliza en esta Disposición adicional.

Con ello nos encontramos con remisiones recíprocas de los Estados de Autonomía a las leyes orgánicas; de esta Ley Orgánica a los Estatutos de Autonomía, que producen un vacío legal que conduce a no saber, jurídicamente, a quién corresponden las competencias.

Mi enmienda —quiero decirlo claramente— no pretende alterar o recortar las competencias que en este campo tengan atribuidas las Comunidades Autónomas. Para las Comunidades Autónomas que constitucionalmente puedan tener competencias en materia de educación, y la tengan asumida por sus Estatutos, se le atribuyen en mi enmienda las competencias que el artículo 20, según la redacción por mí emanada, tienen atribuidas como propias el Estado. Únicamente se señalan los límites constitucionales que la pro-

pia Disposición adicional está configurando en el número 2 de la misma.

Nuestra postura, por tanto, en este tema no pretende, quiero decirlo con claridad, recortar o limitar posibles competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas. Simplemente pretende clarificar, técnicamente, la cuestión sin recortar esas competencias, pues entendemos que no es procedente; no se puede intentar recortar competencias que tengan atribuidas, por sus propios Estatutos y por la Constitución, en este momento.

Nuestra enmienda, por otra parte, distingue los dos tipos de Comunidades Autónomas: Comunidades Autónomas con competencia plena, las del artículo 151; y las Comunidades Autónomas de la vía del 143, que no tendrán competencia plena en materia educativa, que la pueden asumir a través del procedimiento del artículo 150, 2 (la vía de la transferencia o de la delegación); pero entiendo que no es necesario decirlo expresamente, como otras enmiendas lo hacen, porque ésa es una posibilidad que siempre queda abierta en nuestra Constitución al estar establecida en ella.

Hasta aquí mi enmienda que, como antes decía, se circunscribe, única y exclusivamente, al número 1.º de esta Disposición adicional.

Pero ya que estoy en el uso de la palabra debo fijar la posición sobre el número 3, en relación al carácter orgánico de esta ley, y la posible deslegalización que puede suponer el número 3 de la misma. No solamente porque —como digo— me parece que estando en el uso de la palabra debo abordar esta cuestión, sino también por las alusiones concretas que a mi Grupo Parlamentario, y a mí personalmente, ha hecho el señor Peces-Barba en su intervención. Ello, ciertamente, me lleva a intervenir en una polémica de interpretación constitucional sobre el carácter, alcance y sentido de las leyes orgánicas que entiendo van a constituir la «ius iuris» de nuestro ordenamiento jurídico en el futuro, puesto que como veremos estamos iniciando un camino de configuración de un tipo de ley absolutamente desconocido, no solamente en la historia de nuestro ordenamiento jurídico, sino también en la historia de los ordenamientos jurídicos comparados.

creo que está aquí el punto débil de la argumentación del señor Peces-Barba.

El carácter orgánico de una ley no depende de la voluntad de la Cámara. La Cámara no tiene la capacidad de hacer una Ley Orgánica, de convertir en orgánico lo que no es orgánico, mejor dicho. El carácter orgánico procede de la Constitución; no es autónoma la Cámara para hacer orgánico lo que no es constitucionalmente orgánico. Por eso, esta ley no es orgánica porque lo haya decidido la Comisión, señor Peces-Barba. Esta ley debe ser, entiendo, orgánica porque es una exigencia constitucional. Efectivamente, las leyes orgánicas no vienen caracterizadas exclusivamente por un criterio jurídico-formal, por un «quórum» reforzado en su aprobación. Las leyes orgánicas se caracterizan antes por un criterio material que conlleva, ciertamente, unas consecuencias jurídico-formales.

Con el concepto de ley orgánica en nuestra Constitución —y vuelvo a decir que se trata de una categoría jurídica absolutamente nueva— estamos iniciando la configuración de un tipo legal, porque ni siquiera en el Derecho comparado existe esta figura, este concepto de ley orgánica, como se puede ver en el Derecho francés de la Constitución gaulista; no tiene una equiparación plena total, con el concepto de ley orgánica que perfila y dibuja el artículo 81 de nuestra Constitución. Aquí hay un concepto material: «Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución». Pero lo que materialmente no sea orgánico no puede esta Cámara convertirlo, por su propia y simple voluntad, en orgánico. Tiene que estar, dado ese carácter orgánico, en el concepto material que la propia Constitución perfila y establece. Evidentemente, esta ley debe ser orgánica porque desarrolla derechos fundamentales y libertades públicas.

A través de los debates de este proyecto de ley ha quedado claramente puesto de manifiesto —y creo que no puede haber duda para nadie— que se trata del desarrollo del artículo 27, de aspectos conectados con el derecho fundamental a la educación y a la libertad pública y a la ley de enseñanza. Pero

todo el contenido de una ley necesariamente tiene que ser orgánico. Las leyes orgánicas tienen que ser un todo. ¿Dónde está dicho eso, señor Solé Tura?

Yo entiendo que puesto que el concepto de ley orgánica es un concepto material de donde se derivan después unas consecuencias jurídico-formales, ese «quórum» reforzado de la mayoría absoluta de la Cámara y esa aprobación de totalidad o ese voto de totalidad corresponde en estos supuestos de leyes orgánicas; pero no entiendo que todo el texto tenga que ser necesariamente orgánico, que la ley orgánica sea un todo. Esto no está dicho en ningún sitio, y, como digo, estamos iniciando un camino y sería peligroso llegar a esas consecuencias.

Ciertamente no participo de la interpretación de que este número 3 esté deslegalizando —lo he dicho así en la Comisión—, porque la fundamentación de la argumentación que estoy haciendo desvirtúa tal posibilidad. No cabe deslegalizar porque la Cámara no es competente, no tiene la disponibilidad de la materia propia de las leyes orgánicas. Corresponde a la Constitución; es la Constitución la que nos dice lo que materialmente es orgánico y, por lo tanto, no cabe esa deslegalización. Como no cabe la deslegalización en la reserva legislativa que constitucionalmente está establecida. Cabe la deslegalización en la auto-reserva legal, pero no en la reserva constitucional.

Pero si no participo de la tesis de la deslegalización, no puede participar, tampoco, de que ésta sea una fórmula constitucional. Creo que este apartado 3 pone de manifiesto que hay determinados aspectos de esta ley que no tienen carácter constitucionalmente orgánico, y por razones de economía legislativa en un mismo texto se presentan ambas regulaciones. La economía legislativa creo que nos conduce a esta solución que, por otra parte, está apuntando, como decía en alguna de sus intervenciones el señor Herrero Rodríguez de Miñón, a lograr la instrumentación jurídica, el procedimiento normativo que sea realmente útil a los intereses de este momento de la sociedad española.

Argumento del artículo 28 de la Ley del Tribunal Constitucional. Efectivamente, el artículo 28 de la Ley del Tribunal Constitucio-

nal dice que la ley aprobada con tal carácter, cualquiera que sea su contenido, no puede ser modificada por una ley ordinaria. «Cualquiera que sea su contenido». Ciertamente, si la ley no se ha pronunciado expresamente sobre su carácter práctico; es decir, este artículo entiendo que está estableciendo una presunción en favor del carácter orgánico de una ley que se aprueba con tal carácter, que sólo podrá ser destruida mediante decisión del Tribunal Constitucional, que, efectivamente, podrá decir que lo que se ha aprobado con carácter orgánico no tiene tal carácter porque sólo es lo que la Constitución establece y no lo que las Cámaras quieran en cada caso definir. Por eso entiendo que esa regulación o esa previsión que se contiene en el artículo 28 de la Ley del Tribunal Constitucional no destruye el argumento; está estableciendo simplemente una presunción en favor del carácter orgánico de una ley aprobada de tal forma, pero que puede ser destruida, bien por declaración del propio Tribunal, bien, como en este caso, por declaración de la propia ley orgánica que excluye del carácter de tal, de acuerdo con la Constitución, determinadas cuestiones.

Todas estas razones son las que nos llevan, por una parte, a defender las enmiendas al artículo 20 en la forma que ha quedado indicado, matizando que se trata de la Administración del Estado y de la nueva redacción propuesta para el número 1 de la Disposición adicional única. Y la postura de mi Grupo Parlamentario y mi postura personal en relación a este tema de las leyes orgánicas respecto a la cuestión suscitada y las referencias o alusiones del señor Peces-Barba, creo que quedan de esta forma contestadas.

El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno en contra, tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, creo que el debate de esta Disposición adicional es muy esclarecedor, aunque en él se han formulado las cosas más graves y más importantes (desde luego con la absoluta pasividad del Gobierno, que parece que no se ha enterado de la gravedad de lo que aquí está

sucedendo) que se han dicho en esta Cámara desde el 15 de junio.

Si prosperan las tesis, que, en definitiva, se pueden resumir en «el fin justifica los medios», defendidas por el señor Herrero Rodríguez de Miñón y la enmienda del señor De la Vallina, a la que me estoy oponiendo, estaremos destruyendo la entidad de la Constitución. Y parece mentira que sean tan poderosos los intereses que se esconden en esta ley, que sean ustedes capaces de sostener las tesis que están sosteniendo para defender esos intereses. O, quizá, señor De la Vallina, no sean ustedes conscientes de que están ustedes defendiendo otra cosa, que es pura y simplemente el oxígeno que necesita un Gobierno que se tambalea y que se cae. (*Rumores.*)

Probablemente no están ustedes escuchando lo que se ha dicho en estos debates y, a lo mejor, a aquellos que lo sepan o lo entiendan les da igual, pero a nosotros no. A nosotros no nos da igual que se pueda sostener la tesis de la deslegalización o la tesis de que las leyes orgánicas sólo están amparadas en su contenido material.

La enmienda del señor De la Vallina, que solamente modifica la primera parte de este artículo, es absolutamente inaceptable para nosotros, por aceptar el planteamiento del número 3, de esta Disposición adicional.

En definitiva, lo que se ha dicho por unos y por otros es que, como tenemos mayoría suficiente, vamos a hacer lo que nos parezca. Este es el resultado que aquí se ha manifestado. Solamente interesa, por lo que he oído en la defensa del señor De la Vallina y en todo este debate, aprobar esta Ley como sea, pase lo que pase.

El señor Ministro de Educación no ha contestado a las preguntas importantes que se le han hecho; ha estado mudo absolutamente en el debate; ahora, eso sí, aparece un Diputado nuevo en esta Cámara y va corriendo tras él a ver si obtiene su voto para esta Ley Orgánica. (*Aplausos en los escaños de la izquierda.*)

Si ustedes se han fijado, si ustedes han escuchado lo que se ha dicho por el señor De la Vallina, por el señor Roca y por el señor Herrero Rodríguez de Miñón, verán ustedes que la mayoría que apoya esta ley tiene una

interpretación absolutamente distinta de los preceptos. Lo que para el señor Roca supone que reglamentariamente son competencias de las Comunidades Autónomas, para el señor De la Vallina significa que habría que decir Administración del Estado. Lo que para unos supone que son competencias del 151 y del 143, de ambas Comunidades, para otros son solamente de aquellas Comunidades que están por el 151. Es decir, que a aquellos que tienen interés en que se regulen los temas de la educación, a aquellos sectores sociales que están detrás y que creen que esta Ley es la solución, a lo mejor luego les van a decir que vendrá el tío Paco (antes se decía el tío Paco, ahora habrá que decir quizá don Fernando) con la rebaja en la Ley de Financiación de la Educación. Están arreglados, porque fíjense ustedes —y esto es algo que el Grupo Socialista quiere decir a todos los sectores interesados, a lo que nosotros llamamos comunidad escolar— qué débil ley es la que tiene unos apoyos tan confusos y tan absolutamente contradictorios.

Nosotros, señor De la Vallina, no podemos aceptar esa tesis de que el contenido de las leyes orgánicas es un contenido material solamente porque es cierto que lo dice el artículo 81, 1, y no podemos entender cómo se dice que una ley es orgánica o no, acertada o equivocadamente, si no es por la voluntad de la Cámara.

Luego está el Tribunal Constitucional, que nos dirá si nos hemos equivocado o hemos acertado. Pero, ¿cómo se puede explicar esa tesis de que las leyes orgánicas lo son sólo en parte y que en otra parte pueden no serlo? El señor De la Vallina dice, en ese equilibrio que ha intentado mantener para defender su tesis, que no podemos decir que sea orgánica, porque eso lo tiene que decir la Constitución.

¿Cómo podemos decir lo que no es orgánica y cómo podemos decir lo que es orgánica? En definitiva, las leyes orgánicas tienen unos límites materiales, que son los que ha señalado el señor De la Vallina, pero también unos límites formales. Y es absolutamente indestructible y nadie puede superar el argumento que aquí se ha dado de que la votación de totalidad de las leyes orgánicas supone que es votación de totalidad de toda la ley orgá-

nica, porque por eso luego el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice que se podrá declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley que viole una ley orgánica, sea cual sea el contenido de la ley.

Por todas estas razones, nosotros estamos en contra de la enmienda del señor De la Vallina y señalamos la gravedad de lo que aquí se está diciendo. Nos hubiera gustado ciertamente escuchar algunas voces en esta materia. Decía don Nicolás Pérez-Serrano, el inolvidable maestro de todos nosotros, que el silencio también es una opinión. Estoy seguro de que hay silencios que comparten nuestras teorías, aunque desgraciadamente esa mayoría necesaria para oxigenar a un Gobierno que se tambalea les obligue en este momento a callarse.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: En turno de rectificación, tiene la palabra el señor De la Vallina.

El señor DE LA VALLINA VELARDE: Por cortesía parlamentaria, señor Presidente, para contestar al señor Peces-Barba. Lamento que no me haya entendido, o realmente entiendo que no haya querido entenderme, porque la formulación de una ley orgánica, el concepto de ley orgánica que he mantenido en mi intervención no se acomoda ciertamente con el que él me ha atribuido. La pasión, sin duda, que preside estos debates le ha llevado a mantener aquella postura que desde el punto de vista político entiende que le conviene en este punto concreto.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Para rectificación, tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Ya sabe el señor De la Vallina con la cortesía y el interés que siempre le escucho, como a todas las personas de su Grupo Parlamentario, por la honestidad con que exponen sus opiniones, normalmente discrepantes de nosotros. Pero tengo que decir que, en este caso, ciertamente no le he entendido, y, desde luego, no ha destruido esa idea o esa afirmación que aquí hemos hecho

de cómo una ley orgánica puede establecer que una ley de una Comunidad Autónoma vaya a modificar el contenido de una ley orgánica.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. Votaremos en primer lugar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialistas de Catalunya, que propone una nueva formulación para el artículo 20.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 130; en contra, 179; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialistas de Catalunya por la que se proponía una nueva formulación al artículo 20.

Entiende la Presidencia que debemos someter a votación conjunta, porque forman una unidad, las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Comunista; es decir, las dos enmiendas y el voto particular, esto es, nueva formulación al artículo 20, incorporación del artículo 20 bis y supresión de la Disposición adicional. Sometemos, pues, a votación las dos enmiendas y el voto particular del Grupo Parlamentario Comunista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316 a favor, 27; en contra, 183; abstenciones, 106.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas y el voto particular del Grupo Parlamentario Comunista respecto del artículo 20, artículo 20 bis y Disposición adicional.

Someteremos a continuación a votación, entiendo que conjuntamente, la propuesta de separar artículos, según sean de ley orgánica o de ley ordinaria y la fórmula que para la Disposición adicional se da para el caso de que se introduzca esa separación. ¿Está la Cámara de acuerdo? (Asentimiento.)

Sometemos, pues, a votación conjunta las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y del Grupo Parlamentario

Socialistes de Catalunya, puesto que son planteamientos idénticos. (Pausa.)

El señor Solé Tura puede hacer uso de la palabra.

El señor SOLE TURA: Desearíamos una votación en dos fases: una, que contemple hasta la frase «En todo caso...», y otra, a partir de ahí: «En todo caso, y por su propia naturaleza, corresponde al Estado: ...».

El señor PRESIDENTE: Es decir, el Grupo Parlamentario Comunista solicita que la fórmula de Disposición adicional propuesta por los Grupos Socialistas se diferencie para su votación entre el número 1 y el resto. ¿Es así? (Asentimiento.)

Se entiende que el número 1 puede ir acumulado para su votación con la propuesta de separar artículos de ley ordinaria y artículos de ley orgánica. ¿Es así? (Asentimiento.)

Sometemos a votación la propuesta de los Grupos Socialista del Congreso y Socialistes de Catalunya sobre separación y tramitación en proyecto de ley ordinaria de determinados artículos de esta ley y la Disposición adicional que para el caso afirmativo se introduce en cuanto al número 1.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 129; en contra, 176; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda de los Grupos Parlamentarios Socialistas en cuanto a la separación de determinados artículos de este proyecto de ley para su tramitación como proyecto de ley ordinaria, y en cuanto al párrafo primero de la Disposición adicional que a tal respecto proponen.

Me pregunto, señores del Grupo Parlamentario Socialista, si hay que votar el resto de la Disposición adicional, puesto que iba unida a que se aceptara la separación de una parte de la ley como orgánica y otra como ordinaria.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Por comodidad, señor Presidente, no hay que vo-

tarla, aunque en realidad quizá no hubiera habido que votar ninguna de las enmiendas de esta ley. Pero, en fin, ésta, desde luego, que no se vote. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Ha dicho que no se vote. Votaremos seguidamente la enmienda del Grupo Parlamentario Coalición Democrática en cuanto afecta al artículo 20.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 12; en contra, 204; abstenciones, 101.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Coalición Democrática respecto del artículo 20.

Votamos a continuación la enmienda del propio Grupo Parlamentario Coalición Democrática respecto de la Disposición adicional, puesto que ha sido retirada la otra que pretendía establecer el antiguo artículo 21.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 317; a favor, 13; en contra, 300; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Coalición Democrática respecto de la Disposición adicional.

Votaremos a continuación el texto del artículo 20 según el dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 175; en contra, 130; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 20 conforme a los términos del dictamen de la Comisión.

Sometemos a votación seguidamente la Disposición adicional, también conforme al texto del dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 182; en contra, 123; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposición adicional conforme a los términos del dictamen de la Comisión.

Dejamos para el final la votación de la reordenación de los artículos, aun cuando ha sido defendida en este debate.

Votaremos el texto de la Disposición final primera conforme al dictamen de la Comisión, puesto que no hay mantenidas enmiendas respecto del mismo.

Antes, el señor Aguilar desea explicar el voto. Tiene la palabra para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Andalucista. (*Rumores.*)

El señor AGUILAR MORENO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, hemos solicitado esta explicación de voto porque nos corresponde reglamentariamente y también para tranquilizar, entre otras razones, al señor Peces-Barba en cuanto al sentido de nuestro voto, que es el de siempre, nacionalista sí, pero de izquierdas.

Hemos votado, por tanto, en contra de esta disposición adicional en cuanto a los términos del dictamen y a favor de las enmiendas de los Grupos Socialistas de Cataluña y Socialista del Congreso, con abstención respecto de la enmienda comunista. Y hemos votado de esta forma y en contra, como digo, de la disposición propuesta en el dictamen porque, pese a su ropaje autonomista, y una vez más al parecer sin éxito ante la sordera de ciertos oídos, hemos de diferenciar el nacionalismo andaluz de los que se han venido llamando nacionalismos históricos. Y hemos de diferenciarlo aunque esas diferencias en modo alguno podamos aceptar y admitir que sean las que ha dicho en la intervención en defensa del dictamen el señor Herrero, al que agradecemos, no obstante, como andaluces, su sinceridad, y que nos hable —frente a las tesis electorales de su partido durante la campaña del referéndum andaluz—, como lo ha hecho esta noche, de grados de autonomía y del resto de España diferente de Cataluña, País Vasco y Galicia.

Todos sabíamos y sabemos también ahora que eso legalmente era así en la mente de los legisladores constitucionales y que el artículo 151 de nuestra Constitución era un pudibundo artificio para evitar, mediante obs-

táculos insalvables, el acceso de otros pueblos al mismo grado de autonomía. Claro que esos legisladores no previeron, no conocían —estamos acostumbrados a ello, desde luego— el grado de conciencia autonomista del pueblo andaluz, que se ha mostrado superior al de cualquier otro pueblo de España. Desde ese momento se ha perdido toda legitimidad democrática y política para hablar como lo ha hecho el señor Herrero, aferrado a esquemas barridos por la voluntad del pueblo.

Volviendo a nuestra diferenciación entre esos nacionalismos históricos y el nacionalismo andaluz, hemos de decir que, en principio, sí nos parece bien, o nos parecía bien, la reserva de competencias en materia educativa a las Comunidades Autónomas, dentro siempre del marco de la Constitución. Pero frente al hecho de que esas competencias se extiendan tan sólo a temas que en cierto modo se puedan considerar secundarios, en cambio, por lo que respecta a los aspectos nucleares de este Estatuto de Centros que han servido para polarizar el debate, como son los que afectan a la financiación y al ideario del centro educativo, y que no se reserva en modo alguno a las Comunidades Autónomas la capacidad de esa modificación posible hacen en realidad inocuo, desde el punto de vista de nuestro Grupo, esa reserva de competencias, puesto que quedan intocados aquellos aspectos esenciales, incluso los que se derivan del artículo 20 —aprobado ahora— del Estatuto.

Esto es una muestra más de que no son iguales todos los nacionalismos, no por un simple voluntarismo, sino, al contrario, como una inmanencia de las condiciones socioeconómicas del lugar de donde surgen y al que representan. El nacionalismo de los países ricos tiene que servir a sus propios intereses, intereses de clases dominantes que han sabido conducir a su pueblo por los caminos de su autoidentificación, ciertamente. Es lógico, pues, que esas clases no obstaculicen ni necesiten reservarse competencias cuando se favorecen sus propios intereses. Es suficiente seguir la corriente estatal. Incluso eso sirve para disimular esos intereses.

No es ese, como vengo queriendo decir, el caso del nacionalismo andaluz que el Partido Socialista de Andalucía, en teoría y en práctica, se esfuerza en que sea el vehículo de los

intereses de sus clases populares, ya que objetivamente, y por ello históricamente, la oligarquía andaluza ha sabido que sus intereses se defendían siempre dentro del marco estatal. Tácitamente así lo ha venido reconociendo en este prolongado debate el señor Gómez Llorente en especial, que ha subrayado, tan reiterada como delicadamente, que la coincidencia de intereses de la UCD en este tema con las minorías nacionalistas lo era con la minoría vasca y la catalana, es decir, con los representantes de los nacionalismos burgueses de signo distinto al nuestro, al andalucista, que quiere utilizar el nacionalismo como un instrumento liberador de su pueblo y liberador, por tanto, de sus lacras sociales. Por eso no nos sirve un precepto que sólo tiene de autonomista la púrpura, pero no la médula; es decir, no sirve para liberar a nuestro pueblo.

A estas razones, que podríamos llamar de fondo, quisiera añadir otras de carácter técnico constitucional, interviniendo desde un punto de vista muy modesto, desde el punto de vista de abogado, además, abogado de provincias, sobre algo que nos ha impedido también dar nuestro voto afirmativo a esta disposición. La posibilidad de modificación por parte de las Comunidades Autónomas de ciertos aspectos de esta ley no respeta una condición exigida por el mismo precepto constitucional que las autoriza, y que es el ya tan citado artículo 150, 1, que permite, ciertamente, que las Comunidades Autónomas puedan dictar normas dentro de los principios de una ley estatal, pero para ello es preciso que se establezca la modalidad de control legal por las Cortes Generales de esas normas dictadas en uso de esa facultad. Tal forma de control tiene que estar establecida en la propia ley marco, como la llama la Constitución.

En este Estatuto de Centros no aparece ese requisito necesario, sin el cual el precepto autorizante adolece por ello, y por poco que nos guste a nosotros la palabra, de anticonstitucional.

Y no nos han convencido los argumentos del señor Roca porque para nosotros Comunidad Autónoma, tanto en el artículo 150, 1, como en todos los artículos de la Constitución, es Comunidad Autónoma, es decir, las que existan, sea cual sea el rango de los Es-

tatutos de la Comunidad Autónoma ya existente.

Por estas razones de fondo y de forma hemos votado en el sentido que lo hemos hecho. Muchas gracias.

Disposición final primera

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la Disposición final primera, conforme al dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 205; en contra, uno; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposición final primera conforme al texto del dictamen de la Comisión.

Disposición final segunda

El Grupo Parlamentario Comunista mantiene una enmienda a la Disposición final segunda. Tiene la palabra la señora Vintró.

La señor VINTRO CASTELLS: Señor Presidente, a pesar de contar, me parece que por primera vez, con la máxima audiencia, voy a hacer obsequio a la audiencia precisamente dando por defendidas esas enmiendas y pidiendo solamente su votación.

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto de la Disposición final segunda.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 25; en contra, 192; abstenciones, 102.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto de la Disposición final segunda.

Disposición final segunda que sometemos a continuación a votación, de conformidad con el texto del dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 187; en contra, 28; abstenciones, 104.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposición final segunda conforme al texto del dictamen de la Comisión.

El Grupo Parlamentario Comunista mantiene un voto particular a las Disposiciones transitorias, junto con dos enmiendas. La Presidencia entiende que esas dos enmiendas son modificaciones respecto del voto particular. Proponen incorporar la transitorias, según la Ponencia, con las modificaciones de las dos enmiendas. Por consiguiente, podemos someterlas a votación conjuntamente.

Sometemos a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Comunista, junto con las enmiendas que modifican ese voto particular, números 162 y 164.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 128; en contra, 181; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados el voto particular y las enmiendas del Grupo Parlamentario Comunista respecto de las Disposiciones transitorias.

Sometemos a votación seguidamente el texto de las cuatro Disposiciones transitorias según el dictamen de la Comisión.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, nosotros queremos que la Disposición transitoria cuarta se vote por separado, si es posible.

La señora VINTRO CASTELLS: Desearíamos que la primera se votara también separadamente.

El señor PRESIDENTE: Votamos, pues, en primer lugar, a la vista de las peticiones de los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y Comunista, la Disposición transitoria primera.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 188; en contra, 23; abstenciones, 106.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposición transitoria primera, conforme al dictamen de la Comisión.

Disposiciones transitorias primera, segunda y tercera

A continuación votamos conjuntamente las Disposiciones transitorias segunda y tercera. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 190; abstenciones, 128.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las Disposiciones transitorias segunda y tercera, conforme al dictamen de la Comisión.

Disposición
transitoria
cuarta

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑON: Señor Presidente, Unión de Centro Democrático estaría en condiciones de formular a la Disposición transitoria cuarta (que es la que queda por votar), si la Cámara la admitiera a trámite, una enmienda de aproximación a otras posturas que se han mantenido, sustituyendo la frase «en tanto éste subsista» por «o enseñanzas que lo sustituyan». Si la Cámara lo admite a trámite, se podría proceder a su votación. Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay objeción por parte de algún Grupo Parlamentario? (Pausa.)

El señor PECES-BARBA: No hay objeción ninguna por nuestra parte.

El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la enmienda admitida a trámite del Grupo Parlamentario Centrista, consistente en sustituir la frase «en tanto éste subsista» por «o enseñanzas que lo sustituyan».

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 187; abstenciones, 131.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Centrista en los términos que han sido leídos.

Votamos, finalmente, la Disposición transitoria cuarta, conforme al dictamen de la Comisión. Entiendo que llevará incorporada la enmienda que ha sido aprobada con anterioridad.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 191; abstenciones, 126.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposición transitoria cuarta, conforme al dictamen de la Comisión, con la modificación resultante de la incorporación de la enmienda aprobada con anterioridad.

Finalmente vamos a someter a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña, que propone una reordenación del articulado de este proyecto de ley. La señora Mata tiene la palabra.

La señora MATA GARRIGA: Señor Presidente, entiendo que no ha lugar a esta votación, puesto que esta reordenación hubiera sido consecuencia de haberse aprobado la enmienda anterior.

El señor PRESIDENTE: Retirada, pues, a efectos de votación esta enmienda, quedan concluidas las votaciones respecto del proyecto de ley de Estatuto de Centros Escolares.

La señora VINTRO CASTELLS: Señor Presidente, hay una transitoria quinta, que pide como enmienda nuestro Grupo, que no ha sido sometida a votación.

El señor PRESIDENTE: La podemos someter a votación, si quiere, separada. Había entendido la Presidencia que, como se correspondía con una Disposición transitoria quinta de las transitorias de la Ponencia, que el voto particular había pretendido incorporar, había quedado votada juntamente con esas transitorias de restablecimiento del texto de la Ponencia. Pero si desea votación separada, porque puede incorporarse, la podemos incorporar. (Risas.) (La señora Vintro hace signos negativos.) Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente segundo del Gobierno. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO (Abril Martorell): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, no

se preocupen Sus Señorías, que soy consciente de la inoportunidad del tiempo y de lo tarde que es, pero intentaré ser coherente con ese grado de consciencia.

Mi compañero de Educación y el Gobierno, en su conjunto, han considerado conveniente que se intervenga —y que intervenga yo concretamente— para intentar clarificar algunos aspectos de orden presupuestario y económico que se han involucrado en el debate, bien es verdad que estos días anteriores. Tal vez estas seis horas que llevamos de debate, en términos de clarificación autonómica, hayan podido hacer perder la perspectiva de algunos puntos que, de alguna manera, han estado presentes en la opinión pública estos días anteriores.

Mis compañeros de Unión de Centro Democrático también lo han pedido, y han entendido que era conveniente. ¿Y esto por qué? Simplemente porque el tema había salido de las agujas, había salido de las vías donde, lógicamente, estaba inscrito y, naturalmente, hay que volverlo a poner en el carril. (Risas.)

El tema era de libertad de enseñanza, y el tema, desde alguna perspectiva y sin ninguna animosidad, supongo, se ha intentado meter en temas económicos, en un debate de pobres y de ricos, y por eso le ha parecido conveniente a mis compañeros de UCD, a mi compañero el Ministro de Educación, al Gobierno y a todos, en definitiva, que clarifiquemos un poco este tipo de cuestiones.

No tenga miedo, señor Peces-Barba, porque lo voy a hacer de puntillas, ya que soy consciente de mi escasez de formación jurídica, y soy consciente de mi carácter de ingeniero agrónomo y, por tanto, de ingeniero constitucional algunas veces. (Risas.) Probablemente no voy a decir nada nuevo, sino a intentar volver a clarificar algo que las dotes oratorias de alguno de los Diputados del Grupo más importante de la oposición —que no le valieron, por cierto, en el mes de septiembre pasado— han podido inducir a la confusión. (Rumores.) Y no descarto, la buena fe de algunos Diputados del Partido Socialista.

Aquí se ha dicho, y esto es grave —lo digo sin ninguna crítica, porque puede confundir al pueblo— que se producirá un demérito de la enseñanza pública. Y eso, señor Guerra, no es

verdad, aunque tenga el texto. No es cierto, y no es cierto desde la trayectoria anterior —me refiero al trienio 1977-80—, y no es cierto tampoco desde la perspectiva de futuro. Yo quiero decir aquí que no se puede ni se debe hacer un proceso de intenciones.

El pueblo tiene derecho a saber, y el pueblo tiene derecho a que se le hable con el lenguaje de los hechos y con el lenguaje de la verdad. El lenguaje de la verdad indica simple, lisa y llanamente que se ha realizado un esfuerzo, un importantísimo esfuerzo en el trienio 77-80, y eso es lo que dice el lenguaje de los hechos, y eso es lo que dice la verdad. Y ese lenguaje indica que en el sistema educativo, en su conjunto, el sector público ha pasado de ser el 84,7 al 87,1. Les quiero indicar, para alguno que no caiga en esta cosa de los números, que el máximo es el 100. (Risas.) Por tanto, los límites con que se trabaja son escasos. (Aplausos.) Por tanto, el sistema educativo no estatal ha disminuido su participación presupuestaria del 15,3 al 12,9 por ciento en ese período de tiempo. Eso es cierto, y eso es así. Y si se excluye la Universidad y si nos reducimos al ámbito estricto que actualmente es competencia del Ministerio de Educación, el sector no estatal ha pasado en este tiempo de 17,5 al 15,3 por ciento de participación presupuestaria.

Quiero significar también que el conjunto de alumnos de la enseñanza no estatal son el 40 por ciento del total de este año. El lenguaje de los hechos indica —y me refiero al lenguaje de los hechos, porque una cosa es predicar y otra dar trigo— (Risas) que según el informe del Ministerio de Educación, en ese período de tiempo se han creado 1.270.000 plazas de Educación General Básica, de las cuales 500.000 han ido a sustituir plazas en malas condiciones. El lenguaje de los hechos indica también que existe una cierta holgura en el nivel de Educación General Básica, con un sobrante, en términos generales, superior a las 500.000 plazas, aunque ciertamente algunas de ellas han quedado ociosas, obsoletas, y ciertamente, también, existen todavía disfunciones y lagunas a lo largo y ancho de nuestro país. Las dos cosas son ciertas simultáneamente.

El lenguaje de los hechos indica que en Madrid (y convendría verificarlo porque des-

de alguna perspectiva se emiten dudas sobre el particular), en Madrid capital, por ejemplo, sin ignorar la probable o segura existencia de disfunciones en el nivel de EGB, existe una holgura de unos 26.000 puestos y una densidad de ocupación de 33 niños por aula en el sector público. Puede, pues, afirmarse con claridad que no es exacto, que no es cierto que no haya habido un importante esfuerzo en el período 77-80, y puede afirmarse con claridad que no es cierto que, en términos generales, sin ignorar las disfunciones y las lagunas, no exista una alternativa de enseñanza en el sector público. Y aunque somos conscientes de que falta mucho por hacer hay unos «ratios» que indican algo de la calidad, y uno de ellos es, por ejemplo, esta densidad de 33 niños por aula que creo que debe ser un motivo de satisfacción colectiva de esta Cámara.

Creo, también, que en octubre de 1977, cuando se suscribieron los Pactos de la Moncloa, se hizo un importante esfuerzo de construcción de puestos escolares, que creo que debe ser motivo de satisfacción para toda la Cámara y, desde luego, lo es para el Gobierno, que ha abordado responsablemente el esfuerzo presupuestario que conllevaba. Pero quiero decir también que todos esos puestos y toda esa construcción, según los informes del Ministerio de Educación, según lo que a mí me insisten constantemente, tiene también un notable grado de calidad.

Y como uno también tiene que coger fuerzas de las cosas que se hacen, tengo el propósito de el martes que viene, día 18, visitar alguna de las escuelas que hemos hecho como consecuencia de los Pactos de la Moncloa. *(El señor Vicepresidente ocupa la Presidencia.)* Invitaré a algunos de los Diputados de la oposición y a algunos de los otros Diputados de la mayoría para que, si es verdad esa calidad, disfrutemos de esa calidad, y si no es verdad esa calidad de las construcciones recientes, urjamos a todos los responsables para que mejoren la situación.

Conviene que pasemos al lenguaje de los hechos y que cojamos la fuerza de donde está y la fuerza está en el pueblo y la fuerza está en la realidad de las cosas.

Hay otro punto, desde la vertiente económica y presupuestaria, que quisiera significar.

En el campo de los gastos de personal, el presupuesto de lo que es el actual Ministerio de Educación ha pasado, en términos de presupuesto inicial, de 102.000 millones a 215.000 millones en el período 1977/1980. Este incremento ha sido, pues, del 110 por ciento, y, en términos constantes de pesetas del mismo año, el incremento ha sido del 34 por ciento, para una economía que en ese transcurso de tiempo exclusivamente subirá el 6 ó 7 por ciento. Es decir, que también desde esta perspectiva, aunque falta mucho por hacer, no se puede decir que no se haya realizado un esfuerzo importante en este período de tiempo y, por tanto, desde esa realidad avalada por unos hechos, cabe preguntarse también qué pasará.

Bueno, en el discurso de investidura que da origen a este Gobierno y que el desasosiego de algunos de los miembros de la Cámara probablemente impidió escuchar con total nitidez, en el discurso de investidura del primer Presidente constitucional de nuestro país, se decía muy claramente que el Gobierno seguirá en la política de escolarización general en condiciones que garanticen una enseñanza de calidad. Pretendo explicar aquí y ahora, siquiera sea muy brevemente, que esta no es una oferta demagógica, y que este anuncio del Gobierno, que ha sido reiterado en ocasiones y desde hace tiempo, en mi opinión como encargado de asuntos económicos no es una utopía, sino que esto es posible y asumible para el país en un plazo razonable de tiempo. Ese esfuerzo cabe y ese esfuerzo es coherente, además de por múltiples razones de orden social y político, por razones también de carácter económico.

Para nosotros, la primera prioridad sigue siendo la Educación General Básica, en la que todavía existen en nuestro país, según informe del Ministerio de Educación, 300.000 puestos escolares en malas condiciones. Esa situación comporta gastos de inversión simplemente, y no comporta paralelamente gastos corrientes, y, por tanto, es absolutamente coherente con las directrices generales establecidas. Es un esfuerzo, por tanto, coherente, sin lagunas, que puede y debe ser asumido en un plazo breve, y es un esfuerzo que quiero decir a la Cámara que cabe en términos presupuestarios, y que es coherente, ade-

más, con la política económica (que tampoco haría ninguna falta que fuera coherente, porque es una necesidad absolutamente elemental). Pues bien, como cabe en términos presupuestarios y como es absolutamente coherente, el Gobierno tiene el firme propósito de que para octubre de 1982 ese esfuerzo esté terminado.

También antes de este debate, en el propio discurso inicial que da origen a este Gobierno y en el propio programa económico del Gobierno, y en una discusión hace unas cuantas semanas en este Parlamento, se estableció muy claramente una prioridad de Formación Profesional. Faltan por escolarizar en ese tramo, hasta los dieciséis años, un 25 a un 30 por ciento de niños, y nosotros tenemos el propósito de que se garantice la enseñanza generalizada hasta los dieciséis años, de modo que entre un 90 y un 95 por ciento de los niños hasta esa edad en 1984 estén escolarizados y poniendo un énfasis especial y un esfuerzo adicional en Formación Profesional; pero, naturalmente, esos esfuerzos y esas prioridades supondrán, como decía el otro día, algunas estrecheces.

El Gobierno, pues, seguirá, como ya anunció a finales de marzo de 1979, con la política de escolarización generalizada hasta los dieciséis años, y desde los cuatro en condiciones que garanticen, además, una enseñanza de calidad.

Y hay que decir muy claramente, porque el pueblo tiene derecho a saberlo y conocerlo, que ese objetivo, cuando se cumpla, nos situará en vanguardia de la Europa democrática (me gusta más lo de Europa democrática que Europa occidental). (Risas.)

Existen fundamentos para entender que ese compromiso es asumible y posible. Y voy a permitirme dar algunos datos, aunque probablemente se reiteran, pero conviene con claridad ponerlos encima de la mesa.

En el curso 1978-79, es decir, hace ya casi dos años, y según los datos del Ministerio, la situación era la siguiente: entre los cuatro y cinco años faltaban por escolarizar solamente 260.000 niños, equivalentes al 20 por ciento del total. En el tramo superior hasta los dieciséis años faltaban por escolarizar unos 360.000 ó 380.000 niños, equivalentes a un 28 por ciento de chicos de esa edad.

Ha transcurrido algún tiempo desde esos datos y probablemente en el curso 1979-80 el nivel de escolarización en ambos estratos sea mayor, en un caso, del 80 por ciento y, en el otro, del 72 por ciento. Y esta debe ser la situación en este momento.

Nosotros pensamos que no es una utopía, que de aquí a tres o cuatro años, el 90-95 por ciento de los niños en edad preescolar estén escolarizados. Y pensamos que es asumible que el 90-95 por ciento de los chicos hasta los dieciséis años estén también escolarizados en un plazo de tres o cuatro años. Y este esfuerzo de escolarización que equivale, en definitiva, a un 5 ó 6 por ciento del total de alumnos actual en ese nivel educativo, que es del orden de ocho millones, podrá ser asumido, entendemos, desde una perspectiva económica y podrá efectuarse en un plazo de unos cuatro años. Pero hay que establecer unas prioridades y, por tanto, para hacer este esfuerzo habrá que comprimir otro tipo de cuestiones y concretamente habrá que comprimir déficits en la medida que no respondan al esfuerzo que necesita hacer el país en todos los planos.

Y quiero decir también que este objetivo, que es ambicioso, es posible y es realizable además, si se observa, por otra parte, que las curvas de natalidad se han estabilizado con un ligero descenso; que el «boom» ya ha pasado, de alguna manera, en cuanto a la demanda en estos tramos y, por otra parte, que existe una notable ralentización de los flujos migratorios internos, con lo cual los desajustes que se producían anteriormente se ralentizan en su velocidad actual.

En definitiva, yo quisiera decir que el realismo avala los objetivos políticos, que desde hace mucho tiempo, desde el propio discurso de investidura, se han señalado en el programa económico, se han fijado en el programa del Ministro de Educación específico, los compromisos reiterados y anteriores a esta situación del Gobierno de realizar esfuerzos especialmente en el sector público para conseguir de modo generalizado la escolarización entre los cuatro y dieciséis años; es un objetivo difícil, pero realista.

Y es en este contexto de realidad y compromiso donde yo creo que hay que situar, con sosiego, serenidad y moderación el plan-

teamiento de esta ley, que yo, que algunas veces me he intentado poner como observador ajeno a la ley, me ha traído recuerdos del siglo XIX francamente poco gratos.

Pero yo creo que es en este contexto donde hay que situar el planteamiento de esta ley y especialmente los esquemas de financiación que han sido objeto de un debate importante los días anteriores, pero que es claro que serán objeto de una consideración separada.

Pero hay que entender que el debate no se puede simplificar en términos de ricos y pobres. Cuando de un total de algo más de cinco millones de niños de EGB existen algo más de dos millones de niños que reciben enseñanza no estatal, no se puede hacer una simplificación oligárquica, no se puede manipular tanto el concepto.

Evidentemente, hay que reconocer que la enseñanza no estatal supone el 40 por ciento de los niños que reciben Enseñanza General Básica y que no es una oferta razonable decir a éstos que la alternativa es el cierre o el refugio neto y claro de un clasismo. No se puede negar esa evidencia ni esa realidad y, por tanto, a mí no me parece positivo que se abarate el debate y se simplifique.

Es claro que dos millones de niños, algo más de dos millones de niños, sociológicamente se extienden a niveles populares y está extendido en capas muy amplias de la sociedad. Eso es una realidad y una evidencia y, por tanto, no se puede abaratar el debate. Debe ser conocido que en este momento aproximadamente algo más de un millón y medio de niños están subvencionados en los esquemas y que no están subvencionados algo menos del medio millón. Probablemente esa cifra inferior al medio millón, en la que ya estamos en un contexto del 8 por ciento del nivel de EGB, probablemente se corresponde ya algo más con una estructura social determinada, y habrá que convenir que con los errores y disfunciones que en el orden práctico naturalmente se cometen, probablemente el orden de magnitud de los números no está significando más que un acierto. Pero es esta situación y esta realidad sociológica la que debe ser conocida en opinión del Gobierno y discutida con motivo de la Ley de Financiación (que ya está en esta Cámara),

que los criterios aparezcan claros y que nosotros estamos con ellos.

En este proyecto de ley hay que recordar, porque se ha puesto en cuestión con motivo del debate de estos días, que se expresan muy claramente, de un modo simplificado y sin ningún ánimo polémico, aspectos tan elementales como los siguientes:

No se financia a todos sino sólo a los que manden a sus hijos a colegios que tengan como tope máximo de coste el de los colegios públicos. Se dice también: si van a colegios más caros, no recibirán ningún tipo de ayuda pública y, por tanto, a mí no me parece positivo que se abarate y se simplifique el debate llevándolo al término de la caricatura, produciendo daños en una ley que, en definitiva, si trata de algo, trata de la libertad. Y en ese proyecto de ley que ya obra en la Cámara se establece también, y conviene recordarlo, una cosa muy simple: que hay un requisito para tener ayudas por parte de los centros y es que éstos no tengan ánimo de lucro.

Yo recomiendo que se discuta esa ley, que se discuta analizando la estructura social y sociológica que está debajo, con sosiego y moderación, y que no se discuta rememorando en algunas ocasiones —aunque sé que todo esto es disculpable— el siglo XIX.

El Gobierno, también en concordancia con el reconocimiento constitucional que se hace del derecho a la educación, es consciente de la función educadora del Estado y, por tanto, que quede claro que ha existido, como se demuestra por el lenguaje de los hechos, y que seguirá existiendo el propósito de prioridad para el sector público, pero que no hay que confundir nunca, nunca, la prioridad con una dinámica que genere una exclusividad del sector público; todos los monopolios son malos, hasta el propio del sector público.

Que queden claras, pues, estas cuestiones. Que quede claro también —y se ha dicho en el discurso de investidura del primer Presidente constitucional de este país, y se ha dicho en el programa del Ministro de Educación— que ha existido y existe un programa ambicioso y difícil; pero quede claro que desde la perspectiva económica es realista y entendemos que se puede cumplir en un horizonte temporal cercano al objetivo importante que

supone la escolarización en condiciones de calidad adecuada a niños entre cuatro y dieciséis años. Y quede claro finalmente que el sistema de financiación —como he indicado antes— que esta Cámara tendrá ocasión de tratar en su momento de las escuelas no estatales, en nuestra opinión —y está claro por el proyecto presentado—, no va a ser de ningún modo regresivo. Y quede claro también que va a ser socialmente justo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Para explicación del voto en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra el señor Guerra. (Ruidos.)

El señor GUERRA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, efectivamente, voy a hacer la explicación de voto de la última votación, que no he podido hacerla antes porque el señor Vicepresidente, en uso del artículo 60 que le otorga esa atribución, ha hecho esa intervención antes de que tuviera oportunidad de solicitar la palabra para explicar el voto. Pero voy a explicar el voto de la última votación aprovechando ya para un balance general de la posición de nuestro Grupo respecto de la ley y contrastar, en la medida que pueda, las palabras del Vicepresidente del Gobierno.

Entiende el Grupo Parlamentario Socialista que UCD con esta ley acaba de cometer de nuevo un grave error. La actitud de Unión de Centro Democrático, como partido del Gobierno, nos merece en este momento una valoración distinta, diferente de la de las minorías que le han acompañado en esta aventura reaccionaria. Que pequeñas minorías de la Cámara, como Coalición Democrática o la Minoría Catalana se dejen arrastrar simplemente por sus intereses electoralistas, se dejen arrastrar por los intereses de clase a los que sirven, así como por intereses coyunturales, en cierto modo nos resulta natural. Ahora bien, que Unión de Centro Democrático, como partido que tiene la responsabilidad de gobernar en un momento de crisis como el presente, se haya entregado con secretarismos, volcándose por los intereses de cier-

tos grupos confesionales, constituye para nosotros una auténtica temeridad irresponsable.

Esta ley divide y enfrenta al país. A lo largo de estos debates y de los debates producidos fuera de la Cámara sobre este asunto hemos podido constatar, y lo ha podido comprobar cualquier observador imparcial, que esta ley causa un radical enfrentamiento dividiendo en dos al país. Nosotros afirmamos que este enfrentamiento y esta división no son inexorables. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Nosotros mantenemos en materias de enseñanza actitudes negociables. En el discurso pronunciado en esta Cámara por nuestro compañero Gómez Llorente quedó bien patente. No vamos a repetir en este momento sus argumentos, a ellos me remito.

¿Y qué hemos constatado nosotros, a lo largo del debate en el Pleno de la Cámara? Hemos observado la misma actitud de intransigencia. No una sola de las enmiendas mantenidas por el Grupo Parlamentario que yo represento en este momento ha sido aceptada. De las enmiendas planteadas por la oposición sólo han sido aprobadas dos enmiendas insignificantes en cuanto a los problemas de fondo que la ley plantea. El partido del Gobierno ha oscilado durante este debate entre la reiteración machacona de sus tesis, el silencio desconsiderado en algunas sesiones ante importantes argumentos que ni siquiera intentó refutar, y la constante arrogancia de no intentar, en absoluto, la búsqueda de un mínimo acuerdo. En algunos casos, con notoria impertinencia, hasta hemos asistido a intervenciones de Diputados ucedistas auténticamente provocadoras, a las que hemos tenido que replicar con la necesaria contundencia. Esto es impropio de un partido que sostiene al Gobierno en momentos tan difíciles para el país como son los presentes.

El señor Ministro de Educación, que sólo ha subido a esta tribuna para expresar frívolamente que sobran puestos escolares en España, lo dijo literalmente a los medios de comunicación: «Reconozco —son sus palabras— que inicialmente no hay acuerdo; es más, creo que ahora no conviene. Creo que en materia de educación no es posible el pacto. El pacto, en este tema, no conviene».

Por tanto, acusamos al Gobierno de haber

desoído la voluntad negociadora de la oposición; de haberse entregado a los intereses de grupos de presión minoritarios del país y de haber impuesto una ley que divide y enfrenta a los españoles. El Gobierno tendrá que asumir sus responsabilidades en esta materia y las consecuencias que de ello se derivan. Porque está claro que este Gobierno no tiene capacidad para afrontar por sí solo el desarrollo de la Constitución, y en cuanto que esta ley orgánica constituye uno de los puntos más importantes del desarrollo constitucional, no puede por menos que relacionarse con toda esa problemática.

Cuando estamos ante la tarea ingente de reestructurar el Estado, con todo el quehacer de las autonomías ante nosotros; cuando es patente el fracaso de la política del Gobierno, la clamorosa contestación de rechazo que recibe del pueblo de forma rigurosa, a través de las urnas —recordemos Andalucía, Euzkadi y pensemos en Cataluña—; cuando el Gobierno es incapaz de atajar una situación económica en continuo deterioro, este Gobierno imprudente se ha permitido el lujo de desdeñar el concurso de las fuerzas más importantes de la oposición para intentar, si quiera, la búsqueda de una solución concertada a los delicados asuntos de la enseñanza en nuestro país.

¿Cree el Gobierno que los socialistas vamos a estar dispuestos a conversar sólo cuando le interesa al Gobierno y en las materias que sean de su conveniencia? ¿Cree que vamos a prestarnos a esa manipulación, que vamos a prestarnos a que las llamadas a la responsabilidad del Estado se hagan sólo cuando se sientan en debilidad? Este asunto, Señorías, es ya un asunto que afecta a toda la política del Estado.

¿O es que piensa este Gobierno, con una increíble frivolidad, que los socialistas vamos a consentir impasibles el juego consistente en ir sacando adelante los proyectos del suarismo, con el apoyo oportunista ora de esto ora de aquello, para que entre todos le hagamos el juego de su único objetivo serio y real, que no es otro sino el de subsistir en el poder a costa de lo que sea? (*Rumores.*)

Señores del Gobierno, estas cosas hay que pensarlas con más tiento, con más responsabilidad, con más perspectiva. La reordenación

de un Estado, que no es cosa de vanas y solemnes palabras como se repiten a veces desde aquí, sino algo que tiene que ir vertebrándose por medio de leyes básicas como esta que estamos tratando en este momento, es una tarea, señores del Gobierno, que a ustedes les desborda, porque reconstruir y reestructurar un Estado requiere una perspectiva histórica, muy difícil de adquirir por quienes cada día tienen que olvidarse de su pasado, para sobrevivir el presente y afrontar el futuro. (*Rumores.*)

Nosotros, dentro de esa preocupación profunda por sentar unas bases de convivencia duraderas y estables en este país, habíamos buscado fórmulas susceptibles de ser integradoras para todos. Algún Diputado ucedista, ligero de pensamiento, inoportuno en la ocasión parlamentaria, nos tentaba en este debate recordándonos afirmaciones hechas por nosotros aquí mismo de no haber renunciado a nuestros ideales de escuela laica, homogénea, activa, etc. En su trivial argumentación pretendía encontrar contradicciones entre los textos propuestos y la Constitución, que de forma íntegra y constante nosotros defendemos. En fin, el Diputado ucedista pretendía acaso descubrir vanamente doblez o fingimiento en nuestras posiciones.

No, Señorías. Ni hemos dejado de ser los socialistas de un Partido laico, ni de propugnar la enseñanza laica, la escuela única en el sentido homogéneo en sus medios, ni ningún otro de los viejos y queridos ideales de nuestro partido, esos ideales que comparten con nosotros las inteligencias más progresivas de nuestro país. Sin embargo, en el prudente propósito de impulsar el proyecto de la España constitucional, no hemos pretendido, ni pretendemos, llevar al contenido de unas leyes de obligado cumplimiento para todos, lo que es la espiritualidad propia del partido; algo perfectamente legítimo como otras ideas de otras formaciones; y no abandonamos, sin embargo, nuestro propósito de promover en la sociedad esos ideales.

Mas, no basta que haya cauces democráticos y estructuras sociales hábiles, útiles para hacerlo, porque, Señorías, nosotros confiamos en el país, confiamos en las bases sociales y en la virtualidad y en la fuerza racional de nuestras ideas. Acaso sea esto pre-

cisamente la clave última por la que nosotros no necesitamos establecer formas jurídicas, superestructuras legales, ni estructuras económico-sociales que preservando viejos privilegios devengan, se convierten en autoritarismo protector de idearios caducos y modelos de vida decadente.

Aquí se ha impuesto una ley de privilegio, enmienda tras enmienda. En la historia de la educación española, no lo duden, este importante debate será explicado, con el rigor inexorable de la objetividad que imponen los hechos, como la consolidación y la extensión de una situación de privilegio de la enseñanza privada acumulada bajo los años de la dictadura franquista.

En esta Cámara la mayoría puede aprobar una ley, ciertamente. Más, para que las leyes sean duraderas tienen que arraigar y ser asumidas por la gran mayoría de la sociedad. Las leyes, señoras y señores Diputados, tienen una prueba de fuego en la que se cumplen o se destrozan y se infringen con el perjuicio del ordenamiento y del órgano legislador, y esa prueba es su aplicación, su puesta en práctica, no simplemente su mera vigencia jurídico-formal.

Al aplicar esta política educativa se han producido distorsiones sociales y laborales difíciles de explicar. ¿Cómo se va a explicar a nuestro pueblo que en plena crisis económica con más de un millón y medio de parados, UCD con apoyo de Coalición Democrática y Convergencia y Unión se propone entregar la misma cantidad de dinero al capitalista, al hombre acomodado, que al parado o a la viuda indigente para gastos escolares? (*Rumores y protestas en los bancos de la derecha.—Sí, sí, en los de la izquierda.*)

Esto, Señorías, por muchos chorros de palabras que se viertan, no tiene posible justificación mi respuesta. ¿Cómo explicar y justificar que el Gobierno se ha negado a discutir un orden justo de prioridades en las inversiones para gastos educativos? ¿Cómo explicar a los padres, a cada ciudadano en el momento en que lo sufra, que él no puede intervenir en la fijación de esos idearios, conforme a los que se va a educar a sus hijos? ¿Cuál no va a ser el colosal desengaño de esos miles de padres, que han sido movidos por una campaña basada en los lemas «liber-

tad de enseñanza», «libertad de los padres», cuando se encuentren día a día que en centros pagados por el Estado, que no son nadie en orden a contratar o despedir a los profesores de sus hijos? ¿Cómo explicar a los miles de profesores de la enseñanza estatal que desde ahora, por obra de UCD y sus adláteres, ya no podrán ejercer la elección del Director como hasta ahora venían haciendo?

Señorías, éstos son grandes hechos, entre otros, que traerán resquemor expansivo en la sociedad española conforme se vayan aplicando, y eso bastará para que, en su día, millares de ciudadanos nos apoyen para cambiar esa ley nefasta a que ustedes han aprobado rechazando enmienda tras enmienda, aprobando artículos y que todavía no sabemos el resultado final que pueda tener. Lo que han aprobado, lo han hecho, hasta ahora, con nuestra radical oposición desde el principio al fin.

Se dice frecuentemente desde los escaños de UCD que la Constitución establece la gratuidad de la enseñanza obligatoria —artículo 27—, y es cierto, pero no es menos cierto que también establece el derecho al trabajo —artículo 35— y hay más de un millón de parados. Y otros derechos no menos importantes que aquí no se han querido considerar.

El problema reside en una cuestión elemental de moralidad política. Cuando el Estado no puede atender simultáneamente todos los fines que idealmente debiera satisfacer, ¿por dónde empezar? ¿Por otorgar dinero a los ya acomodados para que sus hijos vayan a centros subvencionados por el Estado o a crear puestos de trabajo para ese millón y medio de parados?

Desgraciadamente una mayoría reaccionaria de la cámara ha venido decidiendo a anteponer la financiación de todos los centros privados al cumplimiento de demandas apremiantes en materia de preescolar, de enseñanza especial, compensatoria, profesional, etc., esenciales todas para aproximarnos siquiera algo al principio de igualdad, que es precisamente uno de los que se recoge en el artículo 1.º de nuestra Constitución.

El hecho material e incontrovertible es que para satisfacer a determinadas clientelas de la derecha se van a detraer miles de millones

para sufragar colegios de los pudientes, restando, inexorablemente, recursos en áreas como la misma Formación Profesional o la reconversión pedagógica y científica del profesorado. Con estos hechos irrefutables el Gobierno de UCD y sus adláteres cometen un atentado contra la economía de este país, y contra los sectores más desasistidos de nuestra infancia y juventud.

Pocas veces como hoy nos encontramos tan seguros los socialistas en nuestras ideas al formular la más enérgica y categórica denuncia ante la Cámara y ante el país de lo que significa una descarada política de derecha contraria a los intereses del pueblo, de la inmensa mayoría, de esa mayoría a la que no puede pedirse con autoridad moral el respeto a las instituciones y el acatamiento de las leyes cuando los gobernantes sirven desde esas instituciones, y elaboran proyectos legislativos, al servicio de ciertos grupos de presión harto privilegiados en el régimen anterior y prevalidos hoy en la riqueza y en los medios acumulados durante esas cuatro décadas.

¿Quieren otros ejemplos contundentes que agregar a los muchos que han sido aducidos en el curso de este debate? Un ejemplo que por cierto el señor Vicepresidente ni siquiera ha mencionado. En España, según datos oficiales del SEREM, hay disminuidos psíquicos de cero a seis años, 12.000, y en edad escolar, de seis a diecinueve años, 250.000. Bien; de esos 262.000 disminuidos psíquicos, según datos del SEREM, se hayan escolarizados solamente 72.000.

En estas condiciones, la mayoría derechista de la Cámara intenta aprobar una ley que entrafía la financiación estatal de la enseñanza de los hijos de la clase dominante, y nosotros, en este punto, tenemos el deber de denunciarlo en nombre de los trabajadores y de los más necesitados.

El país tiene que saber que esos 100.000 millones que se van a dedicar a la enseñanza privada suponen, por ejemplo, la cobertura de desempleo de cerca de 300.000 parados; podrían servir para crear, en el sector público, aproximadamente unos 100.000 puestos de trabajo; es el doble de la asistencia primaria de la salud española; suponen el gasto anual en farmacia de la Seguridad Social; so-

brepasan la cifra dedicada a todo el crédito oficial a la vivienda.

Y aquí el señor Vicepresidente del Gobierno viene justamente (dice que en nombre del señor Ministro de Educación, dándonos tal vez la razón a nuestros argumentos sobre que aquí no había un debate ideológico; había un debate de discriminación económica y social) a hablar, no de ideología, sino de dinero, porque ésta es una cuestión de dinero y de cómo se distribuye la riqueza del Presupuesto en materia de enseñanza. Y viene a hacer una intervención, no dirigida a la Cámara, no dirigida al país, sino dirigida al sector de la derecha de esta Cámara, para acallar las conciencias de aquellos que tienen escrúpulos en votar esta ley. (*Protestas en los bancos de la derecha. Muy bien, en los de la izquierda.*) Y viene a decir que hay que hablar con el lenguaje de los hechos, y él ha hablado con la demagogia de los hechos; ha manejado las cifras que ha querido y las ha tomado globalmente o parcialmente, según le interesaba en cada ocasión.

Y así, el señor Vicepresidente ha vuelto a utilizar la frase frívola del Ministro de Educación de que sobran 500.000 puestos escolares en este país; que, tomados globalmente e incluso rebajados, podrían ser aceptados, pero que bien sabe el señor Vicepresidente que no llega al total de la verdad cuando dice «aunque ciertamente algunos de ellos han quedado ociosos» y existe una disfunción: algunos de ellos no, prácticamente todos ellos, y lo sabe muy bien el señor Vicepresidente.

Y se refiere a la situación que hay en Madrid, con 26.000 puestos de holgura, pero no dice que la disfunción es tal que cada año hay miles de padres de alumnos que no encuentran puesto escolar en la enseñanza pública para sus hijos en Madrid; y no lo dice y falta a la verdad cuando no lo dice.

Y el señor Vicepresidente habla de que se intenta la escolarización de cuatro a dieciséis años, cuando el señor Ministro de Educación ha reconocido en esta Cámara que no hay dinero para la enseñanza preescolar. No hay una disfunción, sino una contradicción entre el Ministro de Educación y el Vicepresidente para Asuntos Económicos.

Y sigue insistiendo en cifras: entre los cua-

tro y cinco años habla de que está el 80 por ciento escolarizado, cifra a comprobar; y dice que en 1983 no será una utopía que el 90 por ciento de los niños en edad preescolar estén escolarizados. ¡Atienda bien la Cámara!: si está escolarizado el 80 por ciento, y para el año 1983 dice que no es una utopía llegar al 90 por ciento, en tres años sólo se pretende escolarizar el 10 por ciento.

Aún más: habla de que el esfuerzo de escolarización equivale al 5 por ciento del total y podrá hacerse en cuatro años; es decir, casi a un 1 por ciento anual de escolarización.

Las cifras sí que son lenguaje de la realidad, lenguaje de la verdad.

Y hace referencia también a la Ley de Financiación, que ya es una prueba el hecho de que se debata por separado, y una posibilidad también de acallar ciertas conciencias que tienen escrúpulos, al decir: «Después, en la Ley de Financiación, resolveremos lo que aquí no hemos sido capaces de resolver». Si aquí no han sido capaces, cuando se les han tendido todos los puentes, ¿quién puede tener la confianza de que en el debate de dicha ley se va a arreglar lo que han desarreglado en esta ley?

Y se dice que en el proyecto de ley se ha introducido la siguiente frase: «No se financia a todos, sino sólo a los que manden a sus hijos a colegios que tengan como tope máximo de coste el de los colegios públicos». Y no se dice, y por tanto se falta a la verdad, que hay una enmienda de UCD en esta Cámara a este proyecto de Ley de Financiación que dice que los colegios privados podrán cobrar hasta el 20 por ciento a los alumnos, y no está incluido ni el transporte escolar, ni el comedor, y tampoco se dice, y se falta a la verdad por no mencionarlo. Y se quiere decir que la financiación no va a ser regresiva, sino que va a ser socialmente justa para evitar que, como digo, algunos se sientan impelidos a no aprobar esta ley discriminatoria, antisocial, que se pretende aprobar.

Y todo este debate, ¿para qué? ¿El balance de este debate, para qué? ¿Para qué nos ha servido a esta Cámara y al país, si hubiera tenido la oportunidad de asistir a este debate, que no la ha tenido, porque como bien saben Sus Señorías los medios de comunicación del

Estado se utilizan de una manera discriminatoria? ¿Para qué el debate?

Se ha dicho aquí que para proteger la libertad de los padres, la libertad a elegir centros. ¿Alguien podrá convencer a los padres de las barriadas de que ese cheque igual para todos los va a permitir enviar a sus hijos a un colegio lejano, en un contexto social antagónico del suyo y en el que los padres pudientes podrán organizar, usando de las leyes, sociedades recreativo-culturales paralelas que completen los lujos educativos que quieren para sus hijos, con el mismo dinero que hasta ahora venían gastando en la enseñanza reglada, que desde ahora les pagará el Estado?

En definitiva, Señorías, la libertad que sale reforzada de esta Ley no es la de los padres; es la libertad de los patronos de la enseñanza privada para poner idearios, y para contratar o despedir profesores, todo ello a costa del dinero público. Miles de profesores experimentarán lo que significa que, pagando el Estado su sueldo, un particular sea su patrón, cual si de una empresa privada más se tratase. Esto son realidades y no ficciones; éste es el lenguaje de los hechos al que se refería el señor Vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos.

Nosotros estimamos —como otras muchas personas de buena fe que no se identifican plenamente con nuestra ideología— que esta ley no es asumible ni por quienes tengan una seria conciencia democrática. De ahí las idas y venidas que incluso en el seno de la Cámara hemos observado todos por parte de los agentes del Gobierno para apuntalar la exigua mayoría de votos con que se pretende aprobar esta ley orgánica.

También deseamos manifestar en esta explicación de voto que, si de algo estamos satisfechos de este debate, es por cuanto que este debate ante el Pleno de la Cámara ha servido, al menos, para descubrir a muchas de Sus Señorías, y creemos no errar al decir que incluso a muchos del Gobierno, en qué consistía una ley que al final habían mantenido como una cuestión de Estado, pero que, como es bien notorio, sale con mucho lastre y lleva en las alas de su corto vuelo el plomo de la duda en el propio seno de la mayoría que pretende aprobarla.

Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nosotros vamos a acatar esta ley, porque acatamos la Constitución, si esta ley fuese aprobada en esta Cámara, pese a que hoy UCD haya infringido un duro golpe, a través del rechazo de las enmiendas, al acuerdo que debe respaldar la Constitución, rompiendo unilateralmente el pacto profundo que hubiera podido entrañar, en materia escolar, el artículo 27 de la misma.

La documentación que obra en los archivos de la Cámara, referente al debate constitucional de la anterior legislación, sirve para comprobar que esta ley ha hecho un desarrollo del artículo 27 de nuestra Ley Fundamental, en la línea de las enmiendas entonces presentadas por los Grupos y Diputados más derechistas de aquel momento, y que las cosas que entonces no se incorporaron a la Constitución y hoy se incorporan a esta ley. Esto es legítimo y es reglamentario, pero políticamente es temerario.

En ocasiones les hemos oído decir que ciertas ambigüedades se perfilarían en las leyes de desarrollo de la Constitución; cito palabras del señor Ministro de Educación: «La ambigüedad con que este tema, en virtud del consenso, queda reflejada en la Constitución, debe romperse ahora». Y se pretende romper esa ambigüedad y, ¿en qué dirección? ¿Se refería a esta ruptura de la ambigüedad de la Constitución la grave cita que les voy a leer? ¿Es que están cumpliendo ustedes ahora compromisos que vienen desde lejos?

Un Monseñor cuya impulsividad es de todos conocida reveló, acaso, lo que otros más discretos han silenciado. Es lo cierto, Señorías, que en el Boletín Oficial del Obispado de la Diócesis de Cuenca, referido al mes de julio de 1978, repito, 1978, podemos leer un documento suscrito por el titular de la sede de fecha 25 de julio del mismo año, en el que se dice, refiriéndose al entonces proyecto de Constitución, lo siguiente: «En relación con algún punto en que interesaba conceder posibles reacciones contra ambigüedades pactadas, se ha notificado de modo oficioso y directo al Episcopado el propósito de dar con hechos a la norma ambigua una interpretación aceptable, promesa, naturalmente, subordinada a la permanencia de ciertos grupos y per-

sonas en el poder». Hemos dado la frase exacta y pueden comprobar el texto.

Todo esto es un camino peligroso, es un camino que conduce, inevitablemente, a la discordia.

El Partido Socialista por primera vez ha dicho, y ahora ratifica, que se declara incompatible con esta ley. La acataremos; nada ilegal será promovido por nosotros contra ella si fuese aprobada en esta Cámara, tal como ha sido voto a voto aprobada y enmienda tras enmienda rechazada. Pero también decimos que por la vía de la legalidad constitucional, si fuera aprobada, no cejaremos en el seguimiento de todos los abusos que se produzcan en la implantación práctica de esta ley. No cejaremos en la resistencia por todos los caminos legales posibles a sus efectos negativos, regresivos y, por último, no cejaremos en mantener viva la conciencia del pueblo en torno a cuanto implica de nefasto esta disposición legal. Porque antes o después, con el concurso de nuestro pueblo y en su nombre, la aboliremos.

Muchas gracias. (*Prolongados aplausos en los bancos de la izquierda.*)

El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Centrista, tiene la palabra el señor Herrero.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a explicar muy brevemente nuestro último voto y a tratar de hacer, como mi predecesor, un resumen de nuestras razones de votos anteriores, aunque, sin duda, yo no pueda competir con la brillantez e incluso la capacidad de injuria de mi predecesor en esta tribuna.

Por otra parte, ustedes comprenderán que tengo sobrados motivos para encontrarme muy cansado en estos momentos; de manera que voy a cansar muy poco a mis oyentes.

Yo creo que con el voto favorable que hemos dado a esta ley a través de su articulado y en esta última votación a la Disposición final, que tanta transcendencia parece ha tenido, UCD ha cumplido rigurosamente su programa electoral; el programa electoral que fue votado por una amplia parte del elec-

torado español, por más de seis millones de españoles. Creo que en ese programa ha coincidido con otros Grupos que, desde perspectivas muy distintas y dando en ocasiones ejemplos de responsabilidad dignas de tener en cuenta por toda la comunidad nacional, han apoyado un proyecto desde ángulos muy diversos, pero que, en conjunto, recibe el apoyo mayoritario del electorado español. Porque en nuestro proyecto electoral, aquel que presentamos a raíz de un congreso, un congreso que es homogéneo con nuestras ofertas electorales, que a su vez es homogéneo con las palabras y con los votos que aquí pronunciamos, decíamos que reconocíamos el derecho de todos los hombres a la educación y a los principios de libertad de enseñanza y de igualdad de oportunidades. Reconocíamos solemnemente la libertad de los padres para escoger el tipo de educación de sus hijos y su formación moral y religiosa, y afirmábamos también que al Estado le corresponde garantizar y asegurar la educación, asumiendo una gestión directa de organización de centros, así como supervisando y asistiendo a los promovidos por la iniciativa privada.

Creo, señoras y señores, que ésta es la esencia de la ley, y que esta ley es la clave del cumplimiento exacto y riguroso de nuestro programa electoral, del programa electoral que nos dio el voto de la mayoría de los españoles.

Señor Presidente, nosotros hemos votado con esta ley la libertad, con todo lo que la libertad como algo sintético implica, porque la libertad de enseñanza, tal como se entiende en la Europa democrática, no puede separarse de los restantes aspectos de la libertad, y prueba de ello es que allí donde la libertad de enseñanza ha sido socavada han muerto las demás libertades. El único país de Europa occidental que se nos puede poner como ejemplo de las soluciones participativas, llamémosle así, que nos proponen como alternativa los partidos de la oposición, es Italia, donde la enseñanza se encuentra en una desastrosa situación, pero donde el Estado no nos ofrece ningún modelo a seguir y donde, desde luego, la situación del Partido Socialista no es especialmente floreciente porque ha sido paulatinamente devorado por quie-

nes se han aprovechado de su demagógica ingenuidad. (*Rumores.*)

Señor Presidente, la libertad de enseñanza es, en primer lugar, la libertad de los padres para elegir el tipo de educación. La libertad de enseñanza es, en segundo lugar, la libertad de crear centros escolares distintos de los estatales, de establecerlos, de identificarlos por un proyecto pedagógico que les da un carácter propio y de dirigirlos. La libertad de enseñanza sólo es posible si, además, el Estado establece una red de sector público allí donde el sector público sea demandado por quienes van a utilizar este servicio, pero no indiscriminada y ruinosamente. La libertad de enseñanza es la libertad de los profesores a enseñar. Pero ésta, como toda libertad, ha de cohonestarse con el derecho de los alumnos a aprender y no ser meramente manipulados, con el derecho de los padres a elegir una educación —derecho que no debe ser defraudado por los manipuladores— y con el derecho de todos a establecer y dirigir centros docentes, presididos por un carácter propio, que tampoco debe ser vaciado de contenido mediante el abuso y la infidelidad. Estas dimensiones de la libertad están suficientemente garantizadas para todos en el proyecto que acabamos de votar.

La libertad de enseñanza, para ser real, exige una participación de la comunidad escolar, y nosotros hemos hecho posible en esta ley una participación semejante entre los centros públicos y los centros privados, una participación que nunca había sido alcanzada en España, pero una participación que está al máximo nivel en los países de Europa occidental, con expresión, repito, de Italia, y, vuelvo a decir, que es una excepción a no seguir jamás.

Por último, la libertad de enseñanza, para ser una libertad real y no meramente formal, exige que pueda ejercerse en pie de igualdad por todos los españoles. Para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean efectivas y reales nuestro Estado social de derecho de la Constitución asumió, en el artículo 9.º, el compromiso de remover los obstáculos fácticos y económicos para que esta libertad y esta igualdad llegaran a ser plenas y efectivas. Y esto es lo que busca el principio de financiación, establecido en el artículo 5.º, y

que será desarrollado por la Ley de Financiación, que ya se encuentra en esta Cámara.

Efectivamente, si el Estado no proporciona los costes reales de los puestos escolares allí donde estos puestos son demandados por los padres, excluyendo todo ánimo de lucro de los centros donde estos puestos están ubicados, señoras y señores Diputados, si el Estado no proporciona esta financiación hasta la gratuidad, entonces se reserva la opción entre uno y otro tipo de educación, entre uno y otro sector; entonces se reserva esa opción a unos pocos, cada vez a unos menos, simplemente a aquellos que pueden darse el lujo de costear la enseñanza privada.

Seamos conscientes de que aquellos que nos exigen simplemente la extensión del sector público, que, por otra parte, reconocen costosisima y ruinosa, excluyendo toda financiación de puestos escolares en otros sectores, lo que están es defendiendo la más reaccionaria de las soluciones, la solución que convierte la enseñanza privada en el coto cerrado de unos privilegiados, y eso nosotros no lo hemos consentido. (*Rumores.*)

Se ha hablado, señoras y señores Diputados, de prioridades. Sin duda existen muchas prioridades; pero que existan prioridades no supone que no deban atenderse a la vez distintos campos que son de obligación estatal. Por ejemplo, a nadie se le ha ocurrido en esta Cámara solicitar que desaparezca la subvención que los partidos políticos y los Grupos Parlamentarios reciben del presupuesto nacional para atender a una serie de prioridades tan urgentes y gimientes como las que el señor Guerra nos ha señalado. (*Rumores.*) Y eso es lógico que no se haya hecho, porque no existe un orden riguroso, estricto y lineal de prioridades en un Estado moderno, sino que este Estado moderno tiene una serie de necesidades simultáneas a satisfacer, y una de ellas es garantizar lo que la Constitución dice: la gratuidad, sin distingos, de toda la enseñanza obligatoria, en pie de igualdad, para todos los ciudadanos españoles.

Termino, señor Presidente. Se ha hablado de que se ha roto un consenso constitucional. Cuando se establece el marco constitucional para la democracia es lógico, en cierta medida, que el consenso que sirvió para construir dicho marco desaparezca, puesto que

la democracia, de suyo, no es consenso; la democracia es precisamente disenso; aceptación por las minorías de la decisión mayoritaria, y respeto por las mayorías de la ley de alternancia de esas mismas mayorías. Por ello, que se rompa el consenso constitucional una vez elaborada la Constitución, es lógico y casi esencial a la propia pervivencia de la democracia. Pero no nos preocupemos porque, en lo que a esta ley se refiere, yo creo que, frente a las rotundas afirmaciones del ilustre orador que me ha precedido, el consenso se establecerá por una vía tácita, porque esta ley reproduce (y estoy en condiciones de demostrarlo literalmente; no quiero aburrirles ahora con el tema, pero estoy dispuesto a hacerlo ante cualquier audiencia), casi literalmente, la que es base de los pactos escolares en Holanda o en Bélgica, o de la legislación escolar que es aceptada por los partidos socialistas en Francia, Gran Bretaña, Escandinavia y Alemania.

Precisamente varias de nuestras soluciones las hemos defendido aquí con palabras de un ilustre socialista europeo, Spaak, y por eso estamos seguros de que si esta ley se cumple rigurosa y exactamente —y el Gobierno de UCD adquiere un tremendo compromiso, y nosotros, como Grupo Parlamentario que apoya a ese Gobierno vamos a exigir que ese compromiso se cumpla puntualmente—, en los próximos comicios generales veremos cómo se ocultan las afirmaciones que hoy se hacen contra esta ley, como en los pasados comicios se ocultaron otras afirmaciones anteriores que, sin duda, es lógico que en un momento de calor se hagan, y los señores que las pronuncian saben de mi afecto hacia ellos; pero que, como todas las cosas producto de la pasión y del afecto, no aguantan ante la razón de la experiencia. En todo caso, esta experiencia nos lo dirá cuando el momento llegue.

Gracias, señor Presidente. (*Aplausos en los escaños de la derecha.*)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Comunista, para explicación de voto, tiene la palabra el señor Solé.

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, señoras y señores, sé que a estas alturas del

debate ya se ha dicho prácticamente todo. Sé que es tarde. No voy a cansarles con largas consideraciones, pero creo que el giro que han tomado los acontecimientos y, en definitiva, la trascendencia misma del momento en que nos encontramos ante el voto final, nos obligan a precisar algunos conceptos después de las explicaciones que hemos oído.

Decía hace unos momentos el señor Herrero Rodríguez de Miñón una frase —siento que no esté aquí en este momento—, que me ha parecido enormemente ilustrativa, sobre el fondo de la cuestión. Nos decía: La libertad de enseñanza, tal como nosotros la entendemos, consiste en que el Estado debe crear escuelas públicas allí donde se pidan, es decir, allí donde hay una demanda específica. Con lo cual realmente el Estado, en este momento, los poderes públicos en general, se convierten exclusivamente en subsidiarios de la iniciativa privada.

Nosotros entendemos que ahí está quizá la clave del asunto, porque nosotros, cuando se habla de homologarnos con los países de la Europa democrática o de la Europa occidental, creemos que no es ésta precisamente la situación en estos países.

Se aduce normalmente el ejemplo de lo que ocurre en Francia o de lo que ocurre en Alemania Federal. En Francia, señores, la prioridad absoluta ha sido el desarrollo de una escuela pública, y sólo en la medida en que esa escuela pública está asegurada se da prioridad también a la enseñanza privada. En la República Federal Alemana ocurre prácticamente lo mismo, y si mis datos no fallan sólo el 3 por ciento de los niños están hoy en la enseñanza privada.

Se ha aducido el ejemplo de Italia. Yo recordé el otro día, y tengo que recordárselo otra vez hoy al señor Herrero Rodríguez de Miñón, que el ejemplo de Italia proviene precisamente no de lo que él dice, sino exactamente de lo contrario, de ser un país donde gobierna, de manera ininterrumpida, la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana es exactamente el mismo sector de donde procede el señor Herrero Rodríguez de Miñón y la mayoría de los portavoces que han dirigido este debate en nombre de UCD, y precisamente el Gobierno de este Grupo es

el que ha llevado hoy a Italia a la situación en que se encuentra y de la cual las fuerzas democráticas intentan sacarla, a pesar de la Democracia Cristiana. Cuando el señor Herrero Rodríguez de Miñón dice que éste es el ejemplo a no imitar, estoy completamente de acuerdo con él, pero seamos consecuentes hasta el final.

Ha dicho que la Constitución, en el artículo 9.º, nos impone la obligación —y es cierto— de remover los obstáculos. Pero hay distintas formas de remover obstáculos. Una de ellas consiste en quitarlos de un sitio y ponerlos en otro; y creo yo, señores, que ésta es exactamente la filosofía con la que el Grupo de UCD, y los Grupos que le han apoyado, contemplan la frase de remover obstáculos, por lo menos así se colige en función de los votos y de las discusiones de esta ley.

Aquí se ha intentado —y éste es el error de fondo, a nuestro entender— hacer de esta ley un enfrentamiento de filosofías, de conceptos genéricos; una ruptura del consenso constitucional. Yo no discuto que, por parte del Grupo mayoritario del Congreso hoy por hoy, ésta sea su concepción, pero nos permitirán que les digamos que nos parece que ésta no debe ser la vía, que es un concepto y una vía errónea, y que las cosas deben ir por otro lado, porque el país, señores, se encuentra en una situación que no admite, a nuestro entender, políticas de este tipo.

Efectivamente, estamos en una situación en la que el juego de mayorías y minorías puede ser el factor dominante. Y así ha ocurrido. Muy bien. Nosotros entendemos que, en una situación como ésta, cuando estamos ante la construcción de un Estado de autonomías y cuando estamos ante la puesta en práctica de aquel magnífico trozo de papel que fue y que es la Constitución, cuando necesitamos poner en práctica esto, se exigen políticas que sean capaces de tener detrás el consenso activo de mayorías operantes, de mayorías que se encuentran en diversos sectores del espectro social. Y esto es lo que no se hace; esto es lo que no se ha hecho hoy aquí.

¿Se puede gobernar el país, digo yo, se pueden imponer opciones tan fundamentales, haciendo regresar apresuradamente a Minis-

tros que están en ultramar? ¿Es ésta la vía a través de la cual las grandes opciones de este país van a abrirse paso? ¿Es ésta la vía, señores, de llevar adelante un proceso tan complejo, tan complicado, en el que nos jugamos todos, y no unos solos, el futuro mismo de este sistema, como es el tema de las autonomías? Aquí se ha discutido mucho hoy de autonomías; se ha discutido y, sobre todo, se ha resuelto mal.

Yo no sé si al señor Rodríguez de Miñón le ha traicionado un poco la conciencia, si ha tenido un lapsus froidiano cuando ha dicho que, de todas maneras, el consenso que hoy no se ha obtenido se va a restablecer por vía tácita. Si se refiere al Grupo del que Su Señoría procede, le digo que por vía tácita ya hemos visto a dónde hemos ido a parar y que, en consecuencia, por aquí no se va a reestablecer el consenso.

Quisiera recordar, para apoyar exactamente mis manifestaciones y lo que estoy diciendo, que cuando el señor Vicepresidente encargado de Asuntos Económicos nos hablaba de lo mucho y bueno que se ha hecho en los últimos años, creo que convendrá conmigo en que el fundamento político de lo bueno que se ha hecho, de lo poco bueno que se ha hecho, consiste, a mi parecer, en aquello que se llamó «los pactos de la Moncloa», que si lo bueno que entonces se consiguió no ha seguido adelante es precisamente porque el consenso que estaba detrás de esos «pactos» se ha roto, y creo que el señor Abril Martorell es uno de los principales artífices de esa ruptura. Creo que lo malo es haber abandonado esta vía u otra vía parecida y entenderse exclusivamente con la CEOE y otros sectores, de los cuales algunos ya han sido mencionados.

Creo también que no es posible olvidar que si algunos resultados se han obtenido han sido logrados por el esfuerzo de instituciones como las asociaciones de padres de alumnos que en esta ley que hemos aprobado quedan discriminadas. En definitiva, señores, diría que por esta vía lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo es dar un barniz democrático, en el juego exclusivo de mayorías y minorías, a situaciones de privilegio, de desigualdad; a situaciones que debe-

ríamos corregir y que hemos heredado del sistema anterior.

Nosotros creemos que éste es el fondo del asunto, y en función de ello hemos hecho nuestras enmiendas, hemos manifestado nuestro voto y así vamos a hacerlo también en la votación final. Esta ley se pondrá en práctica, evidentemente; nosotros la acataremos, puesto que acatamos las leyes que de este Congreso salen. Pero yo creo que el problema va a consistir en su aplicación concreta y práctica en un país que está muy alejado, profundamente alejado, de la lógica profunda de una ley que la mayoría va a imponer hoy en este Congreso.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Roca, de Minoría Catalana. Perdón, señor Roca, previamente había solicitado intervenir el señor Vicepresidente.

Tiene la palabra el señor Abril Martorell.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO (Abril Martorell): Muy brevemente, señor Presidente, porque me parece que el señor Solé Tura ha extraído conclusiones, y yo le rogaría que las conclusiones las extrajera con lenguaje cierto.

Quiero recordarle la conclusión de la subsidiariedad, y quisiera manifestar muy claramente que se ha dicho, por parte del Gobierno que, en concordancia con el reconocimiento constitucional del derecho a la educación, el Gobierno es absolutamente consciente de la función educadora del Estado. Por tanto, desde la perspectiva que yo he hablado existe una prioridad, ha existido una prioridad y seguirá existiendo una prioridad para el sector público; pero esa prioridad no debe ser mal entendida desde un exclusivismo porque los monopolios son malos. Por tanto, abandone Su Señoría —si es que me ha entendido mal—, la tesis de la subsidiariedad, porque no se ha dicho.

El señor PRESIDENTE: El señor Roca, por el Grupo Parlamentario Minoría Catalana, tiene la palabra para explicación de voto.

El señor ROCA JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, para mantener una vez más la ficción que estamos

haciendo de hablar para explicar un voto, que nadie ha explicado, y que ha servido para decir lo que cada grupo quiere.

En primer término, esta es una minoría bastante acostumbrada a perder en esta Cámara y, por tanto, en este sentido puedo hablar con más autoridad que el Grupo Parlamentario Socialista, y es una minoría que está acostumbrada a perder, precisamente, en muchas ocasiones, por pactos instrumentados entre UCD y PSOE, cosa que es absolutamente normal, atendido lo que es importante en la correlación de fuerzas que nosotros, ya sabe don Alfonso Guerra que siempre aceptamos modestamente, pero que, evidentemente, no debe olvidarse que en muchos de estos acuerdos se han sostenido posiciones contrarias no sólo a lo que son no nuestras posiciones, sino a lo que son a veces intereses más colectivos y más generales en la vida del progreso, como, por ejemplo, en el tema del Consejo General del Poder Judicial, si ustedes lo quieren recordar, o en el relativo al Tribunal Constitucional.

Don Alfonso Guerra ha hablado aquí de intereses coyunturales y electoralistas, y el único acto electoral que se ha hecho otra vez ha sido el suyo.

Yo, de coyuntural, nada, y de electoralista, menos. Para demostrarle las dos cosas se lo voy a explicar para que lo entienda.

Coyunturales no porque nosotros, desde hace tiempo, venimos sosteniendo en programas educativos, lo mismo aquí que en Cataluña, una cosa que es constante, y no sé si usted y yo podríamos decir lo mismo respecto a la constancia de nuestros respectivos programas. Lo que quiero decir es que nosotros defendemos la libertad de enseñanza, y la libertad de enseñanza, que es lo que se discute, significa dos cosas: la primera, que no hay libertad de enseñanza si no hay posibilidad de escoger y de elegir, y esto requiere una política prioritaria del sector público en la creación de escuelas públicas, porque si no hay posibilidad de elegir es un mito la libertad de enseñanza. Y la segunda, que a partir de aquí, a partir de esta libertad de enseñanza sostenida en una igualdad de oportunidades, evidentemente, el hecho de la opción libre no puede comportar un perjuicio para nadie.

La enseñanza de calidad, que se dé sin ánimo de lucro, no puede costar más a un padre, en función de que ha hecho una opción a favor de uno o de otro tipo de centro. Esto está muy bien en la teoría. Lo que pasa es que en la práctica es muy difícil, y usted y yo lo sabemos.

Aquí hay un muy difícil equilibrio entre lo que debe ser una política de inversión pública y lo que debe ser un principio de justicia. El sesenta, cuarenta o el porcentaje que fuera, de que hablaba el Vicepresidente, de distribución entre escuela pública y privada —estimado Grupo Nacionalista Andaluz—, en Cataluña más del 60 por ciento es de escuela privada, y menos del 40 por ciento es de escuela pública.

El señor Ministro sabe que los Diputados catalanes, al menos yo, hemos tenido que hacer un constante peregrinaje a su Ministerio para pedirle la actualización o la concesión de subvenciones a escuelas calificadas de privadas, a petición, por ejemplo, del Alcalde de Cornellá (comunista), del Alcalde de Badalona (comunista) y del Alcalde de Barcelona (socialista). (*Rumores.*) Le hemos pedido estas subvenciones porque las necesitaban para sobrevivir, y mientras esto no se pueda suplir, el esfuerzo subsidiario lo han tenido que hacer los padres por ausencia de inversión pública, de lo que supongo no nos va a culpar a nosotros, que todavía no hemos estado en el Gobierno, tomen nota. (*Risas.*) Evidentemente, a nosotros no se nos va a culpar de esto. Lo que le quiero señalar es que decir a esta gente de Cornellá, de Badalona o de determinados barrios de Barcelona que esta enseñanza privada es un privilegio me parece que va a ser la primera actuación electoral que se va a hacer a partir de esta conclusión.

Que se nos llame fuerza reaccionaria, estimado amigo señor Guerra, yo, personalmente, no me voy ni a ofender, porque ni usted se lo cree. (*Risas.*) No se lo cree por una razón muy clara, porque si tan reaccionarios somos, lo que no entiendo es por qué muchos y muchos Alcaldes socialistas confían a nuestra gente la gestión y la responsabilidad de las regidurías de educación en sus propios municipios, y por qué nos envían a nosotros a enfrentarnos a veces, en Barcelona, en conflic-

tos recientes, con los comunistas, para defender posiciones comunes con ustedes.

De fuerza reaccionaria, ni hablar. Lo que se está haciendo aquí, con todos los respetos, es demagogia. Se ha hablado de la misma cantidad de dinero, y no es la misma cantidad de dinero; es que no es ni dinero, en muchas ocasiones será una promesa de futuro. Desconozco lo que dirá la ley, no me interesa en este momento, pero estar hablando ahora de que los ciudadanos están percibiendo la misma cantidad de dinero, cuando no perciben ni una peseta, esto es pura demagogia.

Habla de elección del director, una persona de tan fino sentido jurídico como don Alfonso Guerra, cuando de lo que se trata no es de elección, sino de nombramiento, y supongo que no le costará distinguir entre lo que quiere decir nombramiento y elección. Nombramiento quiere decir que puede ser, por ejemplo, mediante propuesta, y luego la elección recae en otro. Eso es absolutamente demagógico.

Aquí, señor Guerra, con todos los respetos, nosotros vamos a votar «sí». Lo digo por si tenía alguna duda. (Risas.) Y vamos a votar «sí» porque responde a los planteamientos que estamos defendiendo aquí y allá. A veces pasa que se coincide o no se coincide con unos o con otros, pero si un programa político se deja de cumplir porque coincides o no coincides, esto entonces no es un programa político, es una especie de agenda o de dietario, que se hace en función de los intereses de cada día.

Nosotros defendemos un modelo y un programa, y cuando las propuestas legislativas encajan con nuestro programa, con nuestro modelo de sociedad o de concepto de la misma, a partir de aquel modelo decimos sí, venga de donde venga.

Señor Guerra, no sufra usted con esta fuerza reaccionaria. Si un día u otro nos tenemos que encontrar para defender —y ésta será su propuesta—, la libertad de enseñanza, el pluralismo ideológico, la no demagogia, el servicio a la ciudad, al municipio, a los ciudadanos o al conjunto de todos los españoles, si se trata, repito, de defender esto, no se preocupe usted, ya que con esta fuerza reaccionaria podrá contar. Lo que no sé es si esto será o

no posible. Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Coalición Democrática tiene la palabra el señor De la Vallina.

El señor DE LA VALLINA VELARDE: Señor Presidente, Señorías, hasta aquí hemos recorrido un largo camino; hemos asistido, desde hace ya largos meses, a amplios debates, primero en la Ponencia, después en Comisión, y ahora en Pleno. En ellos hubo la oportunidad de poner de manifiesto las posturas de cada Grupo político, por lo que pudiera parecer ocioso intentar explicar el voto en este momento. No obstante, y con la brevedad que acostumbro en mis intervenciones, por respeto a la Cámara, intentaré hacerlo ante la importancia de la ley que nos ocupa.

Una vez más la pasión e interés puestos en estos debates confirman la importancia que socialmente presentan los temas educativos y la dimensión conformadora de lo social, que las leyes de enseñanza presentan, y que ha sido suficientemente destacada por pensadores de todas las ideologías, como en la cita de Jovellanos, que la otra tarde recordaba, de que la instrucción pública no sólo sirve para mejorar el espíritu, sino también para cambiar la vida. Mi Grupo político ha entendido desde el primer momento que nos encontramos ante un proyecto de ley, ante un texto jurídico. Y digo esto porque en ocasiones más bien parece que se trataba de redactar un documento político, un programa de Partido. Los tópicos, las generalizaciones inexactas, fruto sin duda de la pasión puesta en el debate, llevados por el deseo de querer que las cosas sean como se desean y no como son, llevaban a olvidarse de la realidad, o a presentarla deformada; porque la realidad es que se trata de una ley, y hay que partir de la Constitución española de 1978 y de las pautas interpretativas que ella suministra.

La Constitución, si es algo, y es deseable que sea mucho para todos los españoles es, por ser una norma jurídica, la norma jurídica suprema de nuestro ordenamiento jurídico, que ha de informar el resto de las leyes,

comenzando por las orgánicas que la desarrollan, como es el caso de la presente.

Por lo tanto, la regulación de las cuestiones contenidas en el proyecto de centros escolares no era una regulación libre, autónoma, sino enmarcada necesariamente en las pautas y principios constitucionales; y entre éstos, con carácter básico, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los Pactos que la complementan.

Y como creo que ha quedado claramente puesto de relieve en estos debates, las normas, esas normas de carácter internacional, son directamente aplicables en el orden interno e invocables directamente ante los tribunales españoles, por el sistema de incorporación de los Tratados internacionales que consagra el artículo 96 de la Constitución; aparte, naturalmente, del carácter interpretativo que tienen como consecuencia de lo establecido en el artículo 10, apartado 2, de la propia Constitución.

Y esas normas internacionales diseñan un claro modelo educativo del que constitucionalmente no es posible apartarse, y que entendemos es el que queda perfilado en este proyecto de ley al que hemos venido prestando nuestro apoyo.

Como los debates han puesto de manifiesto, la ley presenta —y lo decía en una intervención anterior— dos órdenes de problemas: por un lado los contenidos de índole sustancial, la regulación material de la libertad de enseñanza y del derecho a la educación, y por otro lado los aspectos orgánicos y jurídicos formales.

Los primeros pueden ser reflejo de alguna de las dos grandes concepciones o modelos educativos que ideológicamente se ofrecen, y que están expresando dos diferentes concepciones de la sociedad y, en última instancia, del hombre. Por ello, la forma de resolver la cuestión, la forma de entender la libertad de enseñanza es, en cierto modo, como he tenido ocasión de apuntar en otro momento, un tema testigo sobre el modo de concebir en términos generales la libertad individual y los derechos de la persona humana. Y aunque no siempre se quiera decir abiertamente, la opción está planteada entre

libertad de enseñanza o escuela pública autogestionada. La alternativa es pluralismo escolar, reflejo de una sociedad plural, o escuela única, aunque pluralista en su seno, como consecuencia de una determinada forma de entender la libertad de expresión docente. El proyecto claramente opta por el modelo educativo que es propio del mundo occidental europeo, como consecuencia de los principios que hemos dicho presiden nuestra Constitución de 1978.

En la base de toda esta concepción se encuentra el derecho preferente de los padres a elegir el tipo educativo que prefieran para sus hijos, porque, Señorías, entiendo que lo que está en el fondo de todos estos debates es esto concretamente: si la educación de los hijos corresponde a los padres, o corresponde en exclusiva al Estado, tema planteado desde los primeros momentos de la Revolución Francesa, y que las naciones del mundo libre han ido resolviendo abiertamente en favor del derecho de los padres, después de un largo proceso histórico de tensiones y pugnas educativas, hasta lograr reflejarlo en el Pacto Universal de los Derechos Humanos, concretamente en el artículo 26, número 3, que consagra el derecho preferente de los padres a elegir la educación que estimen oportuna para sus hijos. Y este derecho de elección no debe ser desconocido o negado con carácter general por el hecho —como en ocasiones se intenta hacer— de que en algunos supuestos no exista la posibilidad de elección, porque esto, Señorías, es lo que puede suceder con todos los derechos y libertades públicas.

Desgraciadamente, siempre hay sectores sociales marginados que no pueden hacer un uso efectivo y real de sus derechos y libertades, pero no por ello deben ser negados por la ley, con carácter general, esos derechos y libertades públicas, pues sería igualar por abajo. Antes al contrario, los poderes públicos deben esforzarse por facilitar el ejercicio, cada vez en mayor medida y profundidad, de los derechos y libertades públicas de toda la población. En definitiva, es lo que está consagrando y estableciendo el artículo 9.º de la Constitución española: los poderes públicos promoverán las condiciones para la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que

se integra sean reales y efectivas; removerán los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

Y a esto, entendemos, es a lo que apunta el proyecto de ley al que venimos prestando nuestro apoyo. A todo esto, como ya tuve ocasión de indicar, y me parece oportuno reiterar en esta ocasión, no se opone en absoluto la idea de la escuela pública; no puede considerarse como una postura la defensa de la libertad de enseñanza que se hace en la ley que esté atentando a la concepción de la escuela estatal.

Nuestra posición en defensa de la libertad de enseñanza no es contraria a la importancia debida de los centros públicos por muchas y distintas razones. Es más, pensamos que este pluralismo escolar servirá de acicate y estímulo a los centros públicos y contribuirá a elevar la calidad de la enseñanza que en ellos se imparte.

En definitiva, estamos seguros que esta ley servirá para dinamizar el sector público de la enseñanza y para hacer que el Estado pueda hacer frente a las obligaciones que le incumben en este ámbito y que se derivan de las exigencias de nuestra onstitución.

Otra consideración deseo efectuar en relación al tema de la financiación, al que en tantas ocasiones se ha aludido en estos debates. Aparte de que no es esta ley la que se enfrenta y resuelve la cuestión, el hecho de que pueda existir una financiación pública no debe servir para acabar con el pluralismo escolar, no debe llevar a una administración o publicación del sector privado, sobre todo teniendo en cuenta que la iniciativa privada en este campo no responde a móviles económicos.

El ejemplo de las subvenciones a los medios de comunicación social puede ser expresivo. Hay que tener en cuenta que en los niveles a que esencialmente se refiere esta ley, la enseñanza es obligatoria y, en consecuencia, gratuita, tal como reconoce la Constitución. Considerar que la gratuidad queda garantizada por la existencia de centros públicos limita hasta desconocerlo el derecho a la educación tal como constitucionalmente está reconocido, pues en tal caso habría que optar entre gratuidad en centros públicos, sacrificando el derecho que corresponde de elegir un

centro privado más conforme con las preferencias educativas de los padres, siempre que ese centro reúna las condiciones que la ley establezca, o decidirse por estas últimas preferencias educativas, sacrificando la gratuidad, lo cual no estará al alcance de todas las fortunas, con lo que el sistema educativo necesariamente se convertirá en claramente discriminatorio por elitista, pues habríamos consagrado y garantizado exclusivamente libertades para unos pocos, lesionando el principio de igualdad.

El otro aspecto de la ley se refiere a cuestiones jurídico-formales. Desgraciadamente, nuestra postura en relación a esta cuestión, nuestra opinión de la ley no puede ser absolutamente favorable. El resultado de la votación de las enmiendas esta tarde por nosotros mantenidas al artículo 20 y a la Disposición adicional así lo ponen de manifiesto; pero, en todo caso, pienso que los contenidos sustanciales de esta ley, el pluralismo escolar que consagra, tiene un valor superior —y esto explica nuestro apoyo a la ley— que responde, quiero decirlo, a auténticas y muy profundas convicciones, y no a ningún inconfesable interés como en ocasiones se ha querido sostener. Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Andalucista, para explicación de voto, tiene la palabra el señor Aguilar.

El señor AGUILAR MORENO: Para explicación de voto, como ha dicho el señor Presidente. Señorías, ésta es más bien —por lo que se ha convertido de hecho— una fijación de postura, es decir, un punto de vista específico por parte de cada Grupo, y concretamente ahora del Grupo Parlamentario Andalucista.

Quiero ahorrar en esta explicación, que se refiere, como han hecho todos mis antecesores en esta tribuna, a todo el conjunto de la votación, toda reiteración de un debate que ha fatigado nuestros oídos durante dos intensas semanas, en especial cuando nosotros no teníamos enmiendas a este proyecto de ley por las razones que ya explicó mi compañero señor Pérez Ruiz en el debate de enmiendas a la totalidad.

Queremos, pues, tan sólo subrayar que aunque, por las razones expuestas, hemos sido parcos en nuestras intervenciones, nuestra línea parlamentaria, lo mismo que la extraparlamentaria, en éste, como en todos los casos, es inequívoca, y siempre en interés del pueblo andaluz, pese a que muchos parece que quieren podernos meter en un sólo saco con las minorías nacionalistas. Pero ya he explicado en la intervención anterior estas diferencias para no volver a caer ahora en esta reiteración.

Y por eso es por lo que en un caso como el Estatuto de Centros Docentes, que favorece, de forma tan desequilibrada en función precisamente de las disposiciones presupuestarias, a los centros privados, no podemos más que oponernos al mismo, porque, con independencia del debate ideológico, resulta que en las zonas desarrolladas —y nos lo ha confirmado, y además dirigiéndose a nosotros, nuestro querido amigo el señor Roca— hay lógicamente un mayor número de centros privados. Concretamente en Cataluña, nos ha dicho el señor Roca, hay un 60 por ciento de centros privados, frente al resto mantenido por la enseñanza pública.

Pues bien, si hay más centros privados en las zonas más desarrolladas, es lógico y consecuente que en las zonas más empobrecidas, como Andalucía, esa mayor aportación presupuestaria, esa cantidad importantísima, mejor dicho, de presupuesto que va destinada a subvencionar la enseñanza privada, va en una proporción enorme a favorecer a otras en detrimento de las necesidades educativas de Andalucía, y también, por supuesto, en detrimento de necesidades educativas de las grandes zonas suburbanas de las ciudades de esas áreas desarrolladas también.

Aquí tocamos una vez más el aspecto estructural, decisivo para nosotros, de este problema, mucho más grave y mucho más importante que el debate puramente ideológico y antiguo —por desgracia, aunque antiguo, no anticuado— entre enseñanza pública y enseñanza privada.

Porque el dinero, Señorías, siempre es limitado. «Verdad de Perogrullo» que, además, hemos oído decir en esta Cámara al señor Pujol. Y, por tanto, deberá destinarse prio-

ritariamente, por esa limitación precisamente, a eliminar desequilibrios educativos. Y ese objetivo es natural que se reserve esencialmente a una financiación pública, respetando, por supuesto, todas las libertades y derechos que se quieran, pero se trata de una carga que no va a asumir la iniciativa privada, que será bienvenida en esta materia, pero siempre que no sea a costa de privar del dinero que necesitamos para la escuela pública.

Estas han sido razones esenciales en la orientación de nuestro voto, razones que se han reforzado, como tantas veces nos ocurre aquí, cuando al hilo de tan largos debates nos hemos sentido tantas veces ajenos, como andaluces, a unos planteamientos que nos parecían que eran de otros países, con unos niveles de renta que nada tienen que ver con los de Andalucía, donde, por ejemplo, el 12 por ciento de la población hoy es analfabeta profunda, habiéndonos negado en los Presupuestos Generales de este año la irrisoria cantidad de cien millones de pesetas para un plan de alfabetización de Andalucía.

Pero no porque éstas sean las razones fundamentales queremos dejar de tocar ese otro aspecto teórico-educativo, podemos decir, que se ha abordado reiteradamente en esta Cámara en relación con este Estatuto de Centros Docentes. No sólo es la sangrante realidad socio-económica de Andalucía la que se ignora en esta Cámara, con ser la más grave; también se ignora su historia y sus aportaciones, en este caso educativas, y que a nosotros, los andalucistas, nos marcan también nuestra línea como herederos de los andalucistas históricos, y está, en la tradición de esos andalucistas históricos, nucleados alrededor de Blas Infante, una escuela libre, neutral y laica.

Para Blas Infante, según expresa en su obra «La dictadura pedagógica», la escuela, dentro de su concepción del nacionalismo, es el instrumento con el que se puede luchar contra el aparato de dominio que ejerce una clase dominante a través del ideario.

No me resisto a citar —para que por primera vez queden en el «Diario de Sesiones»— las frases de los documentos inéditos de Blas Infante que se agrupan en lo que iba a ser su obra fundamental de Andalucía y que ac-

tualmente están siendo exhumados por el investigador profesor Ruiz Lagos, frases que fueron escritas durante la Dictadura de Primo de Rivera y, por tanto, en el voluntario exilio de Blas Infante en Isla Cristina. Decía Blas Infante: «A esos que se llaman patriotas les ocurre lo mismo que a los clericales; son aquéllos que afirman: “apoderémonos del niño”. ¿Para qué? El niño se convertirá en hombre y no perdonará jamás a unos y a otros el secuestro de su infancia. De escuelas patriotas y clericales salen, precisamente, los más grandes antipatriotas y heterodoxos, y esto ocurre con los individuos y también sucede con los pueblos».

Blas Infante, además, no era una figura aislada o un visionario individualista; otros muchos andalucistas históricos que llegan hasta la primera República, defendieron, incluso en este mismo Parlamento, las mismas ideas. Así, el deán de la catedral de Granada, don Luis López-Dóriga, mantuvo estos mismos criterios en una memorable sesión del 13 de octubre de 1931, en la defensa global del título III de la Constitución Republicana. Este clérigo, andalucista de la primera hora, andalucista de la Asamblea de Ronda de 1913, defendió, junto a los socialistas y frente al padre Manjón, sus ideas educativas, que eran las de que en una sociedad mixta de creyentes y no creyentes no se debe imponer ningún ideario.

Tampoco quiero, por último, dejar de mencionar a don Eloy Vaquero Castillo, Diputado por Córdoba en las Constituyentes republicanas también, y maestro nacional, que en 1923 y 1926 defendió la creación de una escuela libre de Andalucía con iguales criterios que los que mantuvo, y mantenía, la Institución Libre de Enseñanza.

Todo esto lo he querido traer aquí para que se comprenda, si es posible, la diferencia—con independencia, por supuesto, de las afinidades— entre un Blas Infante y un Sabino Arana; entre un Blas Infante y un Prat de la Riba. De aquellos hombres somos orgullosos continuadores.

De ahí la coherencia de nuestro voto, que será en el sentido que hemos venido manteniendo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Para explicación de voto por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña, tiene la palabra la señora Mata.

La señora MATA GARRIGA: En este especial turno de explicación de votos y de preparación de voto, voy a explicar el de Socialistas de Cataluña.

Nuestros votos han obedecido a una posición de fondo ante el modelo de escuela que esta ley propugna para toda España, el modelo que propugnan UCD, Coalición Democrática y, ahora, ya sabemos que también lo propugna la Minoría Catalana. Se trata de un modelo definido en función de la libertad de creación y dirección de centros privados con ideario del titular, seguridad de la financiación pública de todos los centros privados, libertad de elección de centros para los padres, limitación de la participación en los centros, rechazo de la participación en la programación general, dos participaciones previstas en la Constitución (una limitada y otra rechazada), freno a la democratización de los centros llamados públicos y ningún compromiso público de creación de centros públicos. Este es el modelo que esta noche va a salir aprobado de esta Cámara.

Nuestras enmiendas obedecen a otro modelo definido, incluso, antes de que nuestros respectivos partidos existieran en Cataluña (lo digo por Convergencia y por el partido de los socialistas de Cataluña); es el modelo de escuela pública dentro de la Constitución del año 1978. Tenemos la definición de educación como servicio público compensatorio, etcétera. Aquí ha sido negada. La definición de la comunidad escolar participativa; aquí no se ha querido definir ni la comunidad escolar. Hemos querido definir las competencias de los poderes públicos con respecto a los centros escolares, con la participación de los sectores afectados; aquí no se ha querido admitir. Hemos querido poner las condiciones de creación de centros públicos; no se ha querido poner. Nosotros pensamos en un modelo de organización participativa de los centros mantenidos con fondos públicos; se ha rechazado la enmienda en este sentido. Nosotros pedíamos unas condiciones de financia-

ción de la escuela privada a partir de fondos públicos; no se ha querido poner.

Todas nuestras enmiendas han tenido esta explicación, este modelo de escuela pública dentro de la Constitución.

Hasta aquí nuestra explicación como socialistas, que lamentamos el modelo que se va a votar de escuela para toda España.

Como Socialistas de Cataluña, mayoría catalana nacionalista, con el nacionalismo inmanente que nos adjudica el señor Aguilar, y socialistas por la unión de los socialistas de toda España, lamentamos esta ley también para Cataluña, pues nuestro concepto de autonomía política de Cataluña no pasa por considerar otra cosa que nuestra libertad para llegar a construir la escuela pública en Cataluña, para trabajar libremente en la construcción de la escuela pública en Cataluña. Y esto no lo consideramos un privilegio; es el privilegio, en todo caso, del trabajo.

Nosotros queremos dejar ya este tipo de chalaneo de recursos, de puestos escolares, de subvenciones que hemos tenido; nosotros no lo hemos hecho en plan de chalaneo sino en plan de exigencia de un derecho. Así se vio a principio de curso cómo se aumentaron las unidades escolares, los profesores destinados a Barcelona y no como chalaneo, sino como exigencia de un derecho, y allí también los alcaldes socialistas, comunistas, y todos los alcaldes que se preocupan de la escuela en su circunscripción, estuvieron delante en la defensa de estos derechos. Nosotros aquí, en la discusión de esta ley, no hemos chalanado con voto ni hemos chalanado competencias, y mucho menos cuando hemos tenido que tratar con quienes faltan a la palabra, que es lo que ya destruye incluso el chalaneo. Y digo faltan a la palabra cuando tenemos enfrente a un Gobierno que aprobó un decreto de traspaso de competencias que no ha sido aplicado y que ha sido declarado inconstitucional por el Ministro del ramo.

Aquí la Minoría Catalana ha pactado con este Gobierno y con este Grupo que falta a su palabra.

Repetimos que nuestra idea de autonomía política en política educativa es la idea de poder trabajar libremente en la construcción de la escuela, y tengo que decir que ya en las reexplicaciones de voto estamos viendo

cómo la Minoría Catalana de Convergencia y Unión, en la mejor tradición de la derecha catalana, impone con su voto positivo aquí, en esta Cámara, sumado al voto de UCD, impone a Cataluña un modelo de escuela que mayoritariamente es rechazado en Cataluña.

Yo no sé si esto se llama sucursalismo o cómo se llama, pero esto es lo está pasando en este momento y en esta Cámara.

Por otro lado, también tengo que decir que lo que se dice en un programa en Cataluña y lo que se dice aquí, o lo que se dice en la enmienda presentada al proyecto de ley de financiación, no tienen nada que ver. Por ejemplo, el tipo de democracia que se pide para las escuelas en Cataluña no tiene nada que ver con la democracia aprobada para las escuelas aquí: «Los diferentes niveles de enseñanza necesitarán como órganos de gestión los que permitan la gestión democrática de Institutos, escuelas, centros o universidades». Perfecto en Cataluña.

Aquí, el director, nombrado... como sea. «La enseñanza será gratuita en los niveles educativos obligatorios en los centros no estatales que reúnan los requisitos que la presente ley establece y de acuerdo con los términos de la misma». Es decir, todos.

Lo siento, señores, pero esta explicación de voto tiene que terminar con esta explicación para el pueblo de Cataluña. Es muy importante que se sepa cómo se actúa en Cataluña y cómo se actúa aquí.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación final de este proyecto de ley. *(Pausa.)*

El señor PRESIDENTE: Dado el carácter orgánico de esta ley, procede, conforme al artículo 81 de la Constitución, someterla a una votación de conjunto para la que se requiere un «quórum» de la mayoría absoluta.

Ante la Presidencia se ha presentado un escrito suscrito por 56 Diputados en el que, al amparo del artículo 75, solicitan la votación nominal pública por llamamiento, y dos escritos de los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y Socialistas de Cataluña, respectivamente, por los que se solicita votación secreta mediante papeleta.

¿Desea alguno de los Grupos proponentes

plantear alguna cuestión que sería propiamente cuestión de orden en cuanto a definir los términos en que entiende aplicable el artículo 75? *(Pausa.)*

Tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Creo que las cuestiones de orden, si se van a plantear, deberán hacerse por el orden de la presentación de los escritos. Si el Grupo Centrista quiere intervenir que lo diga en este momento para que el Presidente ordene el debate de acuerdo con la forma de presentación o en la forma que el Presidente estime oportuno.

El señor PRESIDENTE: No hay debate, señor Peces-Barba, lo que hay es la posibilidad de exponer la cuestión de orden. Si algún Grupo desea hacer uso de la palabra puede hacerlo. *(Pausa.)*

Tiene la palabra el señor Peces-Barba. Ruego brevedad, porque lo único que se puede hacer son alegaciones dirigidas a la Presidencia.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Efectivamente, para alegar ante el señor Presidente las razones de la petición que han suscitado el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y el Grupo Socialistas de Cataluña, quisiera hacer las siguientes observaciones.

En primer lugar, el artículo 75 del Reglamento provisional de esta Cámara establece de manera textual lo siguiente: «La votación será nominal o secreta en las Comisiones o en el Pleno cuando así lo pidan dos Grupos Parlamentarios o cincuenta Diputados en éste, o cuatro Diputados en aquélla».

Nuestro Grupo Parlamentario solicita que el voto sea secreto porque ésta es una ley que, a nuestro juicio, puede afectar a la conciencia de los Diputados. En todo caso, anunciamos desde este momento que nuestro Grupo Parlamentario siempre estará abierto a que otro Grupo plantee la votación secreta y, en ningún caso, se va a oponer, con ningún tipo de argumentos, a esa petición.

Por consiguiente, nuestro ofrecimiento a todos los señores Diputados para que cuando alguno, de acuerdo con el Reglamento, considere que puede haber en nuestro Grupo

Parlamentario o en otro de la Cámara alguna situación en la que la conciencia de alguno de nuestros Diputados o de otro Diputado de cualquier Grupo de la Cámara estuviera afectada, solicitar la votación secreta. Desde este momento lo aceptamos en garantía de la conciencia de todos los Diputados.

Junto a nuestro escrito, señor Presidente, se ha presentado, o mejor dicho, con anterioridad a nuestro escrito, en este caso con un número de registro anterior, se ha presentado un escrito propugnado por un grupo de parlamentarios, entiendo que del Grupo Parlamentario Centrista, pidiendo que la votación sea nominal.

Pues bien, nosotros entendemos que hay un conflicto aparente, a mi juicio, y es el señor Presidente, efectivamente, el que tiene que resolver. Digo que es aparente solamente porque la petición de votación nominal no es una petición que obedezca a un deseo de celebrar dicha votación, sino simplemente a un deseo de evitar la votación secreta.

En este momento, señor Presidente, todas las votaciones que se celebran en esta Cámara son nominales. El artículo 74 del Reglamento provisional dice: «La votación nominal puede verificarse por decisión de la Presidencia, de acuerdo con la Mesa, por una de las formas siguientes: a) Llamando un Secretario a los Diputados por sus nombres, que responderán «sí» o «no» o declararán que se abstienen de votar», etc., y da la explicación oportuna, o «b) Por procedimiento electrónico, que proporcione un listado con el número de los Diputados votantes, el sentido del voto de cada uno, y los resultados de aprobación, no aprobación y abstención».

Como saben Sus Señorías, esta es la forma habitual de votar en esta Cámara. En esta Cámara se vota siempre por votación nominal, de acuerdo con el artículo 74. Entonces, ¿cuál es el sentido, a nuestro juicio, que tiene el hecho de que se plantee una petición de votación nominal, cuando ésta es la forma habitual de votar en esta Cámara? Pues es, precisamente, el intento de evitar que se produzca la votación secreta y, por consiguiente, que se pueda emitir el voto en conciencia por los Diputados.

Nosotros entendemos que para que el señor Presidente tenga suficientes argumentos de

interpretación habría que proporcionarle los siguientes.

En primer lugar, creo que hay que proporcionarle las normas generales de interpretación que se establecen en el título preliminar del Código Civil (que son normas que obligan a todos los que interpretan normas jurídicas) y, especialmente, señor Presidente, me quiero referir a dos normas fundamentales que están en el número 4 del artículo 6.º del título preliminar del Código Civil: «Los actos realizados al amparo del texto de una norma» —dice este número 4— «que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir». (*Rumores.*)

1. «Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe».

2. «La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo».

Nosotros entendemos que es un abuso de derecho el que se ha producido por los señores Diputados que han solicitado la votación nominal, porque ésta se produce siempre. Siempre hay votación nominal en esta Cámara, y entendemos que el único efecto de esa presentación es el de evitar que se produzca la votación secreta y, por consiguiente, dejando de garantizar el derecho a la emisión del voto en conciencia de los señores Diputados.

En segundo lugar, después de estas observaciones generales respecto a la posible existencia de un abuso de derecho, que el señor Presidente deberá tener en cuenta, añadiríamos dos elementos más para la interpretación que el señor Presidente tenga que hacer.

Efectivamente, hay un conflicto (después de esta observación, a nuestro juicio solamente aparente) entre la petición de votación nominal, que tiende a impedir que haya votación secreta, y nuestra petición de votación secreta. Solamente hay un precedente en el artículo 51 del Reglamento de la Cámara italiana —y pido perdón al señor Herrero Rodríguez de Miñón por citar a la Cámara de Diputados de Italia, donde, según creo, hay mayoría, desde 1945, de ideologías afines a los que están sentados a la derecha de la Cámara—. Por consiguiente, pienso que el

reglamento de aquella Cámara estará inspirado por esa mayoría que dice lo siguiente: «Artículo 51.—Se puede pedir votación secreta por un grupo o veinte Diputados. En caso de concurrencia de diversas propuestas, prevalece la de votación secreta.

Este es el único precedente que existe. Hay otro que no es un precedente, sino que es, digamos, un derecho futuro, que es el propio Reglamento definitivo de esta Cámara, donde se establece que la votación será pública, por llamamiento, o secreta, cuando así lo exija este Reglamento o lo soliciten tres Grupos Parlamentarios o una quinta parte de los Diputados o miembros de la Comisión. Y aquí viene el tema que nos afecta. Si hubiera solicitudes concurrentes de sentido contrario, prevalecerá la de votación secreta. Este artículo 83 del texto de la Ponencia se elaboró a propuesta del señor Presidente de la Cámara, y nosotros, naturalmente, por congruencia, estamos seguros de que el señor Presidente de la Cámara será congruente con su propia propuesta y llevará adelante la propuesta de votación secreta que nosotros hacemos. Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Jiménez Blanco tiene la palabra.

El señor JIMENEZ BLANCO: Señor Presidente, Señorías, para defender que la Presidencia, en su caso, con acuerdo de la Mesa, según el artículo 74, quizá, deba aceptar la petición que hemos hecho 50 parlamentarios al amparo del artículo 75, pidiendo la votación nominal, pero no la que siempre se hace, como ha dicho el señor Peces-Barba, que es la del artículo 74, letra b), por procedimiento electrónico, sino la que nosotros hemos pedido especialmente, que es la de la letra a), llamando un Secretario a los Diputados por sus nombres, que responderán sí o no. Es decir, que no hemos pedido la votación que normalmente se hace, sino una votación excepcional. Y la hemos pedido al amparo del artículo 75, que dice que la votación será nominal o secreta en el Pleno cuando así lo pidan dos grupos o 50 Diputados. En dicho artículo 75 figura primero la palabra nominal y luego la palabra secreta, y ha reconocido el señor Peces-Barba, que

primero ha entrado en la Cámara la petición de votación nominal por el artículo 74, a), y después la petición de votación secreta.

Me permito indicar al señor Peces-Barba, si la memoria no me falla —que me puede fallar—, que creo que en ocasión pareja y similar alegó precisamente que se había pedido votación nominal y que era la del punto b), pero la petición de votación secreta por parte del Grupo Socialista del Congreso y de otro Grupo socialista que le acompañaba había sido presentada en el Congreso precisamente antes que la nuestra, creo recordar.

El voto en conciencia, señor Peces-Barba, está regulado en el Reglamento del Grupo Parlamentario Centrista. Ignoro si existe un reglamento en el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso e ignoro cómo resuelven ahí, si se plantean, los problemas de conciencia. Cuando se plantea un problema de conciencia a un Diputado, según el Reglamento del Grupo Centrista, lo comunica al Presidente del Grupo y éste, en su caso, acepta, escucha las razones que le dan, lo dispensa, o permite, como en ocasiones ocurre, que vote conforme le dicte su conciencia. En este caso ha habido bastantes debates en el Grupo, incluso ha habido tres reuniones para debatir esta ley, y el Grupo ha manifestado sus puntos de vista, porque no es un grupo monolítico, porque es, naturalmente, un grupo de libertades, donde la gente piensa, pero nadie ha planteado el problema de una votación en conciencia. Por eso es injusto hablar, como se ha hablado aquí, de fraude de ley, y es injusto hablar de un planteamiento de buena fe cuando el problema es, fundamentalmente, procedimental.

Cuando ha citado el Código Civil, porque lo tenía seguramente a mano —yo no lo tengo—, creo haberle oído, al hablar de la interpretación, que se refería a «la debida aplicación de la norma». La palabra «debida» significa algo, y aquí no ha sido suficientemente desarrollado.

Creo que el argumento fundamental es éste: El Reglamento tiene una laguna, ya que no dice cuál de las dos fórmulas es la preferente. El hecho de que en un documento de trabajo, que todavía no es más que eso, se diga, a instancias de quien lo ha afirmado con tanta seguridad, que se prefiere esa vota-

ción secreta, quizá sea porque es un Grupo que, a lo mejor, no se plantea problemas de conciencia. (*Rumores.*) Pero el hecho es que en nuestro caso si se plantean y está regulado en forma específica en un Reglamento.

Para nosotros el tema es que el artículo 75 dice «nominal o secreta», y la Presidencia tiene la facultad interpretativa, pudiendo decidir, en todo caso, conforme al artículo 74, y de acuerdo con la Mesa, una u otra de las opciones de este artículo. Nosotros pensamos que el bien jurídico protegible fundamentalmente en la vida parlamentaria —y esto lo ha dicho muchas veces en esta Cámara el señor Peces-Barba con relación a esta materia— es la publicidad.

Si algún sentido tiene la vida parlamentaria, si algún sentido tiene la vida democrática en la forma en que aquí la llevamos, es precisamente la publicidad. El secreto es la excepción, y la excepción en la sesión, como resulta del artículo 93 del Reglamento provisional, está en las votaciones secretas y se justifica sólo por la índole de la materia —éste no es el caso—, o por tener relación con el honor o la intimidad de las personas. Precisamente el tema de la vida parlamentaria es «luz y taquígrafos».

Aquí se trata de elegir un modelo educativo, y el pueblo va a ser quien opta por el modelo democrático, por el modelo occidental. A mí personalmente me da igual una u otra fórmula. (*Rumores.*) Nuestro propósito es saber si alguno de los que ocupan los bancos de la izquierda opta por el modelo educativo que, estimamos, se ajusta más a la Constitución, a la vida democrática occidental. Suponemos que habrá algunas personas que tengan un problema de conciencia ciudadana. (*Rumores y protestas.*) Queremos oírlo si es así.

Además, hemos leído en algún periódico... (*Protestas.*)

El señor PRESIDENTE: Aténgase a la cuestión de orden.

El señor JIMENEZ BLANCO: Sí, señor Presidente, me estoy ateniendo en la forma en que puedo hacerlo.

Quería decirle, además, al señor Peces-Barba, como argumento final, que él sabe

perfectamente que hay parlamentos en donde existe la imposibilidad de acudir al voto secreto y se exige voto público obligatorio precisamente en tres casos: ciertas mociones importantes las cuestiones financieras y el voto final sobre un proyecto de ley. Esto lo sabe el señor Peces-Barba mejor que yo.

Aquí, en toda ley orgánica se ha votado públicamente, porque el pueblo tiene perfecto derecho a saber si sus elegidos defienden el modelo al que se comprometieron conforme a su programa electoral. *(Aplausos.)*

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Solé Tura.

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, Señorías, creo que aquí se plantea un serio problema reglamentario. Hay una concurrencia de peticiones que se excluyen mutuamente y creo que no sería justo que intentásemos llevar la carga de la solución a las espaldas exclusivas del señor Presidente.

Creo que debemos encontrar un criterio objetivo, que a mí me parece que existe, no en este Reglamento que se alaboró en circunstancias distintas a las actuales, pero sí en el propio principio que informa la Constitución y, en consecuencia, también en el futuro Reglamento, y no es casual que en él ya se intente resolver este problema.

Creo que ante la alternativa de voto nominal público o voto secreto, la conquista de un modelo más democrático, más concorde con el espíritu que informa el sistema, es el voto secreto.

Este es un principio constitucional y un principio democrático general y creo que debería ser el que se aplicase en estas circunstancias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: La cuestión se plantea en estos términos: aplicación de un artículo de nuestro Reglamento. No se trata de aplicar ningún artículo de un reglamento italiano ni, por supuesto, de un borrador de reglamento que no sabemos lo que dirá cuando esta Cámara lo apruebe, pero que hubiera sido muy pertinente invo-

carlo antes, para evitar un obstruccionismo lamentable al que nos hemos visto sometidos y en el que seguimos, porque la mayoría de la Cámara está ya decidida y se trata de elegir un procedimiento u otro.

Dicho esto, en la clara igualdad ante los dos procedimientos que establece el mismo artículo del Reglamento, es evidente que en caso de duda hay que estar por la publicidad. Chesterton, en una famosa discusión sobre la publicidad en Inglaterra, dijo: «Yo no sé lo que es la publicidad, pero sé lo que no es. Si el pueblo tal que votó a fulano quiere que diga que no, es absurdo que diga que sí, y si quiere que diga que sí, es absurdo que diga que no».

Todo el mundo que nos ha votado tiene que saber lo que votamos nosotros ahora. Eso es parlamentarismo y democracia; por tanto, en caso de duda, voto público, con luz y taquígrafos. *(Aplausos.)*

El señor PRESIDENTE: Se ha planteado una cuestión como cuestión de orden, y conforme al artículo 63 corresponde, sin más debate, resolver a la Presidencia, debiendo aceptarse su resolución.

El artículo 75 del Reglamento establece, efectivamente, una paridad de supuestos —paridad que ha sido reconocida por todos los que han intervenido—, estableciendo la posibilidad de que determinadas minorías puedan solicitar, en paridad, bien votación nominal o bien votación secreta. Hay una colisión de derechos, también ha sido reconocida irreductible desde el punto de vista de la letra del Reglamento. El Reglamento establece dos posibilidades, establece dos términos de una alternativa, y ejercitado ese derecho por dos minorías en términos contradictorios, repito, el artículo 75 no ofrece argumento alguno que permita resolver la colisión.

Es claro, efectivamente, que hay unas normas de interpretación —han sido aludidas por el señor Peces-Barba— y hay fundamentalmente una finalidad en la valoración de la norma que es esencial. Una norma del Reglamento como la que contemplamos, al configurar esos derechos —derecho a la votación nominal, por un lado; derecho a votación secreta, por otro—, evidentemente está configurando lo que considera que son bienes

jurídicamente protegidos en los términos en que el Reglamento los protege.

Para la Presidencia, en principio, esos bienes tienen la misma valoración objetiva; la Presidencia no puede entrar en valoraciones subjetivas de intencionalidad; la Presidencia no quiere entrar en la intencionalidad política con que se ha podido utilizar el derecho, que a unos u otros corresponde, a solicitar una u otra modalidad, porque la Presidencia tendrá, en definitiva, que objetivar a efectos de resolver.

Es claro que hay una vía de resolver un conflicto de este tipo, que es una vía, diríamos, democrática, sometiendo a la decisión del Pleno de la Cámara si es uno u otro de los dos procedimientos el que tiene mayoría. Y ésa es una decisión obviamente cómoda para la Presidencia, pero que ha sido objetivada ante la propia Presidencia por algunos de los Grupos solicitantes, en función de que siendo un derecho de minorías no sería lógico someterlo a la decisión de la mayoría. La Presidencia acepta la objeción, y porque considera que si los valores jurídicos que pretende salvar el artículo 75 son en sí mismos respetables, no es probablemente respetable la comodidad del titular de un cargo público; es por lo que entiende que debe asumir plenamente la responsabilidad de adoptar el criterio con arreglo al cual debe resolverse esta colisión de derechos entre unos y otros Grupos Parlamentarios. No hay, repito, valoración objetiva que permita dirimir la cuestión suscitada, y la Presidencia no quiere introducir elementos subjetivos respecto de la intencionalidad con la cual se ha solicitado por unos u otros Grupos un sistema de votación. Hay que proceder con arreglo a un criterio objetivo.

Los precedentes de esta Cámara son diversos en cuanto a votación secreta. Siempre que ha habido una petición de votación secreta, la votación secreta se ha producido, sin que se haya producido de hecho eso que hipotéticamente es posible, que es que se utilice el derecho de unos para obstar al derecho de otros. Eso no se ha planteado en la Cámara todavía, y hubo, efectivamente, una situación única de colisión, la situación de colisión se planteó en la sesión del día 20 de diciembre de 1979. En aquel momento

había una petición de los mismos Grupos socialistas, que pedían votación secreta, y había también una petición de parlamentarios del Grupo Centrista, que pedían votación nominal pública. Se trataba, como recuerdan, de la convalidación del Real Decreto-ley que prorrogaba la vigencia de las normas relativas al terrorismo por grupos armados.

En aquel momento ante la Presidencia se esgrimieron una serie de argumentos, entre ellos, desde luego, el de la prioridad en la solicitud. Y saben muy bien los Grupos socialistas peticionarios que la Presidencia, en base a ese argumento, solicitó y obtuvo del Grupo Parlamentario Centrista la retirada de su petición, sin que en aquellos momentos llegara a plantearse ante el Pleno la colisión en los términos que se plantea ahora.

Esos son los hechos, y la circunstancia de la retirada consta en el «Diario de Sesiones». Si en aquellas circunstancias la Presidencia operó con el criterio de prioridad en la presentación que, aun con su posible pobreza, tiene la ventaja de su rigurosa objetividad, entiende la Presidencia que, con arreglo al mismo criterio, debe solventarse en estos momentos la colisión existente entre derechos ejercitados por dos minorías de este Parlamento.

En consecuencia, se va a proceder a la votación nominal pública en la modalidad de «por llamamiento», conforme al artículo 74 del Reglamento.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Pido la palabra, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Peces-Barba, le repito que no hay debate sobre esto.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: De acuerdo con el Reglamento, señor Presidente, el Grupo Socialista acata la decisión de la Presidencia, pero quiere hacer constar en acta que estamos en desacuerdo con ella, y que conste nuestra más enérgica protesta porque nos recuerda otra decisión de la que no queremos acordarnos. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra Fontana.

El señor GUERRA FONTANA: En nombre del Grupo Socialistas de Cataluña, para manifestar también nuestro acatamiento, pero también nuestra protesta por la resolución adoptada.

El señor PRESIDENTE: Se va a proceder a la votación pública por llamamiento. Se verificará, en primer lugar, la insaculación del número correspondiente al Diputado, a partir del cual se comenzará la votación. (Pausa.)

Comenzará la votación por el Diputado que está designado en la relación con el número 80.

Señores Diputados que votaron SI:

Delgado de Jesús, D. Antonio José.
 Díaz Fuentes, D. Antonio.
 Díaz-Pinés Muñoz, D. Manuel.
 Díaz Porras, D. Ciriaco.
 Durán Pastor, D. Miguel.
 Egea Ibáñez, D. Enrique.
 Escartín Ipiens, D. José Antonio.
 Esperabé de Arteaga González, D. Jesús.
 Estella Goytre, D. Alberto.
 Faura Sanmartín, D. Antonio.
 Fernández Arias, D. Manuel Angel.
 Fernández Ordóñez, D. Francisco.
 Fernández Rodríguez, D. Juan Julio.
 Figuerola Cerdán, D. José Luis.
 Fraga Iribarne, D. Manuel.
 Gago Lorenzo, D. José Antonio.
 Galant Ruiz, D. Joaquín.
 Gamir Casares, D. Luis.
 García-Margallo Marfil, D. José Manuel.
 García - Moreno Teiseira, D.^a María del Carmen.
 García Pérez, D. José.
 García-Pumarino Ramos, D. Emilio.
 García-Romanillos Valverde, D. Joaquín.
 Gari Mir, D. Francisco.
 Gasoliva Bohm, D. Carles Alfield.
 Gil-Albert Velarde, D. José María.
 Gila González, D. Carlos.
 Gómez Angulo, D. Juan Antonio.
 Gómez Franqueira, D. Eulogio.
 Gómez de las Rocas, D. Hipólito.
 González Delgado, D. José.
 González García, D. José Antonio.

Grandes Pascual, D. Luis de.
 Guimón Ugartechea, D. Julián.
 Hernández-Sito García-Blanco, D. Isidoro.
 Herrero Rodríguez de Miñón, D. Miguel.
 Hervella García, D. Jesús.
 Huelín Vallejo, D. Ignacio Javier.
 Jiménez Blanco, D. Antonio.
 León Herrero, D. Ricardo.
 López de Lerma López, D. José.
 Márquez Fernández, D. Antonio.
 Martín Montes, D. César.
 Martín Oviedo, D. José María.
 Martín-Retortillo Baquer, D. Sebastián.
 Martín Sánchez, D. Martiniano.
 Martín Villa, D. Rodolfo.
 Martínez-Villaseñor García, D. Gervasio.
 Mascareño Alemán, D. Zenón.
 Mata Gorostizaga, D. Enrique de la.
 Mederos Aparicio, D. José Luis.
 Medina González, D. Guillermo.
 Meilán Gil, D. José Luis.
 Menchero Márquez, D. Pedro.
 Mesa Parra, D. José María.
 Molins Amat, D. Joaquín.
 Monsonis Domingo, D. Enrique.
 Morenas Aydillo, D.^a Dolores Blanca.
 Moreno Díez, D. Eduardo.
 Moreno García, D. José Luis.
 Moreno González, D.^a Elena María.
 Moreta Amat, D. Marcelino.
 Morillo Crespo, D. Antonio.
 Moscoso del Prado, D. Javier.
 Moya Moreno, D. Arturo.
 Muñoz García, D. Faustino.
 Muñoz Peirats, D. Joaquín.
 Nasarre de Letosa Conde, D. José.
 Núñez Pérez, D. Manuel.
 Olarte Cullen, D. Lorenzo.
 Oliart Saussol, D. Alberto Carlos.
 Olivencia Ruiz, D. Francisco.
 Orpez Asensi, D. Antonio.
 Osorio García, D. Alfonso.
 Payo Subiza, D. Gonzalo.
 Peláez Redajo, D. Gregorio.
 Pelayo Duque, D.^a María Dolores.
 Perera Calle, D. Angel Manuel.
 Pérez López, D. Jesús.
 Pérez Miyares, D. Félix Manuel.
 Pernas Martínez, D. José María.
 Pin Arboledas, D. José Ramón.
 Piñeiro Amigo, D. José Manuel.
 Portanet Suárez, D. Rafael J.

Quintás Seoane, D. Juan.
 Reol Tejada, D. Juan Manuel.
 Revilla López, D.^a María Teresa.
 Rigol Roig, D. Juan.
 Roca i Junyent, D. Miguel.
 Rodríguez Alcaide, D. José Javier.
 Rodríguez-Miranda Gómez, D. Santiago.
 Rodríguez Moroy, D. Luis Javier.
 Rubiés Garrofé, D.^a María.
 Ruiz Monrabal, D. Vicente.
 Ruiz-Navarro y Gimeno, D. José Luis.
 Rupérez Rubio, D. Francisco Javier.
 Sabaleta Jiménez, D. José.
 Sabater Escudé, D. Juan.
 Sáenz-Díez Gándara, D. Juan Ignacio.
 Sánchez de León Pérez, D. Enrique.
 Sanjuán Bordá, D. José María.
 Sanmartín Losada, D. Miguel.
 Sárraga Gómez, D. Manuel de.
 Satrústegui Fernández, D. Joaquín.
 Senillosa Cros, D. Antonio de.
 Sentís Anfruns, D. Carlos.
 Solano Carreras, D.^a Carmen.
 Soler Turmo, D. Alfonso.
 Soler Valero, D. Francisco.
 Tejada Lorenzo, D. Jaime.
 Tomé Robla, D. Baudilio.
 Torre Prados, D. Francisco de la.
 Torres Izquierdo, D. Manuel.
 Trías Fargas, D. Ramón.
 Trillo Torres, D. José Antonio.
 Ulloa Vence, D. Julio.
 Valle Pérez, D. José Luis del.
 Vallina Velarde, D. Juan Luis de la.
 Vázquez Guillén, D. Antonio.
 Vega y Escandón, D. Luis.
 Viana Santacruz, D. Jesús María.
 Vilarifio Salgado, D.^a Nona Inés.
 Yebra Martul-Ortega, D. Perfecto.
 Zaragoza Gomis, D. Francisco.
 Aguilar Azañón, D. Julio.
 Aguirre de la Hoz, D. Francisco Javier.
 Aizpún Tuero, D. Jesús.
 Alcón Sáez, D. Fernando.
 Alfonso Quirós, D. Antonio Juan.
 Alierta Izuel, D. Mariano.
 Alvarez Alvared, D. José Luis.
 Alvarez de Miranda García, D. Ramón Ma-
 ría.
 Alvarez de Miranda y Torres, D. Fernando.
 Alzaga Villamil, D. Oscar.
 Apostúa Palos, D. Luis.

Arahetes Portero, D.^a María Soledad.
 Arce Martínez, D. José Luis de.
 Arce Molina, D.^a Juana.
 Areilza y Martínez de Rodas, D. José María.
 Arnau Figuerola, D. José.
 Attard Alonso, D. Emilio.
 Bañón Seijas, D. Alfonso.
 Barnola Serra, D. Jaime.
 Berenguer Fuster, D. Luis.
 Bergasa Perdomo, D. Fernando.
 Bermejo Hernández, D. Manuel.
 Botanch y Dausa, D. Juan.
 Bravo de Laguna Bermúdez, D. José Mi-
 guel.
 Bris Gallego, D. José María.
 Buil Giral, D. León José.
 Cabanillas Gallas, D. Pío.
 Camacho Zancada, D. Blas.
 Camuñas Solís, D. Ignacio.
 Canyellas Balcells, D. Antón.
 Carro Martínez, D. Antonio.
 Casa Ayuso, D. José Antonio da.
 Casañ Bernal, D. Benjamín.
 Casañ Salido, D. Carmelo.
 Cisneros Laborda, D. Gabriel.
 Clavero Arévalo, D. Manuel Francisco.
 Cuartas Galván, D. Alberto Javier.
 Cuatrecasas i Membrado, D. Libert.
 Cuevas González, D. Justo de las.

Miembros del Gobierno:

Abril Martorell, D. Fernando.
 Arias-Salgado y Montalvo, D. Rafael.
 Calvo Ortega, D. Rafael.
 Calvo-Sotelo y Bustelo, D. Leopoldo.
 Cavero Lataillade, D. Iñigo.
 Cierva y Hoces, D. Ricardo de la.
 Fontán Pérez, D. Antonio.
 García Añoveros, D. Jaime.
 García Díez, D. Juan Antonio.
 Garrigues Walker, D. Joaquín.
 González Seara, D. Luis.
 Lamo de Espinosa y Michels de Champour-
 cin, D. Jaime.
 Oreja Aguirre, D. Marcelino.
 Otero Novas, D. José Manuel.
 Pérez-Llorca y Rodrigo, D. José Pedro.
 Rodríguez Sahagún, D. Agustín.
 Rovira Tarazona, D. Juan.
 Sánchez-Terán Hernández, D. Salvador.
 Suárez González, D. Adolfo.

Miembros de la Mesa:

Becerril Bustamante, D.^a Soledad.
 Carrascal Felgueroso, D. Víctor Manuel.
 Fernández-España y Fernández-Latorre, doña María Victoria.
 Fraile Poujade, D. Modesto.
 Lavilla Alsina, D. Landelino.

Señores Diputados que votaron NO:

Díaz Sol, D. Angel.
 Fajardo Spínola, D. Luis.
 Fernández Inguanzo, D. Horacio.
 Franco Gutiez, D. Angel.
 Fuejo Lago, D. Donato.
 Fuentes Lázaro, D. Jesús.
 Galeote Jiménez, D. Guillermo.
 García Bloise, D.^a Carmen.
 García García, D. Tomás.
 García Miralles, D. Antonio.
 García Rollán, D. Cipriano.
 García Sánchez, D. Cipriano.
 González Vila, D. Fernando Juan.
 Gracia Navarro, D. Manuel.
 Granada Bombín, D. Esteban.
 Guerra Fontana, D. Rodolfo.
 Guerra González, D. Alfonso.
 Izquierdo Rojo, D.^a María.
 Lazo Díaz, D. Alfonso.
 Lerma Blasco, D. Juan Francisco.
 Limón Jiménez, D. Andrés.
 López Raimundo, D. Gregorio.
 Lluch i Martín, D. Ernest.
 Madrid López, D. Demetrio.
 Marín González, D. Manuel.
 Marraco Solana, D. Santiago.
 Martínez Martínez, D. Miguel Angel.
 Mata i Garriga, D.^a Marta Angela.
 Maturana Plaza, D. José Antonio.
 Montserrat Solé, D. Antonio.
 Múgica Herzog, D. Enrique.
 Navarrete Merino, D. Carlos.
 Navarro Estevan, D. Joaquín.
 Núñez Encabo, D. Manuel.
 Núñez González, D. Miguel.
 Obiols Germa, D. Josep María.
 Padrón Delgado, D. Néstor.
 Palomares Vinuesa, D. Antonio.
 Pardo Yáñez, D. Pablo.

Pastor Marco, D. Juan Bautista.
 Peces-Barba Martínez, D. Gregorio.
 Pedregosa Garrido, D. José Manuel.
 Peinado Moreno, D. Antonio.
 Pérez Fernández, D. Avelino.
 Pérez Royo, D. Fernando.
 Piazuolo Plou, D. Antonio.
 Plana Plana, D. José.
 Pons Irazazábal, D. Félix.
 Puig i Olive, D. Lluís María de.
 Ramírez Heredia, D. Juan de Dios.
 Ramos Fernández-Torrecilla, D. Francisco.
 Ramos i Molins, D. Francesc.
 Redondo Urbieto, D. Nicolás.
 Riera i Mercader, D. Josep María.
 Rodríguez Contreras, D. Martín.
 Rodríguez Ibarra, D. Juan Carlos.
 Rodríguez Pardo, D. José Luis.
 Rodríguez Rodríguez, D. Antonio.
 Rodríguez Valverde, D. León Máximo.
 Rojas-Marco de la Viosca, D. Alejandro.
 Rubiales Rojas, D. Emilio.
 Saavedra Avecedo, D. Jerónimo.
 Sáenz Cosculluela, D. Javier Luis.
 Salinas Moya, D. José Miguel.
 Sánchez Montero, D. Simón.
 Sanjuán de la Rocha, D. Carlos.
 Sanjurjo González, D. Jesús.
 Sanz Fernández, D. Francisco Javier.
 Sapena Granell, D. Enrique.
 Silva Cienfuegos-Jovellanos, D. Pedro.
 Solana Madariaga, D. Francisco Javier.
 Solana Madariaga, D. Luis.
 Solé Barberá, D. José.
 Solé Tura, D. Jordi.
 Sotillo Martí, D. Vicente Antonio.
 Soto Martín, D. Fernando.
 Tamames Gómez, D. Ramón.
 Tierno Galván, D. Enrique.
 Urralburu Tainta, D. Gabriel.
 Valentín y Antón, D. José.
 Vargas-Machuca Ortega, D. Ramón.
 Vázquez Fouz, D. José.
 Vázquez Menéndez, D.^a Elena.
 Vázquez Vázquez, D. Francisco José.
 Vicente Martín, D. Ciriaco de.
 Vida Soria, D. José.
 Vintró Castells, D.^a Eulalia.
 Yáñez-Barnuevo García, D. Luis.
 Yuste Grijalba, D. Francisco Javier.
 Zapatero Gómez, D. Virgilio.
 Acosta Cubero, D. José.

Aguilar Moreno, D. Juan Carlos.
Aguiriano Fornies, D. José Antonio.
Alcaraz Masatas, D. Luis Felipe.
Almunio Amann, D. Joaquín.
Alonso Sarmiento, D. Emilio.
Alvarez de Paz, D. José.
Arredonda Crecente, D. Miguel Angel.
Ballester Pareja, D. Enrique.
Ballesteros Durán, D. Rafael.
Ballesteros Pulido, D. Jaime.
Bandrés Molet, D. Juan María.
Barón Crespo, D. Enrique Carlos.
Barragán Rico, D. Juan Antonio.
Barranco Gallardo, D. Juan.
Bernal Soto, D. Ramón Germinal.
Blanco García, D. Jaime.
Bofill Abeilhe, D. Pedro.
Bono Martínez, D. Emérito.
Boyer Salvador, D. Miguel.
Brabo Castells, D.ª Pilar.
Bueno Vicente, D. José Miguel.
Busquets i Bragulat, D. Juli.
Caamaño Bernal, D. Esteban.
Cabral Oliveros, D. Francisco.
Calahorra Téllez, D. Fernando.
Camacho Abad, D. Marcelino.
Cano Pinto, D. Eusebio.
Carrillo Solares, D. Santiago.
Castellano Cardalliaquet, D. Pablo.

Castells Ferrer, D. Jaume.
Colino Salamanca, D. Juan Luis.
Chaves González, D. Manuel María.

Miembros de la Mesa:

Bono Martínez, D. José.
Torres Boursault, D. Leopoldo.
Gallego Bezares, D. Teodoro Ignacio.
Gómez Llorente, D. Luis.

El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos, 314; a favor, 187; en contra, 127.

Queda aprobado el proyecto de Ley sobre Centros Escolares, que será remitido al Senado para la tramitación constitucional subsiguiente.

El Pleno se reunirá de nuevo el martes, día 25 de marzo, a las cuatro y media de la tarde.

Se levanta la sesión.

Eran las doce y treinta y cinco minutos de la noche.

Precio del ejemplar 50 ptas.

Venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.,

Paseo de Onésimo Redondo, 36

Teléfono 247-23-00. Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.500 - 1961

Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID